



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN



Escuela Interdisciplinaria
de Altos Estudios Sociales
IDAES_UNSAM

¿Responsabilidad de todos? Posiciones
y conflictos alrededor del “Pacto Social”
durante el tercer gobierno peronista
(1973-1974)

Universidad Nacional de San Martín
Escuela Interdisciplinaria de Altos
Estudios Sociales
Maestría en Sociología Económica

Tesis de maestría

Autor: Pablo Enrique Garrido.

Director: Sergio Friedemann.

Resumen: Pacto Social fue el nombre con el que se conoció popularmente el programa económico inicial del tercer gobierno peronista, bajo la conducción del ministro José Ber Gelbard. La desarticulación del programa tras un año y medio de ciertos logros y mayores dificultades abre una serie de interrogantes sobre las acciones de quienes insinuaron integrar una alianza de poder que le diera sustento, pero que se disolvió tempranamente. En ese sentido, guían nuestras indagaciones las preguntas acerca de cómo evolucionaron las posturas de actores clave a lo largo del Pacto Social y, a su vez, cómo éstas se relacionaron con el contenido del programa y sus modificaciones.

La hipótesis consiste en que el gobierno peronista, sustentado en una coalición político-social altamente heterogénea, buscó lograr un enraizamiento estable entre el Estado y entidades corporativas de la sociedad civil bajo un modelo de pacto social. Sin embargo, la disputa alrededor de la interpretación de los términos de intercambio político entre los actores principales del acuerdo, y el paso de la aceptación al rechazo de dichos términos por parte de importantes actores de la coalición, signaron el fracaso del programa.

Con una estrategia eminentemente cualitativa, en la tesis identificamos las posiciones de actores de la coalición oficialista a partir del análisis de documentos, periódicos y testimonios. Nos detenemos particularmente en la relación cambiante entre la CGE y la CGT, ambas puntales del Pacto Social; en los intelectuales y expertos en economía de la coalición que, en vínculo con organizaciones políticas y corporativas, impulsaron el programa desde el gabinete económico o bien lo criticaron tanto desde la administración gubernamental como desde la sociedad civil; y, finalmente, en las posturas de Montoneros, organización protagonista de una fuerte disputa con la conducción del movimiento peronista, que también afectó de manera directa el devenir del programa.

Palabras clave: Pacto Social – Tercer gobierno peronista – Gelbard – Enraizamiento – Intercambio político.

Índice

Índice de siglas.....	6
Introducción	8
Capítulo I. Construir una estrategia analítica.....	20
1.1 El programa económico – social del tercer gobierno peronista.	21
1.1.1 Las políticas sectoriales y sus resultados en la bibliografía sobre el Pacto Social	22
1.1.2 Un área de vacancia. El Pacto Social a través de sus actores: cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones políticas y funcionarios.....	26
1.2 Sobre la lógica detrás de los pactos sociales: el intercambio político.....	29
1.3 Sobre el enraizamiento en los pactos sociales.....	35
1.4 Hacia un abordaje novedoso de las posiciones alrededor del Pacto Social.....	40
Capítulo II <i>Los puntales del Pacto Social. Entre el intercambio político y el enraizamiento: las posiciones de la CGT y la CGE ante el programa económico.</i>	43
2.1 <i>Los primeros meses son de enamoramiento: el éxito inicial del Pacto Social.</i> 44	
2.1.1 <i>Apuntalar el Pacto Social. La CGE y la CGT ante la estructuración inicial del programa.</i>	44
2.1.2 <i>Épica filosófica y abordajes técnicos. El respaldo y la participación obrero - patronal.</i>	46
2.1.3 <i>El final del idilio. Disputa de interpretaciones sobre los términos del intercambio político.</i>	51
2.2 <i>El nudo gordiano. Precios, salarios y el incumplimiento de los términos de intercambio político.</i>	58
2.2.1 <i>Hacerse cargo. El debate de los actores corporativos: ¿quién debe pagar los costos de la “inflación importada”?</i>	58
2.2.2 <i>Un problema de legitimidad. Sobre cómo resolver la Gran Paritaria Nacional.</i>	64

2.2.3 <i>Tres son multitud</i> . Camino a la crisis del Pacto Social.....	71
2.3 <i>Un epílogo para la gestión Gelbard</i> : el fracaso del enraizamiento.	76
2.3.1 <i>El día después</i> . Gelbard sin Perón: la falta de legitimidad para coordinar a los actores corporativos.	76
2.3.2 <i>Triste solitario y final</i> . La frustración del pacto tripartito y la salida del ministro.	80
Capítulo III. <i>El gabinete económico del plan Gelbard: enraizamiento corporativo y disputas político – técnicas (o “De la imbricación del conocimiento económico”)</i>.	86
3.1. El enraizamiento empresario en el ministerio. La CGE en el gabinete económico.	88
3.1.1 <i>D’Adamo, Leyba y Caraballo</i> . El primer círculo de colaboradores y la confección de un plan.	88
3.1.2 <i>Un “superministerio” con pocos peronistas</i> . La conformación de la cartera económica.	95
3.1.3. <i>Relaciones para la Planificación</i> . El Plan Trienal.	104
3.2. <i>Entre el enraizamiento y el ataque</i> . Los economistas justicialistas en el gabinete y la crítica de los excluidos.	107
3.2.1. <i>Técnicos, políticos y peronistas</i> . Alfredo Gómez Morales y Miguel Revestido.	108
3.2.2 <i>El peso del nombre o el peso del cargo</i> . Antonio Cafiero.	112
3.2.3 <i>Afuera del gabinete, ¿adentro del gobierno?</i> La crítica al Pacto Social.	115
Capítulo IV: <i>Conflictos en la coalición oficialista. Montoneros ante el Pacto Social: de la aceptación al rechazo de los términos de intercambio político. ...</i>	120
4.1. <i>Cámpora al gobierno</i> . Un apoyo ambiguo al Pacto Social.....	121
4.1.1. <i>Los primeros meses son de aceptación</i> . Hacia la moderación montonera	121
4.1.2. <i>La tolerancia defensiva</i> . Custodios de los términos de intercambio político del Pacto Social.....	125

4.1.3. <i>Matices</i> . Las ambigüedades del discurso montonero.....	127
4.2 <i>Nuevos tiempos</i> . “Romper el cerco” para cambiar el rumbo, y una particular irrupción política en el desarrollo del programa económico-social.	130
4.2.1. <i>Los de afuera</i> ... La exterioridad de Montoneros ante el Pacto Social. ...	130
4.2.2 <i>Ataques y alteridades</i> . Montoneros y el Pacto Social ante el recrudescimiento de la disputa intraperonista.	133
4.2.3. <i>Tirarle al ministro</i> ... Montoneros ante el desgaste del Pacto Social.....	139
4.3 “ <i>Voltear</i> ” el Pacto Social para hacer la revolución. La impugnación final de los términos de intercambio político.	144
4.3.1. <i>Tiempo de boicot</i> . “Romper” el Pacto Social.	144
4.3.2. <i>Dar vuelta el tiempo</i> . Antagonizar con el gobierno peronista.	147
4.3.3 <i>Hacia una declaración de guerra</i> . El Pacto Social como motivo de defección de la coalición gobernante.....	152
Conclusiones	159
Agradecimientos	170
Fuentes, bibliografía y gráficos	172
Fuentes de prensa	172
Entrevistas y testimonios orales	180
Gráficos	181
Bibliografía.....	183

Índice de siglas

ACIEL: Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres.

ACN: Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social.

ACEP: Acta de Compromiso del Estado y los Productores para una Política Concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal.

BANADE: Banco Nacional de Desarrollo.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

CARBAP: Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa

CEE: Comunidad Económica Europea.

CEN: Corporación de Empresas Nacionales.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CFI: Consejo Federal de Inversiones.

CGE: Confederación General Económica.

CGI: Confederación General de la Industria.

CGT: Confederación General del Trabajo.

CINA: Confederación Industrial Argentina.

CONADE: Consejo Nacional de Desarrollo.

CONES: Consejo Nacional Económico y Social.

COPINV: Comisión de Precios, Ingresos y Nivel de Vida.

CRA: Confederaciones Rurales Argentinas.

CSMNJ: Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista.

CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria.

COPYME: Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa.

EE. UU.: Estados Unidos.

ERP-22: Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de Agosto.

FAA: Federación Agraria Argentina.

FAP: Fuerzas Armadas Peronistas.

FAR: Fuerzas Armadas Revolucionarias.

FREJULI: Frente Justicialista de Liberación

IIEF-CGE: Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras de la Confederación General Económica.

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

INPE: Instituto Nacional de Planificación Económica.

IPC: Índice de Precios al Consumidor.

JP: Juventud Peronista.

JTP: Juventud Trabajadora Peronista.

JUP: Juventud Universitaria Peronista.

MID: Movimiento de Integración y Desarrollo.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

PB: Peronismo de Base.

PEN: Poder Ejecutivo Nacional.

PJ: Partido Justicialista.

PRT-ERP: Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo.

SMATA: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.

SRA: Sociedad Rural Argentina.

UBA: Universidad de Buenos Aires.

UCR: Unión Cívica Radical.

UIA: Unión Industrial Argentina.

UOCRA: Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

UOM: Unión Obrera Metalúrgica.

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

YPF: Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Introducción

La presente tesis aborda el devenir del programa económico del tercer gobierno peronista, a partir de los posicionamientos de diversos actores de la coalición político social oficialista que consideramos relevantes para entender su devenir. Ellos son la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General Económica (CGE), en tanto organizaciones corporativas que sostuvieron el proyecto oficial; los grupos de técnicos e intelectuales económicos de la coalición que, desde el gobierno, se encargaron de administrar y coordinar el programa, o bien, desde fuera de la gestión, lo criticaron; y la organización política Montoneros, actor protagónico de la disputa intraperonista que signó esta gestión.

Bautizado popularmente como “Pacto Social”, el proyecto fue impulsado por José Ber Gelbard, un representante empresarial designado al frente de la cartera económica por acuerdo del presidente entrante en mayo de 1973, Héctor Cámpora, y Juan Perón, líder del movimiento político que llevaba su nombre. La iniciativa constituyó un proyecto fallido de estructuración económica, política y social, ya que la gestión del ministro se interrumpió abruptamente en octubre de 1974, jaqueada por fuertes disputas políticas al interior de la coalición de gobierno.

El programa involucraba representaciones sociales de organizaciones de la sociedad civil y demarcaba una coalición política que se encontraba ligada por un acuerdo fundante para la nueva gestión. En ese marco, la CGT y la CGE fueron los interlocutores privilegiados por el gobierno para llevar adelante un pacto tripartito coordinado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas¹ que involucró la participación en las estructuras gubernamentales de técnicos e intelectuales ligados a esas organizaciones corporativas. Al mismo tiempo, este acuerdo condicionó las relaciones al interior de la coalición oficialista, convirtiéndose en uno de los ejes centrales de la disputa intraperonista que caracterizaría a este período.

Es por ello que dos grandes preguntas estructuran nuestro trabajo: ¿cómo evolucionaron las posturas de diversos actores de la coalición oficialista a lo largo del

¹ Gelbard fue nombrado ministro de Hacienda y Finanzas, pero dicha designación fue acompañada por una aclaración: con la Ley de Ministerios que dictaría a la brevedad el gobierno entrante, se conformaría un Ministerio de Economía, que tendría competencias más amplias, disolviendo ministerios como el de Obras Públicas. Así, desde un primer momento Gelbard tuvo el control sobre diversas áreas que recién con la nueva ley pasarían a formar parte de manera formal del Ministerio de Economía. La nueva legislación se sancionó en octubre de 1973 (“Gelbard reunió...”, 1973; ver capítulo 3).

Pacto Social? Y, a su vez, ¿cómo se relacionaron esos posicionamientos con la aplicación, las modificaciones y los debates vinculados con el programa económico?

En primer lugar, consideramos estas preguntas relevantes porque la experiencia no ha sido suficientemente estudiada en lo que se refiere a la interacción y mutua influencia de actores -organizaciones de representación corporativa, grupos intelectuales, organizaciones políticas- que, a primera vista, podrían aparecer como agentes que operan en campos independientes. Un análisis centrado en sus posicionamientos cambiantes a lo largo del período permite iluminar las vinculaciones entre los diversos actores de la coalición oficialista.

En segundo término, el casi medio siglo que ha transcurrido desde esta experiencia parece no haberle restado actualidad. En tiempos en los que se ha hecho un culto de un vocablo tan impreciso como gráfico, como es el de “grieta”, para caracterizar el momento histórico que actualmente atravesamos, la apelación a un nuevo “pacto social” se ha repetido en las últimas décadas por parte de diversos protagonistas de la escena política argentina, como una suerte de fórmula que podría evitar un antagonismo acentuado en las relaciones políticas. La experiencia analizada no parece refrendar de manera contundente dichas expectativas. Sin embargo, el eterno retorno del concepto al debate público argentino² invita a pensar en esta tesis como una oportunidad para reflexionar sobre la viabilidad de los pactos sociales en determinadas condiciones, y la necesidad de atender a la relación entre bases sociales, poder político y factibilidad económica.

En el caso abordado, esa relación se presentaba en un escenario en el cual la excepcionalidad aparecía como la norma: la apertura electoral y el triunfo del candidato peronista suponían un doble desafío para el gobierno entrante, que no solo

²En la última campaña presidencial, por caso, existieron referencias explícitas respecto del ejemplo que significaba el programa impulsado por José Ber Gelbard. La mención que dio inicio a un amplio debate sobre el tema en 2019 fue realizada por la entonces candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la primera presentación de su libro *Sinceramente*. Además, en un breve relevamiento, encontramos menciones al respecto tanto para los inicios de ambos mandatos de Cristina Kirchner (https://elpais.com/diario/2007/12/11/internacional/1197327609_850215.html, https://www.clarin.com/ediciones-antiores/inversiones-pacto-social-prioridades-economicas-cristina_0_B16lJM1kAFx.html, <https://fortuna.perfil.com/2011-01-16-47418-primer-pacto-social-subas-de-salarios-de-20-a-25/>), como para el de Mauricio Macri (<https://www.cronista.com/economia-politica/empresas-aceptan-extender-precios-cuidados-para-contribuir-al-pacto-social-20151216-0040.html>), y de cara al inicio de la gestión de Alberto Fernández (https://www.clarin.com/politica/detalles-pacto-social-quiere-alberto-fernandez-acuerdo-salarios-impuestos-tarifas-precios-alimentos_0_6RVJ52tB.html). El debate parece haberse instalado nuevamente luego de las recientes elecciones legislativas de septiembre y noviembre de este año.

debía restablecer un sistema democrático sin proscripciones, sino que se encontraba también ante un marco económico desafiante marcado por una inflación creciente. A su vez, el escenario político se encontraba demarcado por la presencia de fuerzas armadas politizadas que abandonaban la Casa Rosada luego de siete años; el accionar de numerosas organizaciones guerrilleras; un sistema político que debía reincorporar al peronismo como actor legítimo y legal; y un contexto regional signado por países limítrofes en medio de severas crisis políticas, tutelados militarmente o bajo gobiernos militares. Al mismo tiempo, el líder del espacio político gobernante no ocupaba la presidencia de la Nación por la veda a su participación en los comicios, lo que generaba una peculiar situación en la que no estaba claro si el poder decisorio se ubicaba en la casa de gobierno, o en la residencia del expresidente ubicada en Vicente López, a la que peregrinaban líderes políticos, sociales y económicos.

El Pacto Social se presentaba entonces como una expresión de las modificaciones que el movimiento peronista había transitado a lo largo de los dieciocho años previos. La distancia impuesta entre Perón y los peronistas por el exilio obligado del primero no había disuelto el vínculo de conducción, sino que, en 1973, se observaba que el espacio político era más amplio y diverso que en su primera versión. Por un lado, durante la década del sesenta se habían producido dos fenómenos simultáneos que coadyuvaron a la heterogeneización del movimiento peronista. Grupos de variadas tradiciones de la cultura de izquierdas (Altamirano, 2000), acicateados por experiencias que ponían en crisis las lecturas clásicas del marxismo³, habían experimentado un acercamiento a las preocupaciones de raigambre nacional que, en muchos casos, los llevó a un proceso de *peronización*. Al mismo tiempo, Perón había alentado esos nuevos vínculos a través de repetidos elogios a figuras y procesos de izquierda, como el Che Guevara, Fidel Castro, Mao Zedong, y la propia Revolución Cubana, entre otros. Reconocía también a nuevos actores dentro del movimiento: alentó el accionar de grupos de jóvenes peronistas que abogaban por las armas como herramientas para la política y los reconoció como parte de sus “formaciones

³ Podemos mencionar, entre ellos, la Revolución Cubana, los procesos de desestalinización en la Unión Soviética, las luchas de descolonización en África y Asia, y el surgimiento de la *New Left* británica. En el plano local, el golpe de Estado de 1966, la CGT de los Argentinos y el Cordobazo son hitos ineludibles en este proceso. Sobre cómo estos fenómenos se relacionaron con cambios en sectores del peronismo y en las izquierdas en general, se recomienda consultar Acha (2009), Altamirano (2000), Bozza (2001), Lanusse (2005), Terán (2013) y Tortti (2002).

especiales” (Friedemann, 2021a). A finales de la década del sesenta, el líder exilado comenzó también a hacer referencia al “socialismo nacional”, a veces como un horizonte deseable para la realidad argentina, otras como un destino casi inexorable, aunque el contenido de este enunciado no era claramente definido.

En contraposición, la diversificación del peronismo incluyó la proliferación de organizaciones que reivindicaban la tradición hispanista, la naturalización de las jerarquías sociales y el anticomunismo. Conformaron un espacio más acotado que sus rivales dentro del espacio político, pero no por ello menos relevante; y también se identificaban bajo el liderazgo de Perón (Besoky, 2013, 2016; Denaday, 2017).

Expresión de parte de esta heterogeneidad, el 29 de mayo de 1970, primer aniversario del Cordobazo y, a la vez, Día del Ejército, un grupo de jóvenes de raigambre cristiana secuestraron y ejecutaron a Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto durante el gobierno militar inaugurado por el golpe de Estado de septiembre de 1955. El lanzamiento de la organización Montoneros sacudía así el escenario político: no se trataba de la primera organización guerrillera peronista, pero el grupo exhibiría una particularidad al articular sus acciones armadas con numerosas actividades políticas territoriales. Así, con el protagonismo de la Juventud Peronista Regionales, hacia 1973 logró convertirse en el grupo más importante del sector juvenil del peronismo, que pugnaba por constituirse en la cuarta rama del movimiento, hasta entonces conformado por la sindical, la femenina y la política o masculina (Bartoletti, 2010; Gillespie, 2011; Otero, 2019)⁴.

En el inicio de la gestión de gobierno, Montoneros demostró posturas ambiguas que le permitían apoyar ciertos aspectos económico-políticos del Pacto Social, pero luego avanzó hacia un rechazo profundo tanto al programa económico, como a la conducción del movimiento, dando lugar a la más resonante de las disputas internas del peronismo en el período. Esta confrontación incluyó el asesinato del líder de la CGT, José Ignacio Rucci, sostén fundamental del acuerdo tripartito (cap.4).

Por otro lado, la irrupción en la escena pública de Gelbard, un empresario que había tenido cierta participación en la primera década peronista, y su designación en un cargo de suma importancia en el nuevo gobierno, constituían el corolario de un

⁴ Un balance bibliográfico actualizado sobre la experiencia de Montoneros y sus actividades más allá de las operaciones guerrilleras puede consultarse en el reciente artículo de Mora González Canosa y Mariela Stavale (2021).

proceso que se había consolidado en las postrimerías de la autodenominada “Revolución Argentina”: el alejamiento de la CGE de las grandes centrales empresarias tradicionales (Sanz Cerbino & Baudino, 2014a). Complementariamente, se había producido un acercamiento entre esta organización empresarial y el sindicalismo peronista que conducía la CGT: en diciembre de 1972 habían impulsado la declaración *Coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos*⁵, que consiguió la adhesión de los partidos mayoritarios. El documento anticipaba los lineamientos centrales del programa que impulsaría el nuevo gobierno.

De este modo, el peronismo inició su gestión en 1973 con el apoyo de sectores tan disímiles entre sí que podían encontrarse entre sus adherentes reivindicaciones de la revolución socialista, el conservadurismo popular o el hispanismo tradicionalista. Cada sector subrayaba dimensiones diversas del discurso del líder, quien, al menos hasta su primer regreso en noviembre de 1972, se veía en la obligación de conducir esta heterogeneidad a la distancia. El fenómeno de ampliación del espacio político tendría una primera traducción electoral el 11 de marzo, cuando Cámpora obtuvo casi la mitad de los votos; y alcanzaría su punto cúlmine en septiembre de 1973, la segunda elección presidencial de ese año, en la que Perón obtuvo el 62% de los votos.

Por su parte, el plan económico del nuevo gobierno contemplaba, hasta cierto punto, esta diversidad del peronismo y se estructuró a partir de la firma del *Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social* (ACN), un acuerdo rubricado por la CGE, la CGT, y el Estado, que establecía instancias de diálogo y negociación permanentes entre los actores involucrados. Además, se impulsaron acuerdos con otras organizaciones del mundo de la producción, como las nucleadas alrededor de la actividad agropecuaria. Este programa suponía que la CGT y la CGE validaban los planes del gobierno, pero al mismo tiempo, recibían la legitimación por parte del Estado como interlocutores privilegiados. Así, los empresarios tenían a Gelbard, ideólogo del plan, en un puesto clave de la administración y, al mismo tiempo, a un representante en nombre de la CGE, Julio

⁵ A partir de ahora, “Coincidencias programáticas”. Fue un documento impulsado por la CGE y la CGT que constaba de veintidós puntos de política económica presentados el 7 de diciembre de 1972. Entre los adherentes figuraban 24 organizaciones políticas, encabezadas por el Movimiento Nacional Justicialista y la Unión Cívica Radical. En marzo, la CGE presentó un documento con propuestas similares bajo el título *Sugerencias del empresariado nacional para un programa de gobierno*.

Broner, en las instancias del Pacto Social. Los líderes de la CGT obtenían, por su parte, un rol definido en el programa de gobierno y un peso importante en el movimiento peronista. En cambio, los sectores políticos menos institucionalizados y sin peso en instancias corporativas, como era el caso de Montoneros, se encontraban en ese sentido en desventaja al no lograr insertarse de manera clara en el programa.

Por su parte, el peso de la CGE y la CGT se hacía visible en instancias de inserción y enraizamiento con el Estado Nacional a través de organismos que institucionalizaban el diálogo entre la esfera pública y la sociedad civil, y, particularmente, por la designación de sus representantes en lugares claves del Estado. Un dirigente sindical, Ricardo Otero, fue nombrado ministro de Trabajo; mientras que un representante empresario era designado en la cartera económica. Sin embargo, esta distribución no lograría equilibrios estables de poder y tanto la coalición político-social como el programa de Gelbard se verían malogrados antes de transcurridos dieciocho meses de gobierno peronista. En este recorrido, los actores interactuaron, delinearon los puntos iniciales del acuerdo, operaron sobre ellos, los reinterpretaban en numerosas ocasiones e intentaron también modificarlos, con y sin acuerdo de otras partes involucradas. A lo largo de la tesis, realizaremos un análisis diacrónico de los posicionamientos de actores relevantes de la coalición oficialista ante el Pacto Social, y observaremos cómo estos se relacionaron con la aplicación del programa económico.

En ese sentido, presentamos tres hipótesis principales. Primero, que el Pacto Social se vio horadado a partir de los cambios de posicionamiento tanto de los actores involucrados en el ACN, como de otras organizaciones políticas de la coalición oficialista. A su vez, la disputa alrededor de la interpretación de los términos de intercambio político, y el fracaso de las instancias de discusión tripartita, a través de las cuales se esperaba lograr el enraizamiento entre Estado y organizaciones corporativas de la sociedad civil, coadyuvaban a dicho desgaste.

La segunda hipótesis consiste en que el programa intentó expresar de manera poco exitosa en materia económico-social una preocupación común al peronismo y a Perón en diferentes momentos históricos, pero especialmente a principios de la década de 1970: unificar y lograr conducir actores extremadamente heterogéneos. En verdad, las dimensiones política y económica se encontraron yuxtapuestas: las disputas al interior del peronismo estuvieron cruzadas por los posicionamientos respecto del

programa económico, como veremos en el caso de Montoneros; mientras que, al mismo tiempo, estas disputas afectaron el devenir del programa.

Finalmente, la tercera hipótesis es que la búsqueda de un enraizamiento estable entre el Estado y las organizaciones corporativas se reflejó en las instancias mixtas de consulta recíproca y toma de decisiones, en la distribución de los cargos públicos, y, fundamentalmente, en el gabinete económico, donde se pueden identificar grupos y funcionarios relacionados con la CGE y la CGT, enfrentados, a su vez, con otros técnicos e intelectuales económicos de la coalición oficialista excluidos de esa cartera. En definitiva, no se alcanzó una síntesis exitosa, ni en lo político, ni en materia económico-social; y los resultados de esta frustración incidirían en el destino del tercer gobierno peronista.

El enfoque metodológico propuesto para poner a prueba estas hipótesis es eminentemente cualitativo. Así, utilizaremos técnicas acordes, poniendo en un lugar central las herramientas cualitativas de investigación (Valles, 1999): fundamentalmente el análisis documental y el análisis del discurso, sobre las que desarrollaremos en breve.

A su vez, las fuentes a las que recurrimos son diversas, seleccionadas de modo particular para cada interrogante que nos planteamos. Por ello, en el segundo capítulo las fuentes principales serán periódicos de la época; en el siguiente, una combinación entre testimonios y publicaciones del período; y en el último, revistas. No obstante, jerarquizar el peso de cada una de ellas para los distintos apartados no implica que serán utilizadas de modo excluyente; por el contrario, en todos los capítulos se apela a la triangulación de distintos tipos de fuentes como estrategia metodológica.

En cuanto a los periódicos, hemos realizado un intenso relevamiento hemerográfico de todo el período. La consulta de diarios nacionales y provinciales ha permitido identificar pronunciamientos, documentos y declaraciones de los representantes de la CGE y la CGT, así como de otras organizaciones. Entre los periódicos de alcance nacional, recurrimos a las colecciones de *La Prensa*, *Clarín*, *La Nación* y *La Opinión*, por tratarse de diarios que se encontraban entre los de mayor tirada de la época (Poggi, 2010), y que, al mismo tiempo, destinaban buena parte de sus páginas a la cobertura de los eventos político-económicos nacionales. En cuanto a los subnacionales, consultamos las colecciones del santafesino *El Litoral*, que, probablemente por el peso de la CGE en la región, presentaba una cobertura

particularmente detallada de las posiciones de sus dirigentes; y el porteño *Noticias*, que prestaba especial atención a los conflictos sindicales del período⁶.

Con la consulta alternada en el tiempo de estas publicaciones, se cubrió el período que abarca desde los días previos a la asunción de Cámpora -el relevamiento se inicia el 15 de mayo- hasta el día posterior a la renuncia de Gelbard, en octubre de 1974. El objetivo no fue analizar la línea editorial de cada uno de ellos, sino encontrar en sus páginas las voces de los actores -dirigentes políticos, empresariales y sindicales, funcionarios, técnicos e intelectuales- como insumo para identificar sus posturas a lo largo del tiempo. Sin embargo, como observación preliminar podemos identificar que *La Opinión*, *Noticias*, *El Litoral* y *La Prensa* no solo destinaban numerosas páginas al Pacto Social, sino que además reflejaban regularmente los discursos de sus protagonistas⁷. No obstante, aún en ese caso, debemos tener en cuenta que los medios, en tanto actores con agenda propia, seleccionaban también qué discursos reflejar y reproducir de manera prioritaria. Es así que, como recaudo metodológico, procuramos tener para todos los días del período el relevamiento de al menos dos periódicos distintos⁸.

⁶ Los diarios nacionales fueron consultados en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación, y, en el caso de *La Opinión*, también de la colección personal de Sergio Friedemann, a quien agradecemos el acceso. Los dos subnacionales presentan la ventaja de estar parcialmente digitalizados, por lo que *El Litoral* fue consultado en el sitio web de la Hemeroteca Digital de la provincia de Santa Fe (<http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/articulo/portada/>). Este diario también enriquece en términos de fuentes el trabajo porque combinaba la cobertura propia, con notas de importantes agencias de noticias como *Noticias Argentinas* y *Agencia Télam* para los temas nacionales, que no se encuentran demasiado presentes en los demás periódicos. Finalmente, *Noticias* fue consultado digitalmente en ruinasdigitales.com, y aquellos números necesarios que no se encontraban digitalizados fueron consultados presencialmente en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

⁷ El primero de ellos era dirigido por Jacobo Timerman, periodista cuya relación con Gelbard es advertida tanto por los actores del período (caps. 2 y 3) como por la bibliografía que aborda la trayectoria del ministro (Blejmar, 2019; Seoane, 2018). *Noticias*, a su vez, tenía vínculos con Montoneros, aunque mucho más lábiles que *El Descamisado* (Slipak, 2015). En cambio, el diario *Clarín* reservaba sus páginas sobre el Pacto Social para una cobertura crítica del programa, posiblemente por los vínculos que existían entre la dirección del periódico y los grupos desarrollistas (Sivak, 2013), que habían formado parte del FREJULI a través del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

⁸ La utilidad de esta precaución se hace manifiesta, por caso, en la cobertura de los festejos de la Confederación General Industrial -CGI, principal institución miembro de la CGE- en ocasión del Día de la Industria, presente en los periódicos del 2 de septiembre de 1973. El encuentro realizado en el club Ferrocarril Oeste tuvo gran trascendencia por la presencia de Raúl Lastiri, por entonces presidente interino de la Nación. Alfredo Concepción, titular de la CGI, realizó una severa autocrítica del rol histórico de los empresarios en el país, a la que *El Litoral* le dedicó nueve párrafos (cap.2). En cambio, *La Nación* también cubrió el importante evento, pero solo reprodujo un párrafo del discurso, obliterando los que, desde nuestra óptica, constituían los fragmentos más ácidos de la autocrítica empresarial (“Celébrase el Día...”, 1973). Algo similar ocurre con los reclamos salariales de la CGT y la preocupación expresada por Hugo Barrionuevo, secretario de Prensa de la CGT (ver textuales en el capítulo 2).

Otras publicaciones de gran relevancia para nuestro trabajo son las revistas vinculadas con Montoneros: *El Descamisado*, que publicó 47 números entre mayo de 1973 y abril de 1974, y sus efímeras sucesoras, *El Peronista* – seis números entre abril y mayo de 1974- y *La Causa Peronista* -nueve números entre junio y agosto del mismo año-. Resultan particularmente útiles para analizar las posturas de la organización respecto del Pacto Social porque, como señala Daniela Slipak (2015), se trató de proyectos editoriales de su conducción que tuvieron el objetivo de homogeneizar el discurso de un espacio que se ampliaba rápidamente. Este carácter inescindible entre la línea política oficial de Montoneros y sus órganos de prensa quedó al descubierto en las pocas rispideces que se produjeron en el staff periodístico de *El Descamisado*, siempre resueltas en favor de la línea de la Conducción Nacional, ya que se argumentaba que “la publicación debía respetar la línea oficial de la Organización y que toda diferencia debía plantearse en los ámbitos de militancia, no en las notas de la revista” (Slipak, 2015, p. 62)⁹.

Las publicaciones en ambos formatos -diarios y revistas- son a su vez complementadas a lo largo de la tesis con documentos de estas organizaciones y declaraciones de sus líderes en formato audiovisual. En todos los casos, somos conscientes del ejercicio hermenéutico que implica el análisis de estas fuentes, que serán abordadas tomando en cuenta sus contextos de producción y considerando la distancia entre estos y el momento de lectura. La importancia de estas precauciones está dada por reconocer que no es neutro el abordaje de un texto: la interpretación consta de un momento de distanciamiento y otro de apropiación (Ricoeur, 1999), de los que se debe tomar conciencia en tanto investigadores. En el mismo sentido, seguiremos las sugerencias de Friedemann (2012), quien, tomando elementos del enfoque etnográfico (Soprano, 2007), propone distinguir las categorías analíticas, que utiliza el investigador explicitando su sentido, de las nativas, propias de los actores abordados¹⁰. Tampoco en este caso se trata de una división tajante, ya que en las

⁹ Introducimos la aclaración de que nos centraremos en el análisis de las posiciones de las organizaciones antes que en cómo se desenvolvía el proceso decisorio previo al interior de cada una de ellas. Así, priorizamos la observación de la acción colectiva y sus resultados, antes que su génesis y formación. No obstante, en el capítulo 1 se mencionan trabajos que abordan las heterogeneidades en cada una de las organizaciones analizadas. A su vez, respecto de la acción colectiva al interior de las organizaciones empresarias, se recomienda consultar trabajos sobre la acción empresarial organizada (Dossi & Lissin, 2011).

¹⁰ En este caso, por ejemplo, tanto “enraizamiento” como “intercambio político” son dos categorías analíticas que nos resultarán útiles para conceptualizar los procesos estudiados (cap.1).

ciencias sociales analizamos un mundo previamente interpretado; existe entre ambas dimensiones, en cambio, una relación dialógica sobre la que es menester dar cuenta: reflexionar sobre las categorías analíticas supone para el investigador hacerse responsable de las palabras que utiliza.

Los testimonios de los actores, por su parte, se tornan particularmente relevantes para reconstruir elementos relacionados con la formación del gabinete económico de Gelbard, que abordaremos en el tercer capítulo. Resulta central la entrevista realizada por el autor en 2019 a Carlos Leyba, subsecretario de Coordinación Económica durante el período analizado. Gustavo Caraballo, fallecido en el año 2007, también supo revistar en el área económica y en la Secretaría Técnica de la Presidencia. Volcó su testimonio sobre esta experiencia en un libro autobiográfico (Caraballo, 2007). A su vez, los relatos de Roberto Lavagna, funcionario del área económica, y Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Movimiento Nacional Justicialista durante los primeros meses de 1973, fueron consultados en la Red de Archivos Orales de la Argentina Contemporánea¹¹.

En el caso de las entrevistas, realizadas varias décadas después de los hechos, el paso del tiempo también debe ser tenido en cuenta, aunque no necesariamente del mismo modo que en el caso de las publicaciones. Apelamos a estas fuentes considerando, como señala Hernán Confino, que es posible “acceder a las significaciones sobre las experiencias pasadas, aun a través de sus reelaboraciones presentes, de modo tal de no confinar el pasado a una fortaleza inexpugnable” (2021, p.42). No obstante, la precaución consiste en abordar la complejidad de la memoria: a lo largo del trabajo tomamos en cuenta las dificultades que presenta la apelación al relato de los actores cuando se realizan investigaciones vinculadas con la historia reciente (James, 2004; Jelin, 2002). La memoria será comprendida como un terreno complejo, un campo de disputas (Friedemann, 2012), y su resultado no será recibido como el reflejo diáfano de sucesos pretéritos, sino como una narración que produce sentidos en tanto momento activo.

Finalmente, en cuanto a su estructura, la tesis está organizada en cuatro capítulos. El primero de ellos se inicia con la construcción del estado de la cuestión, que nos

¹¹ En un segundo nivel también se encuentran el testimonio de Antonio Cafiero en su libro autobiográfico, *Militancia sin tiempo*, y una entrevista a Yolanda Ortiz, publicada en 2008. Ambos fueron funcionarios del área económica durante el período analizado (cap.3).

permite apreciar cómo nuestra indagación se inserta en la intersección de los campos de estudio de la historia política y económica, y la sociología económica. En el primer caso, dialoga con trabajos históricos que abordaron el tercer gobierno peronista, el Pacto Social y los conflictos políticos del período. A su vez, se relaciona con la sociología económica a partir de la reflexión sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil en los programas económicos y, en segundo lugar, al insertar la indagación sobre el gabinete económico de Gelbard en el debate sobre el rol de las élites estatales y el papel de técnicos e intelectuales económicos en la gestión pública¹². El capítulo incorpora luego la presentación del abordaje analítico, centrado en dos conceptos de las ciencias sociales que se imponen como protagonistas de la exposición: el intercambio político (Rusconi, 1985), como proceso complejo que rige la lógica de este tipo de programas, y el enraizamiento, fundamentalmente como vía institucionalizada de diálogo entre el Estado y la sociedad civil (Evans, 1996).

El segundo capítulo constará de la reconstrucción de las posiciones de las organizaciones corporativas principales de este programa: la CGE y la CGT. Ambas renegociaron constantemente los términos de intercambio político de los acuerdos, tanto entre sí como con el Estado. En ocasiones, lo hicieron de manera abierta, pero en otras a partir de la reinterpretación de los lineamientos originales. De este modo, sus posicionamientos afectaron directamente al programa que tuvo que ser reinterpretado o modificado en numerosas oportunidades.

En el tercero, analizaremos cómo se tradujo el enraizamiento entre el Estado y las organizaciones corporativas de la sociedad civil en la designación de funcionarios provenientes de esos espacios. Haremos foco en los funcionarios de la cartera económica, mayoritariamente provenientes de la CGE, pero también con presencia de referentes del justicialismo que acompañaron a Gelbard en la gestión del Pacto Social. De modo subsidiario, nos detendremos también en ciertos intelectuales y expertos en economía que, aunque formaban parte de la heterogénea coalición oficialista, no tuvieron lugar en el gabinete. A su vez, estos vínculos nos invitan a reflexionar sobre la imbricación del pensamiento económico, y la relación entre saberes técnicos y políticos.

¹² Sobre la inserción en estos debates ver capítulo 1.

Finalmente, en el último capítulo nos detendremos en la disputa política intraperonista que caracterizó este período, concentrándonos en las posiciones de Montoneros respecto del Pacto Social. Esta organización fue protagonista del principal conflicto al interior de la coalición, y el programa económico -aunque poco atendido por la bibliografía sobre el tema- fue un elemento clave de esos enfrentamientos.

En definitiva, nuestra tesis plantea interrogantes sobre los posicionamientos de determinados actores respecto del Pacto Social, cómo interactuaron entre sí y cómo afectaron al programa económico. A continuación, presentamos el resultado de nuestra investigación que brinda ciertas respuestas, e, inevitablemente, abre nuevos interrogantes.

Capítulo I. Construir una estrategia analítica

El 25 de mayo de 1973 quedaban atrás dieciocho años de proscripción del peronismo, en los que se habían alternado dictaduras militares con gobiernos electos en comicios en los que estaba prohibida la participación de la fuerza que insistía en demostrarse mayoritaria. Así, un peronista volvía al gobierno, pero no se trataba del propio Perón, impedido de participar en las elecciones por una cláusula de residencia impuesta por el gobierno de facto saliente; sino de su delegado, Héctor Cámpora, un odontólogo de la provincia de Buenos Aires que hacía gala de la lealtad como su principal atributo. Ésta era la más notoria de una colección de anomalías que presentaba el escenario político: el fin de un largo período de proscripción y de una dictadura militar que cumplía casi siete años; el acceso al gobierno de una coalición de pronunciada heterogeneidad que albergaba a espacios de izquierda que clamaban por la revolución socialista, sectores empresarios y nacionalistas conservadores; y la convivencia del retorno democrático con el accionar de numerosas organizaciones armadas tanto peronistas como no peronistas.

A su vez, el escenario económico sumaba otros desafíos para el gobierno entrante: una inflación creciente y la licuación de los salarios reales en los meses previos aparecían como los rasgos más preocupantes. En términos estructurales, el período de proscripción del peronismo había mantenido tasas de crecimiento estables -sobre todo desde 1963-, pero que se mostraban inferiores a las de otros países de la región, y para las cuales la restricción externa seguía resultando una amenaza. Además, se había registrado un avance notable del capital extranjero, fundamentalmente en la industria (Azpiazu et al., 2004; Azpiazu et al., 1986; Cimillo et al., 1973; Ferrer, 1977; Mallon & Sourrouille, 1973; Peralta Ramos, 2007; Rougier & Fiszbein, 2006; Vitto, 2012).

Gelbard fue elegido por Cámpora y Perón como nuevo responsable de la cartera económica. Esta designación estuvo acompañada por el lanzamiento de un programa bautizado popularmente como “Pacto Social”, un acuerdo que funcionaba como programa económico y, al mismo tiempo, ordenador político.

El abordaje historiográfico sobre este proceso se ha caracterizado por su heterogeneidad. Por ello, en el presente capítulo construimos un estado del arte que revela cuáles son sus dimensiones más exploradas y señala las áreas de vacancia al

respecto. Además, presentamos nuestro abordaje analítico estructurado alrededor de los conceptos de intercambio político y enraizamiento, que nos permiten reflexionar sobre los pactos sociales en general y, al mismo tiempo, aproximarnos a los elementos particulares del caso analizado¹³.

1.1 El programa económico – social del tercer gobierno peronista.

Los primeros días del nuevo gobierno fueron agitados: luego de vastas movilizaciones que reclamaban la liberación de los militantes políticos detenidos por la dictadura saliente, el oficialismo presentó ante el Congreso un proyecto de ley de amnistía que obtuvo un amplio apoyo¹⁴. Superado ese primer conflicto, la nueva gestión se concentró en establecer las bases de su programa económico: impulsó un compromiso policlasista cuyos objetivos centrales se vieron plasmados en el ACN, en conjunto con el *Acta de Compromiso del Estado* -entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias-, el *Acta de Compromiso del Estado y los Productores para una Política Concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal (ACEP)*, y el *Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional* presentado en diciembre de 1973. El ACN era la piedra basal del programa: anunciado formalmente por Cámpora el 8 de junio¹⁵, fue rubricado por los representantes de la CGE, la CGT, y el Ministerio de Hacienda. Expresaba objetivos alineados con los documentos previos impulsados por las dos organizaciones corporativas, y, en particular, con las “Coincidencias programáticas”. La legitimidad de la que gozaba el acuerdo era suficiente como para que una semana más tarde las principales cámaras empresarias -entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), y la Federación Agraria Argentina (FAA)- manifestaran su apoyo (“El respaldo al ‘compromiso nacional’...”, 1973).

¹³ Sobre la distinción entre pactos sociales como categoría analítica y el Pacto Social como experiencia histórica particular ver 1.3 y 1.4.

¹⁴ La más importante de estas movilizaciones se produjo en las inmediaciones del penal de Devoto y fue conocida como *Devotazo* (Gillespie, 2011; Nievas, 1999).

¹⁵ Aunque la versión que se incorporó al Plan Trienal aparece fechada el 30 de mayo (“Acta de Compromiso Nacional”, p.304), el relevamiento hemerográfico muestra que el anuncio fue el 8 de junio, y que en los primeros días de ese mes todavía existían negociaciones entre los actores involucrados respecto de la redacción final del documento (“Continúa aún en estudio...”, 1973; “Principales proposiciones...”, 1973).

Sobre el carácter del programa existe una polémica: en el libro compilado por Dornbusch y Edwards sobre experiencias populistas en América Latina, Sturzenegger (1992) encuadra al proyecto de Gelbard como un caso de macroeconomía populista, en línea con las definiciones ofrecidas por los compiladores en su clásico texto (Dornbusch & Edwards, 1989). Desde un análisis sociológico, Ricardo Sidicaro (2001) brinda un enfoque en el que presenta al Pacto Social como la antesala a la crisis del estado intervencionista, en la que la interacción de los actores con el Estado resultaba dañina y derivaría en la posterior *desarticulación estatal* que se produciría a partir de 1976. Adolfo Canitrot (1978), en cambio, sostiene que, si bien en la práctica el tercer gobierno peronista se desviaría de su enfoque inicial hacia el ejercicio del populismo económico, en 1973 el proyecto buscaba incorporar elementos de moderación salarial y evitar transferencias de ingresos desde el agro (p. 46). También otros autores clásicos marcaron el distanciamiento de este programa del populismo económico, ya fuera por el hincapié en la necesidad del aumento de las exportaciones (De Riz, 1981; Horowicz, 2015), o por la complejidad de su contenido, que no se limitaba al regreso de un escenario de redistribución y crecimiento del mercado interno (Brennan, 1997, p. 136).

Por su parte, Cecilia Vitto (2012) sostiene que los objetivos centrales eran estimular el desarrollo del sector privado nacional en detrimento del capital extranjero y de la “oligarquía nacional”, fomentar la redistribución del ingreso en favor de los asalariados, lograr una política de ingresos concertada, y estimular las exportaciones. A su vez, investigaciones recientes han hecho aportes a este debate. Pryluka y Coviello hacen hincapié en las novedades introducidas en el Plan Trienal con respecto al peronismo de posguerra (2018). Finalmente, Julián Blejmar (2020) ha abordado estas discusiones y, mediante un minucioso relevamiento, demostró que la bibliografía tiende a inclinarse mayoritariamente a definir el programa como no populista, por las novedades que introducía respecto de la economía del primer peronismo. Sin embargo, una aproximación a las políticas sectoriales que involucró permite obtener una comprensión más acabada del plan impulsado por Gelbard.

1.1.1 Las políticas sectoriales y sus resultados en la bibliografía sobre el Pacto Social

A pesar de que a finales de 1973 Gelbard y su equipo delineaban metas trienales, su gestión completa duraría poco más de un año. Su abrupto final puede ser atribuido

a una multiplicidad de causas: la disputa intraperonista que brindaba un contexto de violencia política para la aplicación del programa, un cambio en el escenario internacional desfavorable para la Argentina, el boicot de diversos actores y la pérdida de apoyos políticos, y la incoherencia por parte de agencias gubernamentales que emprendían políticas contradictorias (Brennan & Rougier, 2013; Canitrot, 1978; Di Tella, 1986; Lázzaro, 2013a; Rougier & Fiszbein, 2006; Vitto, 2012).

Son numerosos los autores que destacan cierta contradicción en sus políticas iniciales (Brennan & Rougier, 2013; Di Tella, 1986; Rougier & Fiszbein, 2006). Si bien el aumento salarial fijo definido por el ACN beneficiaba en términos relativos a los salarios más bajos de la pirámide, mayormente sectores populares que representaban una base de apoyo importante para el peronismo, al mismo tiempo impactaba negativamente en los empresarios de las ramas industriales intensivas en mano de obra, en las que los costos salariales representaban una carga más importante. Estos sectores de la industria eran en mayor medida los que se nucleaban en la CGE, uno de los sostenes del Pacto Social y base de apoyo de la coalición gobernante. Algo similar ocurría con la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), impulsada por el ministro Otero, que aumentaba las potestades de los trabajadores en su relación con los empleadores. Según Guido Di Tella (1986) uno de sus efectos fue el aumento del ausentismo, afectando principalmente a los mismos sectores de la industria.

En su análisis sobre el programa, Vitto (2012) señala que el núcleo de las políticas tomadas durante la gestión Gelbard puede reducirse a cuatro leyes fundamentales. La Ley de Capitales Extranjeros (20.557) establecía que ninguna empresa proveniente del exterior podría tener trato más favorable que las nacionales, mientras que las nuevas inversiones tendrían que pedir autorización al Estado y quedarían excluidas de áreas específicas. La ley 20.568 creaba un nuevo organismo, la COPYME, que tenía como fin la promoción de las pequeñas empresas, en especial en el interior del país, aumentando su participación en el mercado interno y facilitando su acceso al crédito. La Ley de Promoción Industrial (20.560) establecía el apoyo estatal a áreas prioritarias de la industria. Y, finalmente, la Ley de Defensa del Trabajo y la Producción Nacional (20.545) buscaba favorecer el rendimiento de las empresas de capitales nacionales, a través de la integración de procesos productivos y tecnología local, y la fijación de derechos de importación y exportación.

Di Tella, por su parte, destaca la reforma impositiva del período, que buscaba identificar a los propietarios de activos y sus fuentes de ingresos, y establecía un impuesto al capital -excepto la tierra-, a la vez que creó una policía impositiva especial. Menos entusiasta es el autor con respecto a la reforma financiera, “una mezcla de algunos conceptos arcaicos en materia bancaria y una actitud intervencionista” (1986, p. 169). La misma le otorgaba nuevas funciones al Banco Central, que se veía investido de más herramientas para orientar el crédito y determinar la masa de dinero circulante. Los fondos del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), por su parte, se orientaron al otorgamiento de préstamos flexibles para cubrir salarios y aguinaldos, lo que reducía la cantidad disponible para créditos destinados a inversión en maquinaria y equipamiento (Brennan & Rougier, 2013).

Se llevó a cabo, al mismo tiempo, una reorganización del Estado, pero Canitrot (1978) identifica en el presupuesto público un punto débil del plan económico: no se observó como un problema serio el aumento del déficit fiscal, y el Estado cargó con el mayor peso de la inversión en el período. En cuanto a las empresas públicas, en noviembre de 1973 se sancionó la ley 20.558/73 que creaba un ente que las agrupaba: la Corporación de Empresas Nacionales (CEN).

Con respecto al sector agropecuario, la preocupación fundamental residía en su estructura desequilibrada en cuanto a niveles de productividad (Lázzaro, 2013b). El nuevo gobierno partió de un diagnóstico consistente en que “el sector agrario no estaba en condiciones -como en la década de 1940- de realizar transferencias de su excedente hacia la industria y el ámbito urbano” (Lázzaro, 2013a, p. 149). En septiembre logró que se firmara el ACEP, por el que el Estado se comprometía a brindar a los productores agropecuarios financiamiento y acceso a la propiedad de la tierra. Por su parte, las entidades de productores¹⁶ se proponían aumentar los niveles de producción como parte de un programa de largo plazo (Lázzaro, 2013a).

La primera gran iniciativa para acrecentar la productividad en el área fue el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que “castigaría al productor ineficiente y a la especulación, a favor de la productividad” (Lázzaro, 2013b, p. 116). Di Tella (1986), por su parte, destaca las nuevas y ampliadas funciones otorgadas a las juntas de carnes y granos, y las señala como un elemento de continuidad con la política

¹⁶ Adhirieron la SRA, la FAA, CONINAGRO, y las Ligas Agrarias, entre otras; la única cámara patronal de peso que se negó a firmar fue Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

del primer peronismo para el área. La otra herramienta que planteó el gobierno fue el frustrado proyecto de Ley Agraria, que pretendía por primera vez “regular en forma orgánica todo lo concerniente a la tenencia y el uso de la tierra” (Lázzaro, 2013^a, p. 160).

Respecto del área energética, Barrera y Vitto (2009) señalan que fue un objetivo inicial implementar “una política activa de fomento a las energías renovables, con el objetivo de modificar la matriz energética del país, fundamentalmente hidrocarburo-dependiente” (Barrera & Vitto, 2009, p. 4). El contexto internacional estaba marcado por la incipiente “crisis del petróleo”, que había multiplicado el precio de los combustibles con un aumento interanual récord del precio del barril entre 1973 y 1974 (Rougier & Fiszbein, 2006).

El impacto en la cuenta corriente argentina resultó feroz, no solamente por lo que concernía a la energía directamente, sino porque los aumentos impactaban también en los insumos industriales importados¹⁷. Este diagnóstico llevó al gobierno, por un lado, a impulsar la explotación de fuentes de energía alternativas, tendencia que se podía observar en las políticas energéticas desde finales de la década del sesenta (Rougier & Fiszbein, 2006). Por otro, se delineó una Ley de Hidrocarburos que establecía cambios profundos que favorecerían a YPF en detrimento de las empresas extranjeras. Sin embargo, la ley proyectada para mayo de 1973 fue presentada recién en julio del año siguiente con modificaciones que atenuaban sus efectos.

Finalmente, en materia de política exterior, Gelbard llevó adelante negociaciones comerciales exitosas con los países socialistas -entre ellos, Cuba, la Unión Soviética (URSS), y Polonia-; abriendo mercados que fomentaban las exportaciones.

Los resultados del programa económico permiten lecturas diversas. En materia de comercio exterior, se produjo un salto notorio en las exportaciones (Canitrot, 1978), los términos de intercambio resultaban positivos para la Argentina y la cuenta corriente del año 1973 fue superavitaria en 704 millones de dólares. Sin embargo, en el último trimestre de ese año la situación se revirtió por la crisis del petróleo, deteriorándose

¹⁷ El déficit comercial energético pasó del 2% en 1972 al 10% en 1974: el impacto era particularmente fuerte para Argentina por el hecho de que casi el 70% de la matriz energética dependía de combustibles líquidos, mientras que en América del Norte y Europa Occidental su participación era de aproximadamente el 45% (Barrera & Vitto, 2009, p. 14).

los términos de intercambio en un 20% (Di Tella, 1986, p. 192). Al aumento de los precios de las importaciones, se sumaba la reducción de las exportaciones por la limitación a la compra de carne por parte de la Comunidad Económica Europea (CEE).

La tasa de inflación cercana a cero durante los primeros meses del programa fue un éxito que se atribuyó al gobierno, pero el aumento de costos de las importaciones a partir de la crisis internacional generó que la rentabilidad se redujera considerablemente, ya que los precios internos seguían mayormente congelados.

En materia de crecimiento, la gestión Gelbard se mantuvo en guarismos positivos de alrededor de un 6%. Sin embargo, no fue acompañado por números similares en la inversión, que durante buena parte del período fue negativa. La desocupación en 1974 llegó a un piso de 3,4% -sobrecumpliendo la meta del Plan Trienal del 5%- y el primer año del programa se caracterizó porque los salarios crecieron por encima de la productividad, haciendo disminuir los márgenes de ganancia empresarial (Vitto, 2012).

La reposición de estos hechos es necesaria porque fueron el marco económico en el cual los actores operaron políticamente sobre el Pacto Social. Parece existir consenso entre numerosos autores (Brennan & Rougier, 2013; Canitrot, 1978; Di Tella, 1986; Rougier & Fiszbein, 2006; Vitto, 2012) alrededor de la idea de que uno de los problemas centrales del programa fue su inflexibilidad, en especial respecto del congelamiento de precios, que resultaba demasiado rígido como para hacer frente a la volatilidad del escenario local e internacional¹⁸. En los capítulos siguientes, nos encontraremos con que, precisamente, el nivel de flexibilidad necesario respecto tanto de precios como de salarios fue uno de los puntos centrales de debate que cruzó a organizaciones corporativas, políticas, funcionarios, técnicos e intelectuales económicos en sus posicionamientos respecto del Pacto Social.

1.1.2 Un área de vacancia. El Pacto Social a través de sus actores: cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones políticas y funcionarios.

Mientras las políticas económicas sectoriales han sido un objeto privilegiado de la bibliografía sobre el período, no sucede lo mismo con las posiciones de los actores protagonistas del programa, elemento fundamental que permite apreciar la dinámica

¹⁸ Vitto (2012) y Di Tella (1986) hacen hincapié a su vez en la inflexibilidad del tipo de cambio que privaba a los funcionarios económicos de una herramienta clave.

de este pacto, y las tensiones y disputas políticas que implicaba. Existen, sin embargo algunas excepciones.

Sanz Cerbino y Baudino (2013) realizan un aporte al estudio de las cámaras empresariales y su rol en el Pacto Social, pero dentro de un análisis más amplio del rol de la burguesía entre 1969 y 1974. Los autores hallan en el acercamiento de la CGE a la CGT y el peronismo un antecedente claro que va a dar lugar más tarde al Pacto Social (Baudino & Sanz Cerbino, 2013).

Brennan y Rougier también señalan como un elemento fundamental el acercamiento de la UIA a las posturas de Gelbard y Broner, que se coronaría en agosto de 1974 con la fusión de la primera con la CGI en la Confederación Industrial Argentina (CINA), dentro de la CGE (2013, p. 252). No obstante, los autores sostienen que se trataba esencialmente de una cuestión de conveniencia para acceder a beneficios del Estado, motivo por el cual, en cuanto empeoró la situación del gobierno, la UIA abandonó la CGE, al igual que otras federaciones menores (2013, p.261).

En cambio, en una importante sección de la bibliografía, el rol del sindicalismo peronista, en particular de la CGT, parece quedar subordinado al de un actor que resultó inmovilizado por los acuerdos que le impedían exigir aumentos salariales. Recién recupera centralidad en los relatos para ser señalado como un agente de desestabilización por los reclamos que realizó a finales de 1973 (Canitrot, 1978; Sidicaro, 2002; Torre, 1983). Canitrot (1978), por su parte, ofrece una explicación en la que vincula sagazmente política y economía, pero no identifica a las organizaciones políticas intervinientes con la misma precisión con que lo hace en el caso de los actores económicos.

Desde la sociología, Juan Carlos Torre (1982) destaca que los sindicatos peronistas priorizaron el corto plazo, lo que dificultó el cumplimiento de los objetivos últimos del programa económico. El sindicalismo clasista, por su parte, se mantuvo siempre crítico, por su oposición a políticas que apuntaban a la conciliación entre el capital y los trabajadores. El autor identifica estos rasgos del sindicalismo argentino como elementos que explicarían, en parte, el fracaso de esta experiencia (Torre, 1983, 1982, 2004). Sidicaro (2001, 2002), en cambio, es crítico del rol de todas las entidades corporativas ya que sostiene que la participación de estos actores generó una “sobrecarga” de demandas dentro del propio Estado.

Otra arista escasamente abordada atañe al rol de numerosos funcionarios que aplicaron el programa, ya que en ese sentido la atención se ha centrado mayormente en la figura de Gelbard (Blejmar, 2019; Rein, 1996, 2015; Seoane, 2018). Poco se ha escrito entonces sobre otros técnicos e intelectuales relacionados con las organizaciones corporativas y políticas de la coalición oficialista que intervinieron en el período en relación al Pacto Social.

Un aporte en ese sentido es el trabajo de Luis Donatello (2017), que relata la trayectoria de quien fuera jefe de asesores del ministerio, Gustavo Caraballo. A su vez, sobre los economistas vinculados al Partido Justicialista (PJ) que Gelbard supo cobijar dentro de la cartera, se ha hecho referencia de manera más notoria vinculada a sus roles en la primera década de gobiernos peronistas (Belini, 2009; Gerchunoff & Llach, 2007; D. Pereyra & González Bollo, 2020; Rein, 1996; Rougier, 2012), o bien en el período previo al regreso de Perón (Denaday, 2018, 2020).

Finalmente, tampoco se hallan análisis que profundicen en la relación entre el devenir de este programa y el particular conflicto político que cruzó a la coalición gobernante en el período. La bibliografía sobre el conflicto es amplia (Bartoletti, 2010; Besoky, 2013; Gillespie, 2011; Sigal y Verón, 2003; Svampa, 2003; entre otros), pero se ha abordado predominantemente de forma escindida de la suerte del programa económico. No obstante, el análisis de las posturas de Montoneros resulta crucial para aprehender el devenir del Pacto Social: como parte de estas disputas, la organización lanzó ataques contra sindicalistas y empresarios, incluyendo el homicidio de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y uno de los tres firmantes del ACN (cap. 4). Así, luego de un moderado apoyo a los lineamientos económicos, profundizó su antagonismo también en esta dimensión hasta llamar a “romper” el Pacto Social.

Sanz Cerbino y Lisandrello (2018) abordan ciertos vínculos entre la configuración interna de la coalición político social oficialista y el programa económico al afirmar que, en un primer momento, fue una convergencia de programas entre Montoneros y la CGE el elemento que permitió llevar adelante el Pacto Social. Sin embargo, los autores hacen un análisis de las grandes definiciones programáticas de estas organizaciones antes que un abordaje diacrónico sobre cómo se modificaron sus tácticas y posturas a lo largo del período.

También los autores que se concentraron en la experiencia de Montoneros abordaron algunos de estos posicionamientos, pero resulta una mención que no es

central en el relato de obras de historia política (Bartoletti, 2010; Gillespie, 2011), o bien se privilegian las posiciones de la Juventud Trabajadora Peronista, un espacio de la organización dedicado al trabajo sindical y, por lo tanto, el más enfrentado con la CGT (Lissandrello, 2012; Pacheco, 2014).

En definitiva, la bibliografía sobre el Pacto Social ha abordado el período priorizando eminentemente las variables económicas. Es así que Rougier y Fiszbein advierten en la introducción de su trabajo que, más allá de que incorporan una variable político social, “en este libro se analizará solo la dimensión económica del peronismo en el poder” (2006, p. 10). En la misma senda, Adolfo Canitrot señala que el tratamiento del tema en su trabajo es “preponderantemente económico” (1978, p. 2), en su búsqueda por reflexionar sobre la relación entre la gestión económica y la democracia en aquellos países que atraviesan un proceso de industrialización. En nuestro caso, en cambio, priorizaremos enfocarnos en la intersección entre política, economía y sociedad, rescatando el peso político de los posicionamientos de actores de diversos planos respecto del programa económico social del gobierno peronista. Para ello, serán fundamentales en nuestra argumentación dos conceptos de las ciencias sociales: el intercambio político y el enraizamiento.

1.2 Sobre la lógica detrás de los pactos sociales: el intercambio político.

La articulación del Pacto Social no solo canalizaba la relación entre el Estado y actores de la sociedad civil, sino que condicionaba la acción colectiva tanto de los sectores empresarios como de los trabajadores¹⁹. Por ello, a lo largo del trabajo priorizamos un enfoque corporativo de la acción colectiva, centrado en el análisis de procesos de articulación de intereses a partir de organizaciones formales. El antecedente más directo de un análisis similar acerca de la realidad argentina puede encontrarse en el libro de Mario Lattuada (2006) sobre corporaciones agrarias. A partir

¹⁹ Offe y Wiesenhal (1992) inauguraron un campo de estudios al marcar la lógica diferencial de la acción colectiva a nivel empresarial y sindical. El Pacto Social permite observar similitudes y divergencias en el caso específico (cap.2). Sin embargo, a pesar de la importancia de identificar diferencias entre estos tipos de acciones, la tesis de la homogeneidad de intereses en el mundo empresarial para el caso argentino fue refutada a través de estudios de casos que demuestran la heterogeneidad de los mismos, y los conflictos que se presentan entre los dueños del capital en la Argentina en diversos períodos (D Azpiazu et al., 2004; Beltrán, 2012; Birle, 1997; Dossi, 2008; Dossi & Lissin, 2011; Heredia, 2003; Lissin, 2008; Ostiguy, 1990), y en particular durante el Pacto Social (Rougier & Fiszbein, 2006; Sanz Cerbino & Baudino, 2014).

del enfoque que Offe (1981) denomina “desde arriba” -es decir, los trabajos que se centran en la relación entre las asociaciones empresarias y el sistema político- realiza un abordaje desde el concepto de acción colectiva que combina un enfoque corporativista amplio con la perspectiva de los movimientos sociales, y resalta la fragmentación de estos actores a la hora de negociar con el Estado. No obstante, evitaremos lo que Lattuada (2006) denomina un enfoque restringido del corporativismo, identificado con desarrollos teóricos con una fuerte raigambre analítica europea, que dificulta sus usos para otras latitudes.

En el análisis de un caso de la realidad nacional, buscaremos también eludir tanto los sesgos “estadocéntrico” como los “centrados en la sociedad”, sobre los que advierte Aníbal Viguera (1998). Es decir, no ponderar a priori como variable explicativa central ni el rol de Estado y sus decisiones económicas, ni el de las entidades corporativas de la sociedad civil. Antes bien, se trata de una relación en la que el peso de cada uno de estos factores y cómo se relacionan entre sí, son elementos que varían históricamente. El propio Viguera (1997) había estudiado con ese lente el proceso de apertura económica en la Argentina entre 1987 y 1996, centrándose en la relación entre el Estado y los empresarios, y buscando articular una perspectiva integradora que reflejara la incidencia política tanto del sector público como de la sociedad civil.

Por otro lado, los trabajos que abordan los vínculos entre entidades sindicales y el Estado hacen hincapié de manera sistemática en las relaciones corporativas: Toledo (2001) señala que a lo largo del tiempo se ha establecido en Argentina un sindicalismo corporativo, es decir, “aquel más subordinado al Estado que a las empresas” (2001, p. 10). A su vez, Sebastián Etchemendy (2010, 2013) ha abordado la relación de las organizaciones representantes de los trabajadores con los gobiernos kirchneristas a partir de las categorías de *concertación* y *negociación colectiva*. El autor identifica al sindicalismo como el principal actor económico de la coalición gobernante en el período 2003-2011 (Etchemendy, 2013). En trabajos previos, Etchemendy y Collier habían utilizado el término *neocorporativismo segmentado*²⁰, caracterizado por la

²⁰ Si bien no será un concepto central de esta tesis, aclaramos que la bibliografía sobre corporativismo y neocorporativismo es vasta, elemento por el cual se han realizado advertencias por el estiramiento tanto conceptual como teórico que ha prestado a diversas confusiones sobre su contenido (D. Collier, 1995). Etchemendy y Collier afirman que se pueden encontrar ciertos acuerdos a partir de buena parte de la bibliografía existente, al respecto de la definición del neocorporativismo como “una modalidad de estructuración de grupos de interés y de formulación de políticas públicas”, caracterizada por dos elementos fundamentales: “a) las organizaciones sindicales y empresarias tienden a ser monopólicas y

porción limitada de la fuerza de trabajo sobre la que se aplicaban los acuerdos alcanzados bajo ese esquema, y por la falta de una política social que redujera la desigualdad al interior de la clase obrera, como era característica de los neocorporativismos europeos²¹.

Collier (1995), por su parte, señala que, en ocasiones, se ha utilizado sin distinción el término “pactos sociales” para referirse al corporativismo. Antes bien, creemos que determinados pactos sociales pueden configurarse como una forma particular de esquema corporativista. A su vez, desde entonces se ha desarrollado una importante bibliografía sobre estos pactos, que nos permite referirnos a los mismos con su propia especificidad, como una forma particular de diálogo social que pone en juego representaciones corporativas. Estas investigaciones se han concentrado mayormente en experiencias del continente europeo que se produjeron en dos oleadas: la primera en las décadas del 60 y 70, y la segunda durante la década de 1990 (Ahlquist, 2008; Avdagic et al., 2005; Benes y Gurrera, 2018; Fajertag & Pochet, 1997; Pizzuto, 2006; Rhodes, 2001). ¿Puede pensarse entonces el programa analizado en relación con ciertos elementos de la primera oleada? Las experiencias europeas aparecen por momentos como una inspiración²² pero, en cualquier caso, herramientas teóricas de los trabajos referidos resultan útiles para abordar procesos de nuestra región²³.

De todas formas, la ambigüedad entre niveles conceptuales puede resultar un problema para la tarea del investigador: en este caso, la experiencia analizada es conocida como “Pacto Social”, pero el mismo término se ha utilizado en las ciencias sociales para estudiar esquemas específicos de diálogo y negociación entre el Estado

bastante centralizadas; b) las políticas con respecto al salario y otros aspectos se formulan en concertaciones tripartitas a nivel de cúpulas entre el Estado y los actores sociales, soslayando las instituciones legislativas y la representación territorial (...)” (2008, p. 147). Resultan textos clásicos sobre los usos del término los de Schmitter (1985, 1992), Garret y Lange (1986), y Collier y Collier (1979), Collier (1995), Etchemendy (2004; 2001). Para un ejemplo del vínculo entre corporativismo e intercambio político con un enfoque marcadamente europeo ver M. Pereira (1999).

²¹ Natalucci (2013) sostiene una tesis similar al señalar que durante el kirchnerismo se produjo una *revitalización sindical*, pero dicho proceso se vio acotado a la restitución del poder de negociación corporativo.

²² Carlos Leyba, colaborador de Gelbard, afirma tanto en su libro (Leyba, 2010) como en una entrevista para este trabajo (Leyba, 2019), que las experiencias de diálogo social europeas resultaron una influencia fundamental para diagramar el Pacto Social.

²³ Ese camino han emprendido Benes y Gurrera (2018) para reflexionar sobre las experiencias de pactos sociales en la Argentina, y García (2004) para abordar experiencias tripartitas de diálogo social en Argentina y el Mercosur.

y otros actores sociales²⁴. El concepto resulta útil porque involucra nociones de acción colectiva y formas de articular demandas; al mismo tiempo, pone en primer plano a los actores que protagonizan estos acuerdos.

Los pactos sociales constituyen entonces un subtipo específico de diálogo social. A diferencia de otras formas más laxas, requieren tanto la coordinación entre los actores como la “formalización” del pacto (Ahlquist, 2008): en el caso analizado esto se produjo originalmente a través de la firma del ACN. Benes y Gurrera (2018) precisan que los pactos sociales implican también la coordinación para la formulación y ejecución de políticas públicas relativas a asuntos variados, que deben estar claramente delimitados en los acuerdos firmados, por lo que la participación del gobierno, junto a otros actores sociales, resulta un elemento importante para su constitución. Finalmente, proponen una clasificación: por un lado, los pactos productivistas se produjeron centralmente en la segunda ola, a finales del siglo XX. Priorizan el aumento de la competitividad y la productividad para garantizar condiciones para la inversión. Por otro lado, los pactos distributivos se centran en la coordinación de precios y salarios, buscan limitar la inflación y tienen una importante participación sindical²⁵. Son estos últimos los que nos resultan relevantes, tanto por sus características como por su ubicación histórica, y exclusivamente a ellos nos referiremos en los capítulos siguientes.

En el caso del Pacto Social, la firma del ACN implicaba una serie de legitimaciones cruzadas. El gobierno conseguía el apoyo de la CGE y la CGT para su programa. A su vez, estas organizaciones corporativas recibían una legitimación por parte del Estado, al reconocerlos y priorizarlos como actores relevantes para conformar un esquema de pacto tripartito. Sin embargo, al mismo tiempo, los compromisos

²⁴ Utilizaremos “pacto social”, en minúscula, como una categoría analítica (Friedemann, 2012; Soprano, 2007) útil para clasificar este tipo de experiencias que, como desarrollaremos, incluyen procesos de diálogo social y negociación colectiva que involucran al gobierno y a representantes del capital, el trabajo, o ambos. Lo diferenciaremos del Pacto Social, en mayúscula, nominación que obtuvo el caso particular que estudiamos.

²⁵ De este modo, Benes y Gurrera resignificaron, desde el análisis de las políticas involucradas en los programas, la clasificación que Rhodes (2001) proponía según los tipos de coaliciones que los apoyan. En esta resignificación, los pactos distributivos se caracterizan por tener como objetivo controlar la inflación, se centran en el control de precios y salarios, compensan a los actores con la ampliación de la seguridad social, y presentan una fortaleza sindical y una institucionalidad del diálogo altas. En cambio, los pactos sociales productivos tienen como objetivo prioritario el aumento de la productividad y la competitividad, compensan a los actores con la participación en nuevos negocios, y presentan baja institucionalidad del diálogo, como así también baja fortaleza sindical (Benes y Gurrera, 2018).

asumidos implicaban limitaciones de diverso tipo para estos actores, en particular en lo concerniente a reclamos salariales y aumentos de precios. Es Juan Carlos Portantiero (1987) quien parece identificar en el debate intelectual argentino el carácter paradójal de este tipo de acuerdos. En un análisis sobre posibles caminos para la transición democrática de la década de 1980, en el marco de discusiones sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil, señala que estos modelos de pactos consisten en una negociación que se articula alrededor de la idea de *intercambio político*. Así, se instaló el concepto en los análisis de esa década, a partir de debates intelectuales marcados por el posibilismo respecto de la reestructuración del sistema político y social argentino²⁶.

Esta categoría ha sido desarrollada por diversos autores en indagaciones acerca de la interacción política entre el Estado y actores de la sociedad civil (Aguilar Astorga, 2015; Lindblom, 1977; Meza, 1986; Pizzorno, 1991; Portantiero, 1987; Rusconi, 1985). Charles Lindblom (1977) fue un pionero al señalar que los intercambios en la esfera política son distintos a los que se producen entre los individuos en los mercados de bienes materiales, porque en la política se ponen en juego también bienes de autoridad. Alessandro Pizzorno subrayaba que este intercambio consiste en que “el poseedor de bienes (generalmente el gobierno) está dispuesto a intercambiarlos por consenso social con otro actor que puede amenazar con destruir ese consenso (...) a menos que reciba los bienes que necesita” (1991, p. 384). Sin embargo, el autor limita su análisis a posibles tratos entre el Estado y los sindicatos.

El italiano Gian Rusconi (2021) sostiene que todo el modelo corporativista se funda sobre el concepto de intercambio político, para el que ofrecía una definición clarificadora:

una situación en la cual se negocian bienes de naturaleza diversa, a medio camino entre la economía y la política. Los protagonistas de la transacción son los grupos sociales organizados y el Estado, en varias combinaciones (...) [Los bienes] pueden ser salarios, ocupación, inversiones, facilidades de crédito o tributarias, etcétera, pero también lealtad política, consenso democrático o simplemente suspensión de disenso activo, postergación de sanciones. (Rusconi, 1985, p. 67)

²⁶ Otro ejemplo se puede encontrar en Landi (1985).

Esta definición nos permite afirmar que es el intercambio político el proceso que permite constituirse como tales a los pactos sociales²⁷. Este intercambio funciona como una vía de institucionalización del conflicto de clases, a la vez que no se constituye en emulación del mercado económico, sino que combina la lógica del mercado con la lógica de la autoridad (Rusconi, 1985). Tanto Portantiero (1987) como Luis Tapia (2009) reflexionaron sobre esta categoría, originalmente planteada para países europeos, revisitada para abordar las realidades latinoamericanas. Ambos coincidieron en la puerilidad de pretender una distinción tajante entre economía y política, o entre bienes económicos y bienes de autoridad: en contextos de intercambio político todos ponen en juego bienes políticos, tengan o no un correlato material²⁸. Esa politicidad de los bienes económicos es reconocida por Rusconi, quien sostiene que también es política la misma legitimación del intercambio y sus reglas: “estas reglas dependen del consenso social, que con ello juega el doble papel de objeto central de intercambio y precondition del mismo” (Rusconi, 2021, p. 204).

El concepto se diferencia de abordajes de las teorías de los juegos relacionados con el modelo de *rational choice* porque, si bien involucra las expectativas y la correlación de fuerzas, también otorga un papel central a la ideología, y, fundamentalmente, al impacto en términos identitarios que el proceso tiene sobre los actores²⁹. Al respecto, Rusconi señala:

El intercambio político presupone y confirma la no equivalencia de los sujetos y de los bienes en juego. Los diversos contratantes les invisten el sentido de su acción colectiva, experimentando al adversario en sus recursos y límites, reconociendo así realmente sus propios límites y recursos. La identidad resulta, en definitiva, el producto de una reciprocidad entre los contratantes, que no es sinónimo de paridad sino, por el contrario,

²⁷ Benes y Gurrera (2018) coinciden sobre el rol del intercambio político en estos pactos.

²⁸ Luis Tapia utiliza el concepto de Rusconi para analizar la política boliviana, y distingue al intercambio político del clientelismo. Concluye que en los casos en los cuales el Estado u otro actor dispensan dinero discrecionalmente, sin un proceso de politización -es decir, de institucionalización y colectivización de la acción-, a cambio de apoyo, no se trata de intercambio político, sino de clientelismo. En el caso del intercambio político prima la lógica política, mientras que en el de clientelismo primaría la lógica económica (2009, p. 91).

²⁹ Rusconi critica lo que denomina un “vicio de abstracción” de las teorías del mercado y la “elección racional” que provendría “verticalmente de la ideología burguesa clásica del individuo libre y poseedor, que dispone de sí y de sus bienes con pleno dominio de lo que es y de lo que quiere”. Por otro lado, en cuanto a la identidad, señala que la ideología es “su componente que con mayor facilidad puede captarse desde el exterior”, pero, sin embargo, no se reduce solo a ella (1985, p.80).

de confrontación y confirmación de la disparidad. De este intercambio, la identidad de partida surge desmentida, confirmada, o simplemente cambiada. (1985, p. 82)

En el programa propuesto por el tándem Cámpora – Gelbard, los actores involucrados pusieron en juego sus recursos y límites no solamente al momento de definir los parámetros iniciales del acuerdo, sino, especialmente, cada vez que intentaron reinterpretarlo, modificarlo, o sencillamente derribarlo.

1.3 Sobre el enraizamiento en los pactos sociales

Si el intercambio político describe una forma de relacionarse entre el Estado y otros actores sociales, el vocablo inglés *embeddedness* (enraizamiento) aparece como un concepto polisémico que expresa la imbricación intrínseca entre lo económico y lo social e inserta nuestro trabajo dentro de la tradición de la sociología económica. Desarrollado por Mark Granovetter (1985), este concepto busca desmentir la noción de los economistas neoclásicos con respecto a que las relaciones económicas pueden ser analizadas de manera independiente de lo social. Minor Salas señala que la categoría refiere a que estas relaciones “están inmersas de forma indisoluble en un mundo de relaciones sociales, culturales, políticas e institucionales” (2004, p. 43). Se trata “de visualizar el cómo lo económico está articulado de manera indisoluble, con lo social, lo cultural y lo político” (2004, p. 47). El vínculo con el concepto de intercambio político es evidente: sobre este último, Meza (1986, p. 2) afirma que “permite entender procesos de imbricación cada vez más profundos entre sociedad y estado”, mientras vincula a la esfera económica con la política al desdibujar los límites entre ellas.

De este modo, el *embeddedness* fue parte de la respuesta de la Nueva Sociología Económica a la perspectiva de la elección racional sobre la acción, y señala la relación intrínseca entre el actor económico y el entorno social a la hora de tomar decisiones, haciendo referencia a la estructuración social, cultural y política de las decisiones en contextos económicos (Beckert, 2017). Así, funciona como un “soporte social” para la acción económica, que tiene especial utilidad cuando, “desde la teoría, se intenta reconstruir un hecho empírico mediante la articulación de conceptos pertenecientes a disciplinas heterogéneas. Es un remedio contra una construcción reduccionista del campo económico” (Fonseca, 2004, p. 150).

Sin embargo, es en un sentido todavía más preciso que el concepto nos será útil como herramienta heurística. Peter Evans, en su clásico trabajo *El Estado como problema y como solución*, retoma el término para graficar la existencia de vínculos y canales institucionalizados de comunicación entre el sector público y la sociedad civil. Son canales de información en ambos sentidos, pero también de negociación sobre el carácter de las políticas públicas. El autor lo utiliza para sostener una hipótesis sobre los factores necesarios para lograr escenarios desarrollistas: no alcanza con que los aparatos burocráticos estatales tengan una autonomía weberiana en un sentido de aislamiento. Deben existir también vínculos con los actores sociales no estatales, es decir, enraizamiento. La propuesta del autor consiste en lograr una “autonomía enraizada” (Evans, 1996).

El texto pionero de Evans ha inspirado numerosos trabajos que se centraron en el análisis del funcionamiento del Estado y su necesaria relación con los empresarios con miras a lograr escenarios de “desarrollo económico”. Castellani y Llanpart subrayan que “el enraizamiento permite conocer las inquietudes y requerimientos del sector privado, y al mismo tiempo permite evaluar, controlar y moldear antes y después de su implementación, las reacciones privadas a las iniciativas públicas” (2012, p. 159). Encontramos que es particularmente relevante para abordar situaciones de pacto social ya que se centra en la relación del Estado con actores económicos a través de canales de diálogo formales o informales, que permiten “la construcción de una relación de reciprocidad y búsqueda de consenso entre las partes, aumentando el grado de eficacia de las intervenciones públicas” (Castellani & Llanpart, 2012, p. 160). Por otra parte, las autoras advierten sobre las dificultades “de especificación empírica cuando se busca dar cuenta de graduaciones o modalidades” (2012, p. 161). En cuanto a ello, para evitar lecturas teleológicas del pasado, en los capítulos siguientes nos interesará identificar elementos del Pacto Social que se corresponden con el establecimiento de vías de comunicación sistemáticas entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil, independientemente de que, finalmente, no hayan cumplido integralmente sus objetivos iniciales.

En definitiva, reflexionaremos sobre el enraizamiento en un doble sentido, tanto por los vínculos entre Estado y sociedad civil, como entre la esfera económica y la sociopolítica. Los pactos sociales distributivos representan una forma particular de estructuración de los intereses sociales que implica la puesta en práctica de

mecanismos coherentes con el enraizamiento a través de canales de información y negociación institucionalizados entre el Estado y actores de la sociedad civil. Así, podemos concluir que uno de los objetivos de los pactos sociales es estabilizar y asentar ese enraizamiento, elemento que, a su vez, brinda mayores posibilidades de éxito a este tipo de programas.

Bajo la influencia de las obras de Evans, investigaciones recientes han abordado diversas aristas de la realidad argentina a partir de estas categorías. Entre ellas podemos distinguir tres tipos fundamentales: las que se centran en la trayectoria de determinados funcionarios y su relación con grupos económicos (Donatello & Obradovich, 2020; Obradovich & Donatello, 2018); las que analizan el rol del Estado como actor que puede motorizar el desarrollo (Castellani, 2006; Castellani & Llanpart, 2012; García, 2018a), y aquellas que hacen foco en la implementación de políticas públicas específicas, evaluadas a partir de la relación entre los funcionarios ejecutantes y la sociedad civil (García, 2018b; Librandi & Di Marco, 2014).

La proliferación de análisis que priorizan el rol del Estado y su relación con los grupos empresarios encuentra su origen en el propio trabajo de Evans (1996), que se concentraba en el vínculo de la burocracia con el sector empresarial. Sin embargo, la definición de enraizamiento funciona a partir de los canales de diálogo entre el sector público y la sociedad civil en general (Evans, 1996, 1997), y el autor recomienda incluir en los análisis de países con estructuras sociales diferentes, a otros actores, en particular a los trabajadores (Evans, 1996, p. 559).

En el caso del Pacto Social, el ministerio encabezado por Gelbard era un lugar clave para pensar el enraizamiento de las políticas gubernamentales: la cartera era la responsable de encabezar las instancias de diálogo tripartitas, mientras que, en cuanto a su integración, desde la cabeza del ministerio hasta numerosos puestos intermedios estaban a cargo de integrantes de la CGE (Blejmar, 2019; Rein, 2015). Ellos habían ideado e impulsado los lineamientos centrales del programa junto a la CGT, y por ello incorporaron también a funcionarios de diálogo fluido con la central gremial (cap. 3). La asignación de ciertos cargos funcionaba como una forma de enraizamiento que reforzaba el vínculo entre el Estado y las entidades corporativas involucradas en el pacto.

No obstante, la falta de cohesión entre diversas áreas económicas, y la discusión sobre la política a aplicar, en ocasiones generó obstáculos para lograr en la práctica un

programa económico coherente. El ejemplo más claro de ello se experimentó en la relación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central que, por momentos, no pudieron acordar en importantes tópicos, como la definición del tipo de cambio. Estos organismos estaban encabezados por economistas relacionados con distintos grupos del espacio político gobernante (Di Tella, 1986). A su vez, expertos e intelectuales económicos de diversos sectores ligados a la coalición oficialista atacaron el Pacto Social, expresando de ese modo divisiones similares a las que existían entre organizaciones políticas del mismo espacio.

El vínculo entre la construcción de conocimiento económico con su contexto de producción es abordado por Marion Fourcade Gourinchas (2001): la autora refuta tanto la neutralidad como la universalidad de los discursos, al sostener que el conocimiento se encuentra inevitablemente relacionado con el marco nacional y las instituciones en las que es producido. Es decir que, al igual que los fenómenos económicos, también los discursos sobre la materia están social y políticamente enraizados. Por lo tanto, las disputas de saberes entre estos economistas no pueden leerse sin aprehender el contexto correspondiente: la intervención corporativa en el gabinete económico y un contexto de alta politización invitan a realizar un análisis de las posiciones de los actores del Pacto Social – en este caso funcionarios, técnicos e intelectuales económicos- que no dé por sentada una escisión tajante entre técnica y política.

La reflexión sobre la convivencia de esas lógicas diversas, inspirada en la polémica iniciada por Max Weber a principios del siglo XX con la publicación de *El político y el científico* y *La política como vocación*, ha renacido con vigor en las discusiones académicas del presente, en especial a partir de trabajos que han abordado la relación entre saber técnico y saber político, así como la especialización de las élites estatales en el escenario nacional (Coviello, 2019; Gené, 2011, 2012; Gené, Heredia y Perelmiter, 2021; Heredia, 2015; Montaña, 2011; Morresi & Vommaro, 2011; Neiburg & Plotkin, 2004a, 2004b; D. Pereyra & González Bollo, 2020; E. Pereyra, 2012, 2017). “Intelectuales” y “expertos” son figuras que aparecen como no contradictorias, sino más bien como partes de una intersección donde se produce el conocimiento sobre la sociedad (Neiburg & Plotkin, 2004a)³⁰. Morresi y Vommaro señalan que tanto el surgimiento como la consolidación de estos expertos, obedece al mismo tiempo a una

³⁰ Los funcionarios técnicos, parte del segundo grupo, se distinguen por tener una responsabilidad en la aplicación de políticas sobre la misma.

lógica técnico-profesional, pero también política. De ese modo, los expertos se desplazan entre el mundo académico, el mundo político-económico y el Estado. A su vez, inspirados en la idea de multiposicionalidad (Boltanski, 1973), hacen hincapié en los expertos como “actores que funcionan en un campo propio que, al mismo tiempo, requiere múltiples pertenencias (el Estado, el sector privado, la sociedad civil, la universidad)” (Morresi & Vommaro, 2011, p. 20). Aún más explícito, el enfoque de Elsa Pereyra (2012, 2017) para abordar el gabinete económico bonaerense en la década del ochenta propone una perspectiva que se centre en evitar una contradicción entre formación especializada y militancia, o entre conocimientos técnicos y políticos. Ambos saberes pueden formar parte del repertorio de los mismos actores (E. Pereyra, 2017).

Respecto de nuestro período, Mariana Heredia (2015) señala que en las décadas de 1960 y 1970 no se encontraban las condiciones para hablar de un campo independiente y establecido de los economistas en la Argentina, a diferencia de lo ocurrido en las décadas siguientes, en las que predominaron élites intelectuales internacionalizadas que priorizaban presentarse como técnicos poseedores de un saber específico, configurando una relación entre técnica y política diferente a la del período previo (Heredia, 2015, p. 50). A su vez, Donatello (2017) ha presentado la trayectoria de Caraballo como un caso de intermediación entre el campo empresario y el político, que conjugaba saberes técnicos con otros corporativos y políticos. Finalmente, Coviello (2019) identifica en el grupo de técnicos de la CEPAL, que asistieron al gabinete económico para la redacción del Plan Trienal, importantes saberes técnicos que, al mismo tiempo, se conjugaban con posicionamientos políticos.

A su vez, debates instaurados en las ciencias sociales sobre las formas de “entrada” a la política y el reclutamiento de los agentes estatales³¹ se han traducido en la proliferación de aportes recientes de la sociología económica que abordan dichos temas al nivel de los ministerios nacionales (Canelo, 2012; Heredia, 2015; Heredia y Gené, 2009; Gené, 2011, 2012; Gené, Heredia y Perelmiter, 2021; Perelmiter, 2012). Como señalan Heredia, Gené y Perelmiter, el análisis del accionar del Estado al nivel de los ministerios funciona como una “vía de entrada para dar cuenta de las mediaciones –ministros y equipos de gobierno, pero también dispositivos

³¹ Sobre el tema, ver Canelo (2012), Donatello (2017), Gené (2017), Heredia y Gené (2009), Offerlé (2011), y Sawicki (2011), entre otros.

organizacionales o socio-técnicos– que acompañan a los presidentes, habilitando y constriñendo sus decisiones, e incluso traduciéndolas de modos diversos en políticas públicas” (2021, p.2). En nuestro caso, la cartera económica tomaba una particular centralidad por ser la encargada de encabezar el pacto tripartito. Así, a partir de la idea de que los discursos económicos están enraizados en situaciones políticas y sociales determinadas, abordaremos el análisis del gabinete económico y, de modo subsidiario, para no obviar otros referentes del área económica vinculados al peronismo, a los economistas oficialistas excluidos de la cartera. De ese modo, identificamos, al menos, dos grupos diferenciables en cuanto a sus relaciones políticas, experiencias previas de gestión estatal, y la pertenencia a grupos intelectuales y *think tanks* de diverso tenor.

1.4 Hacia un abordaje novedoso de las posiciones alrededor del Pacto Social.

El Pacto Social requería movilizar para su éxito diversos recursos económicos y variadas representaciones políticas y sociales. El abordaje de su devenir amerita, pues, trascender el análisis histórico económico enfocado en una variable determinante, para emprender una aproximación al problema que ponga en diálogo conceptos de diversas disciplinas.

Entendemos que el programa del tercer gobierno peronista constituyó, en términos conceptuales, un pacto social en tanto se trató de:

Un esquema de diálogo social en el cual el gobierno y los actores sociales involucrados acuerdan la formulación conjunta y coordinada de políticas públicas sobre asuntos específicos y diversos, tales como la política de control de precios y salarios, de empleo, reformas laborales y/o modificaciones en materia de seguridad social, entre otros. (Benes & Gurrera, 2018, p. 86)

La estructuración tripartita del programa económico fue originalmente signada por el ACN y actas sectoriales posteriores, y luego ratificada por el Plan Trienal que imponía nuevas metas para los años siguientes en diversas áreas de la economía. En línea con la definición de Benes y Gurrera, el gobierno peronista dictó, en el marco del Pacto Social, nuevas regulaciones en materia laboral favorables a los trabajadores, y reservó el Ministerio de Trabajo para referentes de la CGT. La contraparte consistía en que la cartera económica, comandada por Gelbard, era el lugar que se había

destinado para que los referentes de la CGE aplicaran su ideario. En cuanto a su clasificación, se constituyó como un pacto social distributivo (Benes & Gurrera, 2018) ya que emergió como una solución a un escenario de alta inflación con el objetivo explícito de incrementar los salarios reales: entre enero y mayo de 1973 la inflación mensual promedio fue de 5,76%, mientras que en los seis primeros meses del programa bajó al 1,3% (Gráfico 1). A su vez, la piedra basal del ACN fue el acuerdo sobre precios y salarios, mientras que la fortaleza de la CGT como actor resultó un elemento central, y la institucionalización del diálogo se vio reflejada en las actas refrendadas por el gobierno con diferentes actores sociales a lo largo de 1973 y en sus adendas incorporadas posteriormente.

Este pacto se articuló a través de un proceso de intercambio político, mediante el cual las organizaciones de representación corporativa y el Estado se concedían mutuamente bienes económicos y de autoridad (Rusconi, 1985). La lectura del intercambio político implica pensar en actores históricamente situados, disímiles entre sí, y embarcados en relaciones de fuerza dinámicas donde no son equivalentes en cuanto a recursos de poder.

A partir de esta definición, incorporamos un concepto que nos permite operacionalizar el planteo de Rusconi. Nos referiremos a los términos de intercambio político como el conjunto de bienes políticos y materiales que los actores aceptan otorgar y recibir en un momento dado del pacto. De este modo, una parte de ellos se encontraban explicitados en el ACN -aumentos salariales, límites a los precios, límites a las paritarias, entre otros- y en varios documentos del Pacto Social. Pero otros no figuraban en acta alguna, sino que estaban implícitos en el acto mismo de lograr estos acuerdos -la legitimidad que las entidades corporativas otorgaban al gobierno y la legitimación que estas mismas entidades obtenían como las únicas representantes que podían discutir las reformas del ACN-. Los términos de intercambio político serán un elemento central en el análisis del proceso, tanto para abordar las posiciones de las entidades corporativas como de las organizaciones políticas de la coalición oficialista.

Por otra parte, el concepto de enraizamiento nos permite reflexionar sobre las acciones y posturas de la CGE y la CGT en su relación con el Estado en diversos niveles: a través de canales institucionalizados tripartitos de diálogo y negociación, pero también mediante la incorporación en las estructuras gubernamentales de expertos e intelectuales económicos ligados a esas mismas entidades corporativas. El

primero consistía en acuerdos institucionales como el ACN, e instancias de diálogo particulares en las que participaban la CGE y la CGT. El segundo era un mecanismo que reforzaba esa ligazón, a través del nombramiento sistemático de figuras vinculadas de modos diversos con estas entidades, en numerosos organismos del Estado.

En la cartera económica predominaban los actores vinculados a la CGE, organización impulsora del programa. Sin embargo, el nombramiento de algunos funcionarios relacionados con las ramas política y sindical del peronismo otorgaba cierta heterogeneidad al elenco ministerial. Al mismo tiempo, economistas de diversos sectores de la coalición oficialista impugnaron el contenido del Pacto Social restando cohesión al espacio gobernante. La identificación de las relaciones de los economistas analizados con instituciones y espacios políticos resulta útil para contextualizar sus discursos en el período, ya que en las disputas entre ellos se reprodujeron, en buena medida, las posiciones de otros espacios -corporativos, políticos, técnicos- a los que pertenecían o representaban. Es por ello que la configuración del gabinete económico que impulsó el Pacto Social es también presentada alrededor de la idea de enraizamiento, a partir de un enfoque que aborda a los funcionarios como actores capaces de poseer en su repertorio saberes técnicos y políticos de manera simultánea.

Finalmente, analizaremos cómo los pactos sociales pueden generar efectos en actores que no están directamente involucrados en el mismo, por los resultados de estos acuerdos³² que condicionan a todos los actores sociales, firmantes o no de los pactos. En los albores del gobierno de Cárpora, todas las organizaciones analizadas expresaron algún nivel de apoyo al Pacto Social. Sin embargo, una rama importante del peronismo viraría sus posiciones hacia la impugnación de los términos de intercambio político del programa. En el caso de Montoneros, esta impugnación implicó severas variaciones discursivas, escisiones en su interior y derivó en violentas disputas con otros sectores que defendían la política oficial. A su vez, los enfrentamientos sumaron inestabilidad al escenario político y socavaron aún más el programa económico.

³² Los acuerdos que se realizan en estos pactos no afectan solo a los firmantes, sino que terminan funcionando como ordenadores de toda la sociedad, ya que pueden involucrar niveles de precios, salarios, jubilaciones, entre otros aspectos.

Capítulo II *Los puntales del Pacto Social. Entre el intercambio político y el enraizamiento: las posiciones de la CGT y la CGE ante el programa económico.*

Los años previos al regreso del peronismo al gobierno se habían caracterizado por la reconfiguración de las alianzas políticas entre las representaciones patronales: la crisis política desatada a partir del Cordobazo había impulsado a los pequeños y medianos empresarios nucleados en la CGE a buscar un acercamiento con el sindicalismo peronista, alejándose de las posturas de las entidades empresariales tradicionales agrupadas en ACIEL (Sanz Cerbino & Baudino, 2014a). El Pacto Social resultaba así la coronación de un proceso político que se había iniciado con Perón en el exilio, y el nuevo gobierno depositaba en la CGE y la CGT la responsabilidad de acordar las pautas generales para la economía de los años venideros, dentro de las condiciones que aceptara el ministerio a cargo.

El presente capítulo aborda precisamente esta relación triádica, enfocándose particularmente en las posiciones e interacciones de la CGE y la CGT. En ese sentido, identificamos tres etapas que quedan demarcadas por variaciones en la situación económica y las relaciones políticas entre estos actores. La primera de ellas se inicia con la asunción de Cámpora y la firma del ACN, y se caracteriza por el apoyo sin fisuras de ambas organizaciones corporativas y éxitos en el control de la inflación. El segundo período comienza entre finales de septiembre y principios de octubre, cuando se producen una serie de novedades que trastocan el escenario político y económico: los titulares de la CGE, la CGT y la cartera económica por primera vez presentan interpretaciones encontradas sobre la letra del ACN y la política de ingresos, el titular de la CGT es asesinado y Perón asume su tercer mandato presidencial. Durante esta segunda etapa la inflación se mantiene relativamente controlada, pero aparecen nuevos problemas para el gabinete económico: el desabastecimiento y los mercados negros. Finalmente, la tercera etapa se inicia con la muerte de Perón y está signada por el vaciamiento del poder político del Ministerio de Economía, su incapacidad creciente para alcanzar acuerdos con la CGE y la CGT, y el deterioro marcado del índice inflacionario junto al agravamiento de la escasez de productos a precios oficiales.

2.1 *Los primeros meses son de enamoramiento: el éxito inicial del Pacto Social.*

2.1.1 *Apuntalar el Pacto Social. La CGE y la CGT ante la estructuración inicial del programa.*

El programa económico que impulsaba el peronismo implicaba legitimaciones y límites para los actores de la coalición político-social oficialista. El interlocutor privilegiado por el nuevo gobierno en el mundo del trabajo era la CGT, que se encontraba con su contraparte empresarial, la CGE, en una instancia tripartita coordinada por el Estado a través de la cartera económica. A su vez, este ministerio presentaba un elemento novedoso: a su frente se encontraba el empresario impulsor del proceso de convergencia entre las entidades corporativas. Más allá de ciertos matices que presentaremos en el capítulo 3, el gobierno decidió asignar a la CGE la cartera económica (Sidicaro, 2002), mientras la CGT, por su parte, ubicaba en el Ministerio de Trabajo a Otero, un hombre de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que expresaba ciertas diferencias con Rucci y aparecía más cercano a Lorenzo Miguel, líder de las 62 Organizaciones Peronistas. Este reparto de carteras apuntaba a constituir una forma particular de enraizamiento, institucionalizada, entre el Estado y organizaciones corporativas de la sociedad civil.

Esta relación entre un gobierno peronista y el sector de representación empresarial signada por el otorgamiento de la cartera económica resultaba una novedad. No cabían interpretaciones que desligaran a la figura de Gelbard de su rol en la central de la que provenía: Perón mismo se felicitaría a finales de 1973 en un discurso en la Casa Rosada por “haber entregado la conducción económica nacional a los hombres de la CGE” (1988a, p. 127). También la entidad corporativa resaltaba su papel en el gobierno al destacar en una declaración pública su participación en la conducción del ministerio como una “garantía de aplicación del Acta de Compromiso Nacional” (“En resumen”, 1973, p. 13).

Ante el evidente rol protagónico de Gelbard, el sindicalismo se apresuró a reivindicar su lugar en la coalición. Una semana después de la asunción de Cámpora, en plena negociación con el sector empresario de cara al establecimiento de los lineamientos del acuerdo tripartito, Rucci declaraba que “el sindicalismo no colabora con el gobierno, sino que conduce los destinos del país dentro de él” (“El congreso de

la CGT”, 1973, p. 3). La negociación, sin embargo, no sería sencilla: Otero había señalado “en su rol de sindicalista” que el aumento salarial debía ser de un 100% (Torre, 1983, p. 48). No obstante, el ACN definiría parámetros muy alejados de esas aspiraciones: en términos de ingresos, establecía un aumento de suma fija para los asalariados de \$200, que representaba un 20% del salario mínimo y un 14% del salario medio (Di Tella, 1986; Rougier & Fiszbein, 2006). Definía también aumentos en las tarifas de servicios públicos, retrotraía en determinados rubros aumentos preventivos que las empresas habían aplicado en los días previos, y, luego de reajustar precios en línea con los aumentos tarifarios, los congelaba por dos años. De manera expresa, solo mencionaba una corrección de los sueldos, atada a la productividad, prevista para el 1 de junio de 1974, mientras establecía aumentos para las jubilaciones, pensiones y el salario familiar (“Acta de Compromiso Nacional”, 1973; Di Tella, 1986; Rougier & Fiszbein, 2006; Vitto, 2012).

Algunos elementos de los términos de intercambio político quedaban definidos de modo explícito en el ACN y documentos posteriores: al pautar una política de ingresos por dos años, los sindicatos resignaban la herramienta de la huelga para exigir aumentos por fuera de los establecidos. A cambio, lograban la contención de los precios por el mismo período y se garantizaban aumentos salariales que pretendían incrementar tanto el valor adquisitivo del salario como la participación de los trabajadores en el ingreso. Por otro lado, los empresarios admitían los límites a los precios y que el ingreso de los trabajadores fuera a crecer más pronunciadamente que la productividad y su ganancia. Ambos sectores comprometían de este modo límites a la acción colectiva en el marco de un pacto social, pero los empresarios no resignaban una herramienta clave: la decisión inversora.

Asimismo, aunque no escrita, también la legitimación resultaba un elemento central de los términos de intercambio político: las organizaciones corporativas firmantes resultaban fortalecidas, aunque en distintos planos. La CGE era validada por el gobierno ante las demás cámaras empresarias como central de referencia. Además, obtenía acceso a los ámbitos en los que se definían créditos, subsidios y otros estímulos para la industria. Por otro lado, su contraparte recibía un fuerte respaldo al interior del peronismo: el sindicalismo ya no era solamente una de las ramas del justicialismo, sino que, a través de la CGT, se convertía en un actor institucional privilegiado a la hora de definir políticas públicas centrales, como la salarial y la referida al nivel de precios. A

su vez, los acuerdos no se limitaban a esos terrenos, sino que definieron una serie de medidas accesorias que afianzaban el rol de ambas organizaciones. El ACN creaba, en el marco del Consejo Nacional Económico y Social (CONES), la Comisión de Precios, Ingresos y Nivel de Vida (COPINV), con representantes de ambas entidades y el Estado, para que realizara un seguimiento de estas variables; y garantizaba la participación corporativa en las empresas públicas a través de representantes de cámaras empresarias, a los que luego también se sumaron sindicalistas. Ambas organizaciones, a su vez, legitimaban al Estado como garante de una síntesis de las aspiraciones de los trabajadores y empresarios a los que representaban.

De ese modo, en el intercambio político entraban en juego elementos económicos, políticos y simbólicos. El proyecto peronista pretendía conjugar así actores heterogéneos, que fueran integrantes de una coalición de gobierno pero también protagonistas de su gestión, aspirando a lograr un Estado enraizado en la sociedad civil a través de entidades corporativas privilegiadas.

2.1.2 *Épica filosófica y abordajes técnicos. El respaldo y la participación obrero - patronal.*

Luego de dieciocho años, el regreso democrático tenía un tono refundacional que se centraba en el peronismo, pero, al mismo tiempo, lo excedía. A diferencia de los relatos en los que los sindicatos de la CGT aparecen como sujetos inmovilizados por el ACN que tomarían centralidad a medida que el proyecto de Gelbard se debilitaba (Canitrot, 1978); encontramos que, en realidad, estos actores comenzaban a perfilar posturas contundentes y novedosas vinculadas con el inicio del Pacto Social.

Con motivo de la firma del compromiso tripartito, Rucci anunciaba que el acuerdo representaba el inicio de “una nueva filosofía del salario”: “El trabajador no debe reclamar solamente aumentos de salarios, sino que el trabajador es parte del país, y como tal, debe cobrar los dividendos que le corresponden, conforme a su participación en el ingreso nacional” (“Rucci enunció una ‘nueva filosofía’ para el salario”, 1973, p. 10). Continuaba su explicación señalando que habrían de existir dos tipos de salarios: el profesional, que era el resultado de paritarias sectoriales, y el salario social, que consistía “en la participación del trabajador en el ingreso, dado que cumple una finalidad social que no puede ser menos que esa” (“Rucci enunció...”, 1973, p. 10). El objetivo compartido de sindicalistas y gobernantes era elevar la

participación de los trabajadores en el ingreso hasta alcanzar el 50% -se estimaba entonces en 36%-. Aunque el titular de la CGT decía desconocer la fecha en que se concretaría esa cifra, el gobierno se puso como meta el año 1977 (“*Plan Trienal...*”, 1973).

Rucci no solo debía mostrar éxitos en la conducción sindical ante Lorenzo Miguel y las 62 Organizaciones Peronistas, sino también ante las bases a las que representaban, en un contexto en que Montoneros y sus agrupaciones sindicales, que se nuclearían en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), mantenían un apoyo ambiguo a los planes del gobierno pero eran fuertemente críticos de la dirigencia sindical oficial (cap. 4). A su vez, todas las corrientes sindicales de la izquierda no peronista -desde el basismo hasta las organizaciones vinculadas al PRT-ERP³³- expresaban fuertes críticas al Pacto Social (Ghigliani, 2015; Lissandrello, 2012; Torre, 1982). Estas posiciones divergentes entre corrientes sindicales se relacionaban con posiciones ideológicas e identitarias de cada una de ellas: al respecto, Rusconi subraya “cuan decisiva es para la determinación de la acción ‘externa’ del sindicato su modo ‘interior’ de concebir la organización del consenso de base y viceversa” (2021, p. 200).

En cambio, en el campo empresarial la CGE logró concitar rápidamente el apoyo de las entidades más importantes del país. El 15 de junio convocó a una asamblea a la que asistieron la UIA, la SRA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, el Instituto de Fondos Cooperativos, la CRA, y CONINAGRO. Con matices, todas expresaron su apoyo al nuevo gobierno y pidieron ser convocadas para el diálogo. Solo algunas entidades sectoriales muy específicas se opusieron abiertamente a las primeras medidas económicas³⁴.

Entre otros proyectos que el gobierno impulsó para atraer a las entidades empresariales, se destacaba la fundación de la CEN, un órgano público integrado mayormente por representantes de las entidades patronales, destinado a la supervisión y coordinación de todas las empresas que tuvieran participación del Estado Nacional,

³³ Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo.

³⁴ La primera fue la Federación Argentina de la Industria de Aguas Gaseosas y Bebidas sin Alcohol al expresar su oposición a los precios máximos (“Opóñese a los precios máximos una entidad”, 1973). También una cámara de la industria farmacéutica publicó una solicitada criticando los precios definidos para el sector (CILFA, 1973), mientras que la Asociación de Bancos de la República Argentina emitió una crítica a la intervención estatal en el sector (“La Asociación de Bancos...”, 1973). Finalmente, la FAA -integrante de la CGE-, a través de su presidente Humberto Volando, emitió ciertas críticas a la política de precios para el agro (“El sector ruralista...”, 1973), pero finalmente ese mismo año firmaría el ACEP.

con excepción de las del área de Defensa. La propuesta presentaba como objetivo lograr una mayor eficiencia en la gestión de las empresas estatales. Rougier y Fiszbein calculan que se trataba de un conjunto de más de trescientas empresas y señalan que “la idea de conformar una corporación estatal no era nueva y en última instancia coronaba una serie de acciones y estudios iniciados en la segunda mitad de los años sesenta sobre la considerable y creciente participación empresarial del Estado” (2006, p. 166).

Sin embargo, más que con incentivos específicos, el apoyo empresarial puede relacionarse con la moderación que podía suponer por parte del gobierno la propuesta de una forma de pacto social, en contraste con las expectativas que generaba una coalición política en la que resaltaban los sectores que en la asunción de Cámpora clamaban por la “patria socialista” y vivaban a la Revolución Cubana. Sobre la relación con los empresarios, Leyba recuerda:

Crearon que venía Cámpora con la izquierda y les quitaban los campos, ese nivel de cosas, que los aumentos salariales iban a ser mortales. Ése es el clima: ‘llegaron los peores’. (...) Y el miedo puede producir la peor de las hipótesis. Lo que nosotros tuvimos como suerte, o desgracia, es que fue tal el caos material, el quilombo en los hoteles de Ezeiza y todo eso, que ese caos se revirtió con la escritura del programa. Fue un momento mágico. Eso es importante. Pero claro, ellos se imaginaban unos aumentos salariales, una cosa desbocada. Se encontraron con una razonabilidad que superaba su propia comprensión. (C. Leyba, comunicación personal, abril de 2019)

Si bien aparecen los hechos de Ezeiza como momento central de la disputa intraperonista, la presentación del ACN y la asamblea empresaria en la que la amplia mayoría de las cámaras patronales demostraron su apoyo al gobierno entrante fueron previas al 20 de junio. No obstante, el temor a un escenario peor al propuesto por Gelbard, bien sintetizado en los cánticos de sectores del peronismo que reclamaban hacer “un hospital de niños en el Sheraton Hotel”, podía impulsar a los empresarios a tomar partido por una opción moderada dentro de la coalición de gobierno. Es cierto, por otra parte, que la interpelación a estos sectores para ceder cierta porción de las ganancias con el fin de no perderlas todas -utilizando el “fantasma” de los socialismos

reales- era un discurso que se remontaba a los prolegómenos del propio nacimiento del peronismo³⁵.

De todos modos, la CGE estaba más involucrada en el programa que sus pares empresariales. De hecho, Alfredo Concepción, importante dirigente de la CGE y presidente de la CGI, buscaba puntos de encuentro con el peronismo al manifestarse a favor del desarrollo del capitalismo nacional y en contra “del infantilismo de izquierda”. Para lograrlo, los empresarios tenían un rol:

No queremos empresarios que, preocupados por las eventuales contingencias que ocurren en el país, deriven fondos al exterior como forma de asegurar su tranquilidad futura. Pretendemos un empresario comprometido, identificado con la comunidad. Un empresario que crea en el país, que lo sienta, que tenga fe en él. Un empresario que tenga orgullo nacional (...) Vivimos en una sociedad capitalista, y queremos adoptar, adecuar, legitimar y justificar el rol del capital en la sociedad. Para ello debemos diferenciarlo neta y categóricamente del capitalismo tradicional, que no tiene alma ni raíces, y que ha servido para implantar un sistema socialmente injusto y económicamente dependiente.

Al compromiso con la CGT hemos ido con nuestra mejor voluntad, con total buena fe, pero también convencidos que era natural que los trabajadores nos recibieran con reticencia. Debe reconocerse -señaló- que el comportamiento del capital en Argentina no ha sido justo ni sincero en general con los asalariados. Ha sido, por el contrario, egoísta.

Contra esta forma de distribución del ingreso, contra esta manera arbitraria de sojuzgar a una clase en beneficio de otra es que la CGE se rebela. Por eso, este compromiso, este programa conjunto con la CGT pretende ser el inicio de un nuevo estilo, de una nueva modalidad y de una filosofía que dé cabida y justificación a la presencia del capital y simultáneamente felicidad al pueblo en su conjunto. (“Fijó el Dr. Concepción...”, 1973, p. 1)

No parece casual que tanto Rucci como Concepción bregaran por nuevas filosofías, en un caso del salario y en otro del capital. Luego de dieciocho años de proscripción del partido mayoritario, el Pacto Social era presentado como un momento

³⁵ En un conocido discurso ante la Bolsa de Comercio en agosto de 1944, Perón, en su rol de secretario de Trabajo y Previsión, se declaraba partidario de “una perfecta regulación entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas”. Y, luego de mencionar la agitación existente en Europa, advertía: “Es necesario saber dar un 30 por ciento a tiempo que perder todo a posteriori” (Perón, 1944).

de quiebre que permitía renegociar institucionalmente la relación entre patrones y obreros.

Sin embargo, un primer obstáculo para este diálogo podía no provenir de la política: Juan Carlos Torre (1983) afirma que la preparación técnica para afrontar estas instancias de diálogo era diferente en cada una de estas entidades. Es cierto que mientras la CGE había desarrollado grupos técnicos e intelectuales a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras (IIEF-CGE), la situación para la central sindical era muy diferente, ya que no había conformado una usina de pensamiento homóloga, y solo en los últimos años de la autodenominada “Revolución argentina” el peronismo había organizado *think tanks* para delinear estrategias de gobierno (cap. 3; Denaday, 2018, 2020). Torre señala dos motivos para la ausencia de un plantel de asesores técnicos estables en la CGT -con excepción del período 1963-1965 bajo la conducción de José Alonso-: por un lado, durante la proscripción el sindicalismo había actuado como un articulador político que se encargaba de las relaciones de la fuerza laboral con los gobiernos y otros actores sociales. De ese modo, las intervenciones a la central, las disputas por el liderazgo de la representación, y el contexto de inestabilidad política general en el que se alternaban gobiernos civiles y militares, dificultaron “la formación de un aparato administrativo dotado de relativa continuidad y eficiencia” (1983, p. 80). El segundo elemento que coadyuvaba a esta situación era una característica del sindicalismo nacional:

Los dirigentes de la CGT se reclutaban entre cuadros sindicales formados en la tradición reivindicacionista del sindicalismo argentino, una tradición centrada en la defensa del nivel de vida obrero y extraña a toda tentativa más global de intervención sobre las modalidades del desarrollo económico (1983, p. 80).

La disposición de cuadros idóneos no era un elemento menor en un pacto en el que los firmantes se comprometían a aportar veedores de precios y salarios, dos elementos fundamentales del programa. Una segunda dificultad consistía en que el ACN establecía que la COPINV se crearía “en el ámbito del Consejo Económico Social” (“Acta de Compromiso Nacional”, 1973, p. 305), un ente ideado por Lanusse en 1971 que nunca había llegado a funcionar plenamente por la reticencia de los sindicalistas (“CGT contra el CONES”, 1974), en acuerdo con Perón (Bozza, 1997). De este modo, la CGT debía ocupar lugares en la comisión, que tenía un núcleo central

para la evaluación general y subcomisiones encargadas de los estudios sectoriales (Torre, 1983, p. 77); nombrar 22 representantes titulares y 22 suplentes para el CONES; y prepararse para la integración de la Comisión de Coordinación e Implantación del Acta de Compromiso Nacional. En consecuencia, en ocasiones los puestos correspondientes a la CGT serían ocupados por dirigentes sindicales sin formación técnica específica, como resultó el caso de Fernando Donaires, dirigente paplero sobre quien volveremos más adelante.

Lo cierto es que, aún sin la integración del Consejo, la COPINV comenzó a sesionar el 4 de julio en carácter de comisión asesora³⁶, con representantes de la CGE, la CGT y la cartera económica (“Sesionó ayer la Comisión de Precios y Nivel de Vida”, 1973). Sin embargo, Broner destacó la necesidad de poner inmediatamente en funciones el CONES que, a priori, estaba destinado a tener mayores responsabilidades que la comisión que contendría en su interior. En el contexto de las relaciones amistosas entre organizaciones corporativas, la prensa especulaba con que el sector empresario le ofrecería la presidencia a Rucci (“Ofrecerían a Rucci...”, 1973). Al mismo tiempo, el equipo económico, que buscaba estrechar los vínculos de cara a la coordinación y el planeamiento, incorporó a los líderes de la CGT y la CGE a la reunión del gabinete ministerial en la que se iba a debatir el presupuesto y los planes sectoriales de las empresas públicas (“Discutieron el presupuesto...”, 1973).

Todavía restaba tiempo para saber si este esquema lograría mantener relaciones armónicas entre los representantes del capital, los trabajadores y el Estado.

2.1.3 *El final del idilio. Disputa de interpretaciones sobre los términos del intercambio político.*

En la literatura sobre el Pacto Social, existe consenso respecto a que los primeros meses de gobierno mostraron resultados alentadores para la política económica (Canitrot, 1978; Rougier & Fiszbein, 2006; Sidicaro, 2001; Torre, 1983; Vitto, 2012). Fundamentalmente, era notorio el cambio de tendencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC): entre febrero y mayo había promediado un aumento del 6% mensual, en junio había resultado negativo (-2,9%) producto de las retracciones de

³⁶ Para superar estos escollos, la cartera de Gelbard dictó las resoluciones MHF.N° 35, del 14 de julio de 1973 y MC. N° 23/73, que resolvían, hasta tanto se integrara la Comisión Nacional de Precios, Ingresos y Nivel de Vida, la creación de la Comisión Asesora Honoraria de Precios, Ingresos y Nivel de Vida, en jurisdicción del entonces Ministerio de Comercio, luego de la Ley de Ministerios devenido en Secretaría (*Decreto 560/74*, 1974).

aumentos que disponía el ACN, y en ninguno de los tres meses siguientes había alcanzado el 1% (Gráfico 1). Esto no solo otorgaba estabilidad a la situación macroeconómica, sino que también evitaba que se resintiera el poder adquisitivo de los salarios luego de los aumentos pactados. Además, en el tercer trimestre el superávit de la balanza comercial había mejorado notablemente, alcanzando los 377,3 millones de dólares (Gráfico 2).

Sin embargo, las buenas noticias convivían con un contexto político en el que recrudecían las disputas internas del peronismo. El punto más álgido se alcanzó el 20 de junio, cuando en Ezeiza se canceló el aterrizaje del avión que devolvía definitivamente a Perón de su exilio madrileño luego de violentos encuentros entre distintas facciones del peronismo que terminaron con muertos y heridos³⁷. Al día siguiente de los hechos, sin esperar investigaciones posteriores, Perón emitió un discurso muy duro con los sectores juveniles, mayormente vinculados con la “Tendencia Revolucionaria Peronista”³⁸ encabezada por Montoneros. La posición de Cámpora, apoyado por esos mismos sectores, quedaba así debilitada.

En ese marco, el 10 de julio Rucci visitó al presidente para expresarle su apoyo. Distanciándose de las posturas basistas del sindicalismo cordobés identificado con Tosco y de los sectores peronistas que incorporaban postulados marxistas, el secretario general de la CGT destacaba que el socialismo nacional al que se refería Perón “es el que está contenido en la doctrina justicialista, que es (...) pacifista y cristiano” (“La CGT se reunió...”, 1973, p. 6). En el mismo encuentro, renunció a la posibilidad de presidir el CONES para concentrarse en su tarea al frente de la CGT: el sindicalismo ponía límites al enraizamiento institucionalizado en el marco del Pacto Social.

Tres días más tarde, Cámpora presentó su renuncia junto a su vicepresidente Solano Lima, explicitando que la presidencia debía ser ocupada por Perón, en tanto líder del justicialismo. El presidente provisional del Senado, Alejandro Díaz Biale, fue enviado en comisión al exterior para que asumiera Raúl Lastiri, yerno del ministro

³⁷ Sobre los hechos de Ezeiza, ver Verbitsky (1985), Amaral (2010) y Fonte (2014).

³⁸ En adelante, Tendencia. Esta categoría fue utilizada por diversos actores del peronismo entre finales de la década del 60' y principios de la década del 70'. En investigaciones recientes (Antúñez, 2011; Pozzoni, 2018; Tocho, 2015) fue retomada analíticamente para denominar a un espacio heterogéneo del peronismo que tenía como elementos en común la apelación a la revolución como objetivo político, y la reivindicación del peronismo como identidad junto a elementos de la cultura de izquierda, como la utilización de marcos de análisis marxistas. En el período analizado, Montoneros fue la organización hegemónica de la Tendencia, pero no por ello debe perderse de vista que existieron dentro de ella actores con miradas divergente, como las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP).

de Bienestar, José López Rega, y presidente de la Cámara de Diputados. En este contexto de desconcierto, la CGT y la CGE coincidieron en la necesidad de buscar la manera para que, cuanto antes, Perón accediera a la presidencia (“CGE aprobaría...”, 1973; “La CGT propuso...”, 1973). La duda, en el marco del Pacto Social, era la permanencia de Gelbard y su equipo y, junto a ellos, el programa económico concertado. En el medio de la disputa interna, el ministro no tenía el apoyo de ninguno de los espacios más numerosos del peronismo (cap. 3), pero gozaba del decisivo respaldo de Perón.

Rápidamente, la CGE defendió el proceso económico en marcha, por medio de su presidente:

La continuidad de estos lineamientos está asegurada por cuanto ha sido refrendada por los sectores activos del país: empresarios y trabajadores. Su convalidación se produjo a través del acuerdo entre la CGT y la CGE, condensado en el Acta del Compromiso Nacional (...) La CGE, que se comprometió públicamente en la marcha hacia el proceso electoral y que aportó al Gobierno surgido el 11 de marzo su respaldo gremial e ideológico, se coloca ahora, cuando debe completarse el paso hacia la democracia, en la actitud positiva que es congruente con su doctrina y su labor del pasado inmediato. (“Optimismo de la CGE...”, 1973, p. 2)

En los primeros meses, el freno a los precios había tenido pocas respuestas negativas por parte de los empresarios³⁹, y todavía no se observaban problemas generales de desabastecimiento como respuesta, sino más bien falta de productos puntuales, por motivos diversos (“Con trigo almacenado...”, 1973; “Desbaratan en Liniers...”, 1973). En ese marco, la CGT intervenía, con el beneplácito del gobierno, en los controles de precios y contra las maniobras de desabastecimiento y agiotismo (“Colaborará la CGT...”, 1973; “Desbaratan en Liniers...”, 1973). De hecho, el secretario de Comercio, Miguel Revestido, había señalado que la CGT representaría al pueblo organizado en el control de precios (“Se congelaron precios...”, 1973). Los incentivos eran evidentes: por un lado, la CGT intervenía en el control del aspecto de los términos de intercambio político que debía mantener bajo control -los precios-, ya

³⁹ Recientemente la FAA había expresado preocupación por los precios de venta definidos por el ministerio de Economía y por aumentos en la cadena de producción. Pero el equipo económico respondió rápidamente rebajando los precios de los insumos agropecuarios (“Las pautas de política agropecuaria estarán basadas en la productividad”, 1973).

que, de otra manera, el poder adquisitivo de los salarios se horadaría. El gobierno, por su parte, estaba interesado en mantener a la central sindical como un actor relevante del Pacto Social que tuviera interés en su éxito. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos del plan económico, la CGT se limitó a insistir en la necesidad de investir a Perón como presidente y no hizo referencias a la posibilidad de que Gelbard permaneciera -o no- en su cargo.

Finalmente, el 13 de julio se aceptaron las renuncias de solo dos ministros: Esteban Righi, de Interior, y el canciller Juan Carlos Puig, ambos de buenas relaciones con la Tendencia (Miguez, 2018). La ratificación de Gelbard fortalecía la vinculación de la CGE con el Estado: el 22 de agosto, una reunión de Broner, Gómez Morales y Alfredo Concepción derivó en la apertura de una nueva línea de créditos para ramas de la industria con dificultades para la reposición de materiales; y una semana más tarde Broner y el presidente del BANADE anunciaban otra línea para el desarrollo de la industria (“Créditos a industrias”, 1973). El rol de la CGE en el gobierno era cada vez más gravitante y sus referentes se constituían en voceros del empresariado nacional y del proyecto económico concertado.

Desde ese lugar, el titular de la CGE establecía el posicionamiento político de la entidad al desestimar las tesis que sostenían que era insuficiente el ahorro interno para alcanzar el desarrollo (“Inversiones y el pacto social”, 1973). Defendía así las recientemente sancionadas leyes de promoción industrial y de inversiones extranjeras, manifestándose “en oposición a quienes expresaban que el régimen de promoción debía favorecer preferentemente a las empresas de capital nacional, nosotros teníamos la tesis de que debía favorecerlas exclusivamente” (“Se realiza...”, 1973, p. 4). Al mismo tiempo, manifestaba una profunda fe en la potencialidad del Pacto Social como herramienta para el éxito económico-social: “Ningún interés particular o sectorizado, de adentro o de afuera, puede torcer el proceso que se ha puesto en marcha pues éste permite la participación institucionalizada de los empresarios y los trabajadores” (“Inversiones y el pacto social”, 1973, p. 1). Sin embargo, este llamamiento a la opción por el capital nacional sembraba la duda sobre si éste tomaría ese rol: en ese tercer trimestre de 1973 la inversión era la variable que peores números mostraba, marcando una reducción interanual del 12,3% respecto al mismo período del año previo (Rougier & Fiszbein, 2006, p. 230).

Por su parte, la CGT tuvo un gesto con Gelbard al emitir una declaración en rechazo de la comunicación que Max Krebs, encargado de negocios de EE. UU., había enviado al ministro contra la política oficial para las inversiones extranjeras (“La CGT ha condenado...”, 1973). Sin embargo, la central sindical se mostraba más cautelosa ante el equipo económico luego de la remoción de Cámpora ya que esperaban la respuesta oficial a las exigencias de la FAA para aumentar precios de bienes-salario: la falta de esos productos en los mercados y su venta a precios no oficiales fueron los motivos por los cuales Gelbard instruyó el inicio de una investigación contra el desabastecimiento y el agio en el agro (“Investigación del uso de la cosecha”, 1973).

En un contexto de incertidumbre, las versiones sobre posibles relevos afectaban tanto a funcionarios como representantes corporativos, pero el vínculo entre el ministerio y la CGE se seguía mostrando como el más sólido del programa: en la última semana de agosto, Broner participó de la reunión del gabinete económico pero Rucci se ausentaba (“Fue considerada...”, 1973). El líder sindical se avocaba a las tareas relacionadas con el movimiento peronista, convocando a un paro en apoyo a la fórmula “Perón – Perón”⁴⁰ de cara a las elecciones presidenciales del 23 de septiembre.

Por otra parte, la firma del ACEP con las principales cámaras patronales agropecuarias significó para el equipo de Gelbard un avance para ampliar su legitimidad pocas semanas antes de las elecciones (“Hará importantes anuncios Gelbard”, 1973). Sin embargo, la distancia entre la firma del acuerdo por parte de los representantes y las prácticas de los productores se dejaron ver el mismo mes en el desabastecimiento del mercado, a través de una notoria ausencia de carne, papa y cebolla, que fue analizada por el gabinete económico, mientras la FAA seguía reclamando la autorización para aumentar el precio de productos agrícolas (“Problemas de abastecimiento”, 1973).

En vísperas de las elecciones, el pacto tripartito comenzaba a mostrar sus desbalances y problemas en el diálogo entre los actores involucrados, alrededor de la relación entre precios y salarios, nudo gordiano del programa. El 14 de septiembre representantes del IIEF-CGE departieron a solas con el secretario de Comercio, y obtuvieron el compromiso gubernamental para la “corrección” de ciertos precios, con el argumento de que se iniciaba un segundo momento del programa en el que se debía

⁴⁰ María Estela Martínez, esposa de Perón, era la candidata a vicepresidenta.

revisar tanto la “masividad” como la “unicidad” de la política de precios (“La política de precios...”, 1973). De hecho, el propio Gelbard ratificó el comienzo de esta nueva etapa (“Disminuye la inflación”, 1973).

La respuesta de la CGT no se hizo esperar: en una entrevista televisiva, Rucci anunció que, en vista de que la ley 14.250 que regulaba las convenciones colectivas técnicamente seguía vigente, pediría la convocatoria a paritarias para fin de año: “en ningún momento la CGT dijo que los salarios estaban congelados” (Rucci, 1973). Los lineamientos originales del ACN se ponían así en cuestión, y, con ello, identificamos un elemento nuevo en el proceso: los firmantes del pacto planteaban una disputa sobre la interpretación de los términos de intercambio político del acuerdo. El mismo día, Broner salió en defensa del programa, aportándole flexibilidad a su interpretación, de manera que, en lo inmediato, se pudieran permitir los aumentos de precios, y dejaba abierta la posibilidad de aumentos salariales antes del 1/6/74:

Yo diría, tal vez a modo de slogan ya, que el ACN es en sí una paritaria permanente para estudiar los salarios. Fundamentalmente porque estamos comprometidos a que el ingreso de los asalariados tiene que ir creciendo y no puede decrecer. De modo que la Comisión de Salarios e Ingresos oficia de permanente paritaria en lo que a ingresos se refiere (...). (Broner, 1973)

La discusión presentaba al titular de la CGE con argumentos más flexibles que el reticente equipo económico respecto de la posibilidad de ajustar los salarios al alza. Los puntos en discusión del ACN definían una fecha clara para estas correcciones y las materias que podían abordar las Convenciones Colectivas:

-Tomando como base los salarios y haberes pasivos reales ajustados conforme a lo dispuesto en los puntos anteriores, su nivel será corregido el 1-6-74 y el 1-6-75 de acuerdo al crecimiento operado en la productividad media de la economía.

-Establecer que las Convenciones Colectivas de Trabajo tendrán plena vigencia para la discusión y acuerdo de condiciones laborales que no modifiquen la política salarial establecida; asimismo las Convenciones aportarán los elementos de juicio que permitan evaluar las variaciones de la capacidad adquisitiva del salario y la productividad del trabajo.

-Producida una pérdida de la actual capacidad adquisitiva del salario que afecte el cumplimiento del Acta del Compromiso Nacional y conforme a la recomendación de la Comisión de Precios, Ingresos y Nivel de Vida, el Poder Ejecutivo procederá a adoptar

las medidas que aseguren el mantenimiento del actual poder de compra. (“Acta de Compromiso Nacional”, 1973, p. 313)

En definitiva, las Convenciones Colectivas no podían afectar la política salarial -solo aportar elementos que indicaran pérdida de poder adquisitivo-, se establecía una fecha que todavía aparecía muy lejana para las correcciones de sueldos, y definía que quien tenía potestad para tomar estas medidas era el Poder Ejecutivo, según lo recomendado por la COPINV.

De manera abrumadora, la mayor parte de la bibliografía ha presentado al ACN como un congelamiento de los salarios (Canitrot, 1978; Di Tella, 1986, p. 198; Vitto, 2012, p. 117). En consecuencia, analiza los pedidos de aumentos como intentos de transgredir el acuerdo original. Escasa atención se ha prestado a los argumentos que a finales de septiembre presentaban dos de los firmantes del ACN para considerar la posibilidad antes del 1 de junio de 1974. Los anuncios de Rucci y Gelbard planteaban para el Pacto Social algunas novedades. Por primera vez se presentaba una disputa sobre la interpretación de los términos de intercambio político contenidos en el ACN: Broner no se oponía a aumentos salariales, reticencia que sería planteada más adelante por el Ministerio de Economía, pero pretendía que la COPINV cumpliera el rol que Rucci asignaba a las convenciones colectivas en esa materia. En la afirmación del líder de la CGE no aparecía el hecho de que la comisión tenía un carácter no vinculante.

De todas formas, Broner aceptaba considerar aumentos antes de la fecha establecida para junio de 1974, y, a cambio, lograba que los sindicatos continuaran legitimando el programa originalmente impulsado por la CGE, salvando así el Pacto Social. Sin embargo, las declaraciones de los dirigentes planteaban un manto de dudas respecto de hasta qué punto el programa soportaría nuevas reinterpretaciones de los términos de intercambio político, sin suscitar un nuevo conflicto que amenazara la continuidad del programa.

2.2 *El nudo gordiano. Precios, salarios y el incumplimiento de los términos de intercambio político.*

2.2.1 *Hacerse cargo. El debate de los actores corporativos: ¿quién debe pagar los costos de la “inflación importada”?*

En los últimos días de septiembre y las primeras semanas de octubre se sucedieron una serie de hechos que implicaron modificaciones para el Pacto Social en cuanto a su dinámica y a los nombres de sus protagonistas.

Las disputas sobre la interpretación del ACN habían sido opacadas en la escena pública por la apabullante victoria electoral que el 23 de septiembre consiguió la fórmula “Perón – Perón”, superando el 62% de los votos válidos. El día siguiente, el gabinete económico se reunió para abordar el problema del desabastecimiento que, todavía, se restringía a productos puntuales: papa, carne y cebolla. La decisión más drástica se tomó con la primera al habilitarse la importación de 100.000 toneladas de papas (“Equipo económico”, 1973). A pesar de que los productores alegaban razones estacionales y problemas de la cosecha, en las semanas siguientes se decomisaron decenas de miles de bolsas retenidas (“Decomisan 75.000 bolsas de papas”, 1973).

Sin embargo, el gobierno tenía que enfrentar problemas políticos más graves: el 25 de septiembre José Ignacio Rucci era ejecutado en el barrio porteño de Flores por un grupo no identificado. En el momento nadie se atribuyó la autoría, pero actualmente se puede inferir que se trató de una operación llevada adelante por militantes del espacio en el que estaban confluyendo FAR y Montoneros (cap.4).

El homicidio de Rucci implicaba un cimbronazo para el pacto impulsado por el gobierno, que no mostraba resultados en materia de pacificación social. Lejos de ello, derivaba en el asesinato de uno de los tres firmantes del ACN, un dirigente de amplia representatividad en el sindicalismo peronista y estrecha relación con Perón.

No obstante, la reacción de la CGT en el plano institucional fue moderada. Adelino Romero, secretario adjunto interinamente a cargo de la entidad, recibió a funcionarios nacionales y ratificó que la organización sindical era “parte del gobierno”. El ministro Gelbard, por su parte, sostuvo en ese encuentro la idea de definir objetivos conjuntos con ambas entidades corporativas, y rápidamente incorporó al nuevo referente sindical a las reuniones del gabinete (“Deliberaciones...”, 1973, p. 1). Además, subrayó que no se modificaría el programa: “Ahora se va a seguir adelante

más que nunca”. Romero también recibió un espaldarazo de la CGT al ser confirmado como nuevo secretario general, junto a Raúl Ravitti como nuevo secretario adjunto (“Raúl Rabiti...” -sic-, 1973, p. 1). El objetivo de lograr un Estado enraizado con las organizaciones de trabajadores y empresarios parecía mantenerse en pie. De hecho, el deceso de Rucci implicaba un golpe para el programa, pero, al mismo tiempo, una forma de tregua para las otras partes: los sindicalistas tardaron al menos un mes en retomar reclamos similares a los expresados por el líder de la CGT pocos días antes de su muerte. En la Asamblea Confederal Empresaria de la CGE, Broner lamentó el asesinato y apeló a la idea de la alianza policlasista como elemento estabilizador para el gobierno, utilizando como contraejemplo la “vía chilena al socialismo” encabezada por Salvador Allende, quien había sido recientemente derrocado (“Anunció Perón...”, 1973). Perón también se dirigió a los empresarios y dejó claro que el ACN seguía siendo el documento rector de su política: el 12 de octubre asumió su tercera presidencia y ratificó en sus cargos a Gelbard y su equipo.

En la primera semana de la nueva gestión, se produjo un encuentro entre las dirigencias de la CGT y la CGE para afianzar la actuación coordinada con el gobierno, consolidando el Pacto Social e intentando afianzar el enraizamiento para la nueva etapa de gobierno calificada “de expansión” por el ministro y por Broner (“Disminuye la inflación”, 1973; “Se reunieron...”, 1973). Tanto en la evaluación del contexto económico como en la constitución del IIEF-CGE como permanente fuente de consulta se identificaba la continuidad del vínculo entre Gelbard y la organización empresarial de la que provenía, y una unidad de criterios que no se quebraría en ningún momento de la gestión. Es en ese sentido que Brennan y Rougier afirman que, durante este período, además de los lugares que obtuvo en el Estado -en la COPINV, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, y, por supuesto, la cartera económica- “la CGE sirvió como una clase de asesor privado de Gelbard y propagandista del Plan Trienal” (Brennan & Rougier, 2013, p. 245). En cambio, la CGT no demostraría el mismo nivel de alineamiento con el proyecto de Gelbard. A finales de octubre, la prensa citaba a voceros gremiales que retomaban la disconformidad que Rucci había expresado antes de morir:

Voceros gremiales comentaron anoche la disconformidad del sector por ‘el estancamiento de las tareas de la Comisión de Precios, Salarios y Política de Ingresos

del pacto social.’ Los dirigentes gremiales entienden que no se aplica una adecuada política de precios y que existen constantes presiones de sectores empresarios para liberar los topes con riesgo para el salario real. La posición del Consejo Directivo de la CGT -al menos la mayoría- es, como se sabe, que el pacto social no implica la anulación del funcionamiento de las comisiones paritarias a fin de año, pero otros dirigentes han aconsejado solicitar a Perón un aumento masivo por decreto. Ese aumento fue rechazado concretamente por el ministro Gelbard. (“Perón dialoga con cegetistas”, 1973, p. 1)

El planteo combinaba un elemento repetido y otro novedoso. El primero era la propuesta de una interpretación de los términos de intercambio político establecidos en el ACN según la cual las comisiones paritarias podían definir aumentos de sueldo, ya disputada por Broner, quien se había mostrado abierto a los aumentos, pero definidos por la COPINV. El segundo consistía en la posibilidad de ignorar el rechazo del ministro a los aumentos de salarios, deslegitimándolo, para recurrir directamente a Perón, presidente y líder del movimiento justicialista del que los sindicatos se reivindicaban como elemento central.

También en octubre se desató otro inconveniente para el programa: el inicio de la denominada “crisis del petróleo” que empujó al alza un 17% el precio del crudo, y llevó a que entre 1973 y 1974 el barril Brent pasara de U\$S 3,29 a U\$S 11,58, redondeando un aumento del 252% (Barrera & Vitto, 2009, p. 10). Esto se producía en un escenario de reciente ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, tras la decisión de Richard Nixon de decretar el fin de la convertibilidad del dólar a oro, lo que había generado escenarios de recesión internacional con importantes tasas de inflación (Vitto, 2012, p. 123).

El contexto llevó al Ministerio de Economía⁴¹ a ratificar su idea de flexibilizar la política de precios, trasladando la responsabilidad fronteras afuera: “Tenemos que pagar las consecuencias de países que no saben controlar su inflación”, declaró Gelbard (“La evolución de los precios”, 1973, p. 1). Para restablecer un balance de poder dentro del esquema tripartito, el mismo día anunció que la CGT tendría representantes en la CEN, decisión que, según Di Tella (1986), afectó el pretendido carácter tecnocrático del organismo encargado de las empresas estatales.

⁴¹ La cartera económica estrenaba ese mes su nueva denominación.

Los sindicatos peronistas, sin embargo, no se apaciguaron: por primera vez expresaron públicamente su disconformidad con decisiones del ministerio, por considerar que rompían el “equilibrio económico-social y la aplicación de la política sobre precios y salarios” (“Preocupan a la CGT...”, 1973, p. 11). Criticaban así a la cartera económica, buscando erigirse en defensores de la política de ingresos que, interpretaban, disponía el ACN. Allí radicaba entonces la disputa sobre la exégesis de los términos de intercambio político que se establecían para mantener el pacto: definir quién era el que lo estaba traicionando.

El 15 de noviembre, la CGT decidió insistir y presentó estas disconformidades como tema de debate en su consejo directivo. Hugo Barrionuevo, secretario de prensa de la entidad sindical, explicó que pretendían cambios en el accionar de la COPINV:

Se están tratando de evitar distorsiones y se procura una efectiva participación del sector de los trabajadores en el análisis de los costos de los productos de acuerdo a lo establecido en el Acta de Compromiso Nacional (...) Algunos productos escapan actualmente el control de la comisión, por ejemplo (...) la yerba mate o el tabaco, y que el movimiento obrero organizado pretende el control general. (“La CGT analizó...”, 1973, p. 2).

La disputa incorporaba matices: había un conflicto entre interpretaciones del ACN; la CGT buscaba erigirse como defensora del acta de junio a pesar de presentar innovaciones en su interpretación; y ahora sumaba elementos técnicos al debate sobre el programa, al señalar que la COPINV realizaba un control deficiente. Rápidamente, el ministro de Trabajo tomó partido en favor de la interpretación sindical, por lo menos en cuanto a la posibilidad de otorgar aumentos salariales (“Declaraciones de Otero...”, 1973).

A finales de noviembre, se produjeron reuniones de la COPINV para que los actores presentaran sus posiciones: la CGT se oponía a que se autorizaran aumentos de precios; la CGE insistía en la necesidad de permitirlos debido a la incidencia de los insumos importados, pero no se oponía a otorgar luego aumentos salariales si la tendencia de precios así lo justificaba. Mientras tanto, el Ministerio de Economía había postergado las autorizaciones para cualquier modificación, pero junto a los empresarios exigía a los sindicatos soluciones para la “inflación importada”. La CGT

definía: “que la inflación la absorba el gobierno o los empresarios” (“Precios y salarios”, 1973, p. 12).

Las dificultades para alcanzar consensos al interior del Pacto Social no se saldaban y se convertían en un problema de discusión pública: el 23 de noviembre se suspendió una reunión entre Gelbard y las autoridades de la CGT por falta de acuerdo. El ministro sostenía que casi no había aumentado el costo de vida, por lo que no era necesario aumentar salarios (“La política de ingresos...”, 1973). Era notable que se mostraba más reticente al respecto que la propia CGE. De hecho, en este contexto Broner no emitía demasiadas declaraciones sobre el tema -luego de mostrarse meses atrás abierto a los aumentos de salarios- y decidía dirigirse a los empresarios: en un escenario en el que se hacía patente que había problemas de desabastecimiento y falta de inversión, invocaba a destinar para la producción “nuestro propio capital y con nuestra capacidad de ahorro convenientemente estimulada” (“Broner contra la ayuda externa”, 1973, p. 10). No obstante, no se trataba de discusiones necesariamente escindidas. De hecho, Vitto propone que “la reducción de la inversión constituía la respuesta a la restricción de trasladar los incrementos de costos -incluidos los salarios- a los precios” (2012, p. 121).

Así, la adhesión de la CGE al programa no evitaba la falta de respuestas empresarias en materia de inversión. En algún punto, lo mismo sucedía en el ámbito sindical, ya que, impedidos de hacer huelgas en reclamo de aumentos salariales, proliferaban los conflictos por condiciones laborales que, en muchos casos, se terminaban resolviendo con aumentos encubiertos mediante el reescalafonamiento de trabajadores, cambios de categorías y otros mecanismos similares (Lissandrello, 2012; Torre, 1983). La distancia entre los acuerdos de los representantes y las acciones de los representados constituía un escollo difícil de superar.

El 29 de noviembre Gelbard ratificó su postura respecto a los salarios: “es descartable por el momento todo aumento salarial que quiebre el Acta de Compromiso Social”, señalando que la incidencia de los aumentos de precios a autorizarse “debe considerarse ínfima” (“Adivinanza...”, 1973, p. 9). La respuesta sindical no se hizo esperar: el día siguiente, los representantes de la CGT lograron imponer en la COPINV la exigencia a la Secretaría de Comercio para que solicitara “a las empresas los balances confeccionados al 30 de setiembre, para analizar la real gravitación de las materias primas importadas en sus costos” (“Precios: los balances...”, 1973, p. 8). De

este modo, la CGT ponía por primera vez en discusión un elemento caro a la sensibilidad empresaria: sus libros contables. Al respecto, Torre señala:

Desde la generalización de las políticas de ingresos en las economías capitalistas europeas, el libre acceso a los libros de las empresas se había convertido en una permanente, mas nunca satisfecha, reivindicación de los sindicatos. Con la decisión de la comisión tripartita del 30 de noviembre, la CGT triunfaba, pues, allí donde los movimientos sindicales del viejo continente habían fracasado. (1983, p. 79)

La comparación con la situación europea resulta acertada. Sin embargo, si bien lograba imponer el tema en la discusión, el autor parece apresurarse al señalar que triunfaba por la declaración de la COPINV, fundamentalmente por el hecho de que, hasta que se instituyó formalmente el 14 de agosto de 1974, esta comisión tenía solo facultades de asesoramiento (*Decreto 560/74*, 1974). De este modo, para que su exigencia se cumpliera, habría necesitado la confirmación de la Secretaría de Comercio. Es por el peso no vinculante de las decisiones del organismo en esta primera etapa, y no solamente, como señalaba Torre, por carencias del cuerpo técnico de la CGT, que esta decisión “nunca llegó a implementarse en la práctica” (Torre, 1983, p. 81).

En la misma semana, Broner pidió paciencia a los representantes sindicales para permitir que se tardara cuatro años en restablecer la pérdida de participación en el ingreso que se les había descontado a lo largo de dieciocho años (“El gabinete trata el presupuesto”, 1973); y cinco días más tarde calificó de “‘enemigos del cambio en paz’ a quienes llevan a cabo ‘ataques y cuestionamientos’ contra la conducción económica nacional” (“Cuentagotas”, 1973b, p. 13). Este último epíteto podía estar dirigido a las organizaciones guerrilleras⁴²; sin embargo, resultaba sugerente que estas declaraciones se produjeran pocos días después de las primeras críticas abiertas de la CGT al accionar de la conducción económica.

Mientras tanto, la central sindical resolvía disputas internas sobre la táctica a seguir. La prensa identificaba tres vertientes: la más radicalizada pedía no autorizar cambios en los precios y solicitar aumentos salariales; una intermedia, conducida por Miguel y apoyada por Otero, que impulsaba la convocatoria a paritarias independientemente de si se aumentaban los precios, con un tope salarial definido por

⁴² De hecho, cuatro días después un grupo del ERP ocupó una empresa de su propiedad, Wobron.

la CGT; y la liderada por Romero, que habría sido la más conciliadora con la estrategia del gabinete económico, aceptando considerar ciertos aumentos de precios para luego discutir salarios (“Mañana Perón...”, 1973).

De este modo, se ponían en debate tres aspectos fundamentales de la relación capital-trabajo en cualquier economía capitalista: el valor del salario de los trabajadores, la ganancia empresarial, y la participación de ambos en el ingreso nacional. Por el nivel de la discusión, intervino el propio Perón, ratificando la vigencia del Pacto Social, y calificándolo como “un convenio colectivo de trabajo en el más alto nivel” (Perón, 1988a, p. 42). En ese contexto, la tarea más difícil la tenía Revestido, que en la misma semana anunciaba la autorización de aumentos que disgustaban a la CGT (“La inflación importada...”, 1973), y la rebaja de precios en una limitada cantidad de productos, por la que la CGE también manifestó su disconformidad (“Revestido habla hoy de precios con la Confederación del Comercio”, 1973). Sin embargo, inesperadamente, el que resolvió estos conflictos fue el presidente: desautorizando al secretario de Comercio, el 20 de diciembre de 1973 definía públicamente: “la gravitación de la inflación externa a través de los insumos indispensables (...) debe ser absorbida por el sector que tiene que hacer frente a eso que es el empresarial” (Perón, 1988a, p. 70).

El sindicalismo había ganado una batalla. El principal apoyo del gabinete económico dentro del peronismo era el propio Perón, y éste había laudado la disputa alrededor de la interpretación de los términos de intercambio político y, acaso, los reescribía al calor de los acontecimientos.

2.2.2 *Un problema de legitimidad. Sobre cómo resolver la Gran Paritaria Nacional.*

El triunfo sindical demostraba que, aun dentro del esquema tripartito, las batallas continuaban. Lejos de interpretaciones cristalizadas de los pactos sociales, el análisis refleja que, en el mejor de los casos, estos acuerdos pueden generar una canalización institucional de los conflictos.

Ante las palabras de Perón, la Secretaría de Comercio retrotrajo su decisión de permitir aumentos comunicada en diciembre; en los casos en los que fuera imposible en términos de costos, se realizarían desgravaciones impositivas. Las crónicas reflejaban las dificultades de la contramarcha: "Los funcionarios se apresuraron a

ordenar el envío de nuevos telegramas con la contraorden a las mismas empresas que recibieron los anteriores" ("No aumentan precios", 1973, p. 9). De todas formas, la decisión no pudo evitar indicadores inflacionarios más elevados para el cierre de año. Entre septiembre y noviembre, el IPC había aumentado respecto de los primeros meses del programa económico; sin embargo, en promedio no alcanzaba el 1%. En diciembre, el indicador alcanzó un preocupante 8,1%. La decisión de la Secretaría de Comercio de revertir los aumentos recién se reflejó en la medición de enero, con una variación del IPC de -5,7% (Gráfico 1).

Luego de recibir el laudo favorable, las autoridades de la CGT visitaron al presidente. Romero hizo declaraciones elogiosas del Pacto Social y su cumplimiento, y se llevó una promesa de Perón: "lo he garantizado con mi palabra y lo hemos de cumplir: si por cualquier circunstancia hubieran de aumentarse en cualquier parte o de cualquier forma los precios que están congelados, inmediata y conjuntamente se van a aumentar los salarios" (Perón, 1988a, p. 104).

Sin embargo, para finales de 1973 el plan económico comenzaba a mostrar dificultades en materia macroeconómica: la reversión de la situación internacional y los precios relativos congelados a pesar del aumento de los insumos importados⁴³ se presentaban como desafíos a los que el gabinete ministerial debía buscar solución. Además, la combinación de políticas expansivas, la flexibilización de ciertos precios que reanudaban las expectativas inflacionarias y un tipo de cambio fijo amenazaban con consolidar el atraso cambiario. En ese contexto, principalmente por el aumento de las importaciones, el resultado superavitario de la balanza comercial se redujo de 377,3 millones de dólares en el tercer trimestre a 87,9 millones en el cuarto (Gráfico 2). Además, el Estado cerraba 1973 con un déficit del 7,3% en el resultado consolidado del sector público (Rougier y Fiszbein, 2006).

En definitiva, la duda para el final del año era si se podía mantener un congelamiento de precios locales en pesos mientras los insumos importados se encarecían en dólares. El 29 de diciembre los diarios proponían una respuesta provisoria al problema: "CGE y CGT contentas. El Estado absorbió aumentos y salvó el Pacto Social" ("CGE y CGT contentas", 1973, p. 13). El gobierno intervenía comprometiéndose a otorgar subsidios que permitieran cubrir los aumentos de los

⁴³ Entre junio y diciembre los precios de las importaciones crecieron casi un 30% (Di Tella, 1986, p. 197).

insumos importados. Sin embargo, a pesar de que evitaba el quiebre del programa, la solución mostraba que el Pacto Social iba a requerir intervención del Estado en un contexto en el que sus arcas se encontraban en situación deficitaria (Canitrot, 1978). Quedaba así expuesto el doble rol que Rusconi (1985) asigna al Estado en el intercambio político: tanto garante como contratante. Este carácter a su vez ilumina prácticas del Estado que lo alejan de la pura coerción como característica fundamental y subraya las dimensiones en las que priman la negociación y el diálogo como tácticas.

En sus declaraciones de fin de año, la CGE y la UIA, que cada vez actuaban más coordinadamente, expresaron su apoyo a la gestión económica (“CGE anuncia año próspero”, 1974; “UIA: ‘Panorama político positivo’”, 1973). Sin embargo, 1974 se inició con otra polémica sobre la estructuración institucional del pacto. Fernando Donaires, dirigente del sindicato de papeleros destinado en el CONES, presentaba el 5 de enero su renuncia al organismo con motivos claros:

la falta total de actividad del CONES desde hace varios meses, por lo que mi renuncia no es más que el cumplimiento con la obligación que tenemos todos los dirigentes sindicales (...) Ese tipo de comisiones son muy lentas, son efectivamente quintas ruedas del carro. (“CGT contra el CONES”, 1974)

Originalmente, el organismo debía contener a la COPINV, espacio tripartito que monitoreaba precios y salarios para el Pacto Social. A su vez, debía estar integrado por una pluralidad de actores más amplia que esa comisión -incluyendo especialmente a otros representantes de las fuerzas de producción-, y se proponía objetivos de más largo aliento. Sin embargo, esa misma ambición había hecho que nunca funcionara de manera regular y sostenida. De este modo, el sindicalismo proponía “su plan de convertir prácticamente en CONES la actual comisión del Acuerdo Social” (“Propuesta cegetista...”, 1974, p. 12).

No estaba en disputa solamente el armado institucional del pacto, sino también la forma de enraizamiento entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil: qué peso tendrían estas últimas, la manera de resolver disputas de interpretaciones sobre los términos de intercambio político y cuál era el ámbito propicio para modificarlos. Si se cumplía la aspiración sindical de elevar el rango de la COPINV, el peso de la CGT crecía con ella, en tanto era uno de los tres integrantes de dicho cuerpo, en el que tendría que negociar con menos actores que en el proyectado CONES.

También las decisiones podrían volverse vinculantes y dejar de ser un órgano estrictamente de asesoramiento.

La decisión gubernamental fue “no innovar” y la tensión quedó irresuelta. No obstante, Perón decidió ratificar una vez más la vigencia del Pacto Social: reafirmó la postura de haberle confiado “a la CGE la verdadera dirección de la economía argentina”, y dio cuenta de las disputas internas de la coalición oficialista al apuntar contra “agentes que desde el gobierno y las organizaciones gremiales atentan contra el Pacto Social”. Broner, a su vez, señalaba que “el gran cambio en la política económica está dado en los antecedentes de este plan”, haciendo referencia a la importancia de las coincidencias entre representantes empresariales y sindicales (“La CGE en la dirección”, 1974, p. 12).

En línea con las palabras de Perón, en enero de 1974 se agudizaron los problemas de abastecimiento: primero de energía eléctrica y nafta, y más tarde de manera generalizada en productos de diversos tipos. De hecho, el gabinete económico reconocía la problemática: en los últimos días de enero se reunió dos veces para analizar el tema junto a la proliferación de mercados paralelos ilegales, y autorizó aumentos en ciertos productos sin la recomendación previa de la COPINV (“El contrabando...”, 1974). Mientras, el comisario retirado Miguel Gamboa, director de Contralor de Precios, anunciaba que habían sido sancionados más de mil comercios en una “Campaña contra el agio y la especulación” impulsada por el gobierno (“Les siguen...”, 1974); y la Secretaría de Comercio publicaba una solicitada contra el incumplimiento de los precios máximos (“Dígales no”, 1974).

La CGE intentó desvincular a los industriales del problema: su presidente denunció “un boicot contra el gobierno” y acusó a “intermediarios inescrupulosos” (“Broner acusa”, 1974). Vitto señala que precisamente existió esta escisión entre productores y distribuidores, ya que las agrupaciones de comerciantes se sentían perjudicadas por el gobierno que, sostenían, tendía a favorecer a los productores y a los consumidores en el circuito comercial (Vitto, 2020).

Durante el verano de 1974, la situación solo empeoraba: se impusieron limitaciones a la circulación para reducir el consumo de combustibles, y se acentuó el desabastecimiento de productos agropecuarios (“Encara la Junta de Granos...”, 1974; “La consigna...”, 1974). Dirigentes de la CGT fueron recibidos entonces por Perón para departir sobre estas problemáticas, pero el hecho político se produjo luego de

finalizado el encuentro: Constantino Zorila, líder de la Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne e integrante del Consejo Directivo de la CGT, lanzaba el primer ataque directo de la central sindical al equipo económico: “es incoherente, no está preparado, confunde e improvisa” (“Crítica sindical...”, 1974, p. 24). Romero no lo desdijo, y una semana más tarde Zorila reforzó sus apreciaciones contra los funcionarios por considerarlos indolentes en la lucha contra el agio. En el contexto del debate de la reforma del Código Penal, señalaba que “es necesario combatir el sabotaje económico de la misma forma en que se combate al extremismo, porque si no se apoya a la contrarrevolución” (“Denuncias de Zorila”, 1974, p. 9).

Tan solo una semana después, la CGT cosechaba los frutos de su reunión con Perón: el presidente elogiaba el equilibrio propuesto por el gabinete económico, pero señalaba -en una fórmula que se enunciará repetidamente en la historia nacional- que “los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera”. Reclamaba entonces analizar cómo aumentar los salarios sin generar un proceso inflacionario (Perón, 1988b, p. 103).

La intervención directa del presidente a favor del reclamo sindical implicaba una invitación a rediscutir los términos de intercambio político. Por un lado, era dudoso que se pudieran aumentar los salarios sin modificar la letra original del ACN, pero fundamentalmente las palabras de Perón ponían en jaque la autoridad de Gelbard y su legitimidad como interlocutor de los sindicatos en el Pacto Social. Al día siguiente, el ministro habló desde Cuba, donde desplegaba una misión comercial⁴⁴, e hizo hincapié en la primera cuestión al señalar que todo aumento se discutiría dentro de los términos del ACN (“Precios y salarios”, 1974).

La misión en Cuba, en el marco de la promoción del intercambio comercial con el país antillano, significó un paréntesis en las conversaciones sobre aumentos salariales. Recién el 6 de marzo se constituyó nuevamente la COPINV, pero los representantes sindicales no apaciguaron sus reclamos y pidieron realizar una evaluación integral del desempeño del Pacto Social antes de definir un aumento salarial:

⁴⁴ El mismo día en que habló Perón, Gelbard emprendió el viaje junto a Romero, Broner y otros empresarios; y Francia e Italia anunciaron que dejaban de importar carne de la Argentina para priorizar vendedores del Mercado Común Europeo.

Requirieron conocer las perspectivas de los precios para todo el periodo del ejercicio económico corriente, y verificar las cifras que da el INDEC, y la cantidad de productos que se tabulan en la actualidad para establecer los índices. Sobre este último aspecto, señalaron que el INDEC debe ampliar sus bases de análisis (unos escasos 1600 productos actualmente) y adoptar una metodología “más cercana a la realidad, y alejada de ciertos guarismos matemáticos que no expresan la verdadera situación”. (“La paritaria”, 1974, p. 8)

Las dimensiones de la discusión, en el marco del Pacto Social, eran cada vez más complejas: nuevamente la CGT ponía sobre la mesa una discusión técnica -en este caso la medición del IPC- que podía tener consecuencias económicas y políticas, como era la necesidad de modificar lo establecido en el ACN. Si no había acuerdo sobre la manera de medir el nivel de precios, y, por lo tanto, cuál era la variación del salario real, difícilmente podría mantenerse un pacto que se basaba en dichas variables. No obstante, la discusión en este caso no trataba estrictamente sobre los términos de intercambio político, sino acerca de las herramientas para medir aquellas variables institucionalizadas en el ACN.

En ese marco, fue convocada la “Gran Paritaria Nacional”⁴⁵, a desarrollarse durante marzo de 1974, para definir un aumento salarial. Mientras tanto, Perón declaraba que Argentina se había constituido en una “democracia integrada”⁴⁶, y Romero señalaba que había que afianzar los controles de precios⁴⁷. El sindicalismo, al mismo tiempo que ofrecía una disputa en el marco del pacto tripartito, también atendía el escenario de la disputa intraperonista con sectores de la Tendencia (cap.4). Por eso, Romero aclaraba sobre el socialismo nacional: “para los que hablamos en argentino, ese socialismo se llama justicialismo” (“Aquí, socialismo es justicialismo”, 1974, p. 7). A su vez, Zorila volvía a emitir críticas contra el Pacto Social y el gabinete económico, y conseguía que el ministro de Trabajo las repitiera (“Apoya Otero...”, 1974; “Zorila contra Gelbard”, 1974).

Durante una semana se reunió la Gran Paritaria con la presencia de Gelbard y dirigentes de la CGT y la CGE sin alcanzar un acuerdo. El secretario de Coordinación

⁴⁵ A partir de ahora, Gran Paritaria.

⁴⁶ Perón había identificado, a principios de 1973, su modelo de socialismo nacional con la democracia integrada pregonada por el italiano Giancarlo Elia Valori.

⁴⁷ Las retracciones de enero no alcanzaron a compensar las subas de diciembre, y el IPC de febrero había ascendido al 1.6% (Gráfico 1).

del ministerio, Orlando D'Adamo, se encargó de anunciar que cualquier ajuste de salarios y tarifas entraría en vigencia el 1 de abril, pero "ello no supone, de ninguna manera, que el Pacto Social haya dejado de tener vigencia" ("La Gran Paritaria", 1974, p. 12). La misma aclaración ponía en duda la fortaleza del programa.

El 23 de marzo, luego de la última reunión con los representantes corporativos, Gelbard se vio obligado a anunciar el fracaso de las tratativas: "no se ha llegado a un acuerdo hasta el momento; las observaciones formuladas por la CGT no han sido aceptadas por el equipo económico(...) Apelarán ante el general Perón - dijo Gelbard- los reclamos que nosotros hemos considerado inconvenientes." ("Decisión final de Perón", 1974, p. 24). Nuevamente era necesario el laudo del presidente. Las crónicas periodísticas indicaban que los empresarios ofrecían un aumento salarial del 12% y los sindicalistas pedían un 15% como mínimo. Pero Gelbard revelaba en sus declaraciones que el posicionamiento del gabinete lo enfrentaba con los sindicatos, en una disputa que reflejaba nuevamente la cercanía del ministro con la CGE en el triángulo imperfecto que sostenía el Pacto Social.

El 27 de marzo, Perón definía el aumento general del 13%, discriminado del siguiente modo: un 9% para restaurar el poder adquisitivo, un 2,5% por el aumento de la productividad, y un 1,5% para avanzar con las metas que el Plan Trienal disponía sobre redistribución del ingreso. Sin embargo, el aumento era mayor para los ingresos más bajos, ya que se garantizaba un aumento de 24.000 pesos moneda nacional para todos los sueldos menores a 190.000, y el salario mínimo pasaba de 100.000 a 130.000 pesos -un aumento del 30%- . Además, se aumentaban tarifas y determinaba que la Secretaría de Comercio establecería cuáles productos gozarían autorizaciones para aumentar sus precios. Rougier y Fiszbein señalan que el adelantamiento de la Gran Paritaria implicaba en los hechos "un incumplimiento del ACN, aunque el Pacto Social pretendiera mantenerse en pie. La instancia de reajuste prevista tuvo que adelantarse dos meses y condujo a una alteración significativa de los niveles de los precios, los salarios y las tarifas" (2006, p. 121). Efectivamente, incluso considerando la disputa de interpretaciones sobre la posibilidad de aumentar salarios producida en septiembre, el proceso elegido no había sido el propuesto por Broner ni por Rucci. Además, y fundamentalmente, en el aumento se incluía el concepto por productividad que en el ACN estaba claramente pautado para el 1 de junio de 1974.

Sin embargo, la posibilidad de modificar los términos a lo largo del proceso no era lo más preocupante para el Pacto Social. Una vez más, un órgano tripartito, esta vez con la presencia de Gelbard, Romero y Broner, no había alcanzado una resolución consensuada y había sido necesario recurrir a la autoridad de Perón como decisor, por encima de las mesas de negociación que involucraban a los actores corporativos y a la cartera económica. La legitimidad de Gelbard como gestor del programa se ponía otra vez en cuestión, y, junto con él, la factibilidad de mantener un Pacto Social en el que sus actores ya no lograban pactar.

2.2.3 *Tres son multitud.* Camino a la crisis del Pacto Social.

El andar del programa económico todavía presentaba elementos que el gabinete podía mostrar con cierto orgullo: la economía en 1973 había crecido un 5,9%, y en el primer trimestre de 1974 el crecimiento interanual había marcado un 6,7%, cercano al 7% que el Plan Trienal marcaba como objetivo. Otra vez, el IPC de marzo crecía por encima del 1%, pero por debajo de los guarismos de febrero (Gráfico 1). A su vez, en el primer trimestre se había podido contener el crecimiento de las importaciones, y repuntaban las exportaciones, en una tendencia que se acentuaría en los meses siguientes (Gráfico 2), para lo cual la apertura hacia los países socialistas impulsada por Gelbard jugó un importante papel⁴⁸. Sin embargo, las alarmas continuaban: durante todo el primer trimestre el desabastecimiento, el agio, el incumplimiento de los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio y la proliferación de mercados negros de diversos productos habían sido problemas centrales para el gabinete económico. Además, luego del adelantamiento de los aumentos salariales, no se podía prever cuál sería la reacción empresaria. En principio, la inversión privada seguía deprimida: el leve repunte de la inversión total que se registraba en 1974 se debía principalmente a la inversión pública (Rougier & Fiszbein, 2006; Vitto, 2012). El resultado consolidado del sector público marcaba un déficit similar al del año previo, y el escenario que combinaba una inflación moderada pero constante junto con una política monetaria expansiva y un tipo de cambio fijo presentaba la alerta cada vez más fuerte del atraso cambiario, lo que generaría disputas en el gabinete económico (cap.3).

⁴⁸ Este repunte se produjo a pesar de la limitación del mercado europeo para la exportación de carnes, por un crecimiento notable de las exportaciones de manufacturas de origen industrial, que alcanzaron a triplicarse entre 1970 y 1974 (Vitto, 2012).

En abril, Broner, Gelbard y Perón expusieron en la II Asamblea Nacional Empresaria de la CGE. Los dos primeros elogiaron la gestión económica y criticaron a quienes la atacaban. Perón se concentró en defender a los funcionarios del área: "Mientras yo esté en el gobierno, el orden económico no lo cambiaré por nada". Era una respuesta a "todos esos rumores de que se cambia el equipo económico" (Perón, 1988b, p. 19).

Mientras tanto, la CGT protestaba por la modificación de iniciativas que el PEN había enviado al Congreso: se trataba de proyectos que en su redacción original incorporaban representantes sindicales en los directorios de los bancos públicos, pero la participación obrera había sido eliminada en las versiones definitivas. La respuesta de los sindicalistas fue presionar nuevamente por la inactividad de la COPINV: la CGT "instruyó a sus representantes en la Comisión a que exigieran que se precisaran las funciones del cuerpo" ("Adelino Romero irá a la OIT...", 1974). Nuevamente reclamaban un organismo tripartito con peso para hacer cumplir los términos de intercambio político del pacto social, y no quedar a merced de las decisiones del gabinete económico, al que acusaban de favorecer a sectores empresarios.

Sin embargo, en abril se comenzaron a observar matices en la propia CGE: la organización avaló denuncias por escasez de materias primas ("Escasez...", 1974), y una de sus entidades miembro, el Centro de Industriales Panaderos, exigió una autorización de aumentos de precios ("Si no hay alzas...", 1974). Broner, no obstante, se mostraba inmovible en el apoyo al equipo económico, emprendiendo una gira a Venezuela junto al ministro y actuando como su portavoz al anunciar una misión a la URSS, Polonia, Hungría e Italia ("Salen los primeros autos...", 1974). También en abril inició sus funciones la COPYME, con representantes de la CGT y la CGE, bajo la presidencia de un representante empresario, Rafael Kohanoff ("Las ventas de autos...", 1974).

Al presentar la atrasada memoria anual correspondiente a 1973, la CGE ratificó su compromiso con el gobierno y pronosticaba "los mejores augurios" ("Memoria de la CGE", 1974) y, en esa línea, pocos días después fue reelegido Broner al frente de la entidad. La CGT, por su parte, se manifestaba "conforme" con el rumbo general del gobierno, pero el malestar con el equipo económico era manifiesto: a principios de mayo, en la COPINV, le expresó su disconformidad a Revestido por los aumentos concedidos sin la intervención de la Comisión, y rápidamente ordenó a sus

representantes en el órgano tripartito a que se opusieran a cualquier aumento de precios solicitado (“Costo de vida”, 1974). Estas tensiones internas no impedían que, como parte de las disputas políticas, hacia el exterior mostraran un frente unido en defensa del gobierno: en el viaje a la OIT previsto para junio, Romero y Otero se pusieron como objetivo predicar sobre las bondades del Pacto Social (“Pacto Social para todo el mundo”, 1974; “Van a Ginebra...”, 1974). Los sindicalistas no se oponían a la idea del pacto, sino a cómo este era gestionado por Gelbard y su equipo.

Así, la intransigencia sindical ante las autoridades económicas se conjugaba con un problema de desabastecimiento cada vez más agudo, sobre el cual resultaba inocultable la responsabilidad empresarial. Luego de encomiar el crecimiento económico que acompañaba al programa – elemento que, según el discurso oficial, explicaba en parte el desabastecimiento porque convertía en insuficiente la capacidad productiva-, el ministro Gelbard por primera vez responsabilizaba públicamente del problema a grupos empresarios:

Lamentablemente -señaló- ello ocurrió porque ciertos empresarios parecen haber olvidado, al actuar de este modo, el compromiso suscrito con el estado y los trabajadores. Nosotros -advirtió- deploramos que haya quienes procedan de ese modo y estamos dispuestos a aplicar el rigor de la ley para obtener los resultados que debieron conseguirse con la persuasión y el diálogo. (“Gelbard en Diputados”, 1974, p. 24)

El PBI seguía mostrando un crecimiento sostenido y la desocupación descendía al 3,4%, pero los problemas que la economía arrastraba -escasa inversión privada, un incipiente atraso cambiario, resultado deficitario del sector público- se acentuaban. Un ejemplo claro lo constituía la aceleración inflacionaria: en el segundo trimestre de 1974 el IPC había marcado un aumento mayor (10,2%) que el que se había acumulado en los primeros nueve meses del programa -un 5,6% entre el 1 de junio de 1973 y el 31 de marzo de 1974- (Gráfico 1). Sin embargo, el problema central que acuciaba al gobierno era el desabastecimiento: en los primeros días de junio el gabinete económico tuvo dos encuentros para considerar el asunto. Además, a través de la Secretaría de Comercio creó un Comité de Abastecimiento de Bienes y Servicios, el PEN envió al Congreso un proyecto de Ley de Abastecimiento, y el gabinete económico decidió “disponer la importación inmediata de cualquier producto que integre la canasta familiar y escasee en el mercado interno” (“Mano dura”, 1974, p. 1).

El problema mayor para mantener un pacto de estas características radicaba en que tanto los representantes sindicales como los empresariales criticaban los términos de intercambio político, aunque en sentidos no necesariamente coincidentes. Con Broner y Romero en Ginebra, Alfredo Concepción expresaba desavenencias con respecto a la política de precios. Señaló que “el período de congelamiento se había extendido en demasía; (...) debió haberse flexibilizado el régimen en los últimos meses del año anterior a fin de que los precios ya no estuviesen ajustados al modificar el Acta de Compromiso” (“Hay una embestida...”, 1974, p. 12). También precisaba que la unión entre la CGI y la UIA se producía a partir del rechazo común de la política de precios “aunque estamos de acuerdo en la política general” (“Desabastecimiento: maniobra imperialista”, 1974, p. 14). La afirmación resultaba problemática porque, como analizamos, la política de precios era un elemento central de los términos de intercambio político.

Por otro lado, desde la central sindical Ravitti señalaba:

la CGT está alarmada ante la agresión al Pacto Social que se viene realizando desde algunos sectores empresarios. El desabastecimiento se produce por la acción de algunos especuladores –puntualizó–; es el resultado de una acción psicológica que está dirigida a romper una política cuyo único objetivo es lograr la felicidad del pueblo argentino. (“Perón defenderá...”, 1974, p. 14)

En este escenario de creciente antagonismo entre los firmantes del ACN, solo una figura era capaz de imponer el orden. El 12 de junio por la mañana, Perón emitió un discurso en el que amenazaba con su renuncia y denunciaba que “a pocos meses de asumir ese compromiso clave para el país, pareciera que algunos firmantes de la Gran Paritaria, están empeñados en no cumplir con el acuerdo y desean arrastrar al conjunto a que haga lo mismo” (Perón, 1988c, p. 147). Por la tarde, la CGT y la CGE paralizaron sus actividades y concentraron en Plaza de Mayo para escuchar nuevamente a Perón:

sin influenciarnos ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran por la izquierda (...) ni los que pretenden desviarnos, ni los especuladores, ni los aprovechados de todo orden podrán, en estas circunstancias, medrar con la desgracia del pueblo. (Perón, 1988c, p. 152)

Tan solo seis días después, anunciaba, por pedido de la CGT, que a mitad de año los asalariados cobrarían en concepto de aguinaldo el doble de lo previamente

establecido para esa fecha, lo que implicaba otra convocatoria a la Gran Paritaria y una nueva modificación del ACN y de la política salarial: quedaba claro que la palabra de Perón tenía más peso que cualquier discusión en la mesa tripartita.

Romero festejó el anuncio porque “tiende a romper la maniobra de sectores que, a través de la especulación y el agio, han hecho perder el valor real del salario de los trabajadores” (“Romero y Broner viajaron...”, 1974, p. 11). Los representantes empresariales, en cambio, lo calificaron como un pedido de uno de los socios que firmaron el ACN que debía ser considerado por los otros dos, y señalaron que muchas empresas iban a tener problemas para pagarlo: la CGE exigía créditos blandos para cumplir con el pedido (“Los especuladores...”, 1974).

En simultáneo, el gobierno seguía detrás de las empresas que infringían los precios máximos e impuso fuertes multas a Coca Cola, en un mes signado por los operativos contra el desabastecimiento y los mercados paralelos (“Así sí...”, 1974; “Habrá baile...”, 1974). Además, el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley para reprimir el contrabando (“Hoy se trata...”, 1974).

En la primera reunión de la Gran Paritaria por el aguinaldo no hubo un acuerdo entre las partes. Sin embargo, a diferencia de la negociación de marzo, esta vez no era necesario discutir montos, ya que contaba con la decisión del presidente previamente expresada. De este modo, el 28 de junio, en una reunión entre la dirigencia de la CGE, la CGT y el Ministerio de Economía, Gelbard anunció lo previsible: habría doble aguinaldo y créditos blandos para las empresas. Una vez más, la palabra de Perón funcionaba como legitimación para la modificación de los términos de intercambio político, en este caso relacionada con la política salarial. Se formó entonces una comisión entre la CGE y la CGT para redactar una nueva adenda al ACN que formalizara la novedad. Pero el inicio de sus actividades se demoró por una noticia que no podía pasar desapercibida: el 1 de julio a las 13:15 fallecía Juan Domingo Perón. El movimiento que llevaba su nombre se quedaba sin la voz autorizada para intervenir en sus crecientes disputas intestinas⁴⁹ y el Pacto Social perdía a la figura legitimada como árbitro por todos sus actores. Su ausencia abría una incógnita sobre la reconfiguración de los equilibrios de poder en el esquema tripartito y respecto de

⁴⁹ Ver también el capítulo 4.

cómo se entablaría a partir de entonces la relación entre el gobierno y las organizaciones corporativas.

2.3 *Un epílogo para la gestión Gelbard: el fracaso del enraizamiento.*

2.3.1 *El día después. Gelbard sin Perón: la falta de legitimidad para coordinar a los actores corporativos.*

En ausencia de Perón, la presidencia la ocupó su viuda y compañera de fórmula en las elecciones de septiembre. La primera tarea de María Estela Martínez fue encabezar la multitudinaria despedida al líder del peronismo.

Los días posteriores estuvieron signados por la incertidumbre. El fallecido presidente había asegurado que el equipo económico proveniente de la CGE se mantendría mientras él estuviera, pero no estaba escrito qué sucedería después. El intento de enraizamiento con sindicatos y cámaras empresariales se había mostrado útil para detener la inflación durante los primeros meses, pero su eficacia parecía comenzar a agotarse. Privilegiar a la CGE había implicado relegar a otras importantes organizaciones empresariales en términos de diálogo social. Además, se hacía patente la distancia entre la adhesión de los representantes que habían firmado el ACN, comprometiéndose a no aumentar precios y moderar los reclamos salariales, y el incumplimiento de los representados, tanto en el sector empresario con el desabastecimiento y la proliferación de mercados negros, como en el sindical con la sucesión de numerosos reclamos de aumentos salariales en diversas ramas de la economía. Las variables exógenas, como la denominada “inflación importada” en el contexto de la crisis internacional, constituían el último elemento que había horadado la posibilidad de cumplir con metas inflacionarias cercanas a cero.

Al mismo tiempo, cada vez que fue necesario rediscutir los términos del ACN, las instancias tripartitas se habían mostrado inútiles para alcanzar acuerdos, y Perón se había constituido al mismo tiempo en la voz legitimante de determinados pedidos y la palabra legitimada para tomar decisiones, ya se tratara de definir parámetros salariales o detener aumentos de precios. ¿Quién cumpliría ahora ese rol?

Lo cierto es que esta tercera etapa se inicia no solo con la muerte de Perón, sino también con cambios en el ámbito sindical. El 11 de julio, Adelino Romero, internado por una afección de salud, fue reelegido como secretario general de la CGT, y Segundo

Palma, sindicalista de la construcción, se convirtió en el flamante secretario adjunto, en un reconocimiento del peso de Miguel y Otero, quienes sostenían su candidatura. La novedad adquirió vital importancia porque dos días después fallecía Romero, generando un nuevo recambio en la cúpula de la CGT. En una cadena de eventos médicos bastante particular, los medios relataban que, en las exequias, Otero sufrió un episodio cardíaco que lo obligó a internarse durante varios días (“Produjo conmoción la muerte...”, 1974).

Mientras tanto, la CGE, la CGT, el PJ y la UCR emitieron una declaración conjunta en favor de las “Coincidencias programáticas” y el Pacto Social, y reclamaban nuevas “coincidencias o ajustes necesarios” (“Legalidad constitucional”, 1974): la desaparición física de Perón y el deterioro de la situación económica invitaban a renegociar los términos de intercambio político. Incluso Gelbard comenzaba a mostrarse partidario de una flexibilidad que, en sus inicios, el programa no había mostrado:

Lo que se ha dado en llamar el pacto social no es solamente el contenido estático de un acta de compromiso. Es una filosofía de Gobierno y como tal debe tener la mayor flexibilidad. Estamos en contra de toda rigidez porque la historia enseña las frustraciones que generó la aplicación con criterios económicos ortodoxos y rígidos. Repito que somos esencialmente pragmáticos (...) La redistribución del ingreso se está haciendo más rápido de lo previsto. Como dijo Perón, la torta, además de distribuirla mejor, hay que agrandarla (“Gelbard está preocupado...”, 1974, p. 11).

Julio se había revelado como un mes particularmente malo para el equipo económico: la muerte de Perón significaba la pérdida de su principal apoyo dentro de la coalición oficialista, y su relación con las entidades patronales agropecuarias había sufrido un quiebre por la presentación del proyecto de Ley Agraria. Contra ella se habían manifestado la SRA, la CRA, y la FAA, integrante de la CGE, lo cual, luego de las declaraciones de Concepción, indicaba nuevas grietas en su interior. Además, el Mercado Común Europeo en su conjunto se plegaba a la decisión previa de Italia y Francia de cerrar la importación de carnes argentinas, lo que implicaba un nuevo golpe a la balanza comercial (“Vamos a comer más carne”, 1974).

La pérdida de su principal apoyo político en la coalición debilitaba al gabinete económico y su programa, pero, para peor, éste arrastraba resultados cada vez más

pobres, lo que generaba un círculo por el que, a su vez, el grupo de Gelbard perdía nuevos apoyos. En agosto, Madanes, titular de la CEN y socio de Gelbard en FATE y ALUAR, renunció a su cargo junto a otros representantes provenientes de la CGE, lo que indicaba el fracaso del ente que pretendía incorporar el *know how* del ámbito privado a la administración de las empresas estatales (“Este negocio...”, 1974).

Mientras tanto, la CGT reiteraba sus reclamos técnicos sobre la medición de precios y exigía por elementos no cumplidos del ACN, como la Comisión Asesora de Estadísticas del INDEC, para acceder a los datos de la medición del “nivel de vida” (“Fusión UIA-CGI”, 1974). Los dilemas técnicos se superponían con las disputas políticas y los debates sobre el intercambio político del pacto social, en particular en cuanto a los términos referidos a los márgenes de ganancia y rentabilidad, y al valor adecuado de los salarios. Si ellos no se modificaban, la CGT amenazaba con retirarle al programa los escasos visos de legitimidad que mantenía. En ese marco, el 14 de agosto la central sindical recibió a la CGE: ambas se propusieron defender el Pacto Social, criticaron a sectores de la prensa por lo que definían como una “campaña psicológica” contra el gobierno, y los representantes de la CGT propusieron poner en funciones una comisión coordinadora entre ambas organizaciones (“CGT y CGE”, 1974), lo que dejaba en un segundo plano al gabinete económico. Ese mismo día, el PEN emitió el decreto 560/74, firmado por la presidenta y el ministro de Economía, que creaba formalmente la COPINV, ya no como mera comisión asesora, sino elevándola de rango, y con la potestad de otorgarse su propio reglamento. Quedaba bajo la presidencia del flamante secretario de Comercio, Antonio Cafiero, político de larga trayectoria en el movimiento justicialista y de buena relación con los sectores sindicales (cap. 3). Era entonces una respuesta favorable a la CGT en su intento de obtener más peso decisorio en detrimento del gabinete económico. La CGE, por su parte, lanzaba una “campaña de esclarecimiento sobre la economía contra las campañas psicológicas” (“Convocatoria de CGE”, 1974, p. 24), que se inició con una solicitada bajo el título “Los aciertos provocan los ataques del enemigo” (1974, p. 3).

En la última semana de agosto se anunció la nacionalización del comercio minorista de combustibles, de la que se haría cargo YPF, como consecuencia de la Ley de Hidrocarburos. Al mismo tiempo, el gabinete económico decidió autorizar aumentos en el precio de la carne, pero la medida no logró morigerar el desabastecimiento (“El pueblo sigue sin comer carne”, 1974).

En este punto, Gelbard y la CGE adquirieron en conjunto una posición defensiva del programa económico que, aseguraban, sufría ataques constantes. Sin embargo, cada vez era menos efectivo incluso en materias para las que inicialmente parecía eficaz, como la desaceleración de la inflación. Por eso, el 23 de agosto el ministro denunció una campaña psicológica “orquestada desde dentro y desde fuera. Es la batalla que libran las minorías sin votos -dijo-, aquellas que fueron derrotadas en las urnas. Son los grupos que aspiran al poder al margen del pueblo” (“Gelbard rindió...”, 1974, p. 9). Mantenía así cierta ambigüedad respecto de quiénes encabezaban esos ataques. No obstante, el día siguiente fue respaldado por Broner, quien señaló que los empresarios del exterior se referían al Pacto Social como “el milagro económico argentino”, pero en suelo nacional era ocultado por una campaña “del colonialismo agroexportador” (“El milagro económico”, 1974, p. 8).

Es cierto que, todavía a esta altura de 1974, el gabinete podía mostrar logros como la reducción de la desocupación, un crecimiento económico que todavía se sostenía, y cierto resguardo del valor del salario real -que durante ese año alcanzó picos históricos-. Sin embargo, en el tercer trimestre, el IPC promediaba un aumento mensual del 2,5% (Gráfico 1), lo que consolidaba, con un tipo de cambio fijo, el atraso cambiario; se sostenía el déficit en el resultado consolidado del sector público; la inversión privada seguía sin crecer; y, como nuevo elemento de preocupación, por primera vez desde el inicio del programa la balanza comercial resultaba deficitaria, por un leve incremento de las importaciones junto a una marcada caída de las exportaciones en la que se hacían sentir las limitaciones europeas a las carnes argentinas (Gráfico 2).

Mientras Palma se reunía a solas con la presidenta para manifestar su preocupación por el desabastecimiento y los mercados negros, Gelbard le otorgó una entrevista al semanario *Las Bases*, vinculado a López Rega. En ella, afirmó tener relaciones “excelentes” con la CGT y, al mismo tiempo, en un intento de mantener la autoridad ante los propios sindicatos, sostuvo que no se consideraba adelantar incrementos salariales a pesar del aumento del IPC. También se esperaba en que el desabastecimiento se pudiera solucionar por “la movilización popular, la obtención de ciertos insumos en áreas no tradicionales de nuestro comercio exterior, y la flexibilización de la política de precios” (“Opiniones de Gelbard...”, 1974).

La respuesta a ese optimismo provino del Congreso: el 3 de septiembre, el diputado Rodolfo Arce, dirigente de larga trayectoria en la rama política del peronismo (Antúnez, 2015), anunciaba que una comisión legislativa investigaría los contratos del Estado con Aluar, firmados durante el gobierno de Lanusse, que beneficiaron a Gelbard. A la información, el diputado le sumaba una opinión que, desde el peronismo, no se había escuchado aún: según Arce, correspondía que el ministro renunciara antes de que iniciara sus funciones la comisión (“La investigación...”, 1974).

A los ataques de dirigentes sindicales, se sumaba ahora un dirigente del PJ en el marco de una investigación parlamentaria. Lejos de lograr armonía, referentes del sindicalismo y el justicialismo deslegitimaban la figura del ministro. El objetivo de estabilizar el enraizamiento aparecía lejano para el equipo económico, mientras las condiciones no se mostraban propicias para renegociar los términos de intercambio político de un Pacto Social que languidecía.

2.3.2 *Triste solitario y final. La frustración del pacto tripartito y la salida del ministro.*

La CGE decidió mantenerse firme en su posición de defensa del programa y continuó con la “Campaña de Esclarecimiento sobre la economía” que recorría distintos puntos del país. En ese marco, la organización sumaba un comunicado en defensa de Gelbard, y el titular del IIEF-CGE, Israel Dujovne, arengaba a los empresarios: “Nos encontramos -dijo- ante un ataque frontal contra el equipo económico, con plena conciencia de que ese ataque debilita, en definitiva, al propio Gobierno nacional, por lo tanto la defensa del Gobierno no puede ser parcial, debe ser total” (“La política económica...”, 1974, p. 4).

Si en algún momento la discusión entre sindicalistas y empresarios se centraba en los términos de intercambio político expresados en el ACN, la polémica parecía trasladarse a la figura de Gelbard y su gabinete. Sin embargo, rápidamente, a mediados de septiembre, todos los actores enfocaron la disputa nuevamente alrededor de los precios y los salarios. D’Adamo y el flamante secretario de Comercio, Ernesto Paenza, explicaron la nueva política de precios, que se centraba en su flexibilización (“Reunión con empresarios”, 1974). En compensación, el secretario emitió la Resolución 132/74 que, por pedido de la COPINV, impelía a las 425 empresas líderes del país y a todas las que produjeran bienes con precios máximos o congelados, a presentar un balance

de los dos ejercicios cerrados previos, "así como el balance y cuadro de resultados de los 90 días anteriores a la solicitud de aumento" ("Sobre precios y salarios tratan", 1974, p. 1).

El acceso a los libros contables al que refería Torre (1983) dejaba notar el avance sindical en la coalición oficialista, pero al mismo tiempo subrayaba los once meses que habían transcurrido desde la solicitud de la CGT en la COPINV hasta que el equipo económico efectivamente decidió tomar la medida. La decisión no resultó suficiente: el mismo día el secretario de hacienda de la CGT afirmó que la flexibilización de la política de precios "nos va a llevar en breve plazo a solicitar [un] reajuste de salarios" ("Sobre precios y salarios tratan", 1974, p. 1). La declaración significó el inicio de una nueva polémica con el ministro, quien declaró que las paritarias comenzarían a funcionar en enero, y que "salvo que se produzca un desbarajuste", no se adelantarían ("El funcionamiento de las paritarias", 1974, p. 3). El 16, la cúpula de la CGT se reunió con la presidenta y el ministro de Trabajo. Al finalizar, los dirigentes informaron que, sin la presencia del ministro de Economía, trataron elementos relacionados con el Pacto Social ("La presidente con dirigentes obreros", 1974).

En el medio de estas tensiones, la salud de los funcionarios volvería a incidir en la agenda política: el 18 de septiembre Gelbard fue internado por un episodio cardíaco. Su ausencia fue interpretada por el sindicalismo como una oportunidad: el día siguiente, los diarios informaban que la CGT había solicitado a la presidenta la convocatoria a la Gran Paritaria Nacional. Menos de tres meses después de la última modificación al ACN, la conducción sindical ya no planteaba siquiera un cambio de los términos de intercambio político dentro del programa, sino que parecía comenzar a abandonar el esquema del pacto: omitía las instancias tripartitas, deslegitimaba al ministro que había impulsado el programa, y recurría directa y personalmente a la figura presidencial. En ausencia del ministro de Economía, Broner afirmó que los empresarios estaban dispuestos a discutir salarios ("Informes económicos", 1974).

Pocos días tardó la situación en escalar: con la llegada de la primavera, Zorila, el sindicalista del Consejo Directivo de la CGT más crítico del equipo económico, anunció que grupos técnicos de la entidad sindical y de la CGE se reunirían por fuera de la COPINV para realizar intercambios acerca de los equilibrios necesarios entre precios y salarios, y aseguraba que la presidenta convocaría inmediatamente a la Gran Paritaria para que los aumentos que pudieran acordar directamente con los empresarios

rigieran desde octubre (“Grupos técnicos...”, 1974). El vaciamiento de las instituciones tripartitas encabezadas por la cartera económica era notable. Además, la evasión de dichas instancias se producía para renegociar los términos de intercambio político en ausencia de un actor clave: los representantes del Estado definidos por el ACN. El objetivo era notorio: deslegitimar a Gelbard y su equipo como interlocutores válidos. La dimensión del enraizamiento que implicaba una vía de diálogo institucionalizada entre Estado y sociedad civil languidecía con la decisión de la CGT de intentar negociar exclusivamente con su contraparte empresaria y su intención de evitar a los interlocutores estatales definidos en los acuerdos previos.

La estrategia de eludir a la cartera económica se profundizó durante los días siguientes: Zorila afirmó que el incremento salarial era un tema que manejaría “directamente el consejo directivo de la CGT con la presidente de la Nación” (“Al problema de precios...”, 1974, p. 1), ignorando ahora no solo al Ministerio de Economía, sino también cualquier diálogo con los empresarios, y horadando el esquema tripartito. De manera casi coordinada, la Secretaría General de la Presidencia elevó a María Estela Martínez un informe firmado por cuatro ministros -entre ellos, Otero y López Rega-, en el que se recomendaba un pronto aumento salarial. Solo habían pasado diez días desde que el ministro de Economía había negado esa posibilidad: Gelbard estaba cada vez más solo. Aún convaleciente, emitió un comunicado en el que, ante la falta de legitimación por parte de los sindicatos y otros actores del peronismo, recurría a la autoridad de quien lo había elegido para el cargo: “El ministro de Economía, José Ber Gelbard, que continúa internado en el Hospital Italiano, reiteró que la política económica nacional seguirá siendo la misma que inspiró y concretó al asumir el gobierno el teniente general Juan Domingo Perón” (“Será mantenida la política...”, 1974, p. 3).

Sin embargo, tras su salida del hospital, sus primeras consideraciones fueron para condenar el fenómeno que denominó “ola de terrorismo”, días después de que Montoneros proclamara su regreso a la clandestinidad y secuestrara a los hermanos Born. A su vez, aún eran recientes las operaciones del ERP en Catamarca y el asesinato de sus militantes, y la Triple A ya operaba activamente en la Argentina (cap.4). El ministro afirmaba que esta situación impedía “el normal desarrollo económico nacional ya que ni la conducción económica ni las inversiones pueden mantenerse en un clima de violencia (...) La actividad económica está indisolublemente ligada al

marco social, político, jurídico y cultural.” (“Declaraciones del Sr. Gelbard”, 1974, p. 3). La asociación de los problemas económicos con el marco político fue una herramienta discursiva que el gabinete económico repitió durante octubre (“Con cegetistas se reunirá...”, 1974).

En las vísperas del 17 de octubre, Broner seguía recorriendo el país pregonando el éxito del programa económico (“Habló sobre varios temas Julio Broner”, 1974). Gelbard, a su vez, subrayaba que todos los aumentos debían producirse dentro de la concertación, pero, luego de haber sido desmentido públicamente por los dirigentes de la CGT respecto de la necesidad de aumentar salarios, adelantaba su derrota con un escueto “si se convoca la Gran Paritaria, que así sea” (“Gelbard refirióse a la Gran Paritaria...”, 1974, p. 1).

Su resignación resultaba premonitrice: el 17, en el marco del Día de la Lealtad Peronista, la presidenta firmó la convocatoria. La prensa adelantaba que los sindicatos exigirían un aumento del 19%, aunque el Ministerio de Economía calculaba que el deterioro del salario desde abril era del 4,1%. Sin embargo, la mayor preocupación del gabinete era obtener un compromiso escrito de que sería el último reclamo salarial hasta el 31 de mayo de 1975, cuando vencía el ACN (“Reunión de la Gran Paritaria”, 1974). La dinámica del Pacto Social indicaba que, si no se controlaba la inflación, el compromiso deseado resultaría en cualquier caso un papel inútil.

Broner, por su parte, realizó un último llamado desesperado a los empresarios a resignar una porción de las ganancias (“Broner formuló una exhortación...”, 1974). Al día siguiente, la CGE ratificó la postura de su presidente en la “Declaración de Salta”, cuyos puntos centrales eran la adhesión al Pacto Social, el elogio del gabinete económico, y la condena de la violencia de "ultraizquierda y ultraderecha" (“Finalizó la reunión...”, 1974).

De todas formas, ya era muy tarde para cualquier intento de salvar el programa. Carente de su principal apoyo político en el peronismo desde el 1 de julio, huérfano del acuerdo de los actores del Pacto Social sobre cómo reestructurar los términos de intercambio político, con la disidencia creciente de la CGT, y mostrando resultados económicos que se quedaban sin lustre, Gelbard y su gabinete presentaron su renuncia el 20 de octubre. La misma fue aceptada y, al día siguiente, fue designado en el cargo Alfredo Gómez Morales (“Gómez Morales nuevo ministro...”, 1974).

La reacción de los sindicalistas fue de silencio hacia el ministro saliente: manifestaron su apoyo al gobierno y le dieron la bienvenida a la nueva autoridad, con quien tenían mayor relación, ya que se trataba de un economista de larga trayectoria en el justicialismo (cap.3). Los representantes de la CGE, en cambio, se sintieron traicionados por el gobierno: la primera manifestación de Broner fue señalar que los empresarios estaban listos para “volver a las trincheras”. Aunque, pasadas las horas, atemperó su tono y, remarcando la disconformidad por el desplazamiento del equipo saliente, se puso a disposición de la presidenta (“Causas de la crisis”, 1974).

El análisis diacrónico de las posiciones de los actores del Pacto Social en el período nos permite apartarnos de interpretaciones clásicas, según las cuales se puede afirmar directamente que “la ruptura de los acuerdos provino del lado sindical” (Canitrot, 1978, p. 47), o de otras que identifican primariamente los incumplimientos del programa con una respuesta empresarial a la limitación de sus ganancias (Horowicz, 2015). Tampoco creemos que el devenir de esta experiencia pueda explicarse centralmente por formas de cortoplacismo sindical (Torre, 1982) ni por la participación “poco voluntaria” (Vitto, 2012, p.127) de alguna de las organizaciones corporativas, ya que, si bien el acuerdo implicaba limitaciones para ambas, también significaba una importante legitimación. Al mismo tiempo, los representantes involucrados manifestaron encontrar en estos acuerdos cambios importantes en los roles de sus representados. En definitiva, sostenemos que la deriva de esta experiencia no se explica por el incumplimiento o la acción puntual de alguno de los actores involucrados que pueda ser identificado como “culpable” en el juicio de la historia. Antes bien, sostenemos que se trató de un proceso dinámico y complejo en el que ambas organizaciones corporativas pusieron en cuestión los términos de intercambio político con el que se dio inicio al Pacto Social. Nos referimos no solo a los términos establecidos en el ACN, sino también a los no escritos, relacionados con la legitimación del programa y el gobierno.

En ese sentido, los puntos débiles del esquema tripartito se comenzaron a ver cuando se produjo una disputa hermenéutica a finales de septiembre de 1973, acerca de cómo interpretar elementos claves del programa, en particular la relación entre precios y salarios, que conllevaba controversias complementarias como los debates técnicos acerca de la correcta medición de esas variables. A su vez, los acuerdos comprometidos por los representantes en las mesas de negociaciones no resultaban

ratificados de manera satisfactoria en la práctica por los representados. El análisis pone en cuestión también la capacidad del gobierno peronista de integrar en estas mesas tripartitas a todos los actores necesarios para lograr representaciones sociales que hicieran viables este tipo de programas.

Así, la situación reveló la dificultad de estabilizar el enraizamiento entre el Estado y las entidades corporativas, ya que, aun habiendo definido metas comunes en el ACN, los desacuerdos sobre puntos centrales del camino para lograrlo no eran sintetizados en las instancias tripartitas. La repetición de estas situaciones terminó por deslegitimar las instituciones del Pacto Social y al propio ministro de Economía que no era reconocido como autoridad para definir desacuerdos entre los representantes del capital y el trabajo: solo la voz de Perón era reconocida como tal. Fue esta dinámica del proceso de intercambio político -la disputa por sus términos sin resolución legitimada por los propios actores- la que provocó que la suerte del programa fuera difícilmente escindible de la del líder del peronismo, por lo que, tras su muerte, el programa quedó severamente debilitado. El contexto de crisis política, el empeoramiento del escenario externo y las disputas en la coalición político-social gobernante se revelarían poco propicias para revitalizarlo. Así, los últimos meses de la gestión de Gelbard fueron el eco tenue de un programa que mostraba resultados económicos dispares y desgastados, pero que, fundamentalmente, había quedado huérfano de apoyos políticos suficientes. El Pacto Social, como nudo entre el Estado y organizaciones corporativas de la sociedad civil, se mostraba incapaz de estabilizar un vínculo de enraizamiento entre ambas esferas que, acaso, pudiera haber significado un paso hacia alguna forma posible de desarrollo.

Capítulo III. *El gabinete económico del plan Gelbard: enraizamiento corporativo y disputas político – técnicas (o “De la imbricación del conocimiento económico”)*.

Si en el capítulo previo nos detuvimos en organizaciones corporativas de la coalición, en el presente abordamos otro grupo heterogéneo: el de los técnicos e intelectuales económicos del oficialismo que se relacionaron, de maneras diversas, con el Pacto Social. En los días posteriores al triunfo electoral de marzo se discutían posibles nombres para la conformación del futuro gabinete y, si bien parecía evidente que la cartera laboral sería para un hombre de la rama sindical del movimiento justicialista, la designación para el Ministerio de Hacienda y Finanzas era una incógnita. Dentro del peronismo, los sindicatos tenían relaciones firmes con economistas que habían participado en los gobiernos del período 1946 - 1955, como Antonio Cafiero y Alfredo Gómez Morales (Cafiero, 2011; Denaday, 2018, 2020). Por otro lado, desde la Tendencia, los líderes de Montoneros les habían entregado a Cárpora y Perón una nómina para ocupar diversos puestos de la administración. En el listado aparecían, para el área económica, nombres como el de Oscar Sbarra Mitre, y el del radical Roque Carranza, ex ministro de Arturo Illia (Friedemann, 2021b).

Por su parte, Gelbard no era apadrinado por ninguna organización específica del peronismo, pero se había encargado de afianzar un vínculo personal con Perón, quien, desde el exilio, valoraba positivamente los acercamientos de la CGE y la CGT, que se habían coronado con las “Coincidencias programáticas” (Brennan, 1997; Rein, 2015).

Abal Medina recuerda el recelo que generaba su figura en los referentes del sindicalismo y de Montoneros con los que habitualmente se reunía:

Un día estábamos comiendo y llega la noticia de que llevaba Gelbard una semana en Madrid hablando con Perón. Estamos hablando del año 71. Y eso, la alarma frente a ese hecho unió a todos: ‘¡no puede ser!’. Pero era por motivos diferentes obviamente. Pero la coincidencia fue la alarma porque Gelbard estaba ‘lavándole la cabeza’ al General. (Abal Medina, 2005)

Más allá de la postura de Cárpora al respecto, los relatos coinciden en que el impulso principal para su designación fue la palabra de Perón (Cafiero, 2011; Caraballo, 2007; Leyba, 2010).

De familia polaca radicada en Catamarca, Gelbard era un típico *self made man* que había iniciado su fortuna como vendedor de artículos comerciales a lo largo de las provincias argentinas, logrando cierta influencia en el escenario empresarial del noroeste argentino, fundamentalmente en Catamarca y Tucumán. Si bien había formado parte de los ámbitos de influencia del Partido Comunista⁵⁰, la fundación de la CGE durante el primer decenio de gobierno peronista había contado con el beneplácito de las autoridades nacionales. A su vez, se había erigido como una figura central del Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social de 1955, donde se generó un intercambio con las centrales sindicales sobre el camino a seguir en la relación entre patrones y trabajadores. Durante la década del sesenta, fortaleció nuevamente su organización y fundó el IIEF-CGE, una usina de ideas del colectivo pequeño y mediano empresario en la cual se comenzarían a redactar reclamos y proyectos políticos presentados a gobiernos de distinto signo, que constituirían la base de muchas de las políticas que Gelbard aplicaría en su gestión (Rougier & Fiszbein, 2006). Asociado con la familia Madanes, durante los últimos años de la autodenominada “Revolución Argentina” logró contratos con el Estado que terminaron de perfilar su portafolio como importante empresario, antes de ser nombrado ministro. Su trayectoria fue abordada pormenorizadamente por diversos trabajos académicos y periodísticos (Blejmar, 2019; Brennan, 1997; Rein, 1996, 2015; Seoane, 2018). En el presente capítulo, en cambio, haremos foco en cómo estructuró su gabinete en la cartera económica, reflejando la convivencia de figuras que lo habían acompañado en la CGE junto a referentes justicialistas en materia económica, aunque en diferentes niveles. Alejándonos de posturas normativas al respecto⁵¹, nuestra hipótesis, en línea con el desarrollo del capítulo precedente, consiste en que la presencia de actores fuertemente vinculados con las organizaciones corporativas constituyó un intento por estabilizar una forma de enraizamiento entre el Estado y dichas organizaciones.

La convergencia de los estudios que tienen al Estado como protagonista y hacen foco en los intelectuales como grupo social, con el interés por la historia de redes

⁵⁰ Seoane (2018) sostiene que hasta 1965 Gelbard fue parte del “Directorio” del partido encargado de encabezar negocios que financiaban sus actividades.

⁵¹ Por ejemplo, la tesis de Sidicaro (2002) que señala que esta inserción de organizaciones corporativas en el Estado resultó en una “sobrecarga” de demandas.

profesionales, han enriquecido y renovado las lecturas sobre las elites estatales en las últimas décadas (Plotkin & Zimmermann, 2012, p. 18). En ese marco, encontramos que el Ministerio de Economía fue nutrido por expertos e intelectuales vinculados con las organizaciones analizadas en el capítulo 2, pero en distintas posiciones. Gelbard mantuvo siempre dentro de su círculo de cercanía, en el que se tomaban las decisiones centrales del ministerio, a los hombres vinculados con la CGE de extracción no peronista que, a su vez, nombraron funcionarios a partir de redes vinculares profesionales y políticas previas. Al mismo tiempo, existió una segunda línea de funcionarios, vinculados con el Partido Justicialista, que ocuparon lugares de relevancia dispar. En ambos grupos predominaban figuras con inserciones políticas e institucionales claramente definidas y poseedores de cualidades técnicas, cuyas trayectorias sugieren evitar las divisiones contundentes entre la figura del intelectual políticamente comprometido y la del experto guiado por la racionalidad técnica (Neiburg & Plotkin, 2004b). En los espacios en los que habían participado se habían forjado no solo ideas políticas, sino también sus ideas económicas, que no se presentan entonces como conceptos pretendidamente asépticos, sino institucionalmente imbricados (Fourcade-Gourinchas, 2001). Luego de detenernos en estas figuras del gabinete, finalmente abordaremos las intervenciones de economistas vinculados con otros espacios políticos de la coalición oficialista, que fueron excluidos de la cartera y, en líneas generales, expresaron posturas críticas al programa.

3.1. El enraizamiento empresario en el ministerio. La CGE en el gabinete económico.

3.1.1 *D'Adamo, Leyba y Caraballo*. El primer círculo de colaboradores y la confección de un plan.

Ni los discursos económicos ni los planes emergen escindidos de sus entornos y lugares de enunciación (Fourcade-Gourinchas, 2001). En ese sentido, el ACN y, posteriormente, el Plan Trienal reconocían sus antecedentes en las “Coincidencias Programáticas”. La imbricación de los discursos allí volcados era clara: las mismas habían sido redactadas por hombres de la CGE y la CGT y reflejaban la convergencia de intereses entre el sindicalismo mayoritario y un sector del empresariado. En cuanto a la conformación de su gabinete, Gelbard también ubicó en los lugares más importantes a hombres vinculados con dichas organizaciones: esta situación facilitó

una forma particular de relacionarse entre estas entidades de la sociedad civil y el Estado.

En el círculo más cercano al ministro, predominaron los funcionarios con un pasado vinculado al IIEF-CGE, que compartían una serie de características: no se reivindicaban como peronistas y, por lo tanto, en general no tenían una historia vinculada al Partido Justicialista. Además, a diferencia de intelectuales identificados con ese partido, habían podido desarrollarse profesionalmente en la administración pública durante el período de su proscripción (1955-1973), varios de ellos habían trabajado en el gobierno radical de Arturo Frondizi⁵², y, finalmente, habían formado parte del *think tank* empresario.

Orlando D'Adamo, Carlos Leyba y Gustavo Caraballo son nombres que se repiten en los relatos como figuras importantes cercanas a Gelbard, tanto en la gestión cotidiana del ministerio como en el proceso de toma de decisiones (Caffero, 2011; Caraballo, 2007; Leyba, 2010; R. Lavagna, entrevista -AHO-IIGG- 2005). A su vez, las redes vinculares que algunos de ellos habían construido en espacios diversos - profesionales, intelectuales, políticos- se tradujeron, en ocasiones, en nuevos nombramientos en el gabinete económico. Como señala Donatello (2017), trayectorias de este tipo funcionan como ejemplos para pensar la política como intermediación, en este caso entre sectores corporativos y el Estado.

Orlando D'Adamo, un ingeniero forestal con intereses empresarios en la industria del azúcar, ocupó la Secretaría de Coordinación y Programación del Ministerio de Economía⁵³, lo que lo convertía en el segundo hombre más poderoso de la cartera. Tempranamente vinculado a la CGE, su experiencia en el Estado incluía su participación como director de Economía Forestal de la Nación y secretario de la Comisión Nacional de Bosques entre 1953 y 1957: la continuidad luego del golpe de Estado indica que no era percibido como una figura con lazos políticos fuertes con el peronismo. Su participación más relevante había sido como asesor y secretario técnico del gobierno de Arturo Frondizi (Coviello, 2019), ya que durante la década de 1960 se

⁵² Según Heredia y Gené, es precisamente en este período que se produce en la escena pública “un salto en términos de visibilidad y un punto de inflexión en lo que refiere a la presencia de expertos económicos” (2009, p.122).

⁵³ Antes de que se sancionara la nueva Ley de Ministerios, los funcionarios fueron designados en cargos provisorios, pero atendiendo las mismas tareas que asumirían formalmente con la nueva norma en octubre de 1973. Con fines expositivos, nos centraremos en los cargos que ocuparon con la nueva ley, que reflejaba el reparto de tareas y responsabilidades diseñado por Gelbard al interior del ministerio.

alejó de la gestión pública y se encargó de coordinar los grupos de investigación del IIEF-CGE.

La ascendencia de D'Adamo en el gabinete de Gelbard es señalada repetidamente (Cafiero, 2011; Caraballo, 2007; Leyba, 2010). De los testimonios se extrae una valoración tanto de su rol en la gestión diaria de la cartera como de su capacidad técnica, mientras Gelbard era señalado como el encargado de la articulación política. Roberto Lavagna incluso identifica a la conducción económica como “Gelbard – D’Adamo: D’Adamo era el viceministro, y era el ministro en la realidad” (Lavagna, 2005).

También en la prensa del período se puede observar este rol preponderante, no solo acompañando a Gelbard en las actividades más importantes del período, sino asumiendo funciones propias. De este modo, aparece en distintos momentos del año 1973 encargándose de las explicaciones acerca del programa económico y su marcha frente al presidente y los gobernadores (“La reunión de gobernadores”, 1973), presidiendo el acto de creación de la COPINV (“Constituyóse la comisión...”, 1973), e, incluso, como responsable de convocar a entidades corporativas en conflicto con el gobierno (“Convocaron a dirigentes...”, 1973).

El año siguiente fue enviado primero a La Habana y luego a Washington⁵⁴ para viabilizar las exportaciones de automóviles a Cuba (“D’Adamo en Washington”, 1974), y en marzo fue vocero de la Gran Paritaria (“Informe en Olivos”, 1974) y designado al frente del Instituto para la Integración Económica Latinoamericana (“La integración...”, 1974). También supo encargarse de negociaciones por planes de inversión con representantes de Techint (“El plan trienal”, 1974), y anunció la realización de un nuevo censo económico a producirse en octubre (“Censo económico”, 1974). De todas formas, su pico de exposición lo alcanzó en septiembre de ese año cuando asumió las tareas del ministro, ausente por motivos de salud (“Analizóse...”, 1974; “Reunión en Economía”, 1974).

Los testimonios de Leyba y Caraballo resaltan la figura de D’Adamo incluso desde la “hora cero” en la redacción de las “Coincidencias Programáticas”. El “plan Gelbard – D’Adamo” reconocía entonces en ese documento un antecedente reciente

⁵⁴ La visita a los Estados Unidos estaba relacionada con la necesidad de ignorar el bloqueo impuesto a Cuba para llevar adelante la transacción, en la que estarían involucradas empresas que fabricaban automóviles en Argentina, pero cuyas casas matrices estaban en Estados Unidos.

en la Argentina, pero también era hijo de su tiempo: el éxito de esquemas de pactos sociales en la Europa de la segunda posguerra es reconocido como una importante influencia (Caraballo, 2007; Leyba, 2010). En el aspecto teórico, Leyba recuerda que en la formulación de esta política influyó la obra del economista italiano Luigi Pasinetti, neokeynesiano de la escuela inglesa de Cambridge, que, a su vez, continuaba los estudios de Piero Sraffa sobre la producción conjunta:

La Argentina nunca creció tanto como entre el 63 y el 73. Esa productividad extraordinaria no se distribuyó, porque los salarios reales cayeron, a pesar de que el desempleo había aumentado muy poco; y, en segundo lugar, tampoco hubo una exportación industrial que realizara esa productividad en el mercado. Pasinetti dice que si vos no distribuís el producto de la productividad vía salarios o vía exportaciones, detenés el crecimiento de la economía. Porque hay un embolsamiento de *mosca* de alguna manera ¿Por qué voy a aplicar esta productividad que se convirtió en utilidades al ciclo si no tengo salidas? Es así, no tengo salidas por los defectos de la política económica, por la ausencia de la participación del Estado en la exportación, o en la ausencia del Estado en regular la distribución. (Leyba, 2019)

La preocupación por ampliar los mercados para un incremento esperado de la producción refleja una serie de presupuestos del diagnóstico. Primero, una visión positiva en cuanto al crecimiento alcanzado previamente, mas negativa en cuanto a la forma de gestionarlo. En segundo lugar, la redistribución progresiva del ingreso que fomentara el consumo interno apuntaba a mejorar las ventas de las industrias que ofrecían sus productos en el país, muchas de ellas enroladas en la CGE. Sin embargo, para que creciera la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, se preveía que el salario real creciera por encima de la productividad media de la economía (Vitto, 2012), lo que generaba una contradicción con la CGE, que concentraba entre sus adherentes numerosas organizaciones industriales intensivas en mano de obra, en las que las variaciones salariales impactaban más directamente (Di Tella, 1986).

Finalmente, la necesidad de fomentar las exportaciones industriales y agrícolas nace de una lectura motivada por las crisis regulares por escasez de divisas, problema propio de la historia nacional que caracterizaba las preocupaciones de los economistas de las décadas del 60 y 70, centrados en los rasgos particulares de un ansiado desarrollo nacional (Heredía, 2015). Esta figura era asociada de manera casi unánime a la industrialización: Rougier y Fiszbein señalan que “todos los economistas que

participaron del debate de los años sesenta se aproximaban a la formulación de un proyecto nacional de desarrollo en torno a las estrategias para reimpulsar el proceso de industrialización” (2006, p.18). Acaso la discusión era acerca de cómo definir esa estrategia: incluso la posición liberal era favorable al desarrollo manufacturero, pero opuesta al “sesgo antiexportador” (Rougier y Fiszbein, 2006).

En términos del impulso a la industrialización, el programa contenía similitudes con la política del primer peronismo, pero al mismo tiempo expresaba un consenso de época entre los economistas. Canitrot (1978) destaca las diferencias con el programa del primer decenio de gobierno peronista, fundamentalmente a partir de la medida en los aumentos salariales dispuestos por Gelbard, y la moderación de las transferencias del agro a la industria. Antonio Cafiero, en cambio, sostiene que existió una continuidad y se reprodujo “la política de concertación económico-social que había sido característica de la administración justicialista durante el período 1946 – 1955” (Cafiero, 2011, p. 293).

En cualquier caso, lo cierto es que Cámpora y, fundamentalmente, Perón, eligieron a un equipo de funcionarios no peronistas para llevar adelante la política económica. De hecho, a pesar del mentado policlasismo, el sector empresario no poseía representación propia dentro del movimiento peronista, a diferencia de los sindicatos. El pasado de Gelbard asociado al comunismo argentino y el nexo de D’Adamo con el gobierno de Frondizi no fueron impedimentos para que ocuparan altos cargos.

Sus colaboradores no eran la excepción. Carlos Leyba era el único funcionario de este grupo con formación académica como economista. Subsecretario de Coordinación y Programación, su rol en la gestión es destacado por diversos relatos (Cafiero, 2011; Carballo, 2007; Pardo & Frenkel, 2004; Lavagna, 2005). Afiliado al Partido Demócrata Cristiano, había tenido vínculos con la CGT a partir de sus colaboraciones con Hugo Barrionuevo, y había estado a las órdenes de D’Adamo en el instituto de la CGE (Leyba, 2019).

Por su parte, Gustavo Carballo fue jefe de asesores del Ministerio de Economía, y luego fue nombrado secretario técnico de la Presidencia, por recomendación de Gelbard. Según se interpreten sus relatos, en esa función aparecía como un enlace entre el ministro de Economía y el presidente, o bien como un hombre de confianza de Gelbard que trabajó un año con Perón. Abogado de profesión, había sido funcionario

durante el gobierno de Frondizi, y desde entonces se mantuvo en la Administración Pública Nacional. Durante esa primera experiencia en la gestión del gobierno radical conoció a D'Adamo, por cuya recomendación se incorporó al IIEF-CGE en 1965 junto a otros ex funcionarios del gobierno frondizista, como Julio Savón, Saúl Witis, y Horacio Giberti (Caraballo, 2007, p. 65).

Los nombres de ambos aparecen en la prensa vinculados con el Plan Trienal: Caraballo involucrado antes de su envío al Congreso (“Perón habla...”, 1973), y Leyba relacionado con el control del cumplimiento de sus metas (“El control de las metas...”, 1974). Sin embargo, mientras Leyba, por su cargo, era mencionado habitualmente en labores junto al secretario de Coordinación; Caraballo, desde la Secretaría Técnica de la Presidencia, podía ser relacionado por la prensa con una gama de asuntos más amplia, aunque predominaban los económicos, en sintonía con su vínculo estrecho con Gelbard. De este modo, es mencionado como integrante de una comisión asesora en materia de política salarial (“Se creó una comisión”, 1974), participando de la Gran Paritaria (“Gelbard dijo...”, 1974), e incluso desmintiendo versiones periodísticas sobre una supuesta hipertrofia de la burocracia estatal y el gasto público (“Acerca de la burocracia”, 1974).

D'Adamo, Caraballo y Leyba resultan entonces ejemplos de funcionarios con títulos en disciplinas diversas, cuyas preocupaciones en materia económica habían confluído en un organismo técnico del mundo privado, pero vinculado a una organización corporativa como la CGE que se había desarrollado con la intención de influir en la agenda de la administración estatal. Técnica y política aparecían así ligadas en los repertorios de estos hombres que no poseían pertenencias partidarias rígidas o dogmáticas, lo que les permitía, en ciertos casos, desempeñarse en gobiernos encabezados por figuras tan disímiles como Frondizi y Cámpora. Lo que tenían en común ambas gestiones es que aparecían como experiencias en las que, al menos a priori, se podían ejecutar planes afines a los impulsados por la CGE.

Sin embargo, la ausencia en el entorno de Gelbard de personajes con trayectoria en el peronismo era un dato relevante en un contexto en el que la coalición oficialista se veía sacudida por una feroz pugna al interior de ese movimiento. La organización del nuevo gobierno, a través de la sanción de la nueva Ley de Ministerios, representaba una oportunidad de afianzar su poder en el gabinete, o bien, la posibilidad de quedar subsumido ante funcionarios peronistas que aumentarían sus atribuciones.

Tanto el resultado de ese proceso como ciertos relatos al respecto (Caraballo, 2007; Leyba, 2019) indican que el entorno de Gelbard tuvo incidencia a la hora de estructurar formalmente el gabinete nacional. El Ministerio de Hacienda y Finanzas se reconvertiría en octubre en el Ministerio de Economía, incorporando formalmente nuevas funciones – “la centralización de los rubros referidos a la hacienda, finanzas, industria, comercio, y agro”- que Gelbard había coordinado en la práctica desde el comienzo de su gestión. Así, la prensa señalaba que las dos principales carteras beneficiadas por la nueva ley eran las de Economía y Bienestar Social, al punto de convertirlas en “superministerios” (“Economía y Bienestar Social...”, 1973).

A pesar de ese posicionamiento favorable, Leyba señala que Gelbard no consiguió todos los objetivos que se propuso en ese campo: “quería tener el control total del Ministerio de Economía (...) no pudo ser ministro de Economía y Trabajo. Krieger [Vasena] había sido ministro de Economía y Trabajo⁵⁵” (Leyba, 2019).

En cambio, en la cartera laboral asumió Otero, quien se mostró muy activo en sus primeros días de gestión para disputar el papel de vocero del Pacto Social: en junio, viajó a Madrid a entrevistarse con Perón, según *La Prensa* “para explicarle algunos aspectos del ‘Pacto Social’ recientemente concluidos” (Iglesias Rouco, 1973). El ministro de Trabajo también estuvo junto a Gelbard en el anuncio del envío al Congreso de veinte proyectos de ley centrales para el programa económico (“El Poder Ejecutivo envió...”, 1973). El peso de la CGT en esa cartera no sería menor para el programa: desde allí se emprendió la redacción de la nueva Ley de Contrato de Trabajo que incorporaba nuevos derechos para el colectivo trabajador, lo que en algunos casos generaba tensiones con el objetivo del incremento de la productividad (Di Tella, 1986).

De este modo, la conformación del gabinete aparecía como otra forma de enraizamiento entre la sociedad civil y el Estado: en el Ministerio de Economía se priorizaba la vinculación con los empresarios, mientras que en el Ministerio de Trabajo se establecía un sólido vínculo con la CGT, la otra arista del Pacto Social.

⁵⁵ Adalbert Krieger Vasena había sido ministro de Economía entre 1957 y 1958, y de Economía y Trabajo entre 1967 y 1969.

3.1.2 Un “superministerio” con pocos peronistas. La conformación de la cartera económica.

El desembarco en la gestión pública ponía a Gelbard y su equipo ante el desafío de integrar los numerosos cargos que, una vez dictada la Ley de Ministerios, quedarían en la órbita de la cartera económica. En este contexto, la desconfianza de Perón hacia determinadas figuras del campo económico que militaban en su partido (ver 3.2), permitió que esos lugares fueran ocupados por hombres y mujeres con trayectorias políticas disímiles, pero que, mayoritariamente, tenían en común el no haber estado asociadas al peronismo. Luego de dieciocho años de proscripción, los expertos que no estaban vinculados directamente con el PJ se encontraban en una posición ventajosa, ya que muchos de ellos habían tenido experiencias de gestión en el Estado, o se habían podido desarrollar en espacios de investigación legales durante la década de 1960. En cambio, los *think tanks* peronistas habían comenzado a actuar de manera sistemática recién en los años previos al retorno de Perón (Denaday, 2018; Pardo & Frenkel, 2004). Importantes funcionarios del ministerio designados en el período habían participado del IIEF-CGE, usina que desde la década de 1960 brindaba a la central empresaria desarrollos de nivel técnico (Jauregui, 2013), o bien habían tenido vínculos políticos o profesionales con los referentes de este *think tank*.

La Secretaría de Agricultura quedó a cargo de Horacio Giberti, quien había sido entre 1966 y 1971 subdirector del IIEF-CGE, y hasta asumir su cargo era el director de su revista institucional, *Estudios sobre la economía argentina*, donde fue sucedido por Israel Dujovne. Al igual que D’Adamo y Caraballo, Giberti había ocupado un lugar relevante durante el gobierno de Frondizi, al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre 1958 y 1961, y continuó su experiencia en cargos de la administración pública como Coordinador del Sector Agropecuario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), consultor del Consejo Federal de Inversiones (CFI) -entre 1963 y 1967-, y posteriormente como director del Banco Nación (1971-1973). Bajo su impulso, la cartera económica alcanzó la firma del acta que sellaba un acuerdo con el sector agropecuario, con miras a aumentar la productividad del sector y extender la frontera agropecuaria. Las principales medidas impulsadas por Giberti fueron la suspensión de los desalojos de arrendatarios, la

política de regulación de carnes y granos⁵⁶, la Ley de Fomento Agrario y el Impuesto a la Renta Potencial Normal de las Explotaciones Agropecuarias, medida de carácter productivista que incrementaba los costos de poseer tierras sin producir (Makler, 2009, 2013).

Sin embargo, su gestión quedaría marcada por el proyecto de Ley Agraria que regulaba el régimen de tenencia y explotación de la tierra y se planteaba como objetivo no solamente un aumento de la productividad, sino una redistribución de las riquezas extraídas de la tierra argentina. El proyecto generaría el rechazo de la SRA y CARBAP -que incluso acusaría a sus redactores de infiltrados marxistas en el gobierno-, y pedidos de modificaciones de la FAA (“La ofensiva...”, 1974; “Tensa situación...”, 1974; Baudino & Sanz Cerbino, 2013; Gárgano, 2015; Sanz Cerbino & Baudino, 2014). No alcanzaría a tratarse en el Congreso, ya que fue ingresado en septiembre de 1974, cuando Gómez Morales relevaba a Gelbard y desplazaba a Giberti de su puesto, quitándole impulso al proyecto.

Algunas interpretaciones sobre su gestión intentan ubicarlo junto a los sectores de la guerrilla. Carlos Fernández Pardo y Leopoldo Frenkel, vinculados en el período a usinas de pensamiento del justicialismo, sostienen que fue “la visión romántica de la guerrilla ruralista la que vició ideológicamente el problema y (...) arrastró a Giberti, un técnico de reconocido prestigio en estos temas” (Pardo y Frenkel, 2004, p. 188). Sin embargo, esta lectura resulta simplista: de hecho, Giberti no era inmune a las críticas de los sectores de la Tendencia (cap.4). A su vez, los proyectos impulsados por la Secretaría en el período seguían los lineamientos de la obra académica previamente desplegada por el secretario (Giberti, 1964, 1966, 1985) e, incluso, el impuesto a la renta potencial de la tierra formaba parte de las “Coincidencias Programáticas”⁵⁷.

Por otro lado, aparece como una exageración del peso de un secretario alegar que estos proyectos podían reflejar meramente la relación de Giberti con sectores de izquierda, antes que posicionamientos del ministro. Caraballo sostiene que Gelbard no simpatizaba con una fracción importante del sector agropecuario: “Nunca fue a las

⁵⁶ Como parte de esta política, Giberti se enfrentó a las restricciones de los mercados europeos en materia de exportación de carnes. Por otro lado, impulsó una innovación en materia de granos: ante la mala calidad de las semillas de soja disponibles en el país en el período, gestionó la llegada de semillas de alta calidad de los Estados Unidos, trasladadas en aviones Hércules de la Fuerza Aérea para que pudieran ser sembradas a los pocos días de cosechadas (“Semillas de soja...”, 1973).

⁵⁷ La propuesta constituía el inciso 13.2 de las “Coincidencias Programáticas” (*Plan Trienal*, 1973, p. 306).

exposiciones y ferias anuales de la Sociedad Rural y aconsejó a todos los ministros no ir (...) Él prefería conversar con el sector de Horacio Volando, la Federación Agraria” (2007, p. 101).

Un nuevo caso de expertos que mostraron destrezas políticas surge al analizar la trayectoria de Alberto Davié en el área de Industria, primero con rango de subsecretario, y luego de octubre como secretario de Desarrollo Industrial. También proveniente de la CGE (Rougier & Fiszbein, 2006; Seoane, 2018), Davié exhibía una trayectoria particular: ingeniero de profesión, se había erigido en empresario industrial en la ciudad de Santa Fe (“Se realiza la exposición...”, 1973), y combinaba sus emprendimientos comerciales con sus intereses académicos, al punto de que alcanzó la presidencia del Centro Argentino de Control Automático⁵⁸. También se había desempeñado en importantes cargos académicos: había sido decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral entre 1958 y 1962 y vicerrector desde 1962 hasta 1965 (*Crónica Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral*, 1962; Jacovkis, 2014), e integrante del Departamento de Industria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante el decanato de Rolando García (1957-1966) (Rodríguez, 2016).

Su prestigio como académico no le impidió tomar rápidamente decisiones políticas de peso en su rol de funcionario: la Secretaría de Desarrollo Industrial fue la primera dependencia del ministerio en aplicar la Ley de Prescindibilidad, -una normativa que facilitaba las desvinculaciones laborales en la administración pública- para separar de sus cargos a ocho directores generales que permanecían desde la gestión del gobierno de facto (“Primeros ocho prescindibles”, 1973). A su vez, tuvo un rol destacado en el fomento de las exportaciones industriales a los países socialistas y, en particular, a Cuba (“Cuba, nuestro principal comprador”, 1974; “Exposición en Cuba”, 1974). En julio de 1974, en una rotación de cargos dentro del ministerio, fue trasladado a la dirección de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, siendo reemplazado

⁵⁸ Fundada en 1957 -hoy, Asociación Argentina de Control Automático- esta organización nuclea a científicos, técnicos y empresarios relacionados con la automatización. Desde esa institución, Davié impulsó durante el gobierno de Frondizi, en 1961, la realización de las Primeras Jornadas Argentinas sobre Técnicas Matemáticas en la Industria, el Comercio y la Administración Pública (“Primeras Jornadas Argentinas sobre Técnicas Matemáticas...”, 1961).

en la Secretaría por otro hombre de la CGE, Ernesto Paenza (“Cambios en Economía”, 1974)⁵⁹.

En el área de Obras Públicas⁶⁰ fue designado Horacio Zubiri. Según el diario *Clarín*, había diseñado la política de transporte para un Plan de Desarrollo Nacional delineado por la CGE (“Obras y servicios públicos”, 1973). Caraballo, en cambio, hace hincapié en su pertenencia al MID. El espacio desarrollista integraba formalmente el FREJULI -por lo que la incorporación de un hombre de sus filas podía responder a un acto de amplitud frentista-, pero fue muy crítico de la gestión Gelbard (ver 3.3). En el período de la administración Frondizi, Zubiri había sido ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires en el gobierno de Oscar Alende⁶¹, y en 1962 fue el candidato oficialista para la vicegobernación (Panella, 2001; Yazbek, 2015). Durante el gobierno de José María Guido, ascendió a ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación⁶².

El flamante secretario no fue bien recibido por un sector del peronismo:

La oposición a su persona por sectores combativos de la Juventud que irrumpieron en el edificio de la avenida 9 de julio, entraron a sus oficinas, lo amenazaron, lo llevaron al balcón para tirarlo a la calle intentando colgarlo de los talones, fue un incidente de tal gravedad que ocasionó la primera renuncia de Gelbard ante Cámpora, rechazada. (...) Mereció una comunicación de Gelbard con Perón en España. (Caraballo, 2007, p. 101).

Los diarios del período recogieron el evento con ciertos matices:

Alrededor de las 13 de ayer un grupo de aproximadamente 300 personas entre las que se encontraban miembros de la Agrupación Lealtad a Perón, de Obras Sanitarias de la

⁵⁹ Al reconstruir brevemente la trayectoria de Davié en este período surge un elemento a señalar, en línea con lo que hemos planteado sobre saberes técnicos y políticos. Mientras que ciertos datos los reconstruimos a partir de fuentes de diverso tipo, aquéllos que pudimos encontrar en la bibliografía académica aparecen fragmentados: los que refieren a su vida académica se encuentran en trabajos del campo del estudio de las universidades; mientras que los referidos a su rol como empresario y funcionario pueden encontrarse en trabajos de historia económica y política. Una primera impresión al respecto podría indicar que la estructuración de los campos académicos como compartimientos estancos tiende a constituirse en un obstáculo para reflexionar acerca de estos actores como una unidad no escindida, a pesar de sus prácticas en distintas esferas de la realidad social, o su multiposicionalidad (Boltanski, 1973).

⁶⁰ Hasta que se sancionó la nueva Ley de Ministerios, su cargo formal fue subsecretario a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que se convirtió en secretaría con la nueva legislación, dependiendo de Gelbard. Al mismo tiempo era subsecretario interino de Energía.

⁶¹ Así se desprende de publicaciones oficiales del período (Ministerio de Obras Públicas, 1960)

⁶² Se puede verificar en el sitio web actual oficial del Ministerio: <https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/comision-ddhh/ministros-de-obras-publicas>.

Nación, representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación de Trabajadores del Estado, y el diputado nacional Miguel Ángel Davico, procedieron a ocupar el edificio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en la Avenida 9 de Julio y Moreno clausurando todas las puertas de acceso. Luego se dirigieron al despacho del subsecretario general ingeniero Horacio J Zubiri (...) y le exigieron al ingeniero Zubiri la presentación de su renuncia. (“Fue ocupado Obras Públicas...”, 1973)

Las diferencias en cuanto a la gravedad de la escena podrían corresponder a que el periodista no hubiera accedido al episodio completo, o bien a los usos propios de la memoria y el paso del tiempo a considerar en los relatos del presente (Jelin, 2002). Sin embargo, más importante parece la referencia a los sectores combativos de la juventud que hace Caraballo. Tanto en su recuerdo como en los de Leyba (2019), Pardo y Frenkel (2004), y Cafiero (2011), el sector de la Tendencia -en el que sobresalía Montoneros- aparece como el principal obstáculo a la gestión de Gelbard dentro de la disputa peronista. Esta memoria compartida sobre el proceso general podría haber condicionado el recuerdo sobre un hecho particular, en el cual, según el relato de *La Prensa*, los protagonistas de la acción contra Zubiri fueron básicamente organizaciones sindicales, reforzadas por la presencia de un diputado de la misma extracción, como Miguel Davico⁶³.

A raíz de este episodio, Zubiri ofreció su renuncia (“Fue ocupado Obras Públicas...”, 1973), pero fue rechazada por el gobierno. Este caso era un exponente individual de una tendencia: las tomas de edificios públicos y empresas de diversa índole se multiplicaban, poniendo en cuestión la legitimidad del gobierno⁶⁴ (Nievas, 1999).

En cualquier caso, Zubiri se alejó del cargo en julio, con la renuncia de Cárpora, aunque es difícil decir si se debió a hechos como el relatado o a las fuertes críticas que los economistas del MID, empezando por el propio Rogelio Frigerio,

⁶³ Donatello (2017) en su artículo sobre la trayectoria de Caraballo, para el cual utiliza como fuente principal el libro autobiográfico del protagonista, señala que el testimonio ofrecido en el libro data de un momento histórico (2007) en el que la “fracción social” a la que pertenecía Caraballo estaba mayormente enfrentada al gobierno de los Kirchner, sobre el cual Caraballo mismo emitió críticas. El momento de enunciación, sostiene Donatello, podría haber influido en ciertos giros del relato. Sobre la trayectoria de Davico, se puede consultar: <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/circleg/curriculums/Davico.html>

⁶⁴ Estas tomas fueron recurrentes durante los días previos y posteriores a la asunción de Cárpora y cumplieron un papel en la disputa al interior del peronismo, ya que, en muchas ocasiones, fueron utilizadas para exigir nombramientos o remociones de autoridades en los organismos ocupados (Nievas, 1999).

lanzaban a Gelbard y su programa económico. Su reemplazante fue Julio Savón -con la nueva Ley de Ministerios sería designado secretario de Transportes y Obras Públicas-, otro hombre proveniente de las filas del IIEF-CGE, que también había colaborado con el gobierno de Frondizi (Caraballo, 2007)⁶⁵. Se mantendría en el cargo hasta julio de 1974, cuando fue reemplazado por Miguel Revestido (“Cambios en Economía”, 1974).

Respecto a la Ley de Ministerios, Gelbard declaraba que era importante la moderación. “No crear secretarías innecesarias” era el lema del ministro, entrevistado sobre la estructuración del nuevo gabinete económico: “Pero hay una que es una novedad (...) que es la de Recursos y Conservación de Ambiente (...) Nosotros le asignamos mucha importancia” (Gelbard, 1973). La contaminación del aire, los desechos industriales en el Riachuelo y la suciedad en la Ciudad de Buenos Aires son algunos de los elementos que menciona como preocupaciones en la misma entrevista.

Se trataba de la primera secretaría creada especialmente para estos menesteres, pero no resultaba una sorpresa ya que el mismo Perón había expresado sus inquietudes por la ecología en la última etapa de su exilio (Perón, 1972). Finalmente, se denominó Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, y estuvo a cargo de Yolanda Ortiz, licenciada en Química que se convirtió en la primera mujer en tener el rango de secretaria en el Ministerio de Economía (Leyba, 2011), y la primera de esa área en América Latina (Silva Fernández Aldana, s. f.). El flamante organismo incluía las áreas de Recursos Hídricos, Naturales Renovables (Bosques, Flora y Fauna Suelos, Parques Nacionales), Minería y la de Ambiente Humano (Bibiloni, 2008, p. 72).

Leyba, antiguo militante de la Democracia Cristiana, encuentra en la pertenencia de Ortiz a la misma organización una de las claves para que fuera designada:

Ante la existencia de Yolanda y en función de aquel Congreso de Estocolmo⁶⁶, decidimos crear una nueva Secretaría (...) En la figura de Yolanda, que era demócrata cristiana, yo trataba de meter a la gente del partido (...) Yo siempre fui afiliado a la

⁶⁵Caraballo (2007) recuerda que similar trayectoria a la de Savón tuvo Saúl Witis, pasando por el gobierno de Frondizi y el IIEF-CGE. Witis fue nombrado Subsecretario de Política y Administración Tributaria a través del Decreto 146/1973.

⁶⁶Leyba se refiere a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, el primer gran encuentro internacional sobre las cuestiones ambientales, realizada en Estocolmo en 1972, coordinada por el primer ministro sueco, Olof Palme.

Democracia Cristiana, estaba muy vinculado. Es un partido de cuadros, no tiene militantes, cada uno es independiente. (2019)

Ortiz coincide en la relevancia de su pertenencia partidaria y en la *expertise* en materia ambiental, aunque incorpora la cuestión de género como otro elemento a considerar:

Militaba en la Democracia Cristiana, que estaba unida al FREJULI, así fue que comencé mi relación con el gobierno. Allí, hacia la década del 70, Perón se entera que yo hacía 15 años que estaba trabajando en ambiente. Quería, entonces, una persona que conociera mucho el tema ambiental y que fuera mujer. Y no había nadie. Solo yo.” (Ortiz, 2008 p.91)

Uno de los hitos de la secretaría fue la realización de la “Primera Reunión Nacional de Ambiente Humano”. Yolanda Ortiz también remarca la relación de las problemáticas ambientales con el Ministerio de Economía en términos de desarrollo sustentable y relaciona la insistencia de Perón en que una mujer ocupara el cargo con la historia del peronismo:

Creo que le había quedado lo de Evita (...) Tanto es así que cuando yo llego, todas las secretarías, grandes secretarías, la de Recursos Hídricos, con el mejor laboratorio hidráulico de Latinoamérica; la de Recursos Naturales Renovables; Parques Nacionales; Flora; Fauna; Bosques; Minería, todas pasaron a ser Subsecretarías de la Secretaría de Ambiente Humano, presidida por una mujer. Era algo fuerte. Todo dependiente del Ministerio de Economía, porque Perón quería conciliar el desarrollo con el medioambiente. (Ortiz, 2008 p.92)

Importantes cargos en el ministerio eran así otorgados a integrantes del FREJULI que no provenían del peronismo. A su vez, Leyba aclara que respetaron a los trabajadores estables del organismo, empleados de planta permanente designados en su mayoría por los gobiernos radicales o militares durante la proscripción del peronismo: “nosotros no tocamos un solo funcionario del Ministerio de Economía, a un solo director nacional, a nadie” (Leyba, 2019). Según el testimonio, tampoco desde este punto de vista existía un ánimo rupturista en la gestión Gelbard⁶⁷.

⁶⁷ De todas formas, podemos matizar estas apreciaciones ya que, como vimos en el caso de la Secretaría de Desarrollo Industrial, hubo casos puntuales en los que se aplicó la Ley de Prescindibilidad, aunque, vale aclarar, no era un área que dependiera directamente de Leyba.

De hecho, uno de los trabajadores estables del ministerio era un antiguo conocido de Leyba. Junto a Roberto Lavagna habían colaborado en el Centro de Investigaciones Aplicadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y también como empleados en el área de estadísticas sociales del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Arturo Illia⁶⁸. Lavagna fue designado director nacional de Política de Precios y, simultáneamente, de Distribución del Ingreso. Aunque reconoce que cumplía una función político-técnica, en su testimonio decide resaltar los aspectos técnicos de su participación en un área clave como la del seguimiento de precios:

Ahí hicimos una experiencia única, creo, que fue armar una matriz que tenía como 125 sectores por 125 para poder seguir de alguna manera los distintos impactos que se iban dando en un período muy complicado, porque había sido el período del aumento de los precios internacionales del petróleo. Argentina era importadora de casi todos los productos derivados del petróleo. (...) Nosotros quisimos manejarlo lo más técnicamente posible y por eso armamos con la UBA (...) una matriz de seguimiento. (Lavagna, 2005)

Lavagna dejaría el área junto al secretario Miguel Revestido en julio de 1974, cuando ambos fueron trasladados a la Secretaría de Obras Públicas.

Las tres secretarías restantes establecidas por el Decreto 75/1973 -hasta aquí no mencionadas- eran las de Hacienda, Comunicaciones, y Energía. De la primera de ellas quedó a cargo Roberto Lumi, un contador que había integrado el directorio de varias empresas relacionadas con Gelbard, motivo por el cual fue investigado junto al ministro por la comisión bicameral del Congreso abocada al caso ALUAR (*Comisión Bicameral Investigadora Especial de Estudio Contrato Aluar - Estado Nacional*, 1975). Con vasta experiencia en la administración pública, también había ocupado diversos cargos durante la proscripción del peronismo⁶⁹. En Comunicaciones, fue

⁶⁸ En estos puntos coinciden los testimonios de Leyba (2019) y Lavagna (2005). De hecho, según sus relatos, en su tarea en el Ministerio de Trabajo, colaboraron con el sociólogo Roberto Carri, que más tarde se incorporaría a Montoneros, y sería desaparecido por la dictadura militar. Lavagna, por su parte, iniciaba una carrera política prolífica, que se coronaría con el cargo de ministro de Economía entre 2002 y 2004.

⁶⁹ Lumi había empezado su trayectoria como empleado público de carrera durante el primer peronismo, logrando ascensos, según sus palabras, “exclusivamente por méritos”, hasta alcanzar el rol de subsecretario de Hacienda en 1955. Luego de tres años alejado de la administración pública, el gobierno radical de Frondizi lo convocó con el cargo de secretario de Hacienda. A diferencia de otros funcionarios, también ocupó importantes cargos durante la autodenominada “Revolución Argentina”: fue ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires en 1970, y presidente del Banco Provincia

designado Delfor Otero, un general de brigada retirado del Ejército, que durante el golpe de Estado de 1966 había sido interventor de la provincia de Tucumán por un breve lapso (Kotler, 2016). Según Seoane (2018), había funcionado como correo entre el ahora ministro y Perón durante la etapa final de su exilio. Finalmente, la secretaría de Energía quedó a cargo de Herminio Sbarra, un ingeniero de larga trayectoria en SEGBA⁷⁰ y consultor privado en energía, también cercano a Gelbard, que reemplazó a quien hasta octubre se había desempeñado como subsecretario, Belgrande Magno (Yazbek, 2015).

La presencia mayoritaria de actores que no provenían del justicialismo no dejó de significar un problema de cara a la disputa interna peronista. Leyba recuerda que sectores vinculados a la Tendencia “pegaban carteles en el Ministerio de Economía, que decían ‘Leyba, el traidor de los hermanos cubanos’⁷¹” Sin embargo, él mismo ensaya una justificación de tipo político para la actitud de sus detractores: “Nosotros éramos jóvenes, yo era joven, y no éramos peronistas. Vos imaginate (...) el ver que un tipo que no había hecho campaña por Cámpora estuviera sentado ahí. Te ponés en el lugar y te da mucha bronca” (Leyba, 2019).

Al gabinete en el que predominaban los actores no peronistas, con fuerte participación de funcionarios que habían pasado por la CGE, y, en algunos casos, por el gobierno radical de Frondizi, se añadía el hecho de que los hombres que permanecieron en la CGE fueron de consulta permanente para el gabinete económico, instituyéndose otra vía para el enraizamiento entre el Estado y dicha organización. El diario *Clarín* relataba que en la primera reunión del equipo de Gelbard en el Palacio de Hacienda, además de sus funcionarios más cercanos, estuvieron presentes los miembros de la CGE Julio Broner, Rafael Kohanoff, Manuel Madanes, y Ernesto Paenza, los dos últimos también socios comerciales del ministro (“Gelbard reunió...”, 1973). La presencia de Broner se reiteró en la primera reunión formal del gabinete económico (“Primera reunión...”, 1973).

entre 1971 y 1973. Esta trayectoria le mereció críticas de sectores del peronismo (*Comisión Bicameral Investigadora Especial de Estudio Contrato Aluar - Estado Nacional*, 1975; Flores, 2017).

⁷⁰ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires era la empresa pública encargada de la provisión de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

⁷¹ Como integrante de la Democracia Cristiana, Leyba había viajado a Cuba para conocer el proceso revolucionario (Leyba, 2019).

El testimonio de Caraballo también deja ver que las consultas del gabinete hacia la CGE no eran solo políticas, sino también de corte técnico:

Por ejemplo, cuando se trató de definir el proyecto sobre agentes de empresas extranjeras me dijo Gelbard que me comunicara con el *Tuta Kohanoff* y el Dr. Carlos Garber de la CGE y ambos me dieron un precedente de los Estados Unidos⁷² (Caraballo, 2007, p. 87).

Más allá de que en este caso la consulta no le sería útil a Caraballo, muestra cómo, ante un interrogante de tipo técnico-político, Gelbard podía ordenarle consultar primero a su organización empresaria antes que a órganos del Estado.

3.1.3. Relaciones para la Planificación. El Plan Trienal.

El aciago 20 de junio de 1973 el diario *La Opinión* anunciaba que el gobierno había comenzado a elaborar “un plan trienal de desarrollo” en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, a través de una Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno (“Comenzó en el gobierno...”, 1973). La cartera al mando de Gelbard se apresuró a aclarar que “el plan socioeconómico está en marcha” y respondía a las “Coincidencias Programáticas” y al ACN y, especialmente, que, “en lo que atañe al sector socioeconómico ese plan es de jurisdicción de este ministerio” (“El Ministerio de Hacienda formuló...”, 1973). El Plan Trienal demarcaría los lineamientos generales para las políticas públicas de diversas áreas del Estado, con especial énfasis en la política económica (*Plan Trienal para la Lib. y la Reconstrucción Nac.*, 1973).

Caraballo recuerda haber intervenido desde el área de Presidencia en la coordinación del Plan para lograr un abordaje federal: “como era necesario relacionar iniciativas con disponibilidades y sobre todo establecer prioridades, establecimos 600 comisiones de trabajo para negociar con las provincias la distribución geográfica de las obras” (2007, p. 107).

⁷² Rafael Kohanoff (1925-2020) fue un ingeniero, empresario, y dirigente de la CGE, que alcanzaría la presidencia de la CGI, y que en diciembre de 1973 fue designado al frente de la COPYME. Carlos Garber era abogado, y representaba a Gelbard en la empresa FATE (“El caso Gelbard”, 1973). Manuel Madanes era un empresario, miembro de la CGE, y socio de Gelbard en numerosos emprendimientos empresarios (“Argentina impotente”, 1973; Blejmar, 2019; Seoane, 2018). Finalmente, Ernesto Paenza también era dirigente de la CGE: según Leyba (2019), era socio de Gelbard en la distribución de gaseosas de la línea Coca Cola en Tucumán, y fue designado en el BANADE como vicepresidente ejecutivo (“Argentina impotente”, 1973, p. 40).

También participó Leyba, como vicepresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Planificación Económica (INPE), organismo presidido por D'Adamo que había reemplazado al CONADE. Sobre el plan, rescata la importancia de un aporte externo: "El Plan Trienal lo terminé corrigiendo en imprenta yo. Pero los tipos que nosotros trajimos para hacer el plan, aparte del Ministerio, fue toda la gente argentina de CEPAL: Alberto Fraccia, Eric Calcagno, Diego Openhaim, Hernán Albade" (Leyba, 2019).

El plan efectivamente retomaba como antecedentes y directrices principales a las Coincidencias Programáticas, el ACN y los acuerdos del Estado Nacional con las provincias y las entidades representativas del sector agropecuario; mientras que operacionalizaba políticas públicas a aplicarse en diversas áreas y expresaba los objetivos a alcanzar en el trienio siguiente. El presidente anunció su remisión al Congreso en diciembre de 1973:

En la preparación de este plan de Gobierno han trabajado muchos funcionarios del Estado y un equipo de argentinos, técnicos en desarrollo y planificación, algunos de los cuales estaban radicados en el exterior y regresaron para prestar su colaboración y brindar su experiencia. (Perón, 1988a, p. 85)

La referencia de Perón subraya la importancia de los técnicos de la CEPAL referida por Leyba. Ramiro Coviello y Pablo Pryluka (2018) analizaron exhaustivamente aspectos del plan y sostienen que también allí se encuentran diferencias con los programas económicos del primer peronismo. En particular, en cuanto al rol del consumo, incorporando conceptos vinculados con los debates sobre el desarrollo de la década del sesenta. El objetivo era lograr "pautas de consumo" que apuntaran a consolidar un proceso redistributivo sin que se produjeran estrangulamientos por agotamiento de divisas. Por su parte, Coviello también exploró la participación de los expertos de la CEPAL en la confección del plan. En la misma línea de las relaciones que hasta aquí hemos analizado entre muchos de los integrantes del gabinete económico, el autor encuentra que:

En sus tiempos al frente del CFI, Calcagno había impulsado junto al IIEF-CGE, conducido entonces por Gelbard, el Programa Conjunto para el Desarrollo Agropecuario e Industrial (1962-1965), y había depositado la dirección de esa iniciativa en D'Adamo. Es decir que, hacia 1973, los vínculos entre quienes encararon las

negociaciones tercer gobierno peronista-CEPAL tenían al menos una década de existencia (2019, p. 7).

Las acciones de estos actores ponen una vez más en el centro las relaciones entre técnicos referentes en sus áreas de conocimiento, que al mismo tiempo desplegaban vínculos que involucraban afinidades políticas y trayectorias comunes. El modo más apropiado para abordarlo en este caso no sería pretender una división tajante entre las figuras que Neiburg y Plotkin (2004) presentan como el del intelectual políticamente comprometido y el del experto guiado por la racionalidad técnica. Antes bien, como plantea Coviello (2019), aparecen en el caso estudiado como figuras pasibles de “contaminación” recíproca. O, más aún, los estudiados son actores que poseen capacidades técnicas en el terreno económico pero al mismo tiempo exhiben destrezas políticas (Jung, 2018; E. Pereyra, 2012, 2017). Es así que las relaciones políticas de estos técnicos jugaron un papel relevante a partir de sus vinculaciones previas para definir la conformación del gabinete económico y consolidar un programa.

A su vez, la indagación respecto de los integrantes del gabinete refleja una configuración particular del vínculo entre las élites empresarias y el Estado durante la gestión de Gelbard. Donatello (2017) sostiene que la lógica de intermediación fue similar a la que primó en todo el período 1955-1973: “Esta lógica no desapareció en la experiencia peronista de 1973-1976, sino que, en cierta medida, orientó la trama encabezada por Gelbard hasta 1975” (p.110). No obstante, hemos desarrollado especificidades de la etapa que muestran que el acceso del líder de la CGE al ministerio les otorgó una dinámica particular a las relaciones en el período, en especial a partir de la estructuración formal de un programa tripartito que adquirió la forma de un pacto social. De este modo, destacamos la preeminencia de numerosas prácticas institucionalizadas que cristalizaron la relación corporaciones-Estado. Un análisis que excede nuestros objetivos podría abordar cómo, en la práctica, estos elementos se combinaban con otras formas de interacción, como la colonización estatal por la presencia en estas carteras de actores de la CGE o, incluso en un nivel de informalidad más alto, el *lobby* (Castellani, 2006). De todas formas, si uno considerara las posiciones particulares del ministro y algunos de sus colaboradores, los mayores éxitos personales en términos de negocios por ejercicio del *lobby* probablemente los obtuvieron antes de su ingreso a la gestión pública, en emprendimientos vinculados al

Estado durante los gobiernos de Levingston y Lanusse (Blejmar, 2019; Rougier, 2011; Seoane, 2018).

Abordamos entonces la experiencia del gabinete de Gelbard como una tentativa de enraizamiento en tanto canal de información y negociación institucionalizado entre el Estado y actores de la sociedad civil, construido alrededor de un pacto social. En el caso del gabinete económico, este canal se vio constituido por numerosas prácticas institucionalizadas -la firma del ACN, la Gran Paritaria, la conformación de la CEN con empresarios y sindicalistas en su seno, la conformación de la COPYME, entre otras-, y algunas informales -como la presencia de Julio Broner en reuniones de gabinete, o las consultas de Caraballo a expertos de organizaciones corporativas antes que a órganos del Estado-. La conformación de la cartera aparece como un elemento relevante, ya que estos canales priorizaron en particular a la CGE, no casualmente la organización de donde provenían los más importantes funcionarios del ministerio.

3.2. Entre el enraizamiento y el ataque. Los economistas justicialistas en el gabinete y la crítica de los excluidos.

El gabinete económico constituía entonces una rareza: era, esencialmente, un ministerio no peronista, en el marco del regreso de este espacio político al gobierno luego de dieciocho años de proscripción. Sin embargo, existieron algunas excepciones.

Alfredo Gómez Morales, Miguel Revestido y Antonio Cafiero se distinguían de los funcionarios hasta aquí mencionados por su importante trayectoria en el justicialismo. Si el grupo cercano a Gelbard tenía mayores vínculos con la CGE, el trío justicialista exhibía fluidos vínculos con el movimiento peronista, en particular con las ramas política y sindical. Los rasgos comunes de sus trayectorias eran múltiples: los tres eran contadores y doctores en Economía, habían sido ministros durante los primeros gobiernos peronistas⁷³, no habían participado en experiencias de gestión

⁷³ Luego de un meteórico ascenso en su carrera como empleado público, en enero de 1949 Gómez Morales fue nombrado presidente del Banco Central y simultáneamente secretario de Finanzas, cartera que se convertiría en Ministerio al poco tiempo. En 1952 fue designado al frente de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos, que a partir de 1954 tuvo más poder que los propios ministerios, como encargada de la coordinación de las carteras relacionadas con la economía. Ese año fue nombrado ministro de Finanzas Miguel Revestido, que también había ascendido velozmente en el Estado desde su ingreso como funcionario en 1944, por concurso, a la Dirección de Tierras y Bosques. En 1952, con 31 años, Cafiero fue designado ministro de Comercio Exterior. En su caso, a partir de su militancia universitaria, había ingresado a la función pública con el peronismo, cumpliendo tareas en la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Cancillería, y la Embajada argentina en Washington (Belini, 2014; D. Pereyra & González Bollo, 2020; Rougier & Stawski, 2014; Stawski, 2012).

estatal durante los dieciocho años de proscripción de su partido, y en 1972 se habían incorporado a la Comisión Asesora del Consejo de Planificación, una usina del pensamiento justicialista creada en 1970 bajo el liderazgo de Roberto Ares -otro integrante del gabinete durante el primer peronismo- y Leopoldo Frenkel, desde la cual habían participado en la formulación de la plataforma del FREJULI (Cafiero, 2011; Pardo & Frenkel, 2004; Rougier & Fiszbein, 2006).

Por otra parte, tanto Cafiero como Gómez Morales habían sido considerados en repetidas ocasiones como posibles incorporaciones para el gabinete nacional durante el gobierno de Lanusse (Denaday, 2020).

A pesar de que habitualmente son mencionados de manera conjunta como los peronistas incorporados al gabinete de Gelbard en puestos relevantes (Coviello, 2019) o “puestos de primer nivel” (Pardo & Frenkel, 2004, p. 156), discutiremos esa premisa. Al menos en principio, ocuparon cargos de diversa jerarquía: mientras que Gómez Morales y Revestido fueron nombrados en puestos de exposición pública, Cafiero, derrotado en las disputas internas del peronismo, iniciaba la gestión de gobierno en un cargo de dudosa relevancia.

Por otro lado, hubo numerosos técnicos e intelectuales económicos vinculados a espacios de la coalición oficialista -tanto peronistas como no peronistas- que fueron excluidos de cualquier puesto en el área económica. Entre ellos se encontraron discursos inscriptos en diversas tradiciones intelectuales, pero tuvieron como rasgo común la expresión de objeciones contra el programa impulsado por Gelbard.

3.2.1. *Técnicos, políticos y peronistas. Alfredo Gómez Morales y Miguel Revestido.*

La decisión de imponer a Gelbard como ministro se mantuvo a pesar del recelo que generaba en sectores diversos del peronismo. Tal posición aparece en las fuentes testimoniales vinculada a la desconfianza de Perón respecto de la capacidad técnica y la idoneidad política de los economistas justicialistas. Frenkel, por caso, le atribuye la frase: “Si nombramos a peronistas, muchos de ellos irán a preguntarle a Hirsch qué es lo que tenemos que hacer” (Pardo & Frenkel, 2004, p. 124)⁷⁴.

⁷⁴ Leyba (2010) y Caraballo (2007) ratifican el recelo de Perón respecto de los economistas peronistas en el período. La frase atribuida a Perón buscaba reflejar el peso del grupo Bunge y Born en la política argentina: Hirsch era la familia dueña del grupo, curiosamente, relacionada familiarmente con un integrante del otro sector del gabinete económico, Gustavo Caraballo (Caraballo, 2007).

A pesar de estas apreciaciones, el flamante ministro decidió designar a Gómez Morales en el Banco Central. Es por ello que Caraballo se refiere al economista como “un protegido de Gelbard, porque Perón no lo quería nombrar” (2007, p. 145). Leyba (2019) sostiene que “Gelbard lo quería nombrar para tener uno adentro, porque en todo el gabinete no había un solo peronista”. La motivación del ministro aparece entonces como eminentemente política: en un clima de fuerte disputa al interior del movimiento gobernante, por la que sufría ataques personales (cap.4), esperaba obtener cierto capital político con la presencia de estas figuras.

Según una carta transcrita por Seoane, Perón aceptó el nombramiento, elogiando la capacidad técnica del próximo presidente del Banco Central, pero advirtiéndolo al titular de la CGE: “Lo importante será, sin embargo, que una orientación general de la política a seguir sea también servida desde allí, para lo cual será preciso ponerlo perfectamente en la situación y que opere de acuerdo a lo establecido por ustedes” (2018, p. 255). Desde el entorno de Gelbard veían a Gómez Morales como un hombre de ideas liberales, que abogaba por la apertura de la economía y el descongelamiento de los precios (Caraballo, 2007; Leyba, 2010)⁷⁵.

A poco de asumir su cargo, Gómez Morales anunció modificaciones en la política crediticia, de acuerdo a los lineamientos del ACN, facilitando el acceso al crédito para las empresas nacionales (“Nuevas normas...”, 1973). El punto más importante era la modificación de la tasa de interés, a través de la aplicación de reducciones proporcionales según la importancia de los salarios en los costos de las empresas. Era un reclamo de larga data de la CGE, pero según Rougier y Fiszbein (2006, p.74), aunque la organización patronal exigía una reducción mayor, el nuevo presidente del Banco Central se opuso, iniciando un camino de rispideces entre esta entidad y la política de Gelbard⁷⁶.

Sin embargo, el desacuerdo principal se ubicó alrededor del tipo de cambio. El gabinete económico pretendía incorporar el *crawling peg*, la modificación en línea con el avance de la inflación para, de acuerdo a los términos del ACN, evitar la apreciación injustificada del peso:

⁷⁵ En su autobiografía, Cafiero comparte esta lectura sobre la figura de Gómez Morales, y asegura que eso les generó fuertes discusiones (Cafiero, 2011, p. 116).

⁷⁶ Apreciaciones similares sobre estas tensiones se encuentran en la prensa de la época (“¿Cambios en Economía?”, 1974).

Estaban todos los funcionarios sentados ahí, los sindicalistas, los empresarios. Nosotros queríamos establecer el *crawling peg* (...) [Gómez Morales] se puso como loco. Vos pensá que en ese momento nosotros teníamos cierto respeto personal. Nosotros éramos mucho más chicos y él era un prócer del pasado. Y bueno, nos impidió ponerlo. No había mucho tiempo, estábamos ahí, así que no lo pusimos. Teníamos el *crawling peg* y lo sacó. Y después, con Roberto Lowenstein, director de Política Monetaria, viajamos al FMI, en el mes de diciembre del 73, y volvimos con la decisión de devaluar, no porque el Fondo lo hubiera dicho, sino por una discusión de la información. Y desde entonces y hasta que renuncia Gómez Morales, nuestra lucha fue por devaluar. Nosotros queríamos devaluar y él no nos dejaba. (Leyba, 2019)

Los efectos más drásticos de mantener un tipo de cambio fijo se produjeron a partir de finales de 1973, cuando, producto del repunte de la inflación, comenzó la apreciación de la moneda nacional, en un contexto en el que ya había comenzado la crisis del petróleo. En el segundo trimestre de 1974, los términos de intercambio del comercio exterior alcanzaron su punto más bajo del período, la balanza comercial empeoraba de manera progresiva por la sobrevaluación del peso y los requerimientos de importaciones de la industria, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el clandestino aumentaba, y el Banco Central comenzaba a perder reservas de manera sostenida. Aun ante el empeoramiento de estas variables, a finales de julio Gómez Morales afirmaba que “no existe la menor posibilidad de que haya una devaluación” (“¿Cambios en Economía?”, 1974, p. 12). De manera sistemática sostenía que la devaluación no era una herramienta útil (Rougier & Fiszbein, 2006, p. 89).

En un momento de dificultades para el Banco Central y en un contexto de desacuerdo con el gabinete económico, no solo por las decisiones monetarias sino también alrededor de la conveniencia de la emisión de nuevos bonos (Leyba, 2010), Gómez Morales se retiró del Banco Central en septiembre de 1974. Sin embargo, pocas semanas más tarde se convertiría en el relevo de Gelbard en el ministerio de Economía, gestión en la cual sí produciría una devaluación de la moneda.

Miguel Revestido, otro exministro del primer peronismo, fue designado en junio de 1973 al frente de la Subsecretaría de Comercio, que, mediante la nueva legislación, poco tiempo después se convirtió en secretaría. La posición era la de mayor exposición que alcanzaría un funcionario peronista en el gabinete económico de este período, especialmente por tratarse del responsable de controlar los precios y el abastecimiento

en el marco del Pacto Social. El diario *La Nación* reseñaba que la primera dificultad que encontraba en ese cargo era “la carencia de la infraestructura necesaria para encarar una tarea como la encomendada”, y el primer objetivo definido por esa repartición fue la eliminación de la intermediación innecesaria en los circuitos comerciales (“Fue firmado el acuerdo social”, 1973, p. 1).

Revestido aprovechó rápidamente su pertenencia al justicialismo para involucrar en sus tareas a los sindicatos: el control de precios y abastecimiento fue un rubro en el que se evidenció, al menos al principio de la gestión, una forma activa de coordinación entre el Ministerio de Economía y la CGT, consolidando formas de enraizamiento. El 9 de junio, el subsecretario anunciaba: “actuará en el control de precios el pueblo organizado a través de la CGT, de sus sindicatos, de sus organizaciones políticas” (“Se congelaron precios...”, 1973, p. 1).

Agrupaciones ligadas a Montoneros se sumaron a estas actividades de control (cap. 4). Sin embargo, el subsecretario decidía respaldarse en el movimiento obrero organizado, destacando que “en la CGT se había dispuesto que en cada sindicato y en cada una de sus unidades hubiese sectores que reciban denuncias de los trabajadores” (“Se congelaron precios...”, 1973, p. 1). En la disputa intraperonista, el gabinete económico parecía inclinarse por trabajar más cerca de los sectores sindicales, ya que eran los actores legitimados por el pacto tripartito. Pocos días más tarde, se reafirmaba esta postura con el anuncio de la participación de la CGT en los operativos de control de precios y abastecimiento en los mercados de carne (“Colaborará la CGT...”, 1973).

Junio fue el mes más exitoso para el equipo de Revestido, ya que, producto de la definición de precios máximos -incluyendo la obligatoriedad de retrotraerlos en determinados rubros-, la inflación resultó negativa. Sin embargo, a finales de 1973, y, en particular, entrado el año 1974, se convirtió en el área más conflictiva del gabinete, ante un escenario de aumento de precios, desabastecimiento de diversos productos, y la proliferación de variados mercados paralelos ilegales que buscaban eludir los precios máximos. Todo ello en un contexto de apreciación cambiaria, alteración de los precios relativos de la economía, e “inflación importada” producto de la crisis del petróleo y el aumento de precio de los hidrocarburos. Además, Revestido asumió también la intervención de la Junta Nacional de Carnes (“Cuentagotas”, 1973a), en una situación en la que las restricciones de la CEE dificultaban su exportación.

Rougier y Fiszbein (2006, pp. 83–84) señalan a su vez ciertas discordancias entre las posturas del entorno de Gelbard y la secretaría conducida por Revestido: mientras el ministro proponía ajustes graduales de precios, se encontraba con cierta inflexibilidad en el secretario. Lavagna, por otro lado, recuerda la incomodidad que sentían desde la Secretaría de Comercio por lo que consideraban incongruencias entre la política de precios y una laxitud en la política fiscal y monetaria, que se expresaba en cierta generosidad del ministro con sectores empresarios: “era una época donde cada sector pasaba a verlo a Gelbard y sacaba un crédito” (Lavagna, 2005).

La articulación para el control de precios con sectores con los cuales Revestido compartía militancia en el justicialismo y la postura divergente con respecto a Gelbard en materia de aumentos de precios muestran a un experto con posturas definidas respecto de un tema técnico específico, pero que al mismo tiempo sabía desempeñarse políticamente con actores que no necesariamente compartían el terreno de la técnica como espacio de disputa. La situación conflictiva se resolvería con la salida de Revestido del área de Comercio en julio de 1974, luego de la muerte de Perón. Lavagna, que corrió la misma suerte, afirma que el hecho ocurrió a partir de la presentación de sus renuncias: “cuando fallece Perón, yo le dije a Revestido –me había convertido en su principal colaborador- que yo me iba, que si la política era inviable antes, era dos veces inviable con la pérdida del poder político” (Lavagna, 2005). Ambos fueron reubicados dentro del ministerio, como secretario y subsecretario de Obras Públicas, un área menos urgida de soluciones inmediatas. Sin embargo, el secretario de Comercio que llegaba para relevarlos era otro funcionario de larga trayectoria en el justicialismo.

3.2.2 *El peso del nombre o el peso del cargo. Antonio Cafiero.*

Antonio Cafiero tenía un pasado en común con Gómez Morales y Revestido, tanto por su rol como funcionario en la primera década de gobierno peronista, como por su exclusión del Estado durante la proscripción⁷⁷. Sin embargo, durante esos dieciocho años, había tenido mayor participación en los intentos de rearmados partidarios, siempre cercano a los sectores sindicales: durante la década del sesenta

⁷⁷ En sus memorias, Cafiero refiere que durante una parte importante de este período estuvo impedido de ejercer su profesión tanto en el ámbito público como el privado, por la persecución contra figuras del peronismo. Incluso debió trabajar en rubros nada relacionados con el tema, como, por ejemplo, conduciendo un *remisse* (Cafiero, 2011).

había sido secretario técnico del Consejo Coordinador del Movimiento Justicialista, propuesto por Vandor (Cafiero, 2011, p. 260).

El vínculo con el sindicalismo se había afianzado en los inicios de la década del setenta, cuando el liderazgo de José Rucci reemplazó al fallecido Vandor: “[Rucci] me convirtió en su asesor directo y fuimos amigos. Muchas de las solicitadas y comunicados que sacaba en aquel momento la CGT fueron redactadas por mí a pedido de Rucci” (Cafiero, 2011, p. 37). Incluso, Cafiero recuerda el pedido del dirigente sindical para acercarse al equipo de Gelbard: “Cuando se comenzó a elaborar el pacto social con la CGT, Rucci me designó para actuar como una suerte de bisagra entre la organización gremial y los sectores que Gelbard representaba. Yo trabajé activamente en esa tarea” (2011, p. 279).

Abal Medina confirma la relación al señalar que, de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 1973, los sectores sindicales tenían un candidato presidencial alternativo para el peronismo: “El sindicalismo quería que fuera candidato Antonio Cafiero. Fundamentalmente el sindicalismo de la UOM, Rucci y Lorenzo” (Abal Medina, 2005). A pesar de llegar con estos apoyos, no solo no fue candidato, sino que no fue tenido en cuenta para el gabinete. Los testimonios apuntan a que la causa fue un supuesto acercamiento a Lanusse⁷⁸.

De un modo similar al caso de Gómez Morales, la llegada de Cafiero al área de Gelbard podría ser leída como un intento de aportar cierto peronismo a su gabinete, de cara a las fuertes disputas políticas del período. Sin embargo, el cargo de presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro era muy inferior al otorgado a los otros dos dirigentes del peronismo. Leyba (2019) recuerda que, si bien en el organigrama del ministerio Cafiero estaba bajo sus órdenes, ni siquiera dependía directamente de él,

⁷⁸ Cafiero había sido mencionado junto a Gómez Morales como candidato a incorporarse al gabinete de Lanusse (Denaday, 2020). Sin embargo, de acuerdo a los testimonios de Abal Medina, Cafiero, Caraballo, y la correspondencia entre Cafiero y Perón (Cafiero, 1973, se agradece a Sergio Friedemann por el acceso a estos documentos obtenidos en una estancia en el Archivo Hoover), el motivo de su caída en desgracia dentro del peronismo, y especialmente frente a Perón, fue una reunión: desobedeciendo órdenes directas del líder exiliado, en las que le había indicado no reunirse con militares, en diciembre de 1972 Cafiero se dirigió a una reunión secreta en la residencia presidencial, convocada por Lanusse. El 23, *Crónica* publicó un memorándum reservado del Ejército, en el cual se afirmaba que Lanusse había dado cuenta a varios generales de dicha reunión, y había asegurado que Cafiero había vertido conceptos ofensivos hacia Perón y otros dirigentes del justicialismo (Cafiero, 2011; Abal Medina, 2005; Caraballo, 2007). Las desmentidas de Cafiero sobre los contenidos de la reunión se publicaron en *Crónica y Mayoría* (“Iñíguez y Cafiero aclaran...”, 1972; “Un ‘memorándum reservado’...”, 1973).

sino del director de Política Monetaria, Roberto Lowenstein, cuyo jefe sí era Leyba. El testimonio del propio Cafiero da cuenta de su reacción después de conocer el gabinete ministerial:

Pensé que estaba lisa y llanamente ‘tachado’ para ser nombrado en un cargo relevante en el nuevo Gobierno, me sentí poco menos que en ‘disponibilidad’. Así estaba cuando José Gelbard, entonces ministro de economía, me llamó para ofrecerme la presidencia de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (...)

En un principio quise rechazar la oferta de Gelbard: le comenté que ello significaba aceptar mi decadencia política. En pocos meses había pasado de precandidato a la presidencia de la nación a titular de una institución bancaria que jugaba en la “C”. (Cafiero, 2011, p. 290)

Tanto el hecho de que entre el puesto de Cafiero y el ministro existieran jerárquicamente tres jefes intermedios en el organigrama, como la definición de la organización que iba a presidir como una institución de tercera categoría, nos indican que el lugar que le era asignado no era de una relevancia similar al de los otros dos justicialistas del ministerio. En este caso, contra los relatos que mencionan a tres peronistas en el gabinete con puestos importantes, sostenemos que, al menos en el inicio de la gestión, en verdad fueron dos: en el caso de Cafiero, el peso de su trayectoria y su vínculo con el sindicalismo le daban más relevancia política a su persona que el cargo que ocupaba. La situación quedó graficada cuando fue el propio presidente C ampora quien lo invit o a la Casa Rosada para ofrecerle formalmente un puesto de escasa relevancia nacional (“Cafiero presidir ...”, 1973).

No obstante, Leyba se ala que, en un principio, Cafiero fue el peronista que mejor relaci on entabl o con el equipo de Gelbard, al punto de que, en ocasiones, el ministro le dio la tarea de corregir sus discursos junto a su equipo de confianza (Leyba, 2019).

Cuando se produjo la salida de Revestido de la Secretar a de Comercio, Cafiero fue nombrado en su lugar. La idea de reemplazar en ese organismo a un hombre cercano al sindicalismo por otro con v nculos a n m s fuertes con esos sectores ten a una l gica dentro del pacto tripartito: el mayor inter s de los trabajadores en el programa era que los precios no se dispararan, para preservar su poder adquisitivo. De otro modo, comenzar an los reclamos salariales y el ciclo de puja distributiva. A partir

de esa lectura, era importante mantener a la Secretaría de Comercio como el espacio privilegiado dentro del Ministerio de Economía para buscar el enraizamiento entre el Estado y la organización sindical.

No obstante, la gestión de Cafiero fue muy breve. Rougier y Fiszbein (2006) afirman que la fugacidad se debió a la propuesta del flamante secretario de transformar su organismo en un nuevo Ministerio de Comercio e Industria, lo que hubiera significado un recorte de poder para Gelbard. Cafiero, en cambio, testimonia que, ante un cargo que implicaba una serie de problemas importantes -reglamentaciones contradictorias, la proliferación de mercados ilegales que evadían los precios máximos, reclamos empresarios por falta de rentabilidad, y un “sistema de congelamiento de precios que no daba para más” (Cafiero, 2011, p. 294)- aceptó un nuevo cargo en el interior del país.

En cualquier caso, veintidós días después de llegar a la Secretaría de Comercio, Cafiero asumió como interventor federal de la provincia de Mendoza, donde había sido desplazado Alberto Martínez Baca, gobernador cercano a la Tendencia (Servetto, 2011). No se trataba de la última experiencia de Cafiero en el área económica, ya que en agosto de 1975 sería designado ministro por la presidenta Martínez, en una gestión que duraría tan solo cinco meses.

Enfrentado con los otros peronistas de su gabinete, Gelbard tardó en encontrar un reemplazo, por lo que, durante dos semanas de agosto de 1974, Cafiero retuvo el cargo en simultáneo con su función de interventor en una provincia ubicada a mil kilómetros de la sede del ministerio. Recién a finales de ese mes, el ministro decidió que el secretario de Desarrollo Industrial, Paenza, asumiera sus tareas (“Paenza reemplazará a Cafiero”, 1974). El paso de Cafiero por el gabinete de Gelbard había sido el menos relevante entre los personajes justicialistas.

3.2.3 Afuera del gabinete, ¿adentro del gobierno? La crítica al Pacto Social.

Producto de las transformaciones que se habían producido en el seno del peronismo y de los diálogos entre tradiciones diversas durante las décadas previas, en la década del setenta emergían economistas peronistas que, alejados de las concepciones teóricas de figuras como la de Gómez Morales, proponían análisis desde paradigmas marxistas. Dicha tensión entre saberes y discursos económicos planteaba una posible disputa teórico-política al interior del movimiento que llegaba al gobierno.

José Sbarra Mitre fue un referente económico del discurso teórico marxista dentro del peronismo. De hecho, cuando Montoneros les presentó a Cámpora y Perón listados con eventuales “ternas” para ocupar el gabinete, figuraba como posible ministro de Economía. Casi simultáneamente, Sbarra Mitre presentó en *Envido* un análisis de la situación argentina: señalaba que entre 1950 y 1969 los salarios reales se habían incrementado en un 31,4%, pero la participación de los trabajadores en el PBI había caído un 13,1%. Esto demostraba que “el solo incremento del salario real no presupone, necesariamente, la mejora de la situación de los asalariados en términos relativos a los dueños de los otros factores de la producción”. Además, en el trienio 1970 - 1972, también habían empeorado los salarios reales (1973, pp. 27–28). Para el economista, la solución para que mejorara la posición de los trabajadores, tanto en términos reales como relativos no pasaba por “pequeñas élites culturalizadas”, sino que consistía en dos términos: la “edificación del socialismo” y la construcción “del poder popular organizado” (1973, p. 31).

Sin embargo, Sbarra Mitre fue excluido del gabinete. En un camino similar al que recorrieron varios nombres que figuraban en las “ternas montoneras”, le fue asignado un cargo en la rebautizada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires como decano de la Facultad de Ciencias Económicas (Friedemann, 2021b).

Desde ese lugar, moderaba su posición en tanto adherente de la coalición de gobierno: el eje de su discurso ahora estaba dado por un etapismo en el “camino de liberación”, para el cual era central “tener presente la correlación de fuerzas existentes”. Además, para el decano, resultaba “indispensable en cada una de las etapas del proceso visualizar en términos adecuados al enemigo principal y desarrollar en términos también adecuados la contradicción principal”. En un discurso de claro corte movimientista (cap.4), el enemigo principal era “el imperialismo yanqui y las clases sociales aliadas”, entre las que identificaba fundamentalmente a la “oligarquía” y la “alta burguesía ligada al imperialismo” (“Diálogo con el Dr. Sbarra Mitre...”, 1973).

Este último discurso era mucho más afín al programa de gobierno desplegado por Perón y Gelbard que las palabras vertidas en marzo. El acercamiento conceptual se complementaba con un movimiento político: cuando el enfrentamiento entre Montoneros y Perón se acentuó, el decano de Económicas decidió plegarse a la Juventud Peronista Lealtad (Friedemann, 2018), espacio que tomó partido por el fundador del peronismo y la defensa de la gestión gubernamental (Garrido, 2020).

También a mediados de 1974, en una línea diferente, emergía la voz de Jorge Todesca, referente de Montoneros de Capital Federal, con denuncias contra el desabastecimiento como una maniobra política de los mismos actores a los que Sbarra identificaba como enemigos: “Cuando la oligarquía y el imperialismo actúan en contra de la nación hay un conjunto de actores que son afectados, aunque indudablemente la clase trabajadora es la que recibe el mayor impacto” (“El golpe...”, 1974, p. 15). La propuesta del referente montonero era “la formación de organismos populares que controlen precios, combatan el mercado negro, denuncien el acaparamiento, y vayan así teniendo una activa participación en la defensa y profundización del proceso de liberación” (“El golpe...”, 1974, p. 15).

Oscar Braun era otro reconocido economista que recogía en sus formulaciones teóricas elementos del marxismo y de la escuela nekeynesiana⁷⁹, con una importante trayectoria militante en el peronismo, iniciándose en el PB y las FAP⁸⁰. En noviembre de 1973 ofreció una conferencia en la que delineaba un análisis crítico del Pacto Social: caracterizaba a las gestiones de Cámpora y Perón como un gobierno popular en el que las clases hegemónicas en lo económico -el “capital monopolista dependiente”- mantenían el dominio en el nivel de la estructura pero habían perdido el control del aparato político del Estado. La “burguesía monopolista nacional”, un grupo económicamente débil, se ubicaba en el gobierno con fuerza política, en alianza con la clase obrera, de la que se esperaba “un apoyo pasivo” (Braun, 2009, p. 35).

En el desarrollo conceptual encontramos postulados similares a los de Montoneros en la etapa en que se iba erigiendo como una organización crítica del Pacto Social (cap.4). Braun señalaba que no era central el horizonte subjetivo de Gelbard – aunque aclaraba que, seguramente, buscaba negociar la posición de su clase ante el imperialismo-, sino las contradicciones “objetivas del programa”:

- No se podía extraer demasiado excedente del capital monopolista dependiente, porque éste, aliado al imperialismo, poseía el dominio de los resortes de la economía desde afuera, por caso, las patentes necesarias para todos los procesos productivos.

⁷⁹ Oscar Braun había cursado estudios de posgrado en Oxford, donde inició una carrera académica que se destacó por sus contribuciones teórico-conceptuales alrededor del intercambio desigual, la problemática de la renta de la tierra, la polémica conocida como “debate de las dos Cambridge” sobre el capital, y la modelización -junto a Leonard Joy- del funcionamiento de la economía argentina durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones (Azpiazu y Schorr, 2009). Luego del golpe de Estado de 1976 marchó al exilio, donde se incorporó a las filas de Montoneros.

⁸⁰ Peronismo de Base y Fuerzas Armadas Peronistas.

- La “burguesía terrateniente” mantenía su poder en términos de influencia en la balanza de pagos, y en el salario real como productora de bienes-salario.

- La contradicción al interior de la alianza gobernante entre burguesía y trabajadores limitaba los recursos de ambos. A la burguesía representada por Gelbard no le convenía debilitar políticamente a su aliado porque se podían repetir los hechos de 1955. A su vez, los recursos destinados a los sectores obreros representaban menos acumulación de capital. (Braun, 2009)

Si la crítica era muy dura en términos de horizonte, no lo era tanto en la coyuntura. Braun distinguía dos momentos: en el largo plazo había dos opciones, el capital monopolista dependiente o el socialismo, y, en ese sentido, “Gelbard va a hacer lo mismo que Krieger”, pero en lo inmediato la diferencia era notable y “la política pasa en buena medida por la coyuntura económica” (2009, pp. 44–45).

Braun presentaba entonces una propuesta: a las medidas técnicas había que acompañarlas de movilización política –“mandar unos muchachos de la JP a que arriaran unas cuantas vacas y las traigan a Liniers, expropiar uno que otro campo” (2009, p.43)-.

Pero quizás su crítica más ácida era a los desarrollistas: los “grandes comisionistas del capital extranjero” (2009, p.37). El MID había formado parte del FREJULI desde las elecciones de 1973, sin embargo, desde la asunción de Gelbard como ministro, el grupo liderado por Rogelio Frigerio había sido un furibundo detractor del programa económico.

La rivalidad entre los grupos de Frigerio y Gelbard era de larga data: en términos teóricos desaprobaban mutuamente sus proyectos económicos. Martín Sivak desarrolla los duros ataques que el diario *Clarín*, vinculado al desarrollismo, desplegaba contra la política de Gelbard, y califica a la disputa entre estas figuras como un enfrentamiento “personal y político” (Sivak, 2013).

Algunos años más tarde, Frigerio explicaría los motivos centrales de su disidencia política, curiosamente en términos similares a las críticas vertidas por la ortodoxia económica:

El señor Gelbard era populista, porque congeló los precios y enrareció el clima económico con precios y tarifas políticas, pero también inicialmente congeló los salarios, ya, que en el fondo eso era "el pacto social". (...) Lo que no se paga como costo

del combustible, del transporte, de la electricidad, del acero o de los teléfonos, se paga con la emisión sin respaldo, que es el impuesto aplicado a toda la comunidad y especialmente a los trabajadores, o con una presión tributaria desmedida y arbitraria que cierra las posibilidades de inversión (Díaz & Frigerio, 1977, p. 91)

Encontramos entonces que la coalición político social oficialista también tenía fuera del gabinete expertos e intelectuales económicos que combinaban saberes técnicos y destrezas políticas. En muchos casos, se inscribían en tradiciones teóricas distintas a las de los funcionarios del ministerio. En otros, se trataba de desarrollistas que habían compartido determinados espacios durante el gobierno de Frondizi con integrantes de segunda línea del gabinete de Gelbard. Lejos de resultar una discusión apagada, la disputa de saberes al interior del heterogéneo espacio que se denominaba FREJULI, se constituía en una disputa de tipo político que exhibía objeciones, de diversos tenores y orientaciones, al programa económico del tercer gobierno peronista.

Capítulo IV: *Conflictos en la coalición oficialista.*

Montoneros ante el Pacto Social: de la aceptación al rechazo de los términos de intercambio político.

*¡Hay que dar vuelta el tiempo como la taba,
el que no cambia todo, no cambia nada!*

“Triunfo agrario” Armando Tejada Gómez y Alfredo Zitarrosa

El transcurso del programa económico y social impulsado por Gelbard estuvo signado por las disputas políticas desatadas al interior del espacio gobernante. La más aguda de ellas involucró a Montoneros frente a la conducción del peronismo y los sectores sindicales del movimiento; y el Pacto Social fue un elemento importante en este enfrentamiento ya que condicionó de manera recurrente las posiciones de Montoneros respecto de la gestión de gobierno y la conducción del justicialismo. A su vez, el accionar de esta organización afectó el devenir del programa: en su faceta más evidente, por el homicidio de uno de los firmantes del ACN.

El análisis de los desplazamientos que Montoneros mostró respecto del plan impulsado por Gelbard forma parte también de una reflexión acerca de cómo los pactos sociales atañen a actores que no son formalmente parte de los mismos, pero que se ven afectados por ellos. Sostenemos que, mientras el intercambio político articule un acuerdo de este tipo, no solo condiciona a quienes lo firman, sino a todos aquellos que se manifiesten respecto a un compromiso refrendado por otros, que tiende a regular variables que condicionan a todo el cuerpo social. Esta exterioridad formal no evita pues que el proceso tenga impacto en estos actores, cuyos discursos y rasgos identitarios iniciales también pueden verse confirmados, negados, o modificados. Es probable que en las posturas que la organización expresaba respecto del programa económico se puedan identificar transformaciones ideológicas e identitarias. Esta reflexión también permite ahondar una vez más en el vínculo entre la esfera económica y la político-social, ya que la eventual defección de un actor importante de la coalición gobernante no dejó indemne al programa del tercer gobierno peronista.

En este capítulo recurrimos a una estructura triádica cronológicamente ordenada. De acuerdo al análisis de las fuentes, sus posicionamientos con respecto al Pacto Social pueden dividirse analíticamente en tres etapas, cada una de ellas más confrontativa que la anterior. Esta separación es una herramienta analítica por lo que debe tenerse en

cuenta que los límites entre ellas no constituyen necesariamente quiebres abruptos, sino que son hitos que podemos señalar en el tránsito que la organización recorrió desde un apoyo ambiguo hasta la confrontación abierta. Estos hitos que nos sirven para separar etapas en una relación que se deterioraba progresivamente son dos: la primera crítica abierta al Pacto Social en un discurso pronunciado por Firmenich en agosto de 1973, y el llamamiento definitivo al boicot contra el programa efectuado en febrero siguiente. El hecho que marca el final de nuestro análisis es el segundo pase a la clandestinidad de la organización, en septiembre de 1974, explícitamente enfocado en enfrentar al gobierno y su programa económico.

4.1. *Cámpora al gobierno. Un apoyo ambiguo al Pacto Social*

4.1.1. *Los primeros meses son de aceptación. Hacia la moderación montonera*

La asunción de Cámpora y el delineamiento del Pacto Social implicaban una verdadera encrucijada para la organización que había nacido al calor de las acciones guerrilleras. Entre 1972 y 1973, Montoneros ya se había constituido como el actor más importante de la Tendencia⁸¹, pero la forma de inserción de las organizaciones armadas peronistas en este heterogéneo movimiento político era una discusión que estaba lejos de saldarse. La bibliografía tiende a identificar, al menos, dos maneras en las que se relacionaron con el espacio político surgido en 1945: el movimientismo o la búsqueda de una alternativa independiente (Gillespie, 2011; González Canosa, 2018; Lanusse, 2005; Svampa, 2003). A riesgo de simplificar, podemos decir que el primero implicaba interpretar al peronismo como un movimiento revolucionario, y, por lo tanto, dirigido por un conductor también revolucionario. En este esquema, el rol de estas organizaciones sería encargarse de la lucha armada bajo el liderazgo de Perón. Por otro lado, los alternativistas proponían mantener al peronismo como una identidad con gran potencial por su carácter popular, pero no aceptaban convivir con la dirigencia sindical mayoritaria, que no tenía una perspectiva de conflicto clasista. Esta postura veía en Perón a un líder burgués y proponía construir una herramienta política propia.

⁸¹ Cuando hablemos de la Tendencia estaremos haciendo referencia a elementos en los que los integrantes de esta corriente coincidían, como la denuncia de muchos sindicalistas como “burócratas”. Sobre la relación de Montoneros con la Tendencia se recomienda un dossier de reciente edición (González Canosa & Tocho, 2021).

Lanusse (2005) presenta, además, un tercer camino, equidistante de los dos anteriores: el tendencismo. Éste consistía en reconocer la potencialidad revolucionaria del peronismo, buscar dar una lucha a su interior a través de la creación de una tendencia revolucionaria en su seno, manteniendo, mientras fuera conveniente, una cohabitación táctica con la dirigencia sindical que era definida, por lo menos, como no revolucionaria. Esta tríada –alternativismo, movimientismo y tendencismo- podía presentar matices entre las posturas.

Perón buscó entonces mantener a Montoneros dentro de una estrategia movimientista, al reconocerlos en 1971 como parte de sus “formaciones especiales”. Sin embargo, la organización se destacaría como un actor fundamental del escenario político no solo por la resonancia de sus actividades armadas, sino también por sus articulaciones políticas: a partir de 1972 comenzó a crecer y diversificó su ámbito de acción. A través de agrupaciones públicas llamadas “de superficie” o “frentes de masas”⁸², se convirtió en uno de los espacios con mayor capacidad de movilización dentro del peronismo, como pudo demostrar en la campaña electoral de los primeros meses de 1973 (Bartoletti, 2010; Gillespie, 2011).

El pacto social de visos corporativistas implicaba entonces un desafío para la pujante organización, que ya había integrado a sus filas a Descamisados en 1972, y para inicios de 1973 ya trabajaba en conjunto con las FAR⁸³, transitando un proceso que se coronaría con la fusión anunciada en octubre de ese año. Mientras Montoneros abogaba por la “patria socialista” y la conciliaba con el discurso de Perón que marcaba como norte un “socialismo nacional”, los términos de intercambio político del pacto forjado en junio del 73 parecían tener como objetivo congelar o, al menos, matizar los conflictos de clase. La encrucijada que se presentaba radicaba en las formas de legitimación. En tanto el programa incluía una validación explícita del rol de la CGT y de la CGE, la organización liderada por Mario Firmenich debía definir su postura sobre el programa económico, político y social del gobierno que había impulsado en

⁸² Entre ellas podemos destacar a la Juventud Peronista Regionales, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y, más tarde, la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) en el área sindical, la Agrupación Evita, la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), el Movimiento Villero Peronista y el Movimiento de Inquilinos Peronistas, entre otros (Confino, 2021, p. 20). Cuando nos referimos a las posiciones de Montoneros, hablamos entonces de este gran espacio heterogéneo, teniendo en cuenta que las críticas al Pacto Social cruzaron distintos ámbitos de este colectivo.

⁸³ Así lo dejan ver las repetidas declaraciones de sus líderes en el período que abordaremos en el capítulo, y lo ratifica el testimonio de Mercedes Depino, militante de FAR y Montoneros (comunicación personal, 2016).

la campaña electoral. En su calidad de espacio integrante de la coalición de gobierno -tanto en términos políticos como de gestión, ya que tenía funcionarios en diversas áreas del Poder Ejecutivo Nacional, en algunas gobernaciones, y en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional-, el pacto sí le imponía límites políticos, al menos temporarios, al campo de reivindicaciones posibles a impulsar por la organización: por caso, las pautas de aumentos salariales moderadas por dos años significaban un límite a las aspiraciones redistributivas.

En los albores del gobierno, Montoneros estuvo lejos de plantear una postura fuertemente clasista que imposibilitara apoyar un programa diseñado por los empresarios. Por el contrario, decidió acatar el liderazgo de Perón, el plan de Gelbard, y los términos de intercambio político que éste implicaba. En ese sentido, evitamos un abordaje que encuentre un disparador inicial en las críticas de Firmenich de agosto de 1973 (Lissandrello, 2012; Pacheco, 2014); como tampoco adscribiremos al análisis que Gillespie propone sobre un sostén de Montoneros al Pacto Social “sin ninguna crítica al principio” (2011, p. 224), ya que, incluso en una posición de apoyo general al programa, la organización siempre manifestó críticas puntuales a ciertas medidas y funcionarios del gabinete económico.

El diagnóstico de Montoneros sobre la situación heredada era negativo. Es cierto que la mayor parte de las críticas al gobierno de facto de Lanusse no se concentraban en el plano económico: la represión y los asesinatos a militantes políticos, la proscripción del peronismo, y la posibilidad del retorno de Perón aparecían como los elementos centrales de sus discursos en los días previos al 25 de mayo de 1973. En los primeros números de *El Descamisado*, las referencias a fenómenos económicos se hacían mayormente a partir de categorías políticas o sociológicas: se acusaba al gobierno de favorecer al “imperialismo” y al “antipueblo” en desmedro de los intereses populares, así como el saqueo de empresas imperialistas.

Sin embargo, en el número cero, el órgano de prensa montonero hacía un diagnóstico de lo que consideraba el principal flagelo de la economía doméstica⁸⁴. Bajo el título catástrofe “Terrorismo económico: El costo de la vida” se denunciaba una

⁸⁴ A excepción de algunos editoriales que aparecían con el nombre del responsable político de la publicación, todas las notas de *El Descamisado* eran publicadas sin firma. No obstante, según su codirector, Ricardo Grassi (2015), Juan José Yaya Ascone, un militante proveniente de Descamisados que también era periodista profesional, estaba a cargo de las notas de economía.

disparada inflacionaria que había alcanzado el 4,5% en el mes de abril, acumulando un 27,7% en los primeros cuatro meses del año, y un 75,9% medida interanualmente.

El artículo se centraba en los precios de artículos de consumo popular, y criticaba el incumplimiento de los precios oficiales:

Si algo gracioso puede encontrarse en esta verdadera *expropiación del valor adquisitivo de los salarios* son las promesas oficiales acerca de que en este año la inflación se reduciría a la mitad del ritmo que tuvo en 1972.

Como es obvio la inflación no se redujo sino que, por el contrario, intensificó su velocidad al tiempo que los salarios se mantenían prácticamente congelados. (“El costo de la vida. Terrorismo económico”, 1973, p. 10)⁸⁵

Dos elementos se destacan para el análisis. Por un lado, la denominación de la escalada inflacionaria como una “expropiación” refleja una etapa en la que la organización ve al Estado como enemigo, todavía colonizado por las Fuerzas Armadas. No hay menciones en la nota a las empresas o comercios privados que se beneficiarían de estos aumentos de precios por fuera de las regulaciones.

El segundo elemento es la preocupación central por la inflación en la única nota sobre economía que presenta la revista en sus primeros números. No hay llamados a la socialización del capital industrial, ni pedidos por una urgente reforma agraria; sino que se limita a enfocar como objetivos prioritarios el control de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo. Ambos elementos estaban en línea con los puntos centrales que en 1972 habían presentado como proyecto conjunto la CGE y la CGT, y, por lo tanto, con lo que podía esperarse que presentara Gelbard como programa. En ese sentido, compartimos las lecturas que tienden a marcar una confluencia de programas entre Montoneros y la CGE en el período (Sanz Cerbino & Lissandrello, 2018), aunque, como desarrollaremos, resulta necesario presentar una serie de matices al respecto.

La moderación montonera puede ser leída como un apoyo al Pacto Social, y era reafirmada en ese número por la defensa de la decisión de Perón de desplazar a Rodolfo Galimberti⁸⁶ como representante de la juventud, luego de que éste convocara a la

⁸⁵ Las itálicas son nuestras.

⁸⁶ Galimberti había sido el líder de la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, de muy buenos vínculos con Montoneros, organización a la que ingresó en algún momento entre 1972 y principios de 1973 (Gillespie, 2011; Friedemann, 2021b).

formación de milicias populares. La revista presentaba incluso una “autocrítica” de la JP, que apuntaba centralmente al desplazado: “Se *tendenció* y dejó de expresar al conjunto del movimiento, precisamente cuando Perón le otorgó una holgada confianza como vanguardia, no de la Juventud Peronista, sino de toda la juventud argentina” (“La renuncia de Galimberti...”, 1973, p. 12)⁸⁷.

Estas posiciones movimientistas expresaban a su vez un acatamiento a las decisiones de Perón, que había definido, junto a Cámpora, que Gelbard ocupara la cartera económica (Abal Medina, 2005; Bartoletti, 2010; Rougier & Fiszbein, 2006). El empresario no era una figura particularmente apreciada dentro de la Tendencia, tanto por sus prósperos negocios durante los años de proscripción como porque nunca se había identificado de manera inequívoca con el peronismo; pero, en esta primera etapa, cualquier tensión al respecto parecía apaciguada por la moderación montonera.

4.1.2. La tolerancia defensiva. Custodios de los términos de intercambio político del Pacto Social.

El mismo día en que se anunció el ACN, Firmenich, por Montoneros, y Roberto Quieto, entonces máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dieron una conferencia de prensa conjunta. Celebraban la asunción del nuevo gobierno y sus primeras medidas: la liberación de los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo del Estado y la baja de numerosos oficiales de alto rango comprometidos con la dictadura que se había retirado. Sin embargo, el diario *La Nación* destacaba que:

La declaración no incluye alusiones a las medidas económicas del nuevo gobierno y solo dice dentro de este orden que ‘ahora es necesario que este proceso de cambios se generalice a todas las áreas, especialmente al campo económico, para satisfacer las urgentes necesidades de las clases populares y se concreten medidas contra los enemigos de la Patria, en primer término las grandes empresas monopólicas’. (“ERP, Far y Montoneros”, 1973, p. 16)

La primera declaración de los líderes de FAR y Montoneros no contenía un apoyo explícito al programa, pero tampoco una impugnación a los términos de

⁸⁷ Resulta llamativo que en este caso se utilice despectivamente la idea de “tendencia”, cuando más adelante la organización nominará de ese modo a su propia corriente del peronismo. Esta variación discursiva puede relacionarse con el paso analizado desde el movimientismo hacia el tendencismo.

intercambio político del Pacto Social. Esa misma semana, ambos hacían hincapié en la necesidad de “construir el poder popular”, un discurso que se acentuaría a medida que las críticas al programa crecieran. Al mismo tiempo, subrayaban la necesidad de mantener un “frente de clases”, idea a todas luces coherente con la aplicación de un pacto social, aunque una vez más advertían que ese momento debía significar “la transición hacia la construcción nacional del socialismo” (“Responden los compañeros...”, 1973, p. 3).

El análisis de *El Descamisado* sobre el ACN era algo más generoso. Señalaba que “las medidas anunciadas (...) tienden a aumentar la riqueza nacional, evitar que el imperialismo se la lleve, y a distribuirla en forma creciente para beneficio de los trabajadores”. De todas formas, demostraban su desconfianza hacia el capital al destacar que era el producto de un acuerdo entre la CGT y los empresarios de la CGE; pero, para que estos cumplieran, era necesario el accionar del aparato punitivo del Estado y, fundamentalmente, la movilización popular (“Acuerdo social y control...”, 1973, p. 13).

La operación intelectual es notable: el programa económico formal había dejado afuera de la mesa de acuerdos a su organización, ya que el pacto tripartito solo requería la validación de las corporaciones, en este caso la CGE y la CGT. Pero Montoneros se daba a sí mismo un lugar en el programa al otorgarle un rol central a la movilización popular, la principal herramienta que tenía para ofrecer a través de sus organizaciones “de superficie” en diversos territorios. No era necesario impugnar los términos de intercambio político del Pacto Social mientras la organización pudiera atribuirse a sí misma el rol de custodia de los mismos, en tanto mediadora con el pueblo. Al mismo tiempo, intentaba profundizar la relación entre economía y política plebeya: en su discurso convertía en condición necesaria la movilización popular para lograr los objetivos económicos. El mismo elemento sería el que permitiría superar “esta etapa de transición -tal como la definió el compañero presidente- para pasar a etapas superiores del poder popular” (“Acuerdo social y control...”, 1973, p. 13). Sin embargo, este condicionamiento era atenuado por la celebración de algunos anuncios, como la nacionalización del comercio exterior de carnes y granos, la reforma financiera, y cambios en la política para inversiones extranjeras.

El control postulado no era meramente declarativo ya que uno de los primeros aportes que Montoneros proponía al Pacto Social era el control popular de precios. Es

así que la JP anunciaba en *El Descamisado* la puesta en funciones de una Comisión de Movilización y Control que se ocuparía del tema, bajo el título “¡Van a cobrar lo que dijo Cámpora, ni un peso más!” (1973). En su edición del 19 de junio, festejaba que “El gobierno del pueblo bajó los precios”, aunque advertía: “el pueblo debe exigir su cumplimiento” (“Defenderse, movilizarse...”, 1973, p. 10). La hipótesis montonera consistía en que el poder de policía del Estado no era suficiente para controlarlos, era necesaria la intervención popular. Esta idea era consistente con la aspiración de fomentar el poder del pueblo movilizado a través de las estructuras de sus organizaciones:

Todos recordamos que muchos gobiernos intentaron controlar el alza de los precios lanzando legiones de inspectores a las calles para que recorran los comercios. Sin embargo, por la coima, por el ocultamiento o por la escasez de inspectores, tales campañas nunca dieron resultado. Es el pueblo en su conjunto el único capaz de garantizar que se cumplan las medidas establecidas por el gobierno popular. (“Defenderse, movilizarse...”, 1973, p. 10)

El discurso señalaba entonces que el rol de este monitoreo popular debía ser lograr que los empresarios cumplieran su parte del trato con respecto al pacto social vigente. Así, afirmaban que “no deben existir falsas solidaridades con los comerciantes vecinos y amigos”. La conducta recomendada era no adquirir los productos o “denunciarlo, para que se lo castigue a él” (“Defenderse, movilizarse...”, 1973, p. 10). El análisis no distinguía entre grandes empresarios y pequeños comerciantes: el pueblo era convocado por Montoneros a cumplir de manera inflexible el rol de custodio de los términos de intercambio político del Pacto Social.

4.1.3. Matices. Las ambigüedades del discurso montonero.

Los indicios sobre las ambigüedades del apoyo al programa comenzarían a revelarse tanto en los resquemores hacia la figura de Gelbard como en algunas escasas críticas programáticas que la organización deslizará en esta etapa. El cierre de la nota sobre la movilización popular para acompañar el Pacto Social incluía un ataque contra la cartera responsable del programa: el control debían hacerlo los trabajadores, porque “sino nadie lo hará. Menos los enemigos internos que lograron puestos en el equipo económico” (“Defenderse, movilizarse...”, 1973, p. 10). Esta etapa estará signada por críticas ocasionales, mayormente no centradas en el programa económico, sino en sus

creadores y ejecutores. Pero la crítica no era límpida: ¿el problema era Gelbard o algunos de los designados por él? Montoneros todavía no apuntaba directamente al ministro, pero expresaba preocupación por ciertos nombramientos en su área, a partir de lo que evaluaba como continuidades con el régimen precedente. En particular, apuntaban contra David Graiver⁸⁸, socio de Gelbard en diversos emprendimientos comerciales y ex funcionario del gobierno de Lanusse, a las órdenes de Francisco Manrique en el Ministerio de Bienestar Social (Osuna, 2017); y contra Jorge Duchini, nombrado al frente de la Junta Nacional de Granos, a quien se le achacaba la participación en diversas gestiones durante la proscripción del peronismo.

Los hechos de Ezeiza, con el consiguiente agravamiento de la disputa intraperonista y la advertencia de Perón a los “enemigos embozados y encubiertos o disimulados” (1985, p. 202) tuvieron un doble efecto: momentáneamente desviaron la atención de la organización de la economía, pero, por otro lado, cuando volvió a referirse al tema, acentuó la dimensión crítica de su discurso.

El 10 de julio apareció en *El Descamisado* la primera censura directa a políticas impulsadas por Gelbard; en este caso a la propuesta de creación de la CEN, bajo la pregunta: “¿Quieren privatizar el Estado?”. Planteaba que la propuesta se oponía “totalmente a la doctrina justicialista y a los objetivos del gobierno popular”. La crítica se concentraba fundamentalmente en cuatro puntos: la independencia financiera de la que gozaría el organismo; la supresión de los controles estatales; la formación de gabinetes de asesores específicos; y la constitución de nuevos directorios en los que, aseguraban, primaría la mentalidad de las empresas privadas (“¿Quieren privatizar...?”, 1973, p. 29).

La alternativa propuesta no era inocente: reformar las empresas con participación estatal, según la ley 13.653 de 1949. De este modo, la crítica económica se convertía en una disputa por la doctrina política justicialista: desde el espacio montonero, muchas veces atacado por enarbolar una supuesta heterodoxia peronista,

⁸⁸ A pesar de las afirmaciones de *El Descamisado*, según el relevamiento emprendido, en esta fecha Graiver no había sido nombrado en el gabinete económico. La confusión podría provenir del hecho de que participó en la primera reunión del gabinete económico -ampliado, porque incluía a hombres que no eran funcionarios, como Julio Broner y Manuel Madanes- en calidad de ex subsecretario de Bienestar Social (“Gelbard reunió...”, 1973). Su participación, al igual que la de Madanes, probablemente estuvo vinculada a su vínculo de confianza personal con Gelbard -eran socios en diversos negocios-, antes que a nombramientos formales en el gabinete. Seoane (2018, p. 237) sostiene que durante este período, Graiver pasó a integrar una vocalía de la CGE. Poco tiempo después, el financista establecería relaciones comerciales y financieras con Montoneros (Gasparini, 1999; Perdía, 2013).

se proponía regresar al tratamiento del sector público de la producción que había primado en el primer peronismo.

Al mismo tiempo, se repetía una nota de reprobación contra el entorno del ministro: en este caso por sus vínculos comerciales y políticos con Jacobo Timerman, empresario de larga trayectoria antiperonista. El director de *La Opinión* había manifestado desde el diario cierta adhesión a las políticas del nuevo gobierno, pero denunciaba una persecución en su contra debido a problemas gremiales en el periódico. Se le recordaba desde *El Descamisado*: “antes con Lanusse, ahora con Gelbard” (“De la prensa del régimen...”, 1973, p. 14). La mención del general golpista se trataba también de un recordatorio para el ministro de sus relaciones con el gobierno previo. Lo cierto es que, a medida que se acentuara el conflicto con Perón, el espacio profundizaría también sus críticas a Gelbard y su plan económico.

Para principios de agosto, ya se habían acumulado una serie de hechos que alejaban a la Tendencia del poder político y, particularmente, de Perón: la reacción de éste posterior a los hechos de Ezeiza, la renuncia de Cámpora y su reemplazo por Lastiri y, finalmente, la nueva fórmula presidencial que incorporaba a María Estela Martínez. Ella era señalada por el discurso montonero como una de las personas del entorno presidencial que alejaban al líder del peronismo de su pueblo, impidiendo el diálogo. Esta tesis sería conocida como la “Teoría del Cerco” (Bartoletti, 2010; Gillespie, 2011).

No obstante, mantenemos este momento dentro del primer período, caracterizado por un apoyo con ciertas ambigüedades al programa económico, ya que Montoneros no expresaba aún críticas contundentes ni una ruptura clara con el Pacto Social. De hecho, en los primeros días de agosto, el diputado Roberto Vidaña, de la JP Regionales, estableció la posición del espacio respecto a nuevos proyectos legislativos que formaban parte del programa económico. El balance presentado era claramente positivo: sobre cinco iniciativas, se manifestaba a favor de cuatro de ellas, oponiéndose solamente a la mencionada CEN. Más allá de observaciones particulares, opinaba favorablemente de los proyectos presentados para una nueva ley de inversiones extranjeras; la nacionalización del comercio exterior; la promoción industrial y minera; y reformas en el sector agrario, de las cuales, aclaraba, “la más importante es la que establece el impuesto a la renta normal potencial de la tierra” (“¿A quién se la quieren contar?”, 1973, p. 28).

Sin embargo, como parte de esas ambigüedades, en el mismo número incluían una acusación contra un hombre del gabinete económico: “GIVERTI... NEPOTISTA” (sic)⁸⁹. Se acusaba al secretario de Agricultura y Ganadería de lograr que Gelbard nombrara a su esposa en la misma dependencia y mantener funcionarios del régimen militar (“GIVERTI... NEPOTISTA”, 1973). Curiosamente, el apuntado era el impulsor de la ley que establecía el elogiado impuesto a la renta normal potencial de la tierra⁹⁰.

En cuanto a los efectos del programa económico, a pesar de que su diagnóstico de partida calificaba a la inflación como una “expropiación” del salario, Montoneros no identificaba su drástica reducción como un logro del campo popular. Fue el porteño estadio de Atlanta el escenario del cierre de esta primera etapa de sus posturas ante el Pacto Social, en la que, a pesar de críticas específicas y la expresión de ciertas ambigüedades, la organización no impugnaba los términos de intercambio político, y, al mismo tiempo, se proponía como fiel custodia de los mismos.

4.2 Nuevos tiempos. “Romper el cerco” para cambiar el rumbo, y una particular irrupción política en el desarrollo del programa económico-social.

4.2.1. Los de afuera... La exterioridad de Montoneros ante el Pacto Social.

El acto que convocó Montoneros el 22 de agosto de 1973 tenía dos sentidos fundamentales: la conmemoración del primer año de los fusilamientos de militantes en Trelew, y, de cara a las elecciones de septiembre, expresar su apoyo a la candidatura de Perón⁹¹. De todas formas, representó un quiebre: la primera aparición pública de Firmenich y Quieto al frente de un acto multitudinario era acompañada por una crítica abierta al Pacto Social por parte de la organización. No obstante, coincidimos con Pacheco (2014) en que no era todavía un rechazo total a la idea de la alianza de clases, sino que era una objeción contra la forma que adoptó. Este segundo período se caracterizaría entonces por el incremento de las críticas al programa económico social,

⁸⁹ Hacían referencia a Horacio Giberti.

⁹⁰ Los sectores de la Tendencia tuvieron una participación relevante en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires cuyos ejes de política agraria “seguían a grandes rasgos los lineamientos trazados por la política agropecuaria nacional” (Tocho, 2015, p.17).

⁹¹ “Perón Presidente” fue el título de portada de *El Descamisado* n° 15.

pero alternando todavía algunos elogios y rescatando la idea del policlasista “frente de liberación”.

Firmenich abogó en el acto por “una revolución que necesariamente debe ser conducida por la clase obrera organizada” (“El discurso de Firmenich”, 1973, p. 5), pero su discurso continuaba con una acusación a la CGT:

El pacto social, podemos decir que es un acuerdo, o debería ser, un acuerdo que formaliza la alianza de clases, pero regido y dirigido por la clase trabajadora... debería ser. Pero en la actualidad el pacto social no refleja eso, y no refleja eso porque en la constitución de esa alianza, los trabajadores no tienen representantes. Porque tienen allí, en la CGT, una burocracia con cuatro burócratas que no representan ni a su abuela... (“El discurso de Firmenich”, 1973, p.5)

La transcripción que ofrece *El Descamisado* destaca a continuación los cánticos contra la “burocracia sindical”, que prometían para Rucci el mismo trato que se le había dispensado a Vandor en 1969⁹².

Si en el discurso se exigen modificaciones al pacto establecido, solo se detallan aquéllas concernientes a la representación sindical; en cambio, no se encuentran todavía críticas concretas a sus términos de intercambio político. Pacheco caracteriza esta actitud como un “acatamiento crítico” por parte de Montoneros (2014). Mientras se denostaba a la “burocracia sindical” por una pobre representación de la clase obrera, no se criticaba el fondo del programa:

[Entre] los conflictos que impulsó la JTP durante 1973 y mediados de 1974 nos encontramos con que no aparecen conflictos sustantivos que tengan como objetivo la exigencia de mejoras salariales. Por el contrario, la gran mayoría de ellos apuntaba al pago de salarios y quincenas adeudadas, a la reincorporación de trabajadores y activistas despedidos, mejoras en las condiciones laborales, de higiene y de seguridad y cumplimiento de reglamentaciones laborales. (Pacheco, 2014, p. 253)

Del mismo modo, agregamos que la disputa que proponía dar la conducción de Montoneros en el campo sindical en este período se atenía a la pretensión de una

⁹² Augusto Timoteo Vandor había sido un dirigente sindical metalúrgico, que, durante la década de 1960, había impulsado un proyecto político “neoperonista”. Fue asesinado por un grupo armado el 30 de junio de 1969.

disputa al interior de las instituciones existentes, como demostraba Firmenich al corregir a los que cantaban “JTP, la nueva CGT”:

(...) hay que fortalecer a la JTP. Dentro de la estructura sindical, no marginándonos.
(...) Una cosa es la CGT, que equivale al sindicato, y otra cosa es la JTP que equivale a la agrupación. Tenemos que fortalecer la JTP para ganar la conducción política de toda la CGT. (“El discurso de Firmenich”, 1973, p. 5)

Montoneros no llamaba todavía a romper el pacto tripartito vigente. Declamaba, por el contrario, la idea de ganarse un asiento en esa mesa de acuerdos y decisiones por la vía institucional, para desplazar a las “falsas representaciones” de la clase obrera.

La reflexión sobre los pactos sociales como un tipo de programa que implica un vínculo enraizado entre el Estado y la sociedad civil tiene, en este caso, ciertas implicancias: si la organización quería un asiento en la corporativa mesa de acuerdos y decisiones, debía representar a un actor de la sociedad civil. En ese marco se inscribe la disputa de la JTP con las organizaciones sindicales del peronismo de mayor trayectoria. Cabe reflexionar acerca de cómo este tipo de pactos contienen en su formulación a sectores tradicionales, corporativos, de la sociedad civil. Pero el Pacto Social no incorporaba un mecanismo de consulta o decisión que otorgara un peso similar a espacios no corporativos, que pudieran representar a otros grupos sociales.

Montoneros no era *per se* una parte del Estado. Más allá de que algunos de sus cuadros ocupaban posiciones en el gobierno nacional y en diversos estados provinciales (Antúnez, 2011; Bartoletti, 2010; González Canosa, 2018; Servetto, 2011; Tocho, 2015), esta fracción del peronismo trascendía esas funciones institucionales. Del mismo modo, tampoco era exactamente una organización que pudiera reivindicarse representante de la sociedad civil como lo eran la CGE o la CGT. Omar Acha (2004) propone para estos casos pensar en un tercer concepto: la sociedad política. En ese terreno, Montoneros estaba haciendo un intento por ampliar la base de sustentación del programa a través de la convocatoria a todos los espacios de juventud -oficialistas y opositores- en las Asambleas de las Juventudes Políticas Argentinas (“La juventud se prepara...”, 1973). Sin embargo, mientras la organización se concentraba en generar lazos con otros espacios políticos, los enfrentamientos al interior del peronismo recrudecían.

4.2.2 Ataques y alteridades. Montoneros y el Pacto Social ante el recrudecimiento de la disputa intraperonista.

La misma semana en que se produjo el acto de Atlanta, *El Descamisado* festejaba el anuncio que había realizado Gelbard por el cual se le otorgaba un crédito a Cuba (“Peronismo: concretamente antiimperialista”, 1973) y la recepción a delegaciones del bloque comunista (“Argentina y el campo socialista”, 1973). También en ese número, sin embargo, se denunciaba el desabastecimiento de combustibles en época invernal y la importación de petróleo con precios excesivos; todo ello como muestra de la “dependencia” que, se afirmaba, Argentina debía dejar atrás (“Esto es un robo...”, 1973).

En la última semana de agosto, la JTP realizó su primer encuentro nacional, en el que, a través del documento resultante de sus mesas de trabajo, reforzó las críticas al Pacto Social que había vertido Firmenich en Atlanta. Si bien lo reconocían como una “herramienta programática de la necesaria alianza de clases”, remarcaban que “ese Pacto debería reflejar la hegemonía de la clase trabajadora, beneficiar a las clases que lo componen y perjudicar a las fuerzas imperialistas y oligárquicas” (“Propuestas para el trabajo sindical”, 1973, p. 30). El diagnóstico comenzaba a avanzar no solo hacia la representación, sino hacia su contenido y los términos de intercambio político que implicaba el pacto, reclamando un “aumento real de salarios” y “la nacionalización de los resortes básicos de la economía”. El documento indicaba que el contenido del pacto vigente no beneficiaba “a los trabajadores ni a la pequeña burguesía”, y, sobre su forma, que “no fue acordado por los auténticos representantes de esos sectores”. En definitiva, exigían una “reformulación del Pacto Social para que sea realmente la expresión programática del Frente de Liberación Nacional” y respetase la hegemonía de los trabajadores (“Propuestas...”, 1973, p. 30).

No solo se adelantaba a cualquier expresión de descontento de la CGT, sino que, a diferencia de la reinterpretación que propondría Rucci más tarde, la crítica apuntaba contra el pacto vigente en su totalidad, para hacer uno nuevo que incluyera una amplia política de nacionalizaciones y otra política salarial general. Todo ello, menos de tres meses después de la firma del ACN, implicaba una estocada a los términos de intercambio político del pacto. La JTP era la fracción de Montoneros que más radicalizaba su discurso contra el programa económico social: en nuestro marco

analítico era lógico que así fuera porque era la agrupación que se encontraba en competencia directa con los dirigentes que encabezaban la CGT.

Finalmente, el documento expresaba una protesta contra la candidatura a vicepresidenta de María Estela Martínez, que, se afirmaba, había sido impulsada “por los sectores más reaccionarios del movimiento (Norma Kennedy, Rucci, Comando de Organización, etcétera)” (“Propuestas...”, 1973, p. 30).

En esos cruces con la “burocracia”, *El Descamisado* supo incluir a Gelbard como un aliado del sindicalismo en una nota sobre una serie de extraños sucesos en la redacción del diario *Clarín*. El ERP-22 de agosto -una escisión del ERP que se acercaba ideológicamente a la Tendencia- había logrado publicar tres solicitadas en el diario a través de un procedimiento poco convencional: a modo de pago, ofreció la liberación de un gerente del diario al que, convenientemente, había secuestrado la semana previa. La respuesta ante estas solicitadas que criticaban a dirigentes sindicales fue el ataque por parte de un grupo armado a la redacción del diario; pero *El Descamisado* ofrecía una explicación peculiar:

El diario Clarín, directa o indirectamente, viene manifestándose en contra de la política económica desarrollada por el actual ministro de economía José Gelbard. A su vez, esa política reconoce un pivote fundamental, que es el pacto social, acordado, precisamente entre Gelbard y la burocracia sindical. (“Los trabajadores pagaron el pato”, 1973, p. 29)

La interpretación trascendía al ERP-22, al señalar la cercanía de *Clarín* a los grupos de economistas frigeristas (Sivak, 2013), críticos del gabinete económico, como una posible variable explicativa de los hechos. Así, mientras se asociaba al grupo atacante con la UOM, lograba involucrar al ministro de Economía como socio de los agresores. La disputa al interior del peronismo se agudizaba entre la Tendencia, por un lado, y la rama sindical junto a algunas organizaciones menos numerosas por el otro.

En la región, la situación no era más pacífica: el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, el 11 de ese mes, cerraba el cerco alrededor de la Argentina, sumándose a los gobiernos militares de Brasil y Bolivia, y la presencia de un civil bajo tutela militar en Uruguay. La interpretación de Dardo Cabo⁹³, máximo responsable

⁹³ Dardo Cabo fue el director de *El Descamisado* desde el tercer número hasta el final. Había integrado la organización Descamisados y, junto a ella, pasó a Montoneros. Era el integrante de la revista con mayor peso político en la organización, aunque diferentes testimonios asignan también un peso importante en ese sentido a Jorge Lewinger (Grassi, 2015; Slipak, 2015).

político de *El Descamisado*, sobre los sucesos trasandinos consistía en que “Allende respetó demasiado a un sistema constitucional creado por el enemigo. No advirtió que en este respeto a la ley pregonado por los liberales está la trampa antirrevolucionaria” (Cabo, 1973c, p. 3). En esta lectura, la vía revolucionaria se constituía en un camino urgente, desmintiendo a posibles intentos reformistas. Concluía entonces que “una revolución no puede hacerse, ni evolucionar, en un marco legal establecido por quienes son enemigos de esa revolución” (Cabo, 1973c, p. 3).

La violencia de la disputa intraperonista aumentaba desde principios de 1973 con los sucesos de Ezeiza como hito, e incluyendo otros episodios que derivaron en muertes⁹⁴. Pero la ejecución de Rucci el 25 de septiembre, dos días después de la elección presidencial, tenía un peso político inusitado. El día siguiente, el dirigente de la JP Regionales y funcionario de la UBA, Enrique Grynberg, fue interceptado por desconocidos que lo acribillaron. A partir de entonces, las esquelas que reivindicaban a “compañeros muertos” se convertirían en una sección casi permanente de las revistas de la Tendencia.

Las críticas al secretario general de la CGT por parte de Montoneros habían crecido en los últimos tiempos, pero luego de los hechos nadie se atribuyó la autoría. Sin embargo, desde entonces han sido numerosos los testimonios de militantes que afirmaron que el responsable de la operación fue un grupo de militantes del núcleo que conformaban Montoneros y FAR (Amorín, 2006; Anguita y Caparrós, 1998; Duzdevich et al., 2015, pp. 149–152; Flaskamp, 2002; Gasparini, 1999; Mero, 2014; Wainfeld e Ivancich, 1983, entre otros)⁹⁵.

Este trabajo no pretende inscribirse dentro de la tradición que centra el análisis de la época en la violencia, denominada por Acha (2010) “violentología”⁹⁶. Aun así, la acumulación de testimonios en ese sentido permite inferir que la disputa política intraperonista afectó en este punto el desarrollo del Pacto Social de una manera directa, a través de la literal eliminación de uno de sus firmantes.

⁹⁴ Entre ellos, la refriega de José León Suárez del 10 de junio que terminó con un muerto, y los asesinatos de Benito Spahn en San Nicolás el 22 de julio, atribuido por *El Descamisado* a un custodio de Rucci (“Lo mataron por peronista”, 1973), y del dirigente sindical de la UOCRA, Marcelino Mansilla, el 27 de agosto.

⁹⁵ También los entrevistados para esta tesis ligaron a Montoneros y sus ámbitos de influencia con la ejecución de Rucci.

⁹⁶ Acha denomina de ese modo a “una discursividad que encuentra en la violencia política la razón fundamental de una época desquiciada” (2010, p. 2).

En el número posterior a los hechos, curiosamente, el órgano de prensa montonero parecía descubrir ciertas bondades en la figura de Rucci. En el interior de la edición se destacaba que estaba enfrentado con Lorenzo Miguel, quien era calificado como un representante del “vandomismo”. A su vez, recordaba que “Rucci impidió dos veces el ingreso de sus matones a la redacción de El Descamisado, aunque no quiso o no pudo hacer lo mismo cuando torturaron en un hotel de Ezeiza el 20 de junio” (“La vida...”, 1973, p. 5). Finalmente, la revista sostenía que “empezaba a transitar, en los últimos días de su vida, la oposición al Pacto Social firmado con Gelbard” (“La vida...”, 1973, p. 5).

En la misma edición reaparecían críticas al ministro, al que se acusaba de actuar con complicidad en un caso de corrupción relacionado con Aerolíneas Argentinas (“Nos afanaron...”, 1973). Críticas similares se repetirían por el desplazamiento del titular de YPF - “El pueblo apoya a Fatigati por lo mismo que odia a Gelbard” (“Aquí mandan Shell y Esso”, 1973, p.6)-, y por supuestos intereses en Canal 13 compartidos con Jacobo Timerman y “el antiperonista” Goar Mestre (“Siempre listos...”, 1973).

En septiembre, Firmenich había iniciado una gira de charlas por las regionales de la JP desarrollando conceptos plasmados en un documento interno de la organización, que los militantes de la época recuerdan como “biblia” o “mamotreto” (Duzdevich et al., 2015; Salcedo, 2011). En el mismo se expresaban abiertamente las diferencias con Perón, tanto ideológicas como estratégicas, en particular en cuanto a la necesidad de avanzar hacia el socialismo -entendiendo, en el caso de Montoneros, la alianza de clases como un momento de transición- y acerca del contenido del “socialismo nacional”. En el terreno económico-social se reflejaría en el paso de Montoneros desde la aceptación de los términos de intercambio político hacia un progresivo cuestionamiento, como así también, en un orden político más general, desde el movimientismo inicial hacia el tendencismo y, eventualmente, el alternativismo⁹⁷. Al mismo tiempo, Rocío Otero sostiene que, a partir de estas definiciones, la organización “comenzó a enfatizar en la lealtad a los intereses de los trabajadores, restándole peso al vínculo de Perón con sus seguidores” (Otero, 2019, p. 149), elemento que explica el mayor lugar que la organización otorgaba a la JTP en el espacio público, en particular en cuanto a sus críticas al Pacto Social.

⁹⁷ Respecto de formas posibles de abordar el movimientismo, el alternativismo y el tendencismo en Montoneros, consultar González Canosa y Stavale (2021).

De todas formas, luego del asesinato de Rucci, por un tiempo las preocupaciones montoneras pasaron principalmente por la disputa intraperonista, y así lo reflejaron las páginas de *El Descamisado*, relegando a un lugar secundario las menciones referidas tanto al programa económico y social como a Gelbard. En octubre, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista (CSMNJ) emitió el denominado *Documento Reservado*, en el que se declaraba en estado de guerra contra los “grupos marxistas” que atacaban a figuras del peronismo, muchos de ellos “infiltrados” en el propio movimiento. Lo publicó el diario *La Opinión* (“Texto del Documento Reservado”, 1973), y la respuesta fue asociar nuevamente a su director, Jacobo Timerman, con el Ministerio de Economía y el sindicalismo, y poner en duda la veracidad de lo publicado (“Y esto qué es”, 1973, p. 2).

En este contexto, Montoneros y FAR aprovecharon la asunción de Perón para anunciar formalmente su unidad. Si Daniela Slipak (2015) ha podido identificar ciertos discursos que relatan la historia de Montoneros a partir de un desvío, que en algunos casos es asociado a la influencia de lecturas marxistas por parte de los cuadros de las FAR⁹⁸, el discurso que Quieto pronunció en esa ocasión parece ser un elemento en el sentido opuesto a esas voces. Se manifestaba a favor de la alianza policlasista para la etapa, entre trabajadores, sectores medios, y pequeños y medianos empresarios. Y afirmaba que los que proponían otros caminos “confunden los deseos con las realidades y no tienen en cuenta la correlación de fuerzas, el nivel de conciencia y de organización de nuestro pueblo (...)” (“Roberto Quieto”, 1973, p. 20). A pesar de las críticas al Pacto Social, la organización no renunciaba a la idea del frente policlasista.

Al mismo tiempo, Montoneros seguía difundiendo sus posiciones sobre iniciativas que concernían al Pacto Social. Primero, se manifestó a favor de la Ley de Prescindibilidad, como una herramienta que le permitiera al gobierno “eliminar de las esferas de conducción a los funcionarios reaccionarios” (“La JTP fijó su posición”, 1973, p. 14). Más reservas expresó con el proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales, que buscaba dar un nuevo marco a la actividad sindical. Si bien Dardo Cabo reconocía que iba a fortalecer “a los trabajadores en su organización” (Cabo, 1973a, p. 9), se expresaba preocupado por una cláusula que permitía a la dirección nacional de un sindicato intervenir a las de grado inferior -representaciones

⁹⁸ Ver, por caso, Duzdevich et al (2015).

provinciales o regionales-. La JTP sacó entonces una solicitada que reivindicaba el hecho de que “solamente quienes eligen pueden revocar el mandato de sus representantes” (“Al Excelentísimo Sr. Presidente”, 1973, p. 3).

En este punto, la convivencia en el movimiento peronista entre sindicalistas, Montoneros y Perón ya se basaba en un diálogo entre facciones de lenguas distintas. El 8 de noviembre en la CGT, Perón emitió un discurso en el que anunció el envío al Congreso del Plan Trienal, pero también habló de “traidores” e “infiltrados”, comparables con “microbios”, para los cuales el movimiento generaría sus “autodefensas” (Perón, 1987, p. 145). Montoneros captó el mensaje. En el editorial siguiente, Cabo señaló: “El general nos ha dado una sacudida”, pero el titular de ese número era “Aquí manda Perón” (Cabo, 1973a, p.2).

Sin embargo, la semana siguiente, el CSMNJ emitió una nueva resolución en la que desconocía a la JTP como parte de la rama sindical del peronismo (“La JTP existe”, 1973). Como respuesta, *El Descamisado* publicaba una entrevista a Perón de principios de 1973, en la que criticaba duramente a la dirigencia sindical tradicional. Parecía buscar recuperar una faceta del discurso de Perón que no regresaría. Esta exclusión de la JTP del movimiento marcó un parteaguas, y desde entonces se observaría una acentuación de los discursos críticos, pasando de la objeción limitada a las representaciones involucradas en el Pacto Social, hacia una cada vez más incisiva impugnación de sus términos de intercambio político, en particular en lo concerniente al congelamiento salarial:

Haciendo un largo autoelogio [Gelbard] se presentó como el frenador de la inflación, del costo de la vida y como campeón de la destrucción de las causas de la inflación. Todo mentira: porque los precios han sido compulsivamente frenados, pero el mercado negro es el que regula esos precios (...) Antes, Krieger Vasena hacía a la inversa que Gelbard: congelaba los salarios. Ahora Gelbard congela precios y salarios sin aumentar la producción (Cabo, 1973b, p. 3).

Si la inflación había sido definida como una “expropiación del poder adquisitivo de los salarios”; ahora, en un momento de inflación moderada, pero también de enfrentamiento con el gobierno, Montoneros no estaba dispuesto a reconocerle méritos económicos tan fácilmente: “el asunto sigue siendo la dependencia, la dependencia de la inflación de los yanquis que pagamos nosotros” (Cabo, 1973b, p. 3).

El editorial concluía con una acusación contra Gelbard por “desvirtuar” con su política el sentido que Perón originalmente le habría buscado dar al programa económico, en una suerte de reedición de la “Teoría del Cerco”. Otra nota central también estaba dedicada a un tema que alcanzaba al ministro: bajo el título “La ley de la entrega” se denunciaba una modificación a la regulación de inversiones extranjeras, que otorgaba nuevas garantías del Estado a los inversionistas y resignaba la soberanía jurídica para dirimir conflictos⁹⁹.

El 16 de noviembre tuvo su lanzamiento un nuevo órgano de prensa del peronismo que se pretendía antagonista de *El Descamisado: El Caudillo de la Tercera Posición*, dirigido por Felipe Romeo, peronista vinculado a la Juventud Peronista de la República Argentina, que agrupaba a sectores juveniles del peronismo enfrentados con la Tendencia (Besoky, 2016). Su primer editorial apuntaba precisamente contra Gelbard: aseguraba que tenía vínculos con “el aparato sinárquico”, y lo acusaba de “infiltrado”. Curiosamente, se interrogaba: “¿Por qué sino los ‘revolucionarios de la tendencia’ no lo atacan a Gelbard?” Y, luego de apuntar también contra Jacobo Timerman, se contestaba a sí mismo que existía “una tácita sociedad entre el ministro y la tendencia: Gelbard los apoya porque sirven a sus fines que son: caotizar al país para -del quilombo- afianzar la dependencia” (Romeo, 1973, p. 2). Estaba claro que, llegado este momento, en lo que concernía al espacio peronista, el único apoyo importante con el que Gelbard podía contar era el del propio presidente Perón.

4.2.3. Tirarle al ministro... Montoneros ante el desgaste del Pacto Social.

Para fin de año, el panorama económico empeoraba, conjugándose la retracción de la inversión privada y el inicio de la crisis del petróleo; mientras que, en materia política, la relación de Montoneros con Perón no mejoraba. La convocatoria a reuniones periódicas entre el presidente y diversas organizaciones juveniles no llegaron a buen puerto, por lo que la JP Regionales no consiguió que se cumpliera su expectativa de que se reorganizara el peronismo, abriendo el padrón de afiliaciones e incorporando a la rama de la juventud bajo su dirección (Bartoletti, 2010; Gillespie, 2011).

⁹⁹ La modificación había sido incluida en un pedido de ampliación presupuestario enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, por lo que se denunciaba que se buscaba que el cambio pasara desapercibido (“La ley de la entrega”, 1973).

En ese marco, *El Descamisado* se preguntaba “¿Qué pasa con el Pacto Social?” El editorial se encargaba de sacar conclusiones sobre la conferencia de Perón en la CGT del 13 de diciembre:

El General sostuvo: 1) que no habrá aumentos de salarios; 2) que los dirigentes sindicales son leales y honestos; 3) que los que los tildamos de burócratas traidores somos tontos y aventureros; y 4) que el Pacto Social y la política económica llevada adelante hasta el momento cuentan y seguirán contando con su aval explícito.

El quinto, que no aparece verbalmente, es el que más opera políticamente sobre el momento actual: frenar la maniobra vanderista para colocar a Cafiero en Economía. (“¿Qué pasa...?”, 1973, p. 2)

Montoneros interpretaba de las palabras de Perón una descalificación hacia la posición propia, pero en el subtexto intentaba encontrar también un límite a sus rivales internos. Efectivamente, el presidente había respaldado en su discurso tanto a las organizaciones sindicales como a la CGE, al programa económico y el gabinete responsable, en un contexto en el que los sindicalistas comenzaban a exigir una revisión de las pautas salariales. Había anunciado también el envío del Plan Trienal al Congreso y pidió paciencia para mejorar la situación económica por las dificultades que suponía: “el mismo Cristo sabemos que curó, etcétera, pero a arreglar la economía nunca se puso” (Perón, 1988a, p. 42).

Montoneros continuaba reivindicando la idea de la alianza de clases, pero atacaba el programa realmente existente, “el contenido de este Pacto Social”, apuntando a los términos de intercambio político, y, en particular, al congelamiento de los salarios. El problema se extendía, según el editorial, a las representatividades: los trabajadores no podían estar representados si los sindicalistas eran de la “burocracia”, caracterizada como el grupo liderado por Miguel y Otero. Por otro lado, afirmaba que tampoco los pequeños empresarios estaban realmente representados, ya que Gelbard era definido como “un gran empresario”, omitiendo de hecho a Broner. La conclusión editorial era que el reclamo salarial de la CGT era justo, pero que se trataba de una excusa para “la burocracia que ataca al Pacto Social para en realidad destruir la alianza de clases y favorecer al imperialismo”. La única figura capaz de salvar esa alianza era Perón (“¿Qué pasa...?”, 1973, p. 3).

El editorial deja al descubierto la ligazón entre el diagnóstico económico y el político por parte de Montoneros. Reafirmaba su impugnación a las representaciones

del Pacto Social, y, al mismo tiempo, criticaba los términos de intercambio político del programa; pero en un contexto en el que identificaba como su rival principal a los dirigentes sindicales, encontraba que la alternativa propuesta por éstos -Cafiero ministro-, resultaría aún peor, la caída definitiva en manos del “imperialismo”.

Sin embargo, en el número siguiente, el eje de la crítica volvería a estar puesto sobre Gelbard, esta vez él señalado como un actor favorable al imperialismo ante el anuncio del otorgamiento de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 700 millones de dólares. La objeción se basaba en dos fundamentos: el origen del dinero –“los yanquis no financian nuestra liberación ni la de nadie”-, y su destino relacionado con el fomento de las exportaciones industriales. Según *El Descamisado*, los beneficiarios últimos iban a ser “los capitales monopólicos extranjeros” (“¿Los yanquis nos financian la liberación?”, 1973, pp. 2–3).

Los ataques contra el ministro se repetían en la publicación: en el número previo se había incluido un artículo denunciando el uso de la Ley de Prescindibilidad para despedir miembros de la JTP (“Una ley hecha para los gorilas ahora se usa contra peronistas”, 1973), y en éste se reforzaban las críticas a Gelbard con otra nota en la que se desarrollaba el papel del BID como un actor del imperialismo (“¿Qué es el BID?”, 1973). Mismo fin cumplía otro artículo que consistía en un índice de costos para una familia tipo, realizado por la propia revista, en el que se denunciaban situaciones de desnutrición, tasas elevadas de mortalidad infantil, enfermedades profesionales, deserción escolar y analfabetismo, para beneficio “de la oligarquía y el imperialismo” (“El drama del salario”, 1973, p. 10).

Ya en este punto podemos destacar que los enfrentamientos entre Montoneros y sus “frentes de masas”, por un lado, y Perón y el sindicalismo, por otro, estuvieron cruzados por críticas al programa económico mucho más marcadas de lo que se suele rescatar en los textos que abordan estas disputas.

El conflicto por la reforma del Código Penal¹⁰⁰ constituyó otra muestra de este fenómeno. El análisis montonero enlazaba este proyecto con la política económico-social: la portada de su órgano de prensa del 15 de enero de 1974 se preguntaba “¿Pacto

¹⁰⁰ Luego del asalto al Cuartel de Azul por parte del ERP en enero de 1974, Perón propuso aumentar las penas del Código Penal contra estas acciones. Los diputados de la Tendencia se resistían, y, luego de una mentada e infructuosa reunión con el presidente, la mayoría de ellos renunciaron a la banca. Los diputados renunciantes fueron ocho: Rodolfo Vittar, Santiago Díaz Ortiz, Roberto Vidaña, Diego Muñoz Barreto, Carlos Kunkel, Jorge Gellel, Armando Croatto y Aníbal Iturrieta (“Primero la patria...”, 1974).

Social con represión?”, y en el interior se contestaba que “este pacto social requiere esta legislación represiva” (“Este pacto social...”, 1974, p. 2). El argumento que se repetía en el editorial y en el comunicado de Montoneros de la semana siguiente (Montoneros, 1974c) era simple y mantenía los lineamientos previos: los trabajadores no estaban realmente representados en el pacto. Además, señalaban que los empresarios nacionales se subordinaban a los capitales extranjeros, que requerían medidas, como la reforma del código penal, para invertir, al igual que los organismos financieros para liberar préstamos. Ante esta situación, protestaba porque la nueva legislación no incluía “un elemento esencial para el desarrollo de un gobierno popular: la represión y la subversión de los monopolios” (“Este pacto social...”, 1974, p. 3).

En el texto se presentaba una novedad del discurso montonero, al aparecer por primera vez una alternativa al Pacto Social que hacía hincapié en un mayor poder del Estado:

Es el Estado el que debe centralizar el poder económico y planificar toda la actividad en esta área, avanzando sobre los intereses de la oligarquía y los monopolios; y a partir de allí dar una participación a pequeños y medianos empresarios. (“Este pacto social...”, 1974, p. 3)

El discurso con respecto al programa económico – social acentuaba sus críticas a medida que aumentaba el enfrentamiento con Perón. En el mismo número, enviados a Cuba relataban “Cómo es el socialismo nacional” (“Cuba: cómo es el socialismo nacional”, 1974), proponiendo un contenido para el significante vacío (Laclau, 2005) al que el presidente se había referido tantas veces.

En los números siguientes, se hacía hincapié fundamentalmente en el desabastecimiento. Vitto señala a este mecanismo junto a la falta de inversión y al establecimiento de mercados negros de diversos productos como las herramientas centrales que parte de la burguesía utilizó para debilitar al gobierno y su programa económico (2012, p. 131). El órgano de prensa montonero apuntaba como responsables del fenómeno a los “monopolios imperialistas” -no necesariamente extranjeros-¹⁰¹ (Cabo, 1974b; “Desabastecimiento – especulación...”, 1974), mientras

¹⁰¹ Entre los productos faltantes se mencionaban aceite, carne, azúcar, cigarrillos, materias primas y productos industriales. Entre las empresas aludidas estaban Molinos Cañuelas, La Campagnola, y el grupo Bunge y Born (Cabo, 1974b; “Desabastecimiento - especulación - contrabando - negociados”, 1974).

se denunciaba escasez energética (“La escasez...”, 1974) y el contrabando por parte de empresarios vinculados al gobierno (“Desabastecimiento – especulación...”, 1974). Estos problemas eran identificados como muestras del fracaso del programa económico, por lo que se reclamaba salir de los términos de intercambio político del Pacto Social, en particular los concernientes a las garantías a la propiedad privada: “La gran distribución mayorista y los grandes supermercados (...) deben pasar a manos del Estado” (“La escasez...”, 1974, p. 23).

El 29 de enero, Perón recibió a Juan Carlos Dante Gullo y Jorge Obeid, representantes de la JP Regionales. Según *El Descamisado*, los puntos de disenso que le plantearon al presidente fueron: el avance de “sectores gorilas” dentro del gobierno, la reforma del Código Penal, las designaciones en la Policía Federal, y la implementación del Pacto Social (“La entrevista Perón-JP”, 1974). Luego del encuentro, Firmenich ofreció una conferencia de prensa en la que reivindicó la idea del “Frente de Liberación de clases”, pero volvió a criticar la concepción del esquema tripartito y sus representaciones (“La entrevista Perón-JP”, 1974).

El elemento final de esta etapa que marca el paso desde ciertas ambigüedades de Montoneros con respecto al Pacto Social hacia una crítica frontal es la resignificación de elementos que previamente había valorado como positivos. Nos referimos a las decisiones de geopolítica enmarcadas en términos de relaciones comerciales en general, y al vínculo con Cuba en particular. La confirmación del crédito al gobierno socialista para la venta de automóviles, luego de un litigio político con la diplomacia norteamericana, ya no era leído por Montoneros como hito de una postura antiimperialista. La primera ruptura del embargo impuesto contra la isla en 1962 (Morgenfeld, 2014) era relativizada en una nota cuyo título se preguntaba: “¿Rompimos el bloqueo o se caía solo?” La respuesta brindada era que el “paso comercial no se da en la peor época del bloqueo, sino cuando este **ya está muerto de muerte natural**”¹⁰² (“¿Rompimos el bloqueo...?”, 1974, p. 10).

Esta matización de hechos que antes habían sido elogiados se producía el 12 de marzo de 1974, pocos días después de que, en Córdoba, el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, ambos vinculados a la Tendencia, fuera derrocado por un golpe policial ante la pasividad del gobierno nacional, que intervendría la provincia sin reponer a los

¹⁰² En negritas en el original.

gobernantes depuestos. Era la primera de una serie de situaciones similares en las que el gobierno nacional avanzaría sobre provincias gobernadas por sectores cercanos a la Tendencia¹⁰³ (Servetto, 2009).

En este contexto, *El Descamisado* relativizaba las bondades de la política externa, y criticaba la interna. Sobre esta última, hacía un resumen de las leyes “que desmentían las propuestas electorales”: la ley de la CEN, la de inversiones extranjeras, la Ley de Prescindibilidad, la de Asociaciones Profesionales, y la reforma del Código Penal. Las tres primeras habían sido impulsadas por el gabinete económico, mientras que la última era enmarcada por Montoneros como otra consecuencia del Pacto Social. Así se producía una relativización de la apertura comercial hacia el Este: “Y por más antiimperialista que parezca, si la política interna no es coherente con este tipo de medidas internacionales, todo se convierte en simple publicidad. Porque la real política antiimperialista, empieza por casa” (“¿Rompiamos el bloqueo...?”, 1974, p. 10)

Esta segunda etapa de las posiciones de Montoneros se caracteriza por una creciente oposición al Pacto Social realmente existente, ubicándose el foco de las críticas primero en los sistemas de representaciones involucrados, para avanzar luego hacia los términos de intercambio político sobre los que se erigía. A su vez, visibiliza los vínculos entre las disputas políticas intraperonistas y la acentuación de las objeciones en el campo económico; y concluye su movimiento crítico a través de la relativización de hechos que, en la primera etapa, la misma organización había marcado como políticas positivas del gobierno nacional.

4.3 “*Voltear*” el Pacto Social para hacer la revolución. La impugnación final de los términos de intercambio político.

4.3.1. *Tiempo de boicot*. “Romper” el Pacto Social.

La distancia que existe entre la segunda y la tercera etapa es la que separa a la crítica del boicot abierto. Es así que, iniciado 1974, Montoneros dejó de lado cualquier ambigüedad, profundizando su impugnación tanto de las representaciones implicadas en el Pacto Social, como de sus términos de intercambio político para hacer un

¹⁰³En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Oscar Bidegain, cercano a la Tendencia, había renunciado en enero de 1974, luego de ser públicamente reprendido por Perón en el marco del asalto al cuartel de Azul protagonizado por el PRT-ERP. Sin embargo, en ese caso asumió el vicegobernador Victorio Calabró, sindicalista afín a Lorenzo Miguel, sin que mediara una intervención federal (Antúnez, 2011).

llamamiento inequívoco. El 19 de marzo de 1974, *El Descamisado* traía en su portada un único título en mayúsculas. Se trataba de la afirmación de una postura política, y, al mismo tiempo, de una promesa de explicación para las páginas interiores: “POR QUÉ HAY QUE ROMPER EL PACTO SOCIAL”.

La radicalización del enfrentamiento de Montoneros con el gobierno llevaba incluso a que la organización sufriera una ruptura. Militantes disidentes que pretendían evitar la disputa intraperonista, decidieron mantener una defensa cerrada de Perón y su programa de gobierno (Garategaray, 2012; Garrido, 2020; Montero, 2008; Pozzoni, 2018). Adoptarían el nombre de JP Lealtad: entre otros elementos de diferenciación, plantearon una actitud de defensa del gobierno y el Pacto Social.

La llamada de *El Descamisado* a “romper” el programa corporativo era la continuación del discurso que Firmenich había brindado en un acto el 11 de marzo, nuevamente en la cancha de Atlanta, por el primer aniversario de las elecciones que habían llevado a Cámpora al gobierno, mas no al poder. El líder de Montoneros había descripto una “doble traición” de la gestión gubernamental: en el plano político consistía en “el desplazamiento de los leales por los traidores”, mientras que en el económico proponía resumirlo en dos palabras: “Pacto Social” (“Hay que romper este pacto social”, 1974). Una vez más, el programa económico aparece como un punto nodal del discurso montonero crítico hacia la conducción del movimiento peronista.

En cuanto al programa, Firmenich admitía que “hemos tenido públicamente varias posiciones según los momentos frente a este pacto social”. Señalaba que primeramente estuvieron a favor porque esperaban “la conducción de los intereses de la clase trabajadora”. Pero, un año después de las elecciones, la situación había cambiado: “Hoy estamos totalmente en contra de este pacto. Hay que romperlo y hacer otro” (“Hay que romper...”, 1974, p. 8). Las críticas fundamentales apuntaban, por un lado, a las representaciones –“grandes empresarios y un sector de burócratas”–, pero ahora también ampliamente contra los términos de intercambio político del programa: “se congela el salario de los trabajadores, se restringe el derecho de huelga, se congela toda posibilidad de luchar por las propias reivindicaciones” (“Hay que romper...”, 1974, p. 9). A pesar de la propuesta de Firmenich de hacer otro pacto, en sus declaraciones se lee una denuncia a los programas corporativistas que buscan sublimar el conflicto de clases y regular las disputas: el líder de Montoneros convocaba a liberar la posibilidad de luchar.

La nueva postura implicaba dejar definitivamente atrás la etapa descrita por Pacheco y Lisandrello (2013), en la que la JTP priorizaba los reclamos por condiciones laborales, abdicando de las luchas salariales para no boicotear el Pacto Social. La revista profundizaba la lectura política que había marcado Firmenich: encontraba en el acuerdo UIA-CGE una señal de que la política empresarial estaba marcada por las empresas monopólicas ligadas al imperialismo. A su vez, se repetían las críticas a la CGT en la semana en que se desataban conflictos en Villa Constitución porque la UOM nacional utilizaba la Ley de Asociaciones Profesionales para intervenir regionales manejadas por delegados basistas. La conclusión, una vez más, era que había que “romper” el Pacto Social (“Por qué hay que romper...”, 1974).

El tránsito resulta notable: originalmente, ante la situación de hallarse fuera de la mesa de negociaciones del pacto tripartito, Montoneros se asignaba desde afuera de ese centro de decisiones el rol de custodio de los términos de intercambio político, en particular en cuanto a los límites de precios y las aspiraciones redistributivas. Ahora, menos de un año más tarde, la organización se proponía romper ese pacto, y rechazaba términos de intercambio similares por insuficientes. Proponemos, pues, que en este caso también se producen reconfiguraciones en los discursos ideológicos en tanto rasgos identitarios en un actor que había quedado excluido, en términos de toma de decisión, del pacto social. Encontramos que el intercambio político condiciona también a los actores que son excluidos de las negociaciones: Montoneros rechazaba ahora cualquier limitación a la lucha obrera y bregaba por la construcción de poder popular, ya no para custodiar el pacto, sino para conducir un programa distinto.

Montoneros apuntaba, aparentemente, a constituir otro pacto, también distributivo, aunque a todas luces más radical. De todas formas, parecía ignorar que, como para bailar el tango, para pactar hacen falta por lo menos dos intervinientes. La posibilidad de construir “un nuevo pacto” aparece como una declamación grandilocuente antes que como un proyecto desarrollado, que permita pensar que efectivamente la organización pretendía un acuerdo con los actores sociales realmente existentes en la coyuntura argentina. Tanto las manifestaciones de Firmenich como las notas del órgano de prensa montonero apuntaban a la necesidad de “liberar” la lucha obrera, y priorizar la acción directa y la movilización antes que los acuerdos institucionales. De este modo, las tajantes críticas transversales a la UIA, la CGE, la

CGT, y la mayoría de los dirigentes del justicialismo, parecían dejar a Montoneros sin interlocutores para impulsar pactos sociales alternativos.

4.3.2. Dar vuelta el tiempo. Antagonizar con el gobierno peronista.

El distanciamiento de Montoneros respecto de la táctica acuerdista del gobierno se acentuaba a partir de discursos que, como el de Dardo Cabo, marcaban una radicalización de las posturas hacia la clase empresarial:

Evita decía que estaba bien eso de que bajo el peronismo durante el primer gobierno los empresarios y trabajadores repartieran la ganancia; pero -decía- para que esto sea justo habrá que tener en cuenta que los empresarios han oprimido y explotado a los obreros durante siglos. Así que primero habría que dejar que los obreros explotaran durante siglos a los patronos, después sí, podemos ir a medias. Porque si no corren con ventaja. (Cabo, 1974a, p. 2)

La retórica no aparece como parte de un discurso que buscara atraer a fracciones de la burguesía para proyectar formas de pacto social alternativas al existente. Sin embargo, el fragmento ilumina una táctica discursiva de Montoneros que se repite a lo largo de su experiencia: la apelación a la memoria del peronismo -tanto en su década de gobierno como en la Resistencia- para sostener sus posiciones en la coyuntura analizada. Se reivindicaba la propiedad del auténtico peronismo a partir de la interpretación de experiencias pretéritas. Retomando el clásico texto de Silvia Sigal y Eliseo Verón (2003), Rocío Otero (2019) analizó esta dimensión del discurso montonero en vínculo con los usos de la figura de Eva Perón y con las formas de conmemoración de los actos del 17 de octubre. También Slipak, en su análisis de la “reinención” de la tradición peronista por parte de la organización, identifica que el primer peronismo resultó constitutivo para la narrativa de *El Descamisado*, ya que sobre él realizó una operación intelectual: “reivindicó una etapa pasada para diferirla como horizonte hacia el cual dirigirse” (2015, p. 99).

A partir de marzo de 1974, para abordar el debate sobre el programa económico, Montoneros aplicaría de manera sistemática una táctica similar. *El Descamisado* lanzó una serie de notas en las que buscaba comparar el Pacto Social con los programas de los gobiernos justicialistas de mediados de siglo, para establecer así que no se trataba de un programa auténticamente peronista, sino que respondía a intereses similares a los que habían guiado los dieciocho años de proscripción. En esta hipótesis, el ministro

era acusado de haber pretendido distorsionar el peronismo en 1955 con el “Congreso de la productividad”. De forma similar, en 1973 aseguraban que “a través del Estado los hombres de Gelbard y Madanes aspiran a ampliar su presencia en la economía nacional” (“El Pacto Social: instrumento de liberación o de dependencia”, 1974, p. 18). También eran criticados los sindicatos por acordar “el pacto empresario”. La tesis consistía en que atacar al gobierno era lo mejor para defenderlo: “Hoy la denuncia del pacto social, peleando salarios, condiciones de trabajo y democracia sindical es la mejor herramienta para defender al gobierno popular” (“El Pacto Social: instrumento...”, 1974, p. 19).

La estrategia continuaba en el número de finales de marzo, en el que se trazaba una línea histórica que asociaba a los militares “nacionalistas” que apresaron a Perón en octubre de 1945 con los que lo derrocaron diez años después, para llegar finalmente a los empresarios “nacionalistas” que se encargaban de la política económica en el tercer gobierno peronista (“¿Liberación sin ...?”, 1974). Lo que esta crónica no explicitaba es que era el propio Perón, víctima de aquellos militares, el que había elegido a estos empresarios.

El relato histórico de la “verdadera” economía del peronismo ofrecido por Montoneros señalaba al momento de conquistas laborales que Perón promovió antes de asumir, junto al quinquenio 1946-51, como los períodos centrales a analizar, que se habrían caracterizado por la “justicia social y movilización popular” (“¿Liberación...”, 1974, p. 18).

Asimismo, Otero afirma que el sujeto histórico del auténtico peronismo en los relatos montoneros cambia entre el período de gobierno y el de la proscripción, y por ello marca “el peso de la memoria de la Resistencia en la construcción de un sujeto histórico, vanguardia de la revolución y, por lo tanto, la superación de la figura del ‘descamisado’” (Otero, 2019, p. 191). En cambio, la figura del empresariado en estos relatos aparece como un constante retraso para la liberación, ya sea directamente como enemigo del peronismo o como un elemento que, al interior del movimiento, tiene efectos retardatarios y que desalientan su poder transformador, siempre era caracterizado negativamente. De este modo, afirmaban que los empresarios -entre ellos Gelbard-, en el período 1952-55 “debilitan desde adentro al gobierno popular (...) [Para los empresarios] el peronismo debía abandonar sus contenidos revolucionarios” (“¿Liberación...”, 1974, p. 18). En estas notas, eran ubicados como colaboracionistas

de los gobiernos del período 1955-1973, y responsables a su vez del Pacto Social. En la tesis montonera, el programa era reinterpretado como una pieza de la puja interburguesa, por la que la CGE buscaba “fortalecer su capacidad de negociación para obtener una parte estable de la economía nacional frente a los imperialistas” (“¿Liberación...”, 1974, p. 19).

En esa clave, eran criticadas nuevamente políticas como la CEN y la legislación para las inversiones extranjeras, pero al mismo tiempo eran otra vez resignificadas negativamente -ya fuera por sus limitaciones o por sus efectos- medidas que Montoneros había celebrado, como el control de precios, el control del comercio exterior de granos, la nacionalización de depósitos bancarios, y el proyectado impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Pero, fundamentalmente, denunciaban los términos de intercambio político: sostenían que los trabajadores otorgaban mayores concesiones -limitaciones salariales, renuncia a la protesta directa- que los grandes empresarios, apuntados como los verdaderos beneficiarios del Pacto Social (“¿Liberación...”, 1974). Al igual que en el análisis de Otero sobre los relatos históricos montoneros, la denuncia de los términos de intercambio político del acuerdo tripartito le reservaba a la organización el mismo rol de vanguardia revolucionaria del movimiento peronista.

La Gran Paritaria de marzo no acalló las protestas. La combinación de aumentos salariales por encima de la inflación junto a adecuaciones tarifarias no satisfacía las pretensiones de la organización. Así surgía de una crítica que, se anunciaba, no partiría de un enfoque meramente económico: “Con la economía por sí sola no pasa nada. Y Perón fue el primero que nos alertó sobre esto. Todo es política. Y así vamos a enfocarlo” (“Con los aumentos...”, 1974, p. 2). La conclusión sobre la Gran Paritaria era escéptica: “no va a cambiar nada esta renegociación de los burócratas, el empresariado grande y el gobierno” (“Con los aumentos...”, 1974, p. 2). A su vez, señalaban que el aumento salarial era exiguo, ya que iba a ser consumido rápidamente por la inflación, y proponían dos medidas: crear comisiones populares de control de precios, y permitir que las comisiones internas de la industria controlasen los costos de producción empresarios. Abogaban de este modo por la aplicación de “formas concretas de poder popular” (“Con los aumentos...”, 1974, p. 2).

Bien mirado, resulta lógico que Montoneros se opusiera a los resultados de la Gran Paritaria, ya que los representantes en el Pacto Social seguían siendo los mismos,

y las modificaciones de los términos de intercambio político -en términos de salarios y precios- estaban lejos de ser radicales. Se trataba de una reforma que modificaba lo establecido en el acuerdo inicial, pero no implicaba una ruptura de la forma general de pacto con participación corporativa que, a priori, fortalecía a los empresarios de la CGE y los sindicalistas de la CGT, ambos, ahora, adversarios de Montoneros.

No obstante, el abordaje del Pacto Social resaltaba cada vez más las transformaciones discursivas de la organización: de autodesignado custodio de los términos de intercambio político del programa había pasado a convertirse en el principal impulsor de la ruptura del mismo. La noción de “frente de clases” era cada vez menos recurrente y más vaga en los discursos montoneros, y era reemplazada por la centralidad discursiva de los mecanismos de control popular y la hegemonía obrera.

La disputa intraperonista se acentuaba cada día más: en marzo, *El Descamisado* explicaba con satisfacción el asesinato del dirigente sindical Rogelio Coria, y en abril se confirmaba la intervención de la provincia de Córdoba, lo que implicaba la salida definitiva de Obregón Cano. El 8 de abril, el gobierno resolvió la clausura de *El Descamisado* a través del Decreto 1100/74. Su codirector, Ricardo Grassi, la atribuye al editorial sobre la muerte de Coria y la acusación contra López Rega por el asesinato de Alberto Chejolán, militante del MVP (Grassi, 2015). Muestra de la relevancia del Pacto Social en la discusión política, el último número exhibía como único título de tapa una referencia crítica a la relación entre precios y salarios: “Aumentos: aquí no ha pasado nada”.

Sin embargo, el 19 de abril salió a la calle el primer número de *El Peronista*, nuevo órgano de prensa montonero, que repetía al codirector Grassi pero reemplazaba a Dardo Cabo en el puesto de director por otro militante peronista de larga trayectoria, Miguel Lizaso. Slipak confirma que “la línea editorial que siguió *El Peronista* fue la misma que *El Descamisado*” (2011, p. 52).

En ese primer número publicaba *Un documento para la liberación*, una declaración que Montoneros había entregado al coronel Vicente Damasco, para que le hiciera llegar a Perón¹⁰⁴. El documento oficializaba y sistematizaba las posturas que

¹⁰⁴ Esta reunión consta en el último número de *El Descamisado*. Sobre Damasco, González recuerda que Perón lo había convertido en un nexo con los sectores de la juventud del movimiento, por lo que entre finales de 1973 y principios de 1974 había organizado reuniones a las que convocaba a diversos grupos de jóvenes del peronismo, pero nunca se lograron mayores acuerdos (González, 2015).

Firmenich y *El Descamisado* habían vertido sobre el Pacto Social: “un instrumento para la congelación de la lucha de los trabajadores” (Montoneros, 1974b, p. 28). A su vez, enmarcaba la reforma del código penal, y el uso de las leyes de Prescindibilidad y de Asociaciones Profesionales contra militantes de la Tendencia, como herramientas que el gobierno utilizaba producto de la concepción política que se desprendía del pacto con las entidades corporativas.

Si la primera sección repetía las críticas al programa económico social, la segunda, en cambio, proponía alternativas. Señalaba como deseable “el camino de la nacionalización y la socialización de la economía”, para “reencauzar este proceso hacia la liberación nacional”. Las propuestas directamente relacionadas con el programa provenían de la JTP y de la JP Regionales. Esta última se concentraba en dos elementos: la exigencia de modificaciones en la legislación y la aplicación de “políticas represivas” del agio, y por el otro, proponía la creación “de estructuras barriales y municipales” que denunciaran el desabastecimiento y el incumplimiento de precios oficiales. El objetivo era terminar con “la usura y la especulación por parte de los grandes comerciantes y empresas monopólicas” (Montoneros, 1974b, pp. 32–33).

La JTP, por su parte, repetía en sus propuestas algunos tópicos recurrentes relacionados con la legislación represiva, el pedido de aumentos salariales cada seis meses y la incorporación al Pacto Social de la discusión de condiciones laborales. Sin embargo, también presentaba nuevos reclamos, como brindar a las comisiones internas la autoridad para auditar costos de producción dentro de las fábricas y facilitar sus denuncias sobre acaparamientos. Exigía, también, nuevas normas para aplicar la “democracia sindical”, y, finalmente, apuntaba directamente al gabinete: “Destituir a todos aquellos funcionarios que, como el señor ministro Otero, comprometidos en fraudes y corrupciones, son agentes de la dependencia” (Montoneros, 1974b, p. 31).

La referencia al ministro de Trabajo no era inocente: la JTP lo caracterizaba como parte del “vanderismo”. Sin embargo, al involucrar a todos los funcionarios relacionados con actos de corrupción, el comentario parece susceptible de abarcar, en la visión de la Tendencia, a Gelbard, quien, como vimos, había sido acusado a lo largo de los números de *El Descamisado* de utilizar su posición para diversos negocios propios y de allegados. Más aún cuando en el documento se apuntaba contra los “hombres que habían pactado con los monopolios, con las patronales, con las cúpulas militares” (Montoneros, 1974b, p. 26).

Las propuestas del documento, en particular las que aportaba la JTP, pero ahora incluidas en un comunicado que aglutinaba a todos los “frentes de masas” bajo la firma de Montoneros, reflejaban el lugar central que tuvo el discurso sobre el Pacto Social en el progresivo fenómeno de alejamiento y antagonismo de la organización ante el gobierno peronista.

4.3.3 *Hacia una declaración de guerra. El Pacto Social como motivo de defección de la coalición gobernante.*

Los enfrentamientos discursivos constituían el prolegómeno de la confrontación abierta en ocasión del acto convocado por el gobierno para el Día del Trabajador, que culminó con la retirada de la Plaza de Mayo de las columnas de Montoneros y sus organizaciones afines (Bartoletti, 2010; Gillespie, 2011; Otero, 2019). En la reproducción del discurso de Perón ofrecido por *El Peronista*, se lee que, luego de los insultos a los “imberbes” y la referencia a un “escarmiento” que preceden a la retirada, el presidente continúa con referencias al sindicalismo y su rol en el programa de gobierno: “Compañeros, deseo que antes de terminar estas palabras lleven a toda la clase trabajadora argentina el agradecimiento del gobierno por haber sostenido un pacto social que será salvador para la República” (Perón, 1988c, p. 51). La respuesta de los militantes que se retiraban era unívoca: “Conformes, conformes, conformes, general. Conformes los gorilas, el pueblo a luchar.” (“Conformes los gorilas”, 1974, p. 7).

Después del acto, Montoneros emitió un nuevo comunicado en el que ratificaba sus objeciones. Analizaba positivamente la política exterior, comunicacional, y previsional del gobierno, pero volvía a denostar a la CGT –“controlada por el aparato vanguardista”-, la CGE, y la política general de la gestión: “se cuestiona el rumbo total de este proceso y pedimos la reformulación”. Incluía, también, una amenaza: “De continuar esta política económica, se producirá, tarde o temprano, la ruptura del frente de liberación y se destrozará la unidad nacional” (“Hablan los montoneros”, 1974a, pp. 22–25).

La espiralización de la disputa con Perón parecía indetenible. En este marco, el discurso montonero hacia el gobierno era cada vez más crítico, en un contexto en el que denunciaba la conspiración contra los gobernadores afines en diversas provincias, y torturas contra sus militantes por parte de la policía (“Objetivo principal: liquidar a

los militantes de la juventud”, 1974). En todos sus números, *El Peronista* denunciaba el Pacto Social, mientras que las pocas palabras elogiosas que quedaban se relacionaban con la política exterior: en particular, con la venta de autos a Cuba aun ante ciertos reparos de los Estados Unidos (“Dos hechos importantes”, 1974), y con la exitosa misión de Gelbard a la URSS (“Con Moscú...”, 1974). Pero incluso en esos análisis se advertía nuevamente que la política internacional no podía escindirse de la crítica situación nacional, y se presentaban reparos ante una política de fomento a las exportaciones “porque resta productos del consumo interno. Sobre todo, si se trata como en el acuerdo firmado con la URSS, de bienes de consumo masivo, como la carne, el arroz, y las frutas” (“Con Moscú...”, 1974, p. 27).

El Peronista también expresó el rechazo montonero al Plan Trienal en el análisis socioeconómico más profundo que presentó la revista en sus seis números. La nota no tiene firma, pero probablemente estuvo a cargo de Juan Ascone, secretario de redacción de la revista, que antes había sido columnista económico en medios de prestigio como *Primera Plana* y *La Opinión* ¹⁰⁵.

Bajo el título “Cuando las cifras engañan”, se criticaban las estimaciones presupuestarias y la expectativa de crecimiento para el trienio siguiente por resultar demasiado optimistas. También el fomento desmesurado de las exportaciones porque “[implicaba que] la prioridad del equipo económico es acumular suficientes divisas más que mejorar el poder de compra de los trabajadores”. El artículo identificaba los elementos que se encontraban en tensión entre el Estado y los empresarios en los acuerdos inaugurados por el ACN: “(...) el proceso de capitalización en el marco de un intento sumamente moderado de redistribución de ingresos a favor de los trabajadores es la exigencia que el Estado impone al sector empresario en un plano puramente económico” (“Cuando...”, 1974, pp. 19–21).

El último análisis aporta una serie de elementos: se reconoce por primera vez en esta tercera etapa que abordamos un intento de redistribución -aunque moderado frente a las expectativas montoneras- a favor de los trabajadores. Este proceso de redistribución se corresponde con las estimaciones que ubican a los salarios reales de 1974 como los más altos de la serie 1970-1976, y, probablemente, entre los más altos de la historia argentina (Di Tella, 1986; Rougier & Fiszbein, 2006). Sin embargo, en

¹⁰⁵ Sobre la trayectoria de Ascone, ver Grassi (2015) y Baschetti (s. f.).

el proceso que Montoneros había recorrido desde el movimientismo hacia el tendencismo, y desde la aceptación de los términos de intercambio político hasta su total rechazo, esto no resultaba suficiente. De este modo, se mantenían las objeciones contra las representaciones sectoriales del pacto. También se asociaba a éste con el endurecimiento del código penal y el aumento de la represión, y por ello en el siguiente editorial se afirmaba sobre el programa: “Quienes lo conducen, los grandes empresarios argentinos, los principales beneficiados de hoy no lo serán mañana. (...) También el gran empresariado nacional tendrá que morder el polvo de la derrota” (Lizaso, 1974, p. 2). Aun cuando se reconocía cierto intento de redistribución progresiva, los fragmentos reflejan el alejamiento del discurso montonero de las posiciones que bregaban por una táctica alianza de clases, y antagonizaba cada vez más con los términos de intercambio político del programa.

Era cuestión de tiempo para que *El Peronista* corriera la misma suerte que había sufrido *El Descamisado*. La clausura de esta segunda versión del órgano editorial montonero dio paso a una nueva revista, *La Causa Peronista*, en la que Grassi permanecía en el rol de codirector, y Miguel Lizaso era reemplazado en la dirección por Galimberti, quien reaparecía en un lugar de exposición luego de ser relevado como dirigente de la Juventud Peronista. Su primer número fue publicado en una fecha patria: el 9 de julio, a tiempo para sentar posición sobre la muerte de Perón. El titular rezaba laicamente: “Murió nuestro líder... Los peronistas nos quedamos solos”. En su interior, incluía un comunicado de Montoneros en el que se advertía sobre un vacío de poder y llamaba a un acuerdo político interpartidario para apuntalar el futuro gobierno (Montoneros, 1974d).

Otero señala acertadamente que, así, “desautorizaba a Isabel, al denunciar la ausencia de una conducción” (2019, p. 105). Por su parte, Bartoletti identifica este momento como el quiebre en el que Montoneros inicia una postura alternativista (Bartoletti, 2010). Pero, además, la muerte de Perón dejaba a la organización sin referentes en el gobierno justicialista, solo adversarios y enemigos. Su nuevo discurso sobre el Pacto Social lo reflejaba claramente: continuaba denunciándolo, pero al mismo tiempo advertía que los ataques del sindicalismo a dicho programa no eran mejor noticia. En especial porque Miguel y el “vandarismo” ganaban cada vez más peso en la central sindical luego de la muerte de Romero en los primeros días de julio.

Es por ello que analizaban que el desplazamiento de Gelbard podía resultar peor para sus posiciones si llegaba un hombre de ese núcleo:

Obviamente, nadie más vulnerable que Gelbard con un pacto cuestionado por los trabajadores. Y desde esa perspectiva, la de los trabajadores, es que el vandomismo desarrollará su ofensiva. Porque no solo intenta desplazar a un ministro, sino popularizarse como corriente sindical. (“Lo que significa...”, 1974, p. 7)

Es así que Galimberti señalaba a Cafiero, que había sido promovido dentro del gabinete económico, como un alfil en la ofensiva “vandomista” contra el ministro de Economía: “Como quien no quiere la cosa, colocaron a Cafiero (...) en la Secretaría de Comercio. Tal vez su puesto sea transitorio: no sería de extrañar que fuese el candidato a sucesor de Gelbard” (Galimberti, 1974c, p. 3). Montoneros había rechazado, incluso desde antes de la asunción de Cámpora, la posibilidad de que Cafiero fuera designado ministro (Friedemann, 2021b).

En el terreno de la economía, Montoneros se concentró en esta etapa en denunciar los incumplimientos empresarios al Pacto Social, como los despidos, el desabastecimiento, el acaparamiento, y la proliferación de mercados paralelos ilegales de diversos productos: una de las últimas medidas del gobierno que apoyó en este período fue el impulso de la ley de Abastecimiento. De hecho, en esa misma línea discursiva, Quieto retomó elementos de las palabras de uno de los últimos discursos de Perón, intentando generar un vínculo con la figura del fallecido líder: “(...) Después del 12 de junio comenzamos a advertir los primeros síntomas e indicios que denotaban que se estaban introduciendo medidas que significaban corregir los errores políticos que habíamos venido observando a lo largo de un año...” (“Hablan los montoneros”, 1974b, p. 7). Sin embargo, en el mismo discurso, advertía sobre la necesidad de constituirse en resistencia “frente al avance de la derecha”, y convocaba a “preparar la retaguardia” en lo que hoy puede leerse como un adelanto de lo que ocurriría en septiembre.

Que Gelbard fuera enemigo de sus enemigos no implicaba para Montoneros un aliciente para moderar su discurso: las acusaciones contra los empresarios incluían ahora al gabinete económico. En una nota en la que denunciaban el deterioro del Pacto Social, concluían: “Los empresarios que dirigen la política económica del gobierno se preparan para sacar la mayor tajada en la devolución de los controles económicos y

financieros a los gerentes imperialistas desplazados el 25 de mayo de 1973” (“Imperialismo: solo quiere gerentes”, 1974, p. 17). Mientras, Galimberti ratificaba su crítica a los hombres de la CGE por confluir con la UIA (Galimberti, 1974e). La impugnación de Montoneros del programa económico y sus representantes lograba una virulencia inédita: las objeciones alcanzaban tanto a los términos de intercambio político como a las representaciones corporativas, y, ya sin Perón como respaldo de Gelbard, a la representación del propio Estado a través del ministro de Economía.

El concepto de intercambio político nos resulta útil para el análisis porque no se detiene en el mero transaccionismo, sino que hace intervenir en el proceso a las ideologías y las identidades. En ese sentido, el discurso económico social de Montoneros había transitado desde el enaltecimiento del “frente de clases” como eje de sus relatos, hacia una nueva voz que priorizaba las construcciones centradas en la hegemonía obrera, en las que se proponía un rol subordinado para los pequeños empresarios y el de enemigos para los capitales internos medios y grandes, al igual que para todos los externos, definidos como monopolistas. Es así que, a partir de agosto, Montoneros ya “preparaba la retaguardia” y dejaba de lado los matices:

Si los monopolios -como la Ika- *prepean* a los obreros, el vandorismo aplaude a los monopolios y les manda la protección de la Gendarmería. Si los trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo y salarios justos, los atacan por romper un pacto social que solo beneficia a los patrones. (Galimberti, 1974f, p. 3)

El discurso se inscribía en el conflicto del SMATA cordobés que había sido intervenido por el sindicato nacional con el apoyo del Ministerio de Trabajo, desplazando a representantes del sindicalismo basista. Montoneros se oponía al gobierno y planteaba una postura favorable a los sectores de la izquierda no peronista. Al mismo tiempo, crecían los crímenes asociados con la Triple A, también denunciados por la revista, como el asesinato de Rodolfo Ortega Peña.

Ante las actividades armadas del ERP en Catamarca, el 20 de agosto *La Causa Peronista* se preguntaba en tapa: “¿Llegó la hora de la guerrilla?”. La respuesta, en el interior de la revista, era que “todavía no” –“lo de Catamarca es apresurado” (Galimberti, 1974a, p. 3)-, pero las críticas a la situación nacional -entre ellas el Pacto Social- hacían que no condenara totalmente las reivindicaciones guerrilleras.

El 27, ante la combinación de represión a las protestas obreras en Córdoba, junto al accionar de la Triple A (Besoky, 2010), Galimberti ahondaba: “No podemos seguir llamando simplemente represión a lo que es una guerra, una guerra sucia contra el pueblo” (Galimberti, 1974d). En el mismo número, se incluía la última crítica contra Gelbard y su proyecto petrolero, rechazado por la oposición e, incluso, por legisladores peronistas vinculados al oficialismo que minaban las posiciones del ministro. De estas pujas, emergió una medida nacionalista: la prohibición de ejercer el comercio minorista de combustibles a empresas extranjeras (Barrera & Vitto, 2009). La crítica, no obstante, se centraba en el proyecto de Gelbard y en el desplazamiento de Fatigati al frente de YPF (“Hasta dónde llega...”, 1974).

El último número de *La Causa Peronista* incluía un análisis del escenario político, provisto nuevamente por Galimberti. Dentro del gobierno identificaba tres bandos: el dúo “Isabel – López Rega”; el “vandonismo”, conducido por Lorenzo Miguel y flanqueado por Otero; y “finalmente, está Gelbard como expresión de un sector de empresarios nacionales. Como en 1955, con Lanusse, como ahora, se alían con los sectores proimperialistas” (Galimberti, 1974b, p. 2). El ministro de Economía era ubicado decididamente en un lugar antagónico, junto al enemigo “imperialista”. Sin embargo, estas críticas palidecían junto al artículo principal del número: una entrevista a Firmenich y Norma Arrostito, en la que relataban minuciosamente cómo habían secuestrado y ejecutado, cuatro años antes, a Pedro Eugenio Aramburu. La tercera clausura al órgano de prensa montonero no podía resultar un hecho sorprendente.

Fue el 6 de septiembre cuando la organización decidió brindar una conferencia de prensa encabezada por Firmenich -por la Conducción Nacional-, Enrique Juárez (JTP), Gullo (JP Regionales), Adriana Lesgart (Agrupación Evita) y José Pablo Ventura (JUP), en la que se concretó un hecho que quedaría grabado en la historia política argentina como el “pase a la clandestinidad” de Montoneros. En verdad, se trataba de la segunda etapa de clandestinidad de la organización, ya que había iniciado sus actividades en 1970 en la misma condición.

El comunicado continuaba la línea crítica contra el sindicalismo oficialista, denunciando “el copamiento de la CGT por representantes del vandonismo”, que, paradójicamente, identificaban como un hito logrado luego de las muertes de Rucci y Romero. Esto se sumaba “al control que ese sector ya tenía sobre el Ministerio de Trabajo y las 62 Organizaciones” (Montoneros, 1974a, p. 36). También entre los

considerandos -el escrito replicaba el formato de los documentos oficiales del Estado- se incluía la represión paraestatal, los asesinatos de militantes peronistas, y, fundamentalmente, “la vigencia de un pacto social que es un atentado a los intereses de los trabajadores”. Por ello, se presentaba un pliego de demandas que, entre sus puntos centrales, incluía un llamado a “la democracia sindical”, y la “anulación del actual pacto social”. Hasta tanto el gobierno cumpliera, Montoneros decidía llamar a la “RESISTENCIA POPULAR”, y “reasumir las formas armadas de lucha, que junto con todas las otras formas (actos, movilizaciones, huelgas, caños, etc.) constituyen, la guerra popular integral” (Montoneros, 1974a, p. 37).

Se consumaba, de este modo, la defección total de la coalición gobernante por parte de Montoneros, el actor que había protagonizado, al menos hasta marzo de 1973, las movilizaciones y acciones de campaña proselitista que habían devuelto al peronismo al gobierno nacional. Esta decisión señala el punto cúlmine de la impugnación montonera de los términos de intercambio político del pacto, así como de la legitimidad de los representantes que lo suscribían. En un contexto de violencia creciente -guerrillera, estatal, y paraestatal-, acentuaba el antagonismo hacia poderosos actores económicos, corporativos y gubernamentales, la mayoría de los cuales eran, al mismo tiempo, los sostenes del esquema tripartito. De este modo, Montoneros transitó un camino sinuoso desde el apoyo ambiguo al Pacto Social hasta su total rechazo, y desde la cohabitación en la coalición gobernante hasta una aguda oposición expresada mediante una declaración de guerra.

Conclusiones

Abordar el devenir del Pacto Social implica involucrarse en una historia de desencuentros. A lo largo de la tesis abordamos las posiciones de actores sociales, políticos y económicos de la coalición oficialista que, según el caso y el momento, apoyaron, criticaron, boicotearon o reinterpretaron el contenido del ACN. A su vez, la gestión Gelbard transcurrió durante un período relativamente breve, de inestabilidad y convulsión política, conviviendo con cuatro presidentes distintos en un año y medio; mientras que las disputas intraperonistas involucraron ataques a protagonistas del programa, incluyendo el asesinato de uno de los suscriptores del documento fundante.

En definitiva, el programa no cumplió cabalmente sus objetivos iniciales y el ministro fue desplazado en octubre de 1974 junto a su equipo. La propuesta del trabajo consistió en un abordaje complejo que evitara las sentencias unívocas, presentes en parte de la bibliografía, que tienden a acusar a determinados actores de traicionar el programa condenándolo al fracaso. Antes bien, el proceso se correspondió con una dinámica que incluyó disputas políticas, económicas y técnicas, que no fueron canalizadas de manera exitosa por las instancias de mediación establecidas en el programa.

Con ese fin, articulamos el relato alrededor de dos conceptos principales. El enraizamiento fue caracterizado como un objetivo del Pacto Social, logrado a medias, pero que no fue estabilizado: evidentemente los canales de negociación e información entre el Estado y la sociedad civil no fueron exitosos para mantener la cooperación entre los actores o resolver disputas alrededor del programa. No obstante, esta noción resultó útil para abordar vínculos institucionales entre estos actores, como la COPINV y la Gran Paritaria, pero también para abordar otras formas de esa relación, como la designación de hombres de la CGE a cargo del Ministerio de Economía, y la consulta permanente desde ese organismo hacia referentes de la entidad empresarial en materias diversas. Estos funcionarios habían intervenido en la formulación de iniciativas que significaron un antecedente para el programa. Es así que el enraizamiento, concepto recurrente de la sociología económica, también fue considerado en el análisis acerca de cómo se relacionan los saberes y discursos económicos con los contextos institucionales y políticos en los que se forjan o aplican.

Si el enraizamiento resultaba un propósito más amplio, el intercambio político permitió vislumbrar las formas en que los actores se relacionaron en este contexto, ya que fue identificado como el proceso subyacente que estructura los pactos sociales. Este concepto nos permitió pensar en actores que intentaban articular intereses, pero al mismo tiempo confrontaban respecto de las condiciones en las que eso debía ocurrir. A su vez, el intercambio político pone en primer plano la racionalidad de los protagonistas. No obstante, la misma no fue presentada como propia de actores maximizadores, carentes de marcos culturales; por el contrario, el intercambio político sucede entre protagonistas con ideas políticas, inmersos en procesos históricos, a lo largo de los cuales sus identidades se pueden ver modificadas.

El proyecto de Gelbard era, por lo tanto, ambicioso en cuanto a la pretensión de articular actores socioeconómicos heterogéneos, alrededor de un pacto social coordinado por el Estado. No obstante, esa diversidad fue resumida a través de la representación de dos organizaciones corporativas privilegiadas: la CGE y la CGT fueron partes integrantes de la coalición político social oficialista, firmaron el ACN junto a la cartera económica, e integraron la COPINV y el directorio del CEN, entre otros organismos tripartitos. En este proceso, existieron términos de intercambio político explicitados en documentos oficiales: aumentos de salarios reales moderados junto a una política de ingresos que se pretendía estable y previsible, retracción y congelamiento de precios, actualización de tarifas, integración de organismos tripartitos por parte de representantes corporativos, entre otros. Pero otra parte de esos términos resultaban implícitos: fundamentalmente los referidos a la legitimación recíproca entre las organizaciones corporativas y el gobierno.

El programa tenía vínculos con el pasado reciente, marcados por el acercamiento entre la CGE y la CGT en la última etapa de la dictadura saliente; y, a su vez, reconocía como antecedentes experiencias de pactos sociales en países europeos. Sin embargo, el marco del retorno del peronismo al gobierno luego de dieciocho años de proscripción asignaba a la iniciativa un carácter fundacional que buscaba romper con el pasado, caracterizado mayormente de manera negativa. Es así que, en los albores del programa, dirigentes de la CGE anunciaban que era el inicio de la redefinición de la figura del empresariado en la Argentina, una etapa en la que el capital venía a revelarse como nacional, vinculado a su país para su desarrollo y envuelto en una relación justa con los trabajadores, para lo cual la posición de Gelbard en el gabinete

era importante. Los dirigentes de la CGT, por su parte, no pudieron imponer el candidato a presidente ni el ministro de Economía; tan solo ubicaron a uno de sus hombres en la cartera laboral. Sin embargo, también identificaron el inicio del tercer gobierno peronista y el Pacto Social como un momento de ruptura con el pasado en el que tendrían más poder para negociar. Es por ello que Rucci también anunciaba un nuevo tiempo para los trabajadores y una nueva filosofía para el salario.

A pesar de la expectativa compartida, estas organizaciones se encontraban en condiciones diferentes para abordar el desafío del Pacto Social. La CGE aparecía con dos elementos a su favor: en términos técnicos, mostraba una trayectoria más extensa en la formación de cuadros expertos “orgánicos” a través del IIEF-CGE. En términos políticos, su relación con el ministro de Economía era mucho más estrecha que aquella a la que podía aspirar su contraparte. Las vías de comunicación del Estado con estas organizaciones de la sociedad civil no se mostraban equilibradas, lo que podía dificultar la estabilización del enraizamiento.

Durante los primeros meses, en un contexto de recrudecimiento de la disputa intraperonista e inestabilidad política, el programa mostró logros importantes, en particular relacionados con la contención de los niveles de inflación. Sin embargo, rápidamente los posicionamientos de los actores del Pacto Social resultarían puestos a prueba por un elemento del programa que la bibliografía ha señalado como una falencia central: su inflexibilidad. El encarecimiento de insumos, especialmente los importados, llevó al sector empresario a solicitar autorizaciones para aumentar los precios de los productos finales. El anuncio de la decisión de la cartera económica de avanzar en una segunda etapa del programa -no prevista en el ACN- para la flexibilización de ciertos precios, desató una disputa hermenéutica sobre los términos de intercambio político del pacto. La reivindicación de Rucci, consistente en que las convenciones colectivas definieran aumentos salariales a fin de año, obtuvo otra reinterpretación del programa como respuesta: Broner no se negó de plano a las modificaciones, pero solicitó que fuera la COPINV quien lo definiera. El funcionamiento de esta comisión por fuera del CONES implicaba, en sí mismo, un incumplimiento del ACN.

El homicidio de Rucci solo postergó la definición de esta polémica. Hacia finales de año, los reclamos empresariales aumentaron, a medida que las importaciones se encarecían al calor de la crisis internacional del petróleo. Su disconformidad no solo

se expresaba institucionalmente, sino también a través de la ausencia de inversión privada y del desabastecimiento. Gelbard y la cúpula de la CGE mostraron durante todo el programa unidad de criterios; sin embargo, por la reticencia de los sindicatos, hacia fin de año el ministerio solo autorizaba aumentos de precios puntuales. La reacción de la CGT operó en dos planos diferentes: denunció que el ministro y los empresarios rompían los equilibrios de precios y salarios dispuestos por el ACN, erigiéndose en defensora de los términos de intercambio político del pacto y denunciando a sus gestores por traicionarlo; y cuestionó las mediciones de la COPINV por poco abarcativas. La disputa se producía tanto en el plano político, como en el técnico.

La necesaria intervención de Perón en estas disputas puso en cuestión la autoridad del ministro. Para resolver cualquier entredicho en este programa, la CGT proponía jerarquizar la COPINV. Con un CONES ampliado, mayores representaciones entraban en el compromiso. Por el contrario, con una comisión tripartita fortalecida, la distancia entre la palabra de tan solo dos organizaciones corporativas, involucradas en decisiones que afectaban a toda la sociedad y a actores no incorporados a esa mesa de decisión, se ampliaba. No solo se disputaban los términos de intercambio político, sino también sus reglas y la estructuración institucional del pacto.

La presión sindical logró que, a principios de 1974, Perón interviniera nuevamente de manera directa con una solicitud de aumentos salariales, minando una vez más la autoridad del equipo económico. Este fenómeno se acentuaría durante la Gran Paritaria de marzo, que mostró la disfuncionalidad de los organismos tripartitos establecidos: ante la falta de acuerdo, tuvo que ser el presidente quien laudara en la disputa. La instancia fallida revelaba que la definición del aumento no se había producido de ninguna de las formas propuestas en septiembre por Rucci y Broner, quienes no habían logrado imponer sus interpretaciones del ACN. Además, tanto el hecho de que incluyera un temprano aumento por productividad, como las fechas y los montos dispuestos, implicaban una redefinición de los términos de intercambio político del pacto social, en particular en lo relativo a la política salarial y su equilibrio con los precios.

La última intervención de Perón en esta dinámica fue en junio de 1974, definiendo, aun antes de la convocatoria a la Gran Paritaria, que los trabajadores debían recibir un doble aguinaldo y las empresas créditos blandos.

Si parecía que esta intervención debilitaba la posición de Gelbard, la muerte de Perón solo empeoró el cuadro. En ese contexto, los sindicalistas sabían que el ministro perdía un apoyo crucial, y se vieron en posición de fortalecer su lugar en un pacto tripartito que, hasta entonces, había constituido formas de enraizamiento desequilibradas que ligaban a la autoridad estatal pertinente con los representantes empresarios de modo mucho más directo que con los sindicales. Es así que, en agosto, lograron que la Secretaría de Comercio fortaleciera la COPINV y convocara a las empresas a que presentaran sus libros contables, pero no fue suficiente: en septiembre negociaron directamente con la presidenta una nueva convocatoria para redefinir los términos del ACN, y en octubre Gelbard fue desplazado.

La estabilización del enraizamiento entre el Estado y estas organizaciones de la sociedad civil había fracasado. Los órganos tripartitos de negociación y diálogo se habían mostrado ineficaces para canalizar institucionalmente las disputas alrededor de los términos de intercambio político del Pacto Social.

Los roles asignados para los técnicos e intelectuales económicos oficialistas tuvieron estrecha relación con el marco institucional que brindaba el pacto tripartito. Antes de asumir, Gelbard no tenía el padrinazgo de ningún espacio del movimiento justicialista, pero su relación con Perón y el acercamiento de la CGE a la CGT en los años previos lo posicionaron como encargado de la cartera económica.

Encontramos que ni el conocimiento económico en general, ni los programas en particular, pueden ser plenamente aprehendidos de manera escindida de su contexto de producción: la continuidad entre el ACN y las “Coincidencias programáticas” expresaba la sinergia previa entre ambas organizaciones corporativas. Sin embargo, los funcionarios vinculados a uno y otro espacio ocuparían lugares diferentes en el equipo económico.

El grupo de funcionarios que conformaban el entorno más cercano a Gelbard poseía una serie de características comunes: sin fuertes ligazones con el peronismo, entre 1955 y 1973 habían desarrollado sus actividades técnicas e intelectuales en condiciones de relativa normalidad, incluyendo su desempeño profesional en áreas del Estado y el sector privado. Además, muchos de ellos habían formado parte del gobierno radical de Arturo Frondizi, y participado en el IIEF-CGE. De este modo, dentro del esquema tripartito, el equipo económico privilegió el vínculo con la CGE,

articulando formas de enraizamiento que combinaban prácticas institucionalizadas con otros contactos de tipo informal.

Los escasos referentes económicos del peronismo que fueron nombrados en el ministerio se distinguían del primer grupo. Los tres habían sido ministros de Perón, motivo por el cual entre 1955 y 1973 no tuvieron lugar para participar de la gestión estatal, y tuvieron inconvenientes para generar espacios profesionales vinculados al ilegalizado movimiento peronista. Recién cerca del final del período, se incorporaron en conjunto a una usina de pensamiento de extracción diferente al IIEF-CGE: el Consejo de Planificación del Movimiento Nacional Justicialista. A su vez, sus relaciones primarias no eran con sectores empresarios, sino con los actores clásicos del justicialismo. El desembarco de Revestido y Cafiero -ambos de buenas relaciones con el sindicalismo- en la Secretaría de Comercio puede ser leído como una consecuencia del Pacto Social: dentro de ese programa era vital para los representantes del trabajo evitar aumentos generalizados de precios. De ese modo, era coherente constituir a dicha secretaría en el espacio por excelencia de enraizamiento entre el Estado y la CGT dentro del Ministerio de Economía.

Las características de ambos grupos invitan a evitar las distinciones tajantes entre intelectuales políticamente comprometidos y expertos guiados por la racionalidad técnica, priorizando la reflexión acerca de la “contaminación” recíproca entre esas figuras, en algunos casos, hasta no distinguirse un límite. Se trataba de actores que poseían tanto saberes técnicos como destrezas para la articulación política.

La convivencia entre estos dos tipos de funcionarios de trayectorias tan disímiles no estuvo exenta de controversias. En el caso de Gómez Morales, las mismas se reflejaron en desacuerdos alrededor de la política cambiaria, y la definición de tasas de interés no tan generosas como las solicitadas por los empresarios; mientras que en el área de Comercio, las tensiones giraron alrededor de la regulación de los precios.

En cuanto a los expertos e intelectuales de la coalición oficialista que no fueron incorporados al gabinete, las reacciones fueron diversas. Sbarra Mitre, economista que articulaba un marco de análisis marxista con su identidad peronista, recorrió un camino de moderación desde las expectativas de la construcción del socialismo y el poder popular hacia un etapismo que priorizaba las contradicciones principales. Braun también partía del marxismo, pero profesaba menos simpatías por el gobierno. Distinguía dos tiempos para su análisis: en el largo plazo las contradicciones del

programa económico serían incontenibles, pero eso no podía ocultar las diferencias en la coyuntura con las políticas de Krieger Vasena. Finalmente, los más críticos de la coalición fueron los desarrollistas, a pesar de ser, a primera vista, quienes compartían un pasado común con parte de los funcionarios económicos que habían tenido una experiencia previa en el gobierno de Frondizi.

Si el programa buscaba constituirse en una vía de institucionalización para el diálogo entre actores sociales heterogéneos, las diferencias no eran menores en la coalición política oficialista. Montoneros y sus organizaciones afines se habían erigido en protagonistas del peronismo para su retorno al gobierno. Por ello, cómo se conjugarían las expectativas de una organización que vivaba la “patria socialista” con un programa económico y social de visos corporativistas resultaba una incógnita. El esquema tripartito no le reconocía un lugar a la organización, pero el programa sí le imponía límites en tanto integrante de la coalición oficialista.

Lejos de las lecturas que alegan un apoyo cerrado de este sector, como así también de las que solo describen sus objeciones, hemos encontrado que, durante los primeros meses del gobierno, la organización manifestó un apoyo con ciertas críticas a proyectos puntuales y acusaciones contra el gabinete económico. Montoneros mostró signos de moderación tanto en su diagnóstico de la situación económica como en sus reclamos inmediatos, y construyó una operación intelectual por la cual se situaba como custodio de los términos de intercambio político del Pacto Social. La apelación a la movilización popular como única herramienta de control y coerción capaz de lograr cumplir los objetivos del programa, ante la desconfianza que los empresarios le generaban, le otorgaba un rol central por su inserción popular a través de sus “frentes de masas”.

La tolerancia de Montoneros ante este programa se veía resentida a medida que se acentuaba su enfrentamiento con Perón y el espacio sindical de las 62 Organizaciones Peronistas. De este modo, antes de que se cumplieran tres meses del retorno del peronismo al gobierno, la organización declaró abiertamente sus críticas al Pacto Social y comenzó a exigir modificaciones. Esta segunda etapa de sus posicionamientos mantuvo vigente la apelación a discursos policlasistas, a la vez que alternó objeciones y elogios al programa. Las primeras se concentraban en la legitimidad de las representaciones sectoriales, pero también comenzaban a poner en discusión los términos de intercambio político del pacto.

Fuera del esquema de toma de decisiones que vinculaba al Estado con la sociedad civil, Montoneros se puso como meta competir a través de la JTP con los sindicatos que hegemonizaban la CGT, lo que podría permitirle constituirse en la voz legítima y legitimada de los trabajadores ante el Pacto Social. De ese modo, en este período, los reclamos más potentes de modificaciones a los términos del programa -en particular, en cuanto a mejoras salariales inmediatas- eran aprovechados por la JTP como una herramienta de presión contra sus rivales. No obstante, la propia organización estrechó los márgenes de acción para la competencia institucional dentro del sindicalismo, cuando decidió mostrar de manera resonante las particularidades de la imbricación entre política y economía en el período: la ejecución de Rucci, responsable de una de las tres rúbricas del ACN, implicaba un duro golpe al programa delineado por Gelbard. Esta etapa intermedia está marcada por la transición entre el período de mayor apego al programa pactista y el de rechazo total. De este modo, se caracterizó por la acentuación de las críticas a Gelbard y sus colaboradores, que solo eran matizadas cuando éstos sufrían ataques de los sectores rivales a Montoneros en la disputa intraperonista.

A su vez, el Pacto Social funcionó como variable explicativa para entender las iniciativas más criticadas por la organización, como la reforma del Código Penal, lo que impulsó a este sector a desplegar discursos en los que se exigía que el Estado priorizara su rol coercitivo ante los empresarios en reemplazo de las negociaciones tripartitas. La última nota característica consiste en que los pocos aspectos que habían sido observados positivamente en los comienzos de esta segunda etapa fueron resignificados críticamente en su cierre.

El evento que señalamos como inicio de un tercer momento en este tránsito fue el llamado a “romper” el Pacto Social, que implicaba un paso desde la crítica hacia el boicot abierto. A partir de marzo de 1974, las impugnaciones del programa serían integrales, abarcando a las representaciones y a los términos de intercambio político en un sentido amplio, a partir de lo que cedían los trabajadores en este pacto: no solo las limitaciones salariales, sino que Montoneros invocaba la necesidad de liberar la capacidad de lucha obrera. Desde las páginas de *El Descamisado*, incluso reconoció la aspiración del gobierno de generar un moderado proceso de redistribución del ingreso en favor de los trabajadores. Pero ese objetivo era considerado insuficiente y se proponía un nuevo pacto liderado por los obreros, que hubiera significado también

un pacto social distributivo, aunque más radicalizado. Sin embargo, en esta última etapa ese tipo de invocaciones aparecen más como un recurso declamativo antes que como un esfuerzo de articulación política efectiva. A su vez, la apropiación del pasado peronista en materia económica, invocando como modelo las realizaciones de la década del 40, resultaba útil para descalificar a los funcionarios vinculados con la CGE, acerca de quienes se proponía una nueva Teoría del Cerco, según la cual los empresarios desvirtuaban los planes económicos del líder del justicialismo.

La muerte de Perón aceleró el enfrentamiento con el gobierno, en el que habían ganado lugares los enemigos sindicales de la Tendencia, por lo que las críticas contra Gelbard y su programa se multiplicaron después de julio: la impugnación de la representación del Estado en el pacto tripartito se sumaba al rechazo de las representaciones corporativas y de los términos de intercambio político. Finalmente, el “pase a la clandestinidad” incluyó nuevas críticas a la política económica e implicó para la organización la defección final de la coalición de gobierno.

Si previamente reflexionamos sobre los firmantes del ACN inmersos en un proceso de intercambio político, la experiencia de Montoneros plantea un actor en una posición intermedia, porque se encontraba fuera de las negociaciones tripartitas, pero dentro de la coalición gobernante. El tránsito desde la apropiación del rol de custodio de los términos de intercambio político del Pacto Social hasta su total rechazo implicó reconfiguraciones políticas y discursivas para la organización. En ese trayecto, el predominio de los discursos moderados, etapistas, estructurados alrededor de enunciaciones policlasistas y centrados en la inflación como principal problema económico, se vio desplazado por la centralidad de expresiones en las que primaban el enaltecimiento del hegemonismo obrero, los llamados a liberar la lucha sindical y los reclamos por la socialización urgente de diversos resortes de la economía nacional.

Si bien el desacuerdo con respecto al programa económico social puede ser interpretado como una de las causas del enfrentamiento con Perón, la exteriorización de esa mirada crítica aparece a la vez como una consecuencia del deterioro de las relaciones con el líder del peronismo. Es así que el tránsito de Montoneros en términos de posicionamientos respecto del Pacto Social tampoco puede ser plenamente aprehendido sin considerar el pasaje de la organización del movimientismo al tendencismo e, incluso, al alternativismo; y el tránsito desde el protagonismo en la

campaña proselitista hasta la declaración de “guerra popular integral” durante la gestión de gobierno.

Queda a la vista que nos hemos centrado en el análisis de las posiciones de actores de la coalición político-social oficialista y sus relaciones. De ese modo, el trabajo abre nuevos interrogantes sobre el Pacto Social que constituyen posibles problemas de investigación para indagaciones futuras.

En primer lugar, hemos señalado que las posiciones de estos actores no fueron estáticas, por el contrario, lo que primó fue el desplazamiento, como parte de la dinámica del intercambio político. Cómo se estructuraban esas decisiones al interior de las organizaciones analizadas, en relación con dicha dinámica, es una primera pregunta que suscita interés. A lo largo del trabajo, mencionamos ciertas tensiones, en particular entre las organizaciones integrantes de la CGE, y diferencias entre corrientes internas de la CGT; pero el análisis profundo y pormenorizado respecto de cómo eran los procesos decisorios por los que primaba cada una de estas posturas excede los objetivos de nuestra tesis.

Por otro lado, surge la pregunta sobre aquello que quedó por fuera del programa. Esta dimensión puede ser abordada en dos niveles que implicarían interrogantes diferentes. El gobierno privilegió a dos organizaciones corporativas: la CGE y la CGT. Es válido preguntarnos entonces por las posiciones respecto del Pacto Social de las organizaciones corporativas excluidas del mismo. Algunas de ellas fueron mencionadas en el trabajo, y, en ciertos casos, como las agrarias, se comprometieron con el gobierno en actas que implicaban objetivos mucho más acotados que el ACN, posiblemente, por la dificultad de alcanzar acuerdos con cámaras corporativas cuyos discursos tendían a antagonizar con el gobierno. La falta de incorporación en las instancias decisorias de importantes organizaciones -en especial de la parte patronal- alejaba a la experiencia de los neocorporativismos “puros”, en los que las representaciones corporativas tienden a ser monopólicas.

El otro nivel consiste en interrogarse acerca del alcance efectivo del Pacto Social. Es decir, el gobierno, a partir de las tratativas en las mesas tripartitas, tomaba decisiones que afectaban a toda la sociedad; pero su cumplimiento mostró matices. Vimos que algunos conflictos laborales se saldaban con aumentos salariales por fuera de los dispuestos en el ACN y sus modificaciones, y también existieron denuncias de empleadores que no cumplían con los aumentos oficiales. En cuanto a los precios, se

tornaban recurrentes las denuncias sobre la proliferación de mercados paralelos de productos diversos, en los que no se respetaban los topes legales. Una investigación que enfoque su análisis en estos dos niveles podría definir conceptualmente si el Pacto Social puede ser abordado, en términos de Etchemendy y Collier (2008), como una forma “segmentada” de neocorporativismo.

Finalmente, hemos abordado un recorte histórico que coincide con la gestión de Gelbard. Sin embargo, como dijimos, Pacto Social fue una categoría nativa instalada en el léxico popular cotidiano, con lo cual, los límites de aquello que designa pueden resultar difusos. En ese sentido, Vitto (2013) ha realizado un trabajo que distingue a este período de la gestión de Celestino Rodrigo. Un trabajo comparativo similar acerca de las gestiones de Gelbard y su sucesor inmediato, Gómez Morales, podría echar luz sobre las formas de relacionarse de cada una de estas gestiones con los actores corporativos.

En definitiva, las nuevas cuestiones sobre las que invita a reflexionar la investigación son múltiples. Si los interrogantes que aparecen ofrecen nuevos horizontes de indagación, las respuestas que presentamos a nuestras preguntas de investigación constituyen un pequeño escalón desde el cual apreciar mejor ese horizonte. Ellas nos permiten ubicar los acuerdos y disputas alrededor del Pacto Social como elementos de un fenómeno complejo que involucraba a actores corporativos, políticos e intelectuales, cuyas posiciones fueron variando a lo largo de este período. Esos cambios -no automáticos ni lineales- fueron parte de un proceso que involucraba sus propias expectativas, marcos ideológicos, y, particularmente, relaciones de poder. Así, la dinámica expuesta aporta a la comprensión, no solo respecto de la deriva del programa económico, sus modificaciones, y su final; sino también acerca de los actores involucrados en el Pacto Social.

Agradecimientos

Hasta aquí, la narración fue realizada en primera persona del plural: no es casualidad, si bien la firma del texto es mía, soy consciente de que hay muchas personas e instituciones involucradas en el trasfondo de cualquier paso que doy. En este apartado, me apropio del singular porque soy exclusivamente yo quien debe agradecer.

En primer lugar, a mi director de tesis, Sergio Friedemann, cuyas lecturas y devoluciones fueron cruciales para realizar este trabajo, y quien me invitó y alentó a ingresar a la investigación y la docencia. Junto a él, a mis compañerxs de cátedra Silvina Mohnen, Cecilia Gascó y Nicolás Codesido, cuyas lecturas y devoluciones me resultan siempre fundamentales, pero sobre todo, por permitirme compartir un grupo de trabajo apasionado por lo que hace. A su vez, a lxs demás integrantes del Grupo de Estudios sobre Peronismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y a Omar Acha, quien también hizo posible que continuara con mis indagaciones.

También al personal docente y no docente del IDAES y, en particular, de la Maestría en Sociología Económica. A su actual directora, Mariana Heredia, a quien tuve como docente en más de una materia, y a quien quiero agradecer su dedicación y calidez, en especial al comienzo de la cursada, cuando uno portaba solo incertidumbre y ninguna certeza. También menciono especialmente a Marina Dossi, por su acompañamiento en Taller de Tesis II cuando estas páginas aún no existían, y a Lucía Álvarez, quien me alentó a cursar en esta casa de estudios.

La maestría no fue solo un espacio de estudio, también me brindó un grupo de compañerxs que hicieron todo este camino más fácil y, sobre todo, más entretenido. Lautaro, Juan y Esteban son, probablemente, los primeros que aparecieron en el camino y con quienes intercambié más lecturas, diálogos y mensajes. Rápidamente, el grupo se amplió y también debo agradecer a Lucía, Marce, Manu, Juli, Bruno, JP, Cris, Giuli y Male, por haber sido parte de ese trayecto.

En verdad, la maestría fue otro paso dentro de un largo camino de la educación pública que me cobijó desde la sala de tres hasta el inminente inicio del doctorado. Todas las etapas me dieron aprendizajes y amigxs que me han ayudado y apoyado a lo largo del camino. A todxs, desde la Intendente Alvear hasta el Mariano Acosta, muchas gracias. De la facultad, en particular voy a mencionar a Facundo y Eugenia, con

quienes compartimos trabajos y lecturas que aportaron de distintas maneras a esta tesis. Junto a ellos, al entrañable grupo de amigxs de “la Abal”. También a los amigxs que me ha dejado mi trayectoria laboral, en especial los del IAF.

Otro agradecimiento especial para mis hermanos, Paloma y Miguel. También a mis padres, Claudia y Enrique, responsables de esta larga pertenencia al sistema educativo público que me genera al mismo tiempo orgullo, agradecimiento y compromiso. Gracias también por incentivar mi curiosidad. El hogar que compartimos los cinco durante años y las recurrentes reuniones actuales han estado siempre llenas de cariño, risas y conversaciones en las que resonaba la bronca por las injusticias.

Finalmente, le agradezco a Julia por las risas, la compañía y el amor, que me hacen sentir mejor de lo que soy. Y eso está muy bien.

Un docente del secundario una vez nos dijo: “rodéense siempre de gente que sea mejor que ustedes”. Si lo cumplí es solamente porque todxs ustedes aceptaron acompañarme en alguna instancia del camino.

Fuentes, bibliografía y gráficos

Fuentes de prensa

- ¿A quién se la quieren contar? (1973). *El Descamisado* n°13, 28–29.
- ¿Cambios en Economía? (1974, julio 31). *Noticias*, 12.
- ¿Liberación sin justicia social? (1974). *El Descamisado* n°45, 17–20.
- ¿Los yanquis nos financian la liberación? (1973). *El Descamisado* n°32, 2–3.
- ¿Qué es el BID? (1973, diciembre). *El Descamisado* n°32, 8.
- ¿Qué pasa con el Pacto Social? (1973). *El Descamisado* n°31, 2–3.
- ¿Quieren privatizar el Estado? (1973). *El Descamisado* n°8, 29.
- ¿Rompimos el bloqueo o ya se caía solo? (1974). *El Descamisado* n°43, 10.
- Acerca de la burocracia. (1974, marzo 13). *Noticias*, 13.
- Acuerdo social y control de los trabajadores. (1973). *El Descamisado* n°4, 13.
- Adelino Romero irá a la OIT en junio. (1974, abril 18). *Noticias*, 6.
- Adivinanza: ¿Qué tratan hoy la CGT y la CGE? (1973, noviembre 30). *Noticias*, 9.
- Al Excelentísimo Sr. Presidente. (1973). *El Descamisado* n°25, 3.
- Al problema de precios y salarios refirióse Zorila. (1974, septiembre 25). *El Litoral*, 1.
- Analizóse la actual situación económica. (1974, septiembre 19). *El Litoral*, 1.
- Anunció Perón que mandará la actual política económica. (1973, octubre 5). *Clarín*, 16/17.
- Apoya Otero críticas contra Gelbard. (1974, marzo 14). *Noticias*, 9.
- Aquí, socialismo es justicialismo. (1974, marzo 17). *Noticias*, 7.
- Aquí mandan Shell y Esso. (1973). *El Descamisado* n°27, 6.
- Argentina impotente. (1973, agosto). *Militancia* n°12, 40–41.
- Argentina y el campo socialista. (1973). *El Descamisado* n°15, 9.
- Así sí, todo irá mejor. (1974, junio 22). *Noticias*, 24.
- Broner acusa. (1974, enero 31). *Noticias*, 10.
- Broner contra la ayuda externa. (1973, diciembre 2). *Noticias*, 10.
- Broner formuló una exhortación a los empresarios. (1974, octubre 19). *El Litoral*, 1.
- Broner, J. (1973). *Julio Broner sobre las declaraciones de Jose Rucci 1973 / Entrevistado por Sergio Villarroel*. https://www.youtube.com/watch?v=8YyS_TrVGyQ
- Cabo, D. (1973a). Compañeros. *El Descamisado* n°26, 2–3.
- Cabo, D. (1973b). La salud de Perón es la salud del pueblo. *El Descamisado* n°28, 2–3.

- Cabo, D. (1973c). Los yanquis no se van de Vietnam: se vienen para acá. *El Descamisado* n°18, 2.
- Cabo, D. (1974a). Los leales pueden disentir. *El Descamisado* n°38, 2–3.
- Cabo, D. (1974b, enero). Compañeros. *El Descamisado* n°37, 2–3.
- Cafiero presidirá la Caja de Ahorro. (1973, junio 7). *La Nación*, 11.
- Cambios en Economía. (1974, julio 24). *Noticias*, 13.
- Causas de la crisis. (1974, octubre 21). *El Litoral*, 1.
- Celébrase el Día de la Industria. (1973, septiembre 2). *La Nación*, 12.
- Censo económico. (1974, julio 17). *Noticias*, 13.
- CGE anuncia año próspero. (1974, enero 2). *Noticias*, 10.
- CGE aprobaría la presidencia de Perón. (1973, julio 13). *La Opinión*, 14.
- CGE y CGT contentas. (1973, diciembre 28). *Noticias*, 13.
- CGT contra el CONES. (1974, enero 6). *Noticias*, 8.
- CGT y CGE. (1974, agosto 15). *Noticias*, 9.
- CILFA. (1973, julio 11). Medicamentos. *La Opinión*, 12.
- Colaborará la CGT en un operativo de control de carnes. (1973, julio 1). *La Opinión*, 12.
- Comenzó en el gobierno la elaboración de un plan trienal de desarrollo. (1973, junio 20). *La Opinión*, 20.
- Con cegetistas se reunirá hoy Gelbard. (1974, octubre 10). *El Litoral*, 1.
- Con los aumentos no pasa nada. (1974). *El Descamisado* n°46, 2–3.
- Con Moscú: negocios y política. (1974). *El Peronista* n°4, 26–27.
- Con trigo almacenado estarían especulando. (1973, julio 22). *El Litoral*.
- Conformes los gorilas. (1974). *El Peronista* n°3, 7/8.
- Constituyóse la comisión de precios e ingresos. (1973, junio 14). *La Nación*, 12.
- Continúa aún en estudio el acuerdo social. (1973, junio 5). *La Nación*, 1.
- Convocaron a dirigentes agropecuarios. (1973, septiembre 5). *El Litoral*, 2.
- Convocatoria de CGE. (1974, agosto 20). *Noticias*, 24.
- Costo de vida. (1974, mayo 17). *Noticias*, 13.
- Créditos a industrias. (1973, agosto 23). *El Litoral*, 2.
- Crítica sindical a Gelbard. (1974, febrero 15). *Noticias*, 24.
- Cuando las cifras engañan. (1974). *El Peronista* n°5, 19–21.
- Cuba, nuestro principal comprador. (1974, julio 10). *Noticias*, 11.
- Cuba: cómo es el socialismo nacional. (1974). *El Descamisado* n°35, 16.

Cuentagotas. (1973a, noviembre 25). *Noticias*, 12.

Cuentagotas. (1973b, diciembre 10). *Noticias*, 13.

D'Adamo en Washington. (1974, marzo 6). *Noticias*, 24.

De la prensa del régimen a la prensa del pueblo. (1973). *El Descamisado* n°8, 14–15.

Decisión final de Perón. (1974, marzo 24). *Noticias*, 24.

Declaraciones de Otero en Mar del Plata. (1973, noviembre 19). *La Nación*, 4.

Declaraciones del Sr. Gelbard. (1974, octubre 1). *El Litoral*, 3.

Decomisan 75.000 bolsas de papas. (1973, octubre 4). *El Litoral*, 3.

Defenderse, movilizarse, no dejarse robar. (1973). *El Descamisado* n°5, 10.

Deliberaciones del equipo económico. (1973, octubre 1). *El Litoral*, 1.

Denuncias de Zorila. (1974, febrero 19). *Noticias*, 9.

Desabastecimiento: maniobra imperialista. (1974, junio 12). *Noticias*, 14.

Desabastecimiento - especulación - contrabando - negociados. (1974, febrero). *El Descamisado* n°39, 27.

Desbaratan en Liniers una maniobra tendiente a eludir el precio máximo. (1973, junio 26). *La Opinión*, 14.

Diálogo con el Dr. Sbarra Mitre sobre la enseñanza antinacional. (1973). *Realidad Económica* 14, 42.

Dígame no. (1974, febrero 1). *Noticias*, 5.

Discutieron el presupuesto y la preparación de los planes inmediatos para cada sector. (1973, julio 3). *La Opinión*, 13.

Disminuye la inflación. (1973, septiembre 19). *La Nación*, 1.

Dos hechos importantes. (1974, abril). *El Peronista* n°2, 29–31.

Economía y Bienestar Social vuelven a un nivel virtual de superministerios. (1973, julio 12). *La Opinión*, 10.

El caso Gelbard. (1973, octubre). *Militancia* n°20, 26–30.

El congreso de la CGT. (1973, junio 2). *La Nación*, 3.

El contrabando de comida es millonario. (1974, enero 24). *Noticias*, 10.

El control de las metas del plan trienal. (1974, septiembre 16). *El Litoral*, 1.

El costo de la vida. Terrorismo económico. (1973). *El Descamisado* n°0, 10.

El discurso de Firmenich. (1973). *El Descamisado* n°15, 5–6.

El drama del salario. (1973). *El Descamisado* n°32, 9–10.

El funcionamiento de las paritarias. (1974, septiembre 16). *El Litoral*, 3.

El gabinete trata el presupuesto. (1973, diciembre 5). *Noticias*, 24.

El golpe del imperialismo. (1974). *La Causa Peronista* n°2, 12–13.

El milagro económico. (1974, agosto 25). *Noticias*, 8.

El Ministerio de Hacienda formuló una aclaración. (1973, junio 23). *La Opinión*, 13.

El Pacto Social: instrumento de liberación o de dependencia. (1974). *El Descamisado* n°44, 16–19.

El plan trienal. (1974, abril 26). *Noticias*, 12.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso 20 leyes de reforma económica. (1973, junio 19). *La Opinión*, 1.

El pueblo sigue sin comer carne. (1974, agosto 24). *Noticias*, 5.

El respaldo al “compromiso nacional” dieron ayer las autoridades empresarias. (1973, junio 15). *La Prensa*, 9.

El sector ruralista retiraría su colaboración al equipo económico. (1973, julio 3). *La Opinión*, 15.

En resumen. (1973, junio 21). *La Opinión*, 13.

Encara la Junta de Granos el almacenamiento de las cosechas. (1974, febrero 3). *Noticias*, 8.

Equipo económico. (1973, septiembre 24). *El Litoral*, 2.

ERP, Far y Montoneros. (1973). *La Nación* 9/6, 16.

Escasez de materias primas. (1974, abril 20). *Noticias*, 11.

Este negocio tiene que manejarlo el país. (1974, agosto). *Movimiento* N°8, 18.

Este pacto social necesita esta legislación represiva. (1974). *El Descamisado* n°35, 2–3.

Esto es un robo del imperialismo yanqui. (1973). *El Descamisado* n°15, 12–13.

Exposición en Cuba. (1974, junio 20). *Noticias*, 9.

Fijó el Dr. Concepción la posición de la industria. (1973, septiembre 2). *El Litoral*, 1.

Finalizó la reunión semestral de la CGE. (1974, octubre 20). *El Litoral*, 1.

Fue considerada la política de precios. (1973, agosto 27). *El Litoral*, 1.

Fue firmado el acuerdo social. (1973, junio 7). *La Nación*, 1.

Fue ocupado Obras Públicas y renunció el Ingeniero Zubiri. (1973, junio 15). *La Prensa*, 1.

Fusión UIA-CGI. (1974, agosto 3). *Noticias*, 10.

Galimberti, R. (1974a). ¿Llegó la hora de la guerrilla? *La causa peronista* n°7, 2–3.

Galimberti, R. (1974b). ¿Quiénes son y para quién gobiernan? *La causa peronista* n°9, 2.

Galimberti, R. (1974c). Por qué le tienen miedo a Perón y Evita. *La causa peronista n°4*, 2–3.

Galimberti, R. (1974d). Quién votó a Isabel - López Rega. *La causa peronista n°8*, 2–3.

Galimberti, R. (1974e, agosto). ¿Sigue siendo peronista este gobierno? *La Causa Peronista n°5*, 2–3.

Galimberti, R. (1974f, agosto). El brujovandorismo... *La Causa Peronista n°6*, 2–3.

Gelbard dijo que habrá aguinaldo doble. (1974, junio 29). *Noticias*, 8.

Gelbard en Diputados. (1974, mayo 31). *Noticias*, 24.

Gelbard está preocupado y dijo que el camino es duro. (1974, julio 19). *Noticias*, 11.

Gelbard, J. (1973). *Sergio Villaroel entrevista al ministro de Economía José Gelbard*.
<https://www.youtube.com/watch?v=nQHPrhGLGnc>

Gelbard refirió a la Gran Paritaria y otros temas. (1974, octubre 15). *El Litoral*, 1.

Gelbard reunió a sus colaboradores. (1973, mayo 26). *Clarín*, 12.

Gelbard rindió dos extensos informes acerca de su gestión. (1974, agosto 24). *Noticias*, 9.

GIVERTI... NEPOTISTA. (1973). *El Descamisado n°13*, 25.

Gómez Morales nuevo ministro de Economía. (1974, octubre 22). *Clarín*, 1.

Grupos técnicos de la CGT y CGE se reunirán. (1974, septiembre 22). *El Litoral*, 1.

Hablan los montoneros. (1974a). *El Peronista n°5*, 22–25.

Hablan los montoneros. (1974b). *La causa peronista n°4*, 7.

Habló sobre varios temas Julio Broner. (1974, octubre 11). *El Litoral*, 2.

Habrà baile para los especuladores. (1974, junio 29). *Noticias*, 8.

Harà importantes anuncios Gelbard. (1973, septiembre 8). *La Nación*, 1.

Hasta dónde llega esta nacionalización. (1974). *La causa peronista n°8*, 31.

Hay que romper este pacto social. (1974). *El Descamisado Extra*, 8–9.

Hay una embestida contra el Pacto Social. (1974, junio 11). *Noticias*, 12.

Hoy se trata la ley de represión al contrabando. (1974, junio 25). *Noticias*, 7.

Imperialismo: solo quiere gerentes. (1974). *La causa peronista n°4*, 17.

Informe en Olivos. (1974, marzo 22). *Noticias*, 24.

Informes económicos. (1974, septiembre 19). *El Litoral*, 2.

Iñiguez y Cafiero aclaran una versión. (1972, diciembre 28). *Crónica*.

Inversiones y el pacto social. (1973, agosto 22). *El Litoral*, 1.

Investigación del uso de la cosecha. (1973, agosto 13). *El Litoral*, 1.

La Asociación de Bancos de la República Argentina critica la política oficial. (1973, julio

7). *La Opinión*, 12.

- La CGE en la dirección. (1974, enero 15). *Noticias*, 12.
- La CGT analizó costos y precios. (1973, noviembre 16). *El Litoral*, 2.
- La CGT ha condenado la intromisión extranjera. (1973, agosto 3). *El Litoral*, 2.
- La CGT propuso ayer que se nombre presidente a Perón. (1973, julio 13). *La Opinión*, 2.
- La CGT se reunió ayer con el Presidente de la Nación. (1973, julio 11). *La Opinión*, 6.
- La consigna es no importar petróleo. (1974, febrero 10). *Noticias*, 10.
- La entrevista Perón-JP. (1974). *El Descamisado* n°38, 8.
- La escasez de todos los días. (1974). *El Descamisado* n°37, 23.
- La evolución de los precios. (1973, noviembre 14). *El Litoral*, 1.
- La Gran Paritaria. (1974, marzo 21). *Noticias*, 12.
- La inflación importada será poca, parece. (1973, diciembre 18). *Noticias*, 13.
- La integración Latinoamericana. (1974, abril 22). *Noticias*, 24.
- La investigación de contratos con la firma ALUAR. (1974, septiembre 4). *El Litoral*, 2.
- La JTP existe. (1973). *El Descamisado* n°27, 2.
- La JTP fijó su posición. (1973). *El Descamisado* n°24, 14.
- La juventud se prepara para la reconstrucción. (1973). *El Descamisado* n°12, 25.
- La ley de la entrega. (1973, noviembre). *El Descamisado* n°28, 7.
- La ofensiva de los dueños de la tierra. (1974, julio 31). *Noticias*, 11.
- La paritaria. (1974, marzo 7). *Noticias*, 8.
- La política de ingresos oficial refirmó Gelbard. (1973, noviembre 24). *La Nación*, 1.
- La política de precios explicó Revestido. (1973, septiembre 15). *La Nación*, 1.
- La política económica y los embates en su contra analizados en una charla. (1974, septiembre 5). *El Litoral*, 4.
- La presidente con dirigentes obreros. (1974, septiembre 16). *El Litoral*, 1.
- La renuncia de Galimberti, un golpe de timón. (1973). *El Descamisado* n°0, 12.
- La reunión de gobernadores. (1973, junio 2). *La Nación*, 1.
- La vida y la muerte de José Rucci. (1973). *El Descamisado* n°20, 4-5.
- Las pautas de política agropecuaria estarán basadas en la productividad. (1973, julio 12). *La Opinión*, 12.
- Las ventas de autos a Cuba. (1974, abril 18). *Noticias*, 13.
- Legalidad constitucional. (1974, julio 5). *Noticias*, 24.
- Les siguen dando duro a los agiotistas. (1974, enero 6). *Noticias*, 6.

Lizaso, M. (1974, mayo). Al peronismo no se lo calla con la cárcel. *El Peronista* n°6, 2–3.

Lo mataron por peronista. (1973, julio). *El Descamisado* n°11, 26–29.

Lo que significa este triunfo vandorista. (1974). *La Causa Peronista* n°2, 6–7.

Los aciertos provocan el ataque de los enemigos. (1974, agosto 23). *Noticias*, 3.

Los especuladores no se rinden. (1974, junio 19). *Noticias*, 9.

Los trabajadores pagaron el pato. (1973). *El Descamisado* n°18, 29.

Mañana Perón en la CGT. (1973, diciembre 12). *Noticias*, 24.

Mano dura. (1974, junio 11). *Noticias*, 1.

Memoria de la CGE. (1974, abril 27). *Noticias*, 13.

Montoneros. (1974a). Habla la resistencia. *Evita Montonera* n°1, 36–37.

Montoneros. (1974b). Un documento para la liberación. *El Peronista* n°1, 21–40.

Montoneros. (1974c, enero). Solo la organización y movilización del pueblo nos dará la liberación. *El Descamisado* n°36, 2–3.

Montoneros. (1974d, julio). A los compañeros... *La Causa Peronista* n°1, 2–3.

No aumentan precios. (1973, diciembre 21). *Noticias*, 9.

Nos afanaron 50.000 millones. (1973). *El Descamisado* n°20, 10.

Nuevas normas sobre política crediticia. (1973, junio 14). *La Prensa*, 1.

Obras y servicios públicos. (1973, mayo 25). *Clarín*, 22.

Ofrecerían a Rucci la dirección del CONES. (1973, julio 1). *La Opinión*, 1.

Opiniones de Gelbard sobre distintos tópicos. (1974, agosto 28). *El Litoral*, 2.

Opónese a los precios máximos una entidad. (1973, junio 15). *La Nación*, 10.

Optimismo de la CGE sobre la evolución de la economía. (1973, julio 15). *El Litoral*, 2.

Pacto Social para todo el mundo. (1974, junio 1). *Noticias*, 8.

Paenza reemplazará a Cafiero. (1974, agosto 26). *Noticias*, 24.

Perón defenderá el Pacto Social. (1974, junio 12). *Noticias*, 14.

Perón dialoga con cegetistas. (1973, octubre 25). *El Litoral*, 1.

Perón habla el 17. (1973, diciembre 12). *Noticias*, 10.

Peronismo: concretamente antiimperialista. (1973). *El Descamisado* n°15, 25.

Por qué hay que romper el Pacto Social. (1974). *El Descamisado* n°44, 2–3.

Precios: los balances deben ver la luz. (1973, diciembre 1). *Noticias*, 8.

Precios y salarios. (1973, noviembre 22). *Noticias*, 12.

Precios y salarios. (1974, febrero 22). *Noticias*, 12.

Preocupan a la CGT algunas medidas. (1973, noviembre 14). *La Nación*, 11.

Primera reunión del equipo económico. (1973, junio 5). *La Nación*, 7.

Primeras Jornadas Argentinas sobre Técnicas Matemáticas en la Industria, el Comercio y la Administración Pública. (1961). *Revista de Administración Pública - ISAP - Presidencia de la Nación*, 125–127.

Primero la patria... (1974, enero). *El Descamisado* n°37, 4.

Primeros ocho prescindibles. (1973, diciembre 23). *Noticias*, 12.

Principales proposiciones incluidas en el acuerdo. (1973, junio 9). *La Nación*, 1.

Problemas de abastecimiento. (1973, septiembre 17). *El Litoral*, 1.

Produjo conmoción la muerte de Adelino Romero. (1974, julio 14). *Noticias*, 8.

Propuesta cegetista ante la Comisión de Precios. (1974, enero 8). *Noticias*, 12.

Propuestas para el trabajo sindical. (1973). *El Descamisado* n°16, 30–31.

Raúl Rabiti es el nuevo secretario adjunto de la CGT. (1973, octubre 5). *El Litoral*, 1.

Renunciamos a los honores pero no a la lucha. (1974). *El Descamisado* n°38, 4–10.

Responden los compañeros Firmenich y Quieto. (1973). *El Descamisado* n°4, 3–4.

Reunión con empresarios. (1974, septiembre 13). *El Litoral*, 1.

Reunión de la Gran Paritaria. (1974, octubre 19). *El Litoral*, 1.

Reunión en Economía. (1974, octubre 7). *El Litoral*, 1.

Revestido habla hoy de precios con la Confederación del Comercio. (1973, diciembre 20). *Noticias*, 12.

Roberto Quieto. (1973). *El Descamisado* n°23, 20.

Romeo, F. (1973, noviembre). La Tendencia se acabó: el que manda es Perón. *El Caudillo* n°1, 2–3.

Romero y Broner viajaron a Ginebra. (1974, junio 19). *Noticias*, 11.

Rucci, J. (1973). *Di Film - José Rucci convenciones colectivas / Rueda de prensa*.
<https://www.youtube.com/watch?v=mgOCYLAwfUs>

Rucci enunció una “nueva filosofía” para el salario. (1973, junio 9). *La Prensa*, 10.

Salen los primeros autos a Cuba. (1974, abril 13). *Noticias*, 12.

Sbarra Mitre, O. (1973, marzo). Poder político y distribución del ingreso. *Envido*.

Se congelaron precios de artículos esenciales. (1973, junio 10). *La Prensa*, 1.

Se creó una comisión. (1974, enero 9). *Noticias*, 9.

Se realiza la exposición celebrando el 50 aniversario de la Unión Industrial. (1973, agosto 12). *El Litoral*, 4.

Se reunieron cegetistas y empresarios. (1973, octubre 15). *El Litoral*, 1.

Semillas de soja en avión. (1973, noviembre 24). *Noticias*, 7.

Será mantenida la política económica. (1974, septiembre 26). *El Litoral*, 3.

Sesionó ayer la Comisión de Precios y Nivel de Vida. (1973, julio 5). *La Opinión*, 13.

Si no hay alzas no habrá pan. (1974, abril 9). *Noticias*, 7.

Siempre listos... para servir al imperialismo. (1973). *El Descamisado* n°28, 31.

Sobre precios y salarios tratan. (1974, septiembre 14). *El Litoral*, 1.

Tensa situación entre Gelbard y los agropecuarios. (1974, julio 18). *Noticias*, 10.

Texto del Documento Reservado. (1973, octubre 2). *La Opinión*.

UIA: “Panorama político positivo”. (1973, diciembre 31). *Noticias*, 12.

Un “memorándum reservado” que es solo difamatorio. (1973, enero 7). *Mayoría*, 5.

Una ley hecha para los gorilas ahora se usa contra peronistas. (1973, diciembre). *El Descamisado* n°31, 26.

Vamos a comer más carne. (1974, julio 19). *Noticias*, 24.

Van a cobrar lo que dice Cámpora, ni un peso más. (1973). *El Descamisado* n°3, 5.

Van a Ginebra a explicar el Pacto Social. (1974, junio 2). *Noticias*, 8.

Y esto qué es. (1973). *El Descamisado* n°21, 2.

Zorila contra Gelbard. (1974, marzo 20). *Noticias*, 24.

Entrevistas y testimonios orales

Abal Medina, J.M. (2005). Entrevista a J.M. Abal Medina. Red de Archivos Orales de la Argentina Contemporánea, disponible en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG). Buenos Aires.

Depino, M. (septiembre de 2016). Comunicación personal con el autor y Facundo Castro.

González, H. (2015). Testimonio de Horacio Luis González. Biblioteca Nacional.

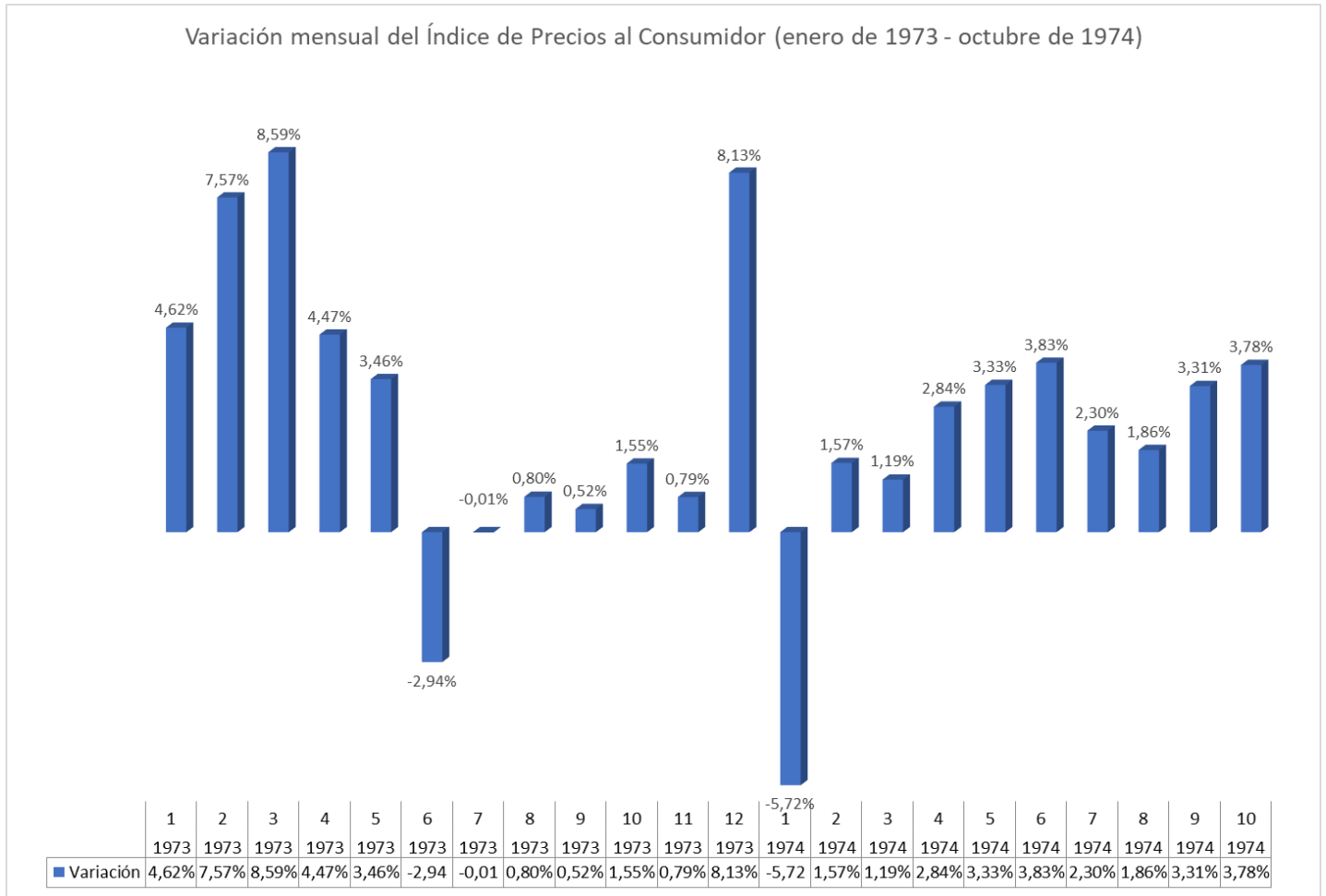
Lavagna, R. (2005). Entrevista a R. Lavagna. Red de Archivos Orales de la Argentina Contemporánea, disponible en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG). Buenos Aires.

Leyba, C. (abril de 2019). Comunicación personal con el autor.

Ortiz, Y. (2008). Entrevista a Yolanda Ortiz. En Paula Wagner y Guido Perrone, “Los medios siempre toman la catástrofe ambiental, nunca la otra parte”. *Conversaciones*, n°64.

Gráficos

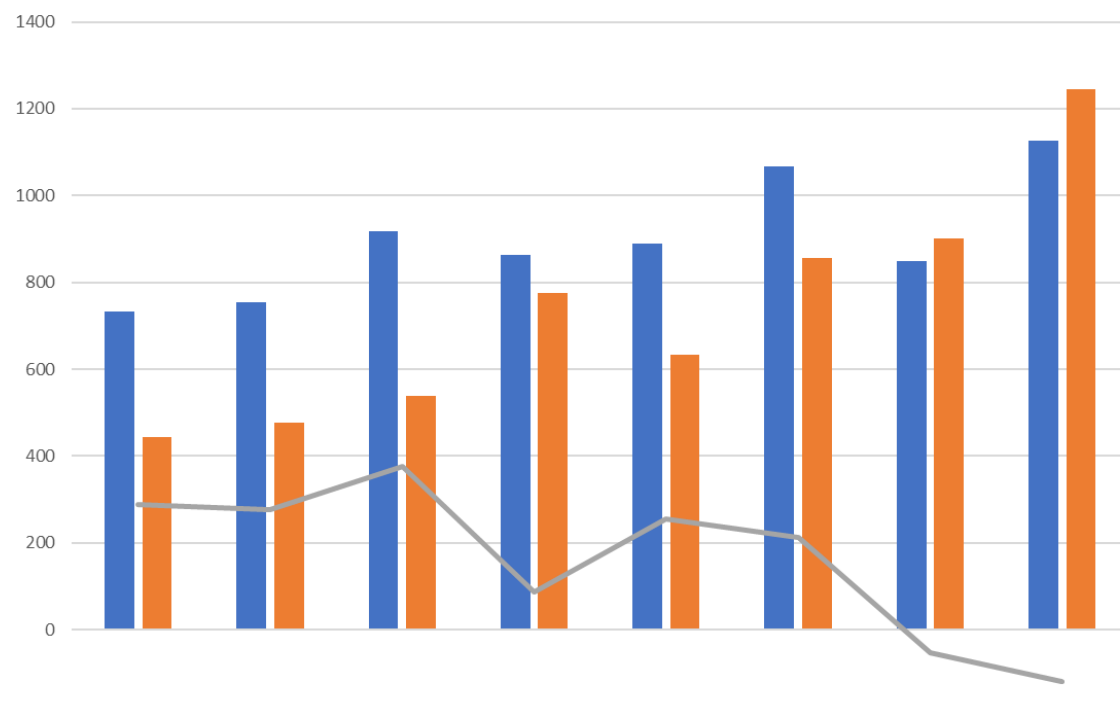
Gráfico 1



Variación mensual de la inflación con respecto al mes anterior. Elaboración propia en base a INDEC (s.f.).

Gráfico 2

Evolución trimestral del comercio exterior (1973 - 1974, en millones de dólares)



	1973				1974			
	1	2	3	4	1	2	3	4
■ Exportaciones	732,8	753,2	916,8	863,1	889,3	1066,9	849,1	1125,4
■ Importaciones	444,4	476,2	539,5	775,2	634	855	902,1	1243,8
— Balanza comercial	288,4	277,1	377,3	87,9	255,3	211,9	-53	-118,5

■ Exportaciones ■ Importaciones — Balanza comercial

Elaboración propia en base a Rougier y Fiszbein (2006) y Di Tella (1986).

Bibliografía

- Acha, O. (2004). Sociedad política y sociedad civil durante el primer peronismo. *Desarrollo Económico*, 44(174), 199–230.
- Acha, O. (2010). Dilemas de una violentología argentina: tiempos generacionales e ideologías en el debate sobre la historia reciente. *V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Universidad Nacional de General Sarmiento*.
- Acha, O. (2009). *Historia crítica de la historiografía argentina: las izquierdas en el siglo XX*. Prometeo.
- Acta de Compromiso Nacional. (1973). En *Plan Trienal para la Liberación y la Reconstrucción Nacional*. Poder Ejecutivo Nacional - República Argentina.
- Aguilar Astorga, C. R. (2015). Intercambio Político: una forma de indagar las relaciones de poder entre sociedad y gobierno. El caso del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, México. *XX Congreso Internacional del CLAD*, 20.
- Ahlquist, J. (2008). Parties, Pacts, and Elections The Determinants of Social Pacts, 1974-2000. *Unpublishsed Manuscript, 188*(University of Washington), 496–512.
- Altamirano, C. (2000). *Peronismo y cultura de izquierdas*. Siglo XXI.
- Amaral, S. (2010). Ezeiza, 20 de junio de 1973. *Todo es historia*, 518, 6–21.
- Amorín, J. (2006). *Montoneros. La buena historia*. Catálogos.
- Anguita, E. y Caparrós, M. (1998). *La Voluntad*. Planeta.
- Antúnez, D. (2011). *La tendencia revolucionaria del peronismo en los gobiernos provinciales (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta, 1973-1974)*. Universidad de Salamanca.
- Antúnez, D. (2015). El peronismo en los municipios bonaerenses de 1973-1976. *Coordenadas: Revista de Historia Local y Regional*, 2(1), 84–121.
- Avdagic, S., Rhodes, M., & Visser, J. (2005). *The emergence and evolution of social pacts: a provisional framework for comparative analysis*.
http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2457/pdf/egp_newgov_N_05_01.pdf
- Azpiazu, D, Basualdo, E., & Khavisse, M. (2004). *El nuevo poder en la Argentina de los años 80*. Siglo XXI.
- Azpiazu, D, Basualdo, E., & Kosacoff, B. (1986). Las empresas transnacionales en la Argentina, 1976-1983. *Revista de la CEPAL*.
- Barrera, M. A., y Vitto, C. (2009). El Plan energético del tercer gobierno peronista (1973-1976): potencialidades, limitaciones y consecuencias de la crisis del petróleo. *III^a*

- Jornadas de Economía Política*, 9(10).
- Bartoletti, J. (2010). *Montoneros: de la movilización a la Organización. Un caso paradigmático de militarización*. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno. Tesis doctoral.
- Baschetti, R. (s. f.). ASCONE, Juan José María.
<http://www.robertobaschetti.com/biografia/a/224.html>
- Baudino, V., & Sanz Cerbino, G. S. (2013). *El tercer gobierno de Perón y la fractura de la clase dominante*.
- Beckert, J. (2017). Sociología Económica y enraizamiento: ¿Cómo conceptualizar la acción económica? *Papeles de Trabajo*, 11(20).
- Belini, C. (2009). *La industria peronista: 1946-1955: políticas públicas y cambio estructural*. Edhasa.
- Belini, C. (2014). Inflación, recesión y desequilibrio externo. La crisis de 1952, el plan de estabilización de Gómez Morales y los dilemas de la economía peronista. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 40, 105–148.
- Beltrán, G. J. (2012). Las prácticas del poder. Discusiones en torno al problema de la acción política empresaria. *Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*, 39(70), 69–102.
- Benes, E., & Gurrera, M. S. (2018). Pactos sociales en la Argentina: las experiencias de concertación social desde mediados del siglo XX. *Revista Argentina de Ciencia Política*, 21.
- Besoky, J. L. (2010). Perón y la Triple A: ¿Una relación necesaria? *VI Jornadas de Sociología de la UNLP 9 y 10 de diciembre de 2010. La Plata, Argentina*.
- Besoky, J. L. (2013). La derecha peronista en perspectiva. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux-Novo Mundo Mundos Novos-New world New worlds*.
- Besoky, J. L. (2016). *La derecha peronista: Prácticas políticas y representaciones (1943-1976)*. Tesis de posgrado. UNLP.
- Bibiloni, H. (2008). *Ambiente y política. Una visión integradora para gestiones viables*. Rap.
- Birle, P. (1997). *Los empresarios y la democracia en la Argentina*. Editorial de Belgrano,.
- Blejmar, J. (2019). *José Ber Gelbard: la patria desde el boliche*. Ediciones UNGS, Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Blejmar, J. (2020). El Plan Gelbard y el populismo económico. *Realidad económica*,

49(330), 141-a.

- Boltanski, L. (1973). L'espace positionnel. Multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe. *Revue française de sociologie*, 3–26.
- Bozza, J. A. D. (1997). Perón y el Frente Cívico de Liberación Nacional: Coalición y confrontación. *Cuadernos del CISH*, 2(2–3), 135–182.
- Bozza, J.A. (2001). El peronismo revolucionario. Itinerario y vertientes de la radicalización, 1959-1969. *Sociohistórica*, (9-10), pp.135-169.
- Braun, O. (2009). Una charla sobre la actual coyuntura económica. En Daniel Azpiazu & M. Schorr (Eds.), *Peronismo y Dictadura*. Capital Intelectual.
- Brennan, J. (1997). Industriales y bolicheros: la actividad económica y la alianza populista peronista, 1943-1976. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Tercera serie*, 15.
- Brennan, J., & Rougier, M. (2013). *Perón y la burguesía argentina: El proyecto de un capitalismo nacional y sus límites,(1964-1976)*. Lenguaje Claro Editora.
- Cafiero, A (1973). Carta a Juan Domingo Perón. Buenos Aires 17/2/1973. Juan Domingo Perón Papers, Box 2, Hoover Institution Archives, Stanford University.
- Cafiero, A. (2011). *Militancia sin tiempo: mi vida en el peronismo*. Planeta.
- Canelo, P. (2012). 'Un ministerio de tercera línea'. Transformaciones en el reclutamiento y las trayectorias de los Ministros de Defensa argentinos. *Polhis*, 5(9), 319-329.
- Canitrot, A. (1978). *La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la experiencia peronista 1973-1976*. Cedes.
- Caraballo, G. (2007). *Tras las bambalinas del poder*. Corregidor.
- Castellani, A. (2006). *Estado, empresas y empresarios. La relación entre intervención económica estatal, difusión de ámbitos privilegiados de acumulación y desempeño de las grandes firmas privadas. Argentina 1966-1989*. Universidad de Buenos Aires.
- Castellani, A., & Llanpart, F. (2012). Debates en torno a la calidad de la intervención estatal. *Papeles de trabajo: La revista electrónica del IDAES*, 6(9), 155–177.
- Cimillo, E., Lifschitz, E., Gastiazoro, E., & Ciafardini, H. (1973). *Acumulación y centralización del capital en la industria argentina*. Tiempo Contemporáneo.
- Collier, D. (1995). Trajectory of a Concept: "Corporatism" in the Study of Latin American Politics. En P. Smith (Ed.), *New Approaches to Methods and Analysis*. Routledge.
- Collier, R. B., & Collier, D. (1979). Inducements versus constraints: Disaggregating

- “corporatism”. *American Political Science Review*, 73(4), 967–986.
- Comisión Bicameral Investigadora Especial de Estudio Contrato Aluar - Estado Nacional. (1975). Imprenta del Congreso de la Nación.
- Confino, H. (2021). *La contraofensiva: el final de Montoneros*. Fondo de Cultura Económica.
- Coviello, R. (2019). “Expertise y confianza”: los expertos de la CEPAL en el tercer gobierno peronista (1973-1976). *Sociohistórica*.
- Crónica Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (pp. 289–290). (1962).
- De Riz, L. (1981). *Retorno y Derrumbe: el último gobierno peronista*. Hyspamérica.
- Decreto 560/74. (1974). Boletín Oficial de la República Argentina.
- Denaday, J. P. (2017). Notas para el debate historiográfico sobre el peronismo de los setenta. *Pasado abierto. Revista del CEHis*, (5), 115–136.
- Denaday, J. P. (2018). *No todo fue violencia: un think tank en el retorno de Perón: el caso del Consejo de Planificación del Movimiento Nacional Justicialista (1970-1973)*.
- Denaday, J. P. (2020). La fallida incorporación de los economistas peronistas y el fracaso del GAN. *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, 419–427.
- Di Tella, G. (1986). Perón-Perón 1973-1976, Hyspamérica. En Bs. As.
- Díaz, F., & Frigerio, R. (1977). *Conversaciones con Rogelio Frigerio sobre la crisis política argentina*. Colihue/Hachette.
- Donatello, L. M. (2017). *La política como intermediación: la trayectoria estatal de Gustavo Caraballo entre 1958 y 1975 dentro de la Presidencia de la Nación*.
- Donatello, L. M., & Obradovich, G. (2020). Los titulares de las carteras de Industria en la Argentina y Brasil, en las experiencias kirchnerista y del PT. Enraizamiento, autonomía y experticia. *Miríada: Investigación en Ciencias Sociales*, 12(16), 55–75.
- Dornbusch, Rudiger, & Edwards, S. (1989). *Macroeconomic Populism in Latin America*. National Bureau of Economic Research.
- Dossi, M. (2008). *La acción colectiva de los grandes grupos económicos. Un análisis de las estrategias y comportamiento de las corrientes internas de la Unión Industrial Argentina en el período 1989-2002*. Tesis de Maestría en Ciencia Política, Argentina: IDAES/UNSAM.
- Dossi, M., & Lissin, L. (2011). La acción empresarial organizada: propuesta de abordaje para el estudio del empresariado. *Revista mexicana de sociología*, 73(3), 415–443.
- Duzdevich, A., Beltramini, R., & Raffoul, A. (2015). *La Lealtad. Los Montoneros que se*

- quedaron con Perón. Sudamericana.*
- Etchemendy, S. (2004). Repression, exclusion, and inclusion: Government-union relations and patterns of labor reform in liberalizing economies. *Comparative Politics*, 273–290.
- Etchemendy, S. (2010). La Concertación y la Negociación Colectiva: perspectiva histórica y comparada. *Revista de Trabajo*, 6(8), 199–205.
- Etchemendy, S. (2013). La “doble alianza” gobierno-sindicatos en el kirchnerismo (2003-2012). Orígenes, evidencia y perspectivas. En C. Acuña. *Instituciones gubernamentales y actores de la política argentina*. (Vol. 21, pp. 101–132). Siglo XXI Editores.
- Etchemendy, S., & Collier, R. B. (2008). Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007). *Revista POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político*, 13, 145–192.
- Etchemendy, S., & Filc, J. (2001). Construir coaliciones reformistas: la política de las compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica. *Desarrollo económico*, 675–706.
- Evans, P. (1996). El Estado como problema y como solución. *Desarrollo económico*, 529–562.
- Evans, P. (1997). State-Society Sinergy, Research Series, núm. 94. *University of California en Berkeley*.
- Fajertag, G., & Pochet, P. (1997). Social pacts in Europe in the 1990s. Towards a European social pact? En *Social Pacts in Europe*,. European Trade Union Institute and Observatoire social européen.
- Ferrer, A. (1977). *Crisis y alternativas de la política económica argentina*. FCE.
- Flaskamp, C. (2002). *Organizaciones político-militares: testimonio de la lucha armada en la Argentina:(1968-1976)*. Ediciones nuevos tiempos.
- Flores, R. D. (2017). *Timoneles de una economía inestable: ministros y funcionarios económicos en la Argentina de 1955 a 1976*. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.
- Fonseca, M. Á. G. (2004). Reflexiones sobre el concepto de embeddedness. *Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, 2, 145–164.
- Fonte, L. M. (2014). Del “Perón Vuelve” al día que Perón volvió. Ezeiza 1973, percepciones de un regreso. *Anuario de la Escuela de Historia Virtual*, 6, 175–187.

- Fourcade-Gourinchas, M. (2001). Politics, institutional structures, and the rise of economics: A comparative study. *Theory and society*, 30(3), 397–447.
- Friedemann, S. (2012). Aportes del campo de estudios sobre memoria para un abordaje reflexivo del pasado reciente universitario. *Aletheia*, 2(4).
- Friedemann, S. (2018). “Compañeros decanos”. La reforma universitaria de la izquierda peronista a través de las designaciones en la Universidad de Buenos Aires (1973-1974). *PolHis. Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política*, 21, 161–200.
- Friedemann, S. (2021a). La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. La reforma universitaria de la izquierda peronista, 1973-1974. Prometeo.
- Friedemann, S. (2021b). Del ‘gabinete montonero’ a la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (1973-1974). *Revista Paginas*, 13(31).
- Garategaray, M. (2012). “Montoneros leales a Perón”. *Naveg@ mérica. Revista electrónica*.
- García, A. (2018a). Auge y caída de la planificación regional en Argentina: entre la búsqueda de una autonomía enraizada y el escenario económico del capitalismo periférico (1965-2015). *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 27(1), 180–194.
- García, A. (2018b). Brechas de capacidad y ¿autonomía enraizada?: la experiencia del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable, ProFeder (Argentina, 2003-2016). *Revista Política e Planejamento regional*, 5(2), 216–240.
- Gárgano, C. (2015). *La cartera agropecuaria en tiempos de Giberti y el rol del INTA en la política estatal. Intereses, recursos y sujetos agrarios en disputa*.
- Garret, G., & Lange, P. (1986). Performance in a Hostile World: Economic Growth in Capitalist Democracies, 1974-82. *World Politics*, 38(4).
- Garrido, P. E. (2020). ¿Hacia un peronismo de centro? Un abordaje de la experiencia de la JP Lealtad (1973-1974). *Argumentos. Revista de Critica Social*, 22.
- Gasparini, J. (1999). *Montoneros: final de cuentas*. De la campana.
- Gené, M. (2011). En torno a los profesionales de la política. Trayectorias, prácticas y destrezas en el ejercicio del poder político desde el estado. *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, 1(1), 85-107.
- Gené, M. (2012). Prácticas, destrezas y códigos del trabajo político en democracia: una aproximación desde el Ministerio del Interior en Argentina. *Revista mexicana de*

- ciencias políticas y sociales*, 57(215), 71-96.
- Gené, M. (2017). Acontecimientos, grupos y mentores: sobre agentes de politización y entradas múltiples a la política en Argentina. *Política & Sociedad*, 16(37), 112-142.
- Gené, M., Heredia, M. y Perelmiter, L. (2021). El carácter múltiple de la racionalidad estatal: ministerios, funcionarios y desafíos de gobierno en la Argentina. *Sociohistórica*, 48, e139. <https://doi.org/10.24215/18521606e139>
- Gerchunoff, P., & Llach, L. (2007). *El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas argentinas*. Emecé.
- Ghigliani, P. (2015). Las luchas obreras bajo el Pacto Social (1973-1974): el caso de la Federación Gráfica Bonaerense. *Páginas (Rosario): Revista Digital de la Escuela de Historia*, 7(14), 81–98.
- Giberti, H. (1964). El desarrollo agrario argentino. *Eudeba, Buenos Aires*.
- Giberti, H. (1966). Uso racional de los factores directos de la producción agraria. *Desarrollo Económico*, 17–55.
- Giberti, H. (1985). *Historia económica de la ganadería argentina*. Hyspamérica Buenos Aires.
- Gillespie, R. (2011). *Soldados de Perón. Historia crítica sobre los Montoneros*. Sudamericana.
- González Canosa, M. (2018). ¿Democracia y/o Revolución? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias frente a la coyuntura electoral: los comicios, la revolución y la lógica instrumental (Argentina, 1972- 1973). *Izquierdas*, 38, 164–189.
- González Canosa, M., & Tocho, F. (2021). Más allá (y más acá) de montoneros: actores, experiencias y sentidos del peronismo revolucionario en el pasado reciente argentino. *Revista Páginas*, 13(31).
- González Canosa, M., & Stavale, M. (2021). Peronismo, izquierda y lucha armada. Balance bibliográfico y perspectivas analíticas sobre las organizaciones armadas peronistas en clave comparada. *Revista Páginas*, 13(31), 9.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American journal of sociology*, 91(3), 481–510.
- Grassi, R. (2015). *Periodismo sin aliento. El descamisado: La revista que cubrió el conflicto y la ruptura de Perón con Montoneros*. Sudamericana.
- Heredia, M. (2003). Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital. *Revista mexicana de*

sociología, 65(1), 77–115.

Heredia, M. (2015). *Cuando los economistas alcanzaron el poder*. Siglo XXI.

Heredia, M., & Gené, M. (2009). Atributos y legitimidades del gabinete nacional: Socio-historia de los ministerios de Economía e Interior en la prensa (1930-2009). *El Príncipe*, 2(3), 109-135.

Horowicz, A. (2015). *Los cuatro peronismos*. Edhasa..

Iglesias Rouco, J. (1973, junio 13). Conviértese Puerta de Hierro en una segunda Casa Rosada. *La Prensa*, 1.

INDEC (s.f.). Índice de Precios al Consumidor (IPC) GBA desde 1943 en adelante.

https://www.indec.gob.ar/ftp/nuevaweb/cuadros/10/sh_ipc_2008.xls

Jacovkis, P. (2014). Manuel Sadosky y su impacto en la ciencia y la política argentina. En R. Carnota & C. Borches (Eds.), *Manuel Sadosky. El sabio de la tribu*. (pp. 17–83). Libros del Zorzal.

James, D. (2004). *Doña María: historia de vida, memoria e identidad política*. Manantial.

Jauregui, A. (2013). Las organizaciones de los industriales argentinos en la "era del desarrollo" (1955-1976). *Revista de Sociología e Política*, 21(47), 55–68.

<https://doi.org/10.1590/S0104-44782013000300006>

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria* (Vol. 1). Siglo XXI de España editores.

Jung, M. E. (2018). Nuevos saberes, nuevas profesiones, nuevos técnicos. *Políticas de la Memoria*, 18, 251–268.

Kotler, R. I. (2016). La defensa del Comedor estudiantil en la Universidad Nacional de Tucumán. De los Tucumanazos a la última dictadura (1969–1976). *Historia, voces y memoria*, 10, 9–20.

Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Losada.

Landi, O. (1985). *El discurso sobre lo posible. La democracia y el realismo político*.

Lanusse, L. (2005). *Montoneros, el mito de sus doce fundadores*. Vergara.

Lattuada, M. (2006). *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina: transformaciones institucionales a fines del siglo XX*. Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Lázzaro, S. B. (2013a). Acuerdos y confrontaciones: la política agraria peronista en el marco del Pacto Social. *Historia Crítica*, 51, 145–168.

<https://doi.org/10.7440/histcrit51.2013.07>

Lázzaro, S. B. (2013b). La reforma agraria en la propuesta del peronismo durante la

- década de 1970. *Estudios del ISHiR*, 3(6), 111–132.
- Leyba, C. (2010). *Economía y política en el tercer gobierno de Perón*. Biblos.
- Librandi, J., & Di Marco, M. (2014). Autonomía enraizada y viabilidad de las políticas públicas: el caso del plan AHI en la Provincia de Buenos Aires. *XI Congreso Argentino de Antropología Social*.
- Lindblom, C. E. (1977). Politics and Markets: The World's Political. *Economic Systems*, 136.
- Lissandrello, G. (2012). Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores–ERP ante el Pacto Social (1973-1974). Una perspectiva comparada. Montoneros and the Partido Revolucionario de los Trabajadores–ERP in front to the Social Pact (1973-1974). A comparative perspectiv. *Izquierdas*, 13.
- Lissin, L. (2008). Acción colectiva empresaria.¿ Homogeneidad dada o construída?: Un análisis a la luz del estudio de las corporaciones empresarias en la crisis del 2001. *Documentos de Investigación Social*, 3.
- Makler, C. A. (2009). Horacio CE Giberti: la pluma como arma (1918-2009). *Mundo agrario*, 10(19).
- Makler, C. A. (2013). *El episodio de Olavarría*. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires.
- Mallon, R. D., & Sourrouille, J. V. (1973). *La política económica en una sociedad conflictiva: el caso argentino*. Amorrortu Buenos Aires.
- Marques-Pereira, B. (1999). “ Corporativismo societal” y" corporativismo de Estado": Dos modos de intercambio político. *Foro Internacional*, 39(1 (155), 93–115.
- Mero, R. (2014). *Contraderrota. Conversaciones con Juan Gelman*. Sudamericana.
- Meza, J. S. (1986). Intercambio político: La perspectiva de Gian Enrico Rusconi. *Sociológica (México)*, 1(2), 135–144.
- Miguez, M. C. (2018). La política exterior del tercer gobierno peronista en la Argentina (1973-1976). *Relaciones Internacionales*, 27(55), 21–49.
- Ministerio de Obras Públicas. (1960). *Vialidad. Revista de la Direcciónn de Vialidad*.
- Montaña, M. J. (2011). La Gran Transformación O la borrosa frontera entre política y economía en la Argentina neoliberal. *Investigación y reflexión en Ciencias Sociales Univ Nac General Sarmiento*.
- Montero, A. S. (2008). Héroes, ortodoxos, disidentes o traidores. Los avatares de la Juventud Peronista Lealtad (1973-1976). *V Jornadas de Sociología de la UNLP*.

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.

- Morgenfeld, L. (2014). Argentina y Estados Unidos, golpe a golpe (1966-1976). *Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político*, 8(2), 521–554.
- Morresi, S., & Vommaro, G. (2011). *Saber lo que se hace: expertos y política en Argentina*. Prometeo Libros.
- Natalucci, A. (2013). Revitalización sindical y sindicalismo peronista: encrucijadas entre el corporativismo y la política (Argentina, 2003-2012). *Realidades y desafíos del sindicalismo en América Latina, Cahiers ALHIM*, 26.
- Neiburg, F., & Plotkin, M. Ben. (2004a). *Intelectuales y expertos*. Paidós Buenos Aires.
- Neiburg, F., & Plotkin, M. (2004b). Los economistas. El Instituto Torcuato Di Tella y las nuevas elites estatales en los años sesenta. En C. Neiburg F y Plotkin M (Ed.), *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina*. Paidós.
- Nievas, F. (1999). Cámpora: primavera-otoño. Las tomas. *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, 351–393.
- Objetivo principal: liquidar a los militantes de la juventud. (1974, mayo). *El Peronista* n°4, 12–15.
- Obradovich, G., & Donatello, L. M. (2018). Los secretarios de la industria durante el kirchnerismo. Enraizamiento, autonomía y experticia. *Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales*, 8, 195–213.
- Offe, C. (1981). The attribution of public status to interest groups: observations on the West German case. Organizing interests in western Europe. En *Organizing interests in western Europe* (pp. 123–158). Cambridge University Press Cambridge.
- Offe, C., & Wiesenhal, H. (1992). Dos lógicas de la acción colectiva. *Cuadernos de sociología*, 3.
- Offerlé, M. (2011). Los oficios, la profesión y la vocación de la política. *PolHis*, 4(7), 84–99.
- Ostiguy, P. (1990). *Los capitanes de la industria: Grandes empresarios, política y economía en la Argentina de los años 80*. Legasa.
- Osuna, M. F. (2017). El ministerio de Bienestar Social durante la gestión de Francisco Manrique: la función de la política social en los últimos años de la “Revolución

- Argentina”(1970-1973). *Quinto sol*, 21.
- Otero, R. (2019). *Montoneros y la memoria del peronismo*. Prometeo.
- Pacheco, J. (2014). Acerca del programa de la organización Montoneros: ¿reformistas o revolucionarios? *Trabajo y sociedad*, 23(249–265).
- Pacheco, J., & Lissandrello, G. (2013). Montoneros y el PRT-ERP: una propuesta comparativa a partir del análisis de sus posiciones frente al movimiento obrero (1973-1976). *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM. Les Cahiers ALHIM*, 26.
- Panella, C. (2001). Política bonaerense y gestiones gubernativas, 1943-2001. *Barreneche, Osvaldo-Director/a; Autor (es) Gonnet Lugar Edhasa UNIPE*, 89.
- Pardo, C. A. F., & Frenkel, L. (2004). *Perón: la unidad nacional entre el conflicto y la reconstrucción, 1971-1974* (Vol. 1). Ediciones del Copista.
- Peralta Ramos, M. (2007). *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. FCE.
- Perdía, R. (2013). *Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona*. Planeta.
- Perelmiter, L. (2012). La constitución de una autoridad plebeya. El ministerio ‘de la pobreza’ en la Argentina reciente. *Revista Polhis*, 5.
- Pereyra, D., & González Bollo, H. (2020). *Estado y planificación en el lejano sur. Agencias y funcionarios de la Argentina peronista*. Universidad Nacional de Quilmes.
- Pereyra, E. (2012). El Estado y la Administración Pública nacional en perspectiva histórica. Análisis crítico de la producción académica sobre el período 1930-1976. *Pol-His.: Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política*, 5(9), 92–112.
- Pereyra, E. (2017). *Trayectorias y saberes en la provincia de Buenos Aires: el equipo del ministerio de Economía (1987-2007)*.
- Perón, J. D. (1944). *Discurso en la Bolsa de Comercio*.
<http://archivoperonista.com/discursos/juan-domingo-peron/1944/discurso-en-bolsa-comercio/>
- Perón, J. D. (1972). Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. *Recuperado de <http://www.labaldrich.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Mensaje-Ambiental-de-Juan-Domingo-Per%C3%B3n-a-los-Pueblos-y-Gobiernos-del-Mundo-%E2>*, 80.
- Perón, J. D. (1985). Discurso del 21 de junio de 1973. En H. Verbitsky (Ed.), *Ezeiza*.

Contrapunto.

- Perón, J. D. (1987). *Discursos completos. Tomo I*. Megafón.
- Perón, J. D. (1988a). *Discursos completos. Tomo II*. Megafón.
- Perón, J. D. (1988b). *Discursos completos. Tomo III*. Megafón.
- Perón, J. D. (1988c). *Discursos completos. Tomo IV*. Megafón.
- Pizzorno, A. (1991). Intercambio político e identidad colectiva en el conflicto laboral. En *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa Occidental a partir de 1968* (pp. 381–408). Servicio de Publicaciones.
- Pizzuto, A. (2006). Social pacts in Europe. *Bank of Valletta Review*, 33, 50–58.
- Plan Trienal para la Liberación y la Reconstrucción Nacional. (1973). Poder Ejecutivo Nacional - República Argentina.
- Plotkin, M. Ben, & Zimmermann, E. A. (2012). *Los saberes del Estado*. Edhasa.
- Poggi, M. (2010). Discursos y representaciones agrarias en la prensa escrita. *La Nación*-1973. *Theomai*, (21), 170-196.
- Portantiero, J. C. (1987). La concertación que no fue: de la Ley Mucci al Plan Austral. *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*.
- Pozzoni, M. (2018). *Leales. De la Tendencia Revolucionaria a la Juventud Peronista Lealtad*. Imago Mundi.
- Pryluka, P. F., & Coviello, R. (2018). Consumo y desarrollo en el tercer gobierno peronista. *América Latina en la historia económica*, 25(1), 98–135.
- Rein, R. (1996). Reconsiderando el concepto y el papel de la ‘segunda línea’ del liderazgo peronista. *Melón Pirro, JC y Quiroga, NF (Compiladores) El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre*, 55–78.
- Rein, R. (2015). *Los muchachos peronistas judíos: los argentinos judíos y el apoyo al justicialismo*. Sudamericana.
- Rhodes, M. (2001). The political economy of social pacts: ‘Competitive corporatism’ and European welfare reform. *The new politics of the welfare state*, 165–194.
- Ricoeur, P. (1999). *Historia y narratividad*. Paidós.
- Rodríguez, L. G. (2016). La “subversión científica” en las universidades de Argentina e Hispanoamérica. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux-Novo Mundo Mundos Novos-New world New worlds*.
- Rougier, M. (2011). *Estado y empresarios de la industria del aluminio en la Argentina: el caso ALUAR*. Universidad Nacional de Quilmes.

- Rougier, M. (2012). *La economía del Peronismo: Una perspectiva histórica*. Sudamericana.
- Rougier, M., & Fiszbein, M. (2006). *La frustración de un proyecto económico. El gobierno peronista de 1973-1976*. Ediciones Manantial.
- Rougier, M., & Stawski, M. (2014). Un programa que "no puede conformar a todos": economía y burocracia en los años finales del primer peronismo. *América Latina en la historia económica*, 21(1), 174–199.
- Rusconi, G. E. (1985). *Problemas de teoría política. Cuadernos de Teoría Política*. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.
- Rusconi, G. E. (2021). Sobre el concepto de sociedad compleja. *Política y Transgresión: Antología de textos de la Revista Metapolítica*, 193.
- Salas, M. M. (2004). Hacia una visión sociología de la acción económica: Desarrollos y desafíos de la sociología económica. *Economía y Sociedad*, 9(24).
- Salcedo, J. (2011). *Los montoneros del barrio*. Ed. Untref.
- Sanz Cerbino, G. S., & Baudino, V. (2013). *El tercer gobierno de Perón y la fractura de la clase dominante*.
- Sanz Cerbino, G. S., & Baudino, V. (2014). Corporaciones empresarias, alianzas sociales y disputas políticas en el retorno del peronismo (1969-1974). *Trabajo y sociedad*, 22, 395–416.
- Sanz Cerbino, G. S., & Lissandrello, G. (2018). El programa de liberación nacional en la Argentina de los '70: la convergencia entre Montoneros y la Confederación General Económica (CGE). *Conflicto Social*, 11(19), 100–132.
- Sawicki, F. (2011). Para una sociología de los entornos y de las redes partidistas. *Revista de sociología*, (25).
- Schmitter, P. (1985). Neocorporativismo y Estado. *REIS*, 31.
- Schmitter, P. (1992). ¿Continúa el siglo del corporativismo? En *Neocorporativismo. Más allá del Estado y el mercado*.
- Seoane, M. (2018). *El burgués maldito*. Random Penguin House.
- Servetto, A. (2009). El sentido político de las intervenciones federales en el tercer gobierno peronista: "desplazar" a los "infiltrados" y "depurar" al peronismo. *Revista Escuela de Historia*, 1(8).
- Servetto, A. (2011). 73/76. *El gobierno peronista contra las provincias montoneras*. Siglo XXI.

- Sidicaro, R. (2001). *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*. Libros del Rojas. UBA.
- Sidicaro, R. (2002). *Los tres peronismos: Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*. Siglo XXI Editores.
- Sigal E. y Verón S. (2003). *Perón o muerte*. Eudeba.
- Silva Fernández Aldana, M. (s. f.). *Discursos, representaciones sociales y roles de las mujeres en el agro en los primeros gobiernos peronistas (1943-1955)*.
- Sivak, M. (2013). *Clarín: el gran diario argentino: una historia*. Planeta.
- Slipak, D. (2011). Sobre los orígenes. Peronismo y tradición en la revista El Descamisado (1973-1974). *Sociohistórica*, 0(29 SE-Artículos).
- Slipak, D. (2015). *Las revistas montoneras*. Siglo XXI Editores.
- Soprano, G. (2007). La vocación kantiana de la antropología social. En G. (comps. . Rinesi, E ; Soprano (Ed.), *Facultades Alteradas. Actualidad de El conflicto de las Facultades de Immanuel Kant*. Prometeo y UNGS.
- Stawski, M. (2012). Del equipo de asalto a la consolidación: Estado, elites y economía durante el primer peronismo, 1946-1955. En Plotkin, M. y Zimmermann, E. *Saberes de Estado* (Vol. 2).
- Sturzenegger, F. (1992). Descripción de una Experiencia Populista 1973-1976. En R Dornbusch & S. Edwards (Eds.), *La macroeconomía del populismo en Latinoamérica*.
- Svampa, M. (2003). El populismo imposible y sus actores. En D. James (Ed.), *Nueva Historia Argentina, 1955?1976, volumen IX*, (pp. 1–31). Sudamericana.
- Tapia, L. (2009). Introducción: Formas de intercambio político. En *La coyuntura de la autonomía relativa del Estado*. CLACSO La Paz.
- Terán, O. (2013). *Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual argentina, 1956-1966*. Siglo XXI.
- Tocho, F. (2015). El desafío institucional: las prácticas políticas no armadas de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires (1973-1974). *Sociohistórica*, 35.
- Toledo, E. D. G. (2001). Las transiciones políticas en América Latina, entre el corporativismo sindical y la pérdida de imaginarios colectivos. En E. (comp. . de la Garza Toledo (Ed.), *Los sindicatos frente a los procesos de transición política* (pp. 9–24).

- Torre, J. C. (1982). El movimiento obrero y el último gobierno peronista (1973-1976). *Crítica y Utopía*, 6(82), 99–134.
- Torre, J.C. (1983). *Los sindicatos en el gobierno: 1973-1976*. Centro Editor de América Latina.
- Torre, J. C. (2004). *El gigante invertebrado: los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976* (Vol. 4). Siglo Veintiuno de Argentina Editores.
- Torti, M.C. (2002). La Nueva Izquierda a Principios de los' 60: Socialistas y Comunistas en la Revista CHE. *Estudios sociales*, 22(1), pp.145-162
- Verbitsky, H. (1985). *Ezeiza*. Contrapunto.
- Viguera, A. (1997). *La política de la reforma económica en la Argentina. Estado y empresarios en torno a la apertura comercial, 1987-1996*. FLACSO.
- Viguera, A. (1998). Estado, empresarios y reformas económicas: en busca de una perspectiva analítica integradora. *Perfiles latinoamericanos*, 12, 9–51.
- Vitto, C. (2012). Plan económico del tercer gobierno peronista: Gestión de Gelbard (1973-1974). *Problemas del desarrollo*, 43(171), 111–134.
- Vitto, C. (2013). La política económica del tercer gobierno peronista y las principales rupturas entre las gestiones de gelbard y rodrigo. *Brazilian Journal of Latin American Studies*, 12(22), 9–24.
- Vitto, C. (2020). Apuntes para el estudio de las fracciones del capital durante el tercer gobierno peronista (1973-1976). *Realidad económica*, 50(336), 95-a.
- Wainfeld N., M. . I. (1983). Montoneros. *Revista Unidos*, 2, julio d.
- Yazbek, S. (2015). *YPF y la política petrolera de los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976*. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.